

PARA RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA

FREI, ALLENDE Y PINOCHET



LUIS VITALE, LUIS MOULIAN, LUIS CRUZ,
SANDRA PALESTRO, OCTAVIO AVENDAÑO,
VERÓNICA SALAS Y GONZALO PIWONKA

CONTRIBUCIÓN A LA PROPUESTA DEL SENADO PARA EL ESTUDIO DE
LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS DE LA HISTORIA DE CHILE

**PARA RECUPERAR LA
MEMORIA HISTÓRICA
FREI, ALLENDE Y PINOCHET**

**Luis Vitale, Luis Moulian, Luis Cruz,
Sandra Palestro, Octavio Avendaño,
Verónica Salas y Gonzalo Piwonka**

**CONTRIBUCIÓN A LA PROPUESTA DEL SENADO PARA
EL ESTUDIO DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS DE LA HISTORIA DE CHILE**

ÍNDICE

PARA RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA
FREI, ALLENDE Y PINOCHET
Luis Vitale, Luis Moulian, Luis Cruz,
Sandra Palestro, Octavio Avendaño,
Verónica Salas y Gonzalo Piwonka

© Ediciones ChileAmérica - CESOC
Esmeralda 636, Santiago

Inscripción N° 109.591 (julio, 1999)
ISBN: 956-211-077-X

Coordinadora de edición: Maider Etchevers
Diseño de portada: Patricio Andrade
Composición: Salgó Ltda.

Primera edición: julio de 1999

Impreso en: Impresos Universitaria, S.A.

Impreso en Chile / Printed in Chile

PRÓLOGO Julio Silva Solar	7
Nota Introductoria Luis Vitale	39
<i>Capítulo I</i> BALANCE HISTORIOGRÁFICO Luis Moulian	43
<i>Capítulo II</i> EL PRIMER GOBIERNO DC: EDUARDO FREI MONTALVA Luis Vitale	111
<i>Capítulo III</i> EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE Luis Vitale	174
<i>Capítulo IV</i> GOBIERNO DE PINOCHET Y DE LAS FF.AA. COMO INSTITUCIÓN Luis Vitale	239
<i>Capítulo V</i> ALGUNOS CRITERIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS Luis Vitale	295
<i>Capítulo VI</i> LOS CAMPESINOS DEL VALLE CENTRAL EN EL CHILE DE LA POST REFORMA AGRARIA Octavio Avendaño Pavez	308
<i>Capítulo VII</i> LAS MUJERES EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS Sandra Palestro	327

<i>Capítulo VIII</i>	
RASGOS HISTÓRICOS DEL MOVIMIENTO DE POBLADORES	
Verónica Salas	354
<i>Capítulo IX</i>	
ESTADO, PARTIDOS Y MOVIMIENTO OBRERO	
Luis Cruz Salas	382
<i>Capítulo X</i>	
LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS GOBIERNOS DE	
FREI MONTALVA, ALLENDE Y PINOCHET	
Gonzalo Piwonka	426

PRÓLOGO

JULIO SILVA SOLAR

La inquietud manifestada en el Senado por analizar más profundamente los últimos 30 años de nuestra historia y en particular los años previos al golpe militar de 1973, encuentra en el presente volumen una primera respuesta de contundente envergadura. Luis Vitale, historiador reconocido por su rigor y solvencia en sus estudios, que no obsta a su orientación igualmente reconocida, aborda el análisis de los períodos de Frei Montalva, Allende y Pinochet, entregando una interpretación global de esos años sólidamente fundada.

Luis Moulian hace un completo balance historiográfico de corrientes y autores que se han ocupado de los últimos 30 años. Los demás colaboradores del presente libro tratan temas más específicos que se complementan y recaen en distintos sectores o materias, a saber, campesinos del valle central, analizado por Octavio Avendaño; mujeres, por Sandra Palestro; pobladores, por Verónica Salas; partidos obreros, por Luis Cruz; y derechos humanos, por Gonzalo Piwonka.

Tal es el equipo de historiadores formado para producir esta obra, a modo de comisión alternativa frente a la proposición de los senadores de derecha.

El lector encontrará aquí un trabajo de notable calidad profesional a la vez que enriquecedor y sugerente, cualquiera sea su juicio sobre estos años, acerca de los grandes hechos y líneas históricas de las tres últimas décadas en nuestro país.

En el prólogo que sigue he optado por delinear mi propio punto de vista sobre el tema de la obra, tal vez en

su punto más crucial, admitiendo algunas diferencias en la apreciación del proceso en análisis, lo que agrega, quizás, el interés de la diversidad y de algún grado de contraste con parte de lo expuesto en las páginas siguientes.

Dentro, pues, del amplio y necesariamente complejo entorno de la obra que prologamos queremos ocuparnos con alguna detención de dos aspectos cuya particular incidencia en el conjunto del proceso nos parece relevante. Uno es el peso que tuvo el integrismo católico en la ideología del golpe militar y del régimen nacido de él, y el otro alude a determinados antagonismos al interior de las fuerzas populares, derivados de una carencia suya, a la que nos referiremos, que contribuyeron a su colapso. A través de estos dos puntos nos proponemos introducir en la temática tanto más vasta contenida en el libro.

El Estado Portaliano es la principal referencia ideológica del golpe militar de 1973, pese a que Portales nunca fue partidario de un régimen militar.

Este Estado era confesional-católico y su herejía principal fue el liberalismo. El Estado de Pinochet también es de tipo confesional y su herejía principal es el marxismo sin perjuicio que también continúe siéndolo el liberalismo, en segundo lugar, esto es, la democracia liberal, no confesional, neutra, pluralista, abierta por lo mismo a la penetración marxista, es decir, al peligro mortal que el golpe quiere eliminar para siempre. El gobierno nacional de Pinochet pretende contraponerse al gobierno de partidos o de clases en que el país se ha debatido. El concepto "nacional", "nacionalista", o en otros casos "chilenidad" se usa para oponerlo al de clase o partido. Las Fuerzas Armadas están por sobre estas divisiones, son la nacionalidad misma. El modelo histórico es dicho Estado Portaliano al cual se reconoce verdadero sentido y objetivos nacionales. Es el de la guerra contra la confederación de Perú y Bolivia y luego de la guerra del Pacífico, ambas

victoriosas para Chile y que dan gloria a los militares y marinos. El heroísmo emblemático de Prat. Todo lo cual se evoca como la época de la grandeza de Chile, que de ser la más pobre colonia de España pasó a tener un papel rector en el ámbito de los países latinoamericanos, según se recalca una y otra vez.

Pero, ante todo, objetivamente hablando, el Estado Portaliano, que se trata de rescatar, era un Estado fuertemente autoritario, oligárquico, con sufragio restringido a los pudientes, que no obstante el juicio que de él se tenga en relación a la época, constituía el medio de dominación (contra los intentos liberales) de la clase más tradicional salida del pasado colonial, la aristocracia terrateniente, clerical, conservadora, que después de la Independencia termina por reagruparse en el partido pelucón, soporte de Portales.

Son los restos de esa clase, animados por las pequeñas elites del integrismo católico, las que a través de las Fuerzas Armadas tratan de reestructurar, a partir del golpe, el Estado y la sociedad según el viejo esquema del pasado con el cual se identifican. Es un caso de profunda regresión política. Su visión de la historia es simple. Después de la dominación del sector social del cual se sienten herederos, el país perdió su unidad y su grandeza. Ellos son, por así decirlo, la representación misma de la patria, la nacionalidad, el Chile vencedor de antes. Después de ellos viene la decadencia, la destrucción del país (que ellos forjaron) por obra de las luchas partidistas, la demagogia, las ideologías foráneas, la lucha de clases. De esa manera perciben al Chile de la época en que emergen las fuerzas de la clase media y del pueblo, desde fines del siglo pasado. Tienden a ver en la democracia chilena en tanto escapa a su dominación, un chivateo politiquero y demagógico.

La invocación de Diego Portales muestra por sí misma que es la parte más tradicional de la vieja clase domi-

nante la que orienta al régimen militar. El nacionalismo y extremismo de derecha, en sus diversas expresiones, tendieron siempre a apoyarse en Portales como el símbolo de la patria por encima de los individuos, los partidos, las ideologías. Portales aparece también como el hombre en que se encarna el ideal político del antiguo partido conservador y luego del partido nacional en que se fusionaron, durante el gobierno Demócrata Cristiano, en 1965, el partido conservador, el liberal, y grupos nacionalistas que habían simpatizado con el nazismo, toda la vieja derecha, que había sufrido un descalabro electoral en las elecciones parlamentarias de ese año. Así, Portales, llegó a ser, según Mattelart, el símbolo del ideal perdido y de la utopía a restaurar. (A. Mattelart, "Le Monde Diplomatique", n.244, julio 1974). Es el propio Pinochet quien proclama solemnemente que el espíritu de Portales es el que guía su gobierno.

Los partidos son presentados como factores de división y decadencia del país. Los partidos de la Unidad Popular son estigmatizados como marxistas. A la Democracia Cristiana le enrostran que sus recursos financieros y su ideología provengan del extranjero y a la vez su supuesta debilidad frente al marxismo. La Administración Pública había pasado a ser feudo de los partidos. Los apetitos de prebenda y de poder partidista eran el principio supremo. Se sucedieron las luchas intestinas, la demagogia social desenfundada, hasta que la nación misma estuvo al borde del precipicio marxista del cual no hay retorno. De ahí que se estimara indispensable para que Chile recuperara su unidad y grandeza un drástico receso político-partidista por largo tiempo. Hasta que surja una nueva generación con otros hábitos políticos, no partidistas sino con auténtico sentido nacional, y que a la vez se haya podido extirpar por completo el llamado "cáncer marxista".

Ya durante el gobierno de Frei Montalva (1964-1970)

los sectores tradicionales se alarman por la efervescencia social que es principalmente estimulada por la reforma agraria y la reforma universitaria. Esta última genera la ocupación de la Universidad Católica por los estudiantes, con un gran lienzo mirando a la Alameda que dice "El Mercurio miente", que trae por resultado el cambio de rector y produce enorme revuelo. Toman cuerpo las tendencias de izquierda entre los cristianos y se agudiza el enfrentamiento social.

El integrista católico empieza a entrar en acción. Se organiza el grupo llamado Fiducia, en 1966, en base a estudiantes y profesores de la U. Católica. Predominan en él los hijos de connotados latifundistas que llaman a combatir la reforma agraria como un pecado mortal contra la propiedad privada. Se presentan como los "cruzados del anticomunismo" y en sus banderas y escudos figura la imagen de la Virgen y el Sagrado Corazón. Afirman que la doctrina del gobierno demócrata cristiano es una mezcla de cristianismo y comunismo que ha introducido una confusión corrosiva en los católicos. Fundan luego la sociedad chilena de defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad, similar a la que con igual nombre forma en Brasil Plinio Correa de Oliveira que combate fanáticamente al marxismo y al gobierno de Goulart, extendiéndose pronto a otros países. De este grupo sale el libro contra Frei presentándolo como el Kerensky chileno.

La sociedad por la Tradición, Familia y Propiedad denunció el progresismo católico y el carácter "socialista y confiscatorio" atribuido a la reforma agraria de Frei Montalva. Por "orden" entendemos, dice Correa de Oliveira, "la civilización cristiana austera y jerárquica, sacral en sus fundamentos, anti igualitaria y anti liberal." (Plinio Correa de Oliveira, "Revolución y Contrarrevolución") Sostiene que la Iglesia no puede conciliarse con un gobierno que aún reconociendo la libertad de cultos, no admita la

intangibilidad de la propiedad privada, que sería un principio básico del Decálogo.

Muy cercanos a los grupos nombrados se organizan el Opus Dei y Patria y Libertad, este último como cuerpo de choque que en los meses finales del gobierno de Allende realiza una intensa actividad terrorista. Surge, además, el llamado "gremialismo" que jugará un importante papel en el rescate reaccionario de la Universidad Católica y en la movilización de los colegios profesionales y gremios de la pequeña burguesía (camioneros, comerciantes, dueños de buses y taxis, etc.) contra Allende.

Son elementos que provienen de los núcleos del integrismo católico quienes ejercen la mayor influencia de carácter ideológico-político sobre la Junta Militar. Entre estos núcleos debemos mencionar todavía el que se reúne en tomo a Jorge Prat (fallecido en 1972) que durante años publicó la revista "Estanquero", que evocaba con su mismo nombre la que el propio Diego Portales publicara en su tiempo. Prat se había empeñado tenazmente pero sin resultado por obtener el apoyo de los militares para llevar adelante sus tesis políticas e ideológicas, que eran prácticamente las mismas que la Junta Militar proclamó después.

Por su más vasto alcance y profundidad cabe mencionar también el llamado grupo "hispanista" nacido en la Universidad Católica bajo la influencia del historiador Jaime Eyzaguirre, en los años 40. Aquí el integrismo venía de más lejos. No solo reivindicaba a Portales contra las tendencias liberales sino que a la propia Corona de España. Presentaba su dominación colonial con verdadero entusiasmo y enjuiciando a los historiadores laicos del siglo 19 como Barros Arana, Vicuña Mackenna y otros, por la "leyenda negra" que habrían creado contra la madre patria, España. La misma, paradójicamente, que ahora miran con furor.

De este núcleo hispanista provienen dos personali-

dades que tienen gran ascendiente en el discurso del régimen militar. Ellos son Arturo Fontaine, entonces subdirector y principal editorialista de "El Mercurio", y Jaime Guzmán cuya influencia es claramente discernible en las orientaciones doctrinarias de los principales discursos, documentos, declaración de principios, del general Pinochet y la Junta Militar. Tal integrismo hispano-católico desprestigiaba las ideas de la Revolución Francesa, menoscabando su influencia en la independencia de los países latinoamericanos, criticaba los esfuerzos del liberalismo político en ellos como teorías impracticables, y aún la democracia pluralista, no confesional, que promovía Maritain en el campo cristiano, es combatida en nombre del Estado católico-integral y autoritario, que no debe reconocer iguales derechos a la verdad y al error.

En la época de la segunda guerra mundial desarrollan una fuerte campaña anti norteamericana, que apenas disimula la simpatía que sienten por la Alemania nazi. Son los tiempos de "Hispanoamérica del dolor", que se esgrime contra la otra América llena de poder y riqueza. Tomando pie de que la colonización inglesa se hace exterminando la población indígena, exhiben, en cambio, a la española como promoviendo la mezcla de las razas, la conquistadora y la conquistada, así como una legislación protectora de los indios que incluye el sistema de "encomiendas", según el cual la población indígena fue repartida entre sus amos españoles para que estos cuidaran de su evangelización y salvación eterna de sus almas, en tanto los indios debían retribuir tan alto servicio trabajando la vida entera para sus evangelizadores.

Al terminar la guerra impugnan el Tribunal de Nuremberg que juzgó a los criminales de guerra del nazismo, invocando delicados escrúpulos jurídicos que, por supuesto, olvidaron después en su propio país

Se escribió un libro por connotados exponentes del

integrismo católico que apareció en los mismos días del golpe. Se llama "Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional." Estaba destinado a promover y justificar el golpe. A poco que uno se adentra en sus argumentos comprende que la seguridad nacional no es otra cosa que el nombre general que se da a la seguridad de los sectores sociales tradicionalmente dominantes, a su seguridad como clase, como poder, como Estado. Ellos se identifican y autorreconocen en la nación, la patria, y la seguridad de ésta es su propia seguridad. Es un sentimiento natural y espontáneo en quienes por mucho tiempo han constituido la clase dirigente. El pueblo, de esta suerte, es nacional y patriota en tanto está con ellos, en tanto les es leal y se conduce como un buen servidor o un buen soldado. Pero si el pueblo ya no los sigue, si desarrolla una conciencia propia y con ella la crítica o el cuestionamiento de todo ese poder y esa estructura social, si se empeña en promover cambios que afectan ese sistema, entonces les parecerá que ya no es el mismo pueblo de antes, que ahora está infiltrado por ideas "foráneas", "extranjerizantes", ajenas a la "chilenidad", que vinieron de fuera y se oponen a la nación misma, a su unidad, sus tradiciones, su "idiosincrasia", y por cierto a su seguridad. Es el problema de la subversión interna. Los subversivos quedan asimilados al enemigo exterior de la patria, puesto que ambos amenazan la seguridad nacional. Al desintoxicar al pueblo de las ideologías foráneas volverá su chilenidad pura. Este modo de pensar estaba replegado pero rebrota con toda su fuerza y con todo su simplismo al crearse la circunstancia apropiada con el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Jairne Guzmán sostenía que la democracia estaba en crisis no solo en Chile sino en el mundo. "La democracia en el mundo, dice, está atravesando por una crisis muy profunda ... La crisis de las democracias europeas está a la vista ... Esa crisis es la que ha llevado a que en la mayoría

de los países de América Latina existan regímenes de carácter institucionalmente militar en que las Fuerzas Armadas han debido asumir el poder. Uno de los signos de esta crisis, agrega, es la penetración de la doctrina marxista en la democracia. La penetración comunista aprovecha la política internacional de distensión. Falta combatir frontalmente al comunismo". ("La Segunda" 20-9-74)

En el fondo ellos creyeron, sobre todo en el primer momento de alegre triunfalismo, que podrían insinuarse como receta para estas democracias en crisis. Indudablemente la política de distensión, desarme y coexistencia, que hacía progresos entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no les gustaba nada. Ello no favorecía la guerra santa que el integrismo reclamaba contra el comunismo internacional. Pero lo cierto es que habían llegado tarde no solo a la guerra santa sino aún a la guerra fría de la cual el mundo empezaba a salir, empeñado en asegurar la paz. Esto, que es motivo de satisfacción para la humanidad, no lo es tanto para el fanatismo del régimen militar. No quieren oír hablar de diálogo ni de coexistencia y previenen al mundo sobre los peligros de la distensión a la vez que le insisten en que deben aprender de la experiencia chilena.

Pero no sólo la democracia sino también la Iglesia está en crisis para el integrismo católico. Y también es una crisis universal. No están conforme con Pablo VI que desde el primer momento denunció la sangrienta represión militar de la dictadura en Chile. En lugar del carácter "recio, exigente, duro" de la verdadera religión, Guzmán percibe una Jerarquía que cede a la demagogia y aún a la política, que confunde a los fieles, que no enseña la doctrina en forma sólida, que lleva a una concepción "blandengue, fofa, de la religión." "Nuestra Jerarquía, señala, debe sentir que hay una sensación de orfandad dentro del pueblo católico, que quisiera ser bien conducido y que a veces no tiene

los guías que cumplan adecuadamente su misión.” (“La Segunda”, 20-9-74)

Naturalmente ellos quieren que la Iglesia cambie a su principal guía en Chile, el Cardenal Silva Henríquez. Tal vez otros guías podrían hacer de la Iglesia algo más concordante con el régimen militar, recio, duro. Preocuparse menos del respeto o amor al prójimo, o sea, de que no se atropellen sus derechos humanos, y más de servir al poder que confiesa solemnemente el nombre de Dios y proclama a grandes voces su fe.

En suma, el país estaba gravemente enfermo, infiltrado por ideas disolventes que se habían apoderado del propio gobierno. Los militares han venido a salvar al enfermo. Ellos deben acometer una operación quirúrgica de gran magnitud. Hay que extirpar el cáncer marxista desde sus raíces dice el general Leigh dos días después del golpe. Para justificar tanta represión ésta se concibe como una operación depuradora y de limpieza con el fin de acabar con la infección mortal. Surge todo un lenguaje donde se combina la sangre con la purificación, donde Chile (el enfermo) debe ser amputado para salvarle la vida. Había que actuar con energía y sin contemplaciones. Los miembros activos de la Unidad Popular, portadores del mal, debían ser eliminados, sometidos, o echados fuera del país. Muchos deberán “purificarse” mediante la tortura o la prisión. Otros serán simplemente asesinados o desaparecidos. El Plan Z sirve de apoyo psicológico y moral para legitimar la operación limpieza. También algunos obispos proclives al integrismo otorgan su beneplácito al dictador y hasta se suman al lenguaje de la depuración.

El integrismo quiso, pues, transmitir su experiencia a la mayor parte de las democracias occidentales que la necesitaban con urgencia puesto que habría en ellas un alto grado de penetración marxista, lo que constituía una “realidad inquietante” para el mundo libre en su conjunto. Pero

luego del primer acuerdo abrumador adoptado por Naciones Unidas contra el régimen militar, por sus atropellos a los derechos humanos, Pinochet dijo que “se siente en la obligación de denunciar la profunda crisis que se revela en casi toda la civilización occidental”, y que hay una “actitud suicida” en muchos países democráticos frente a la Unión Soviética, en referencia a la política de distensión. (Discurso publicado en “El Mercurio” de 15-11-74)

La Declaración de Principios del régimen militar recurre a conceptos abstractos como “derecho natural”, el “bien común”, la “recta razón” y otros, que manejan a su amañ haciéndolos objetos exclusivos de su patrimonio intelectual o moral y desde los cuales proceden como premunidos de una autoridad que está por encima de la comunidad y sus leyes positivas. La Declaración parte de los derechos naturales anteriores y superiores al Estado, por lo que éste debe estar al servicio de la persona y del bien común, bien que exigiría respetar el principio de subsidiaridad que a su vez garantiza el derecho de propiedad privada y libre iniciativa económica.

En la medida que va descendiendo de los principios generales llegamos finalmente al núcleo concreto que no es otro que la propiedad y la iniciativa individuales. El principio de subsidiaridad en que aterrizan los grandes enunciados es el principio ordenador de todo el esquema. En síntesis, se trata de un principio que se enfatiza para reducir el rol del Estado y dejar el campo libre de toda regulación real al capital privado. Se mide la libertad y otros derechos fundamentales en términos de la subsidiaridad. “El respeto al principio de subsidiaridad, dice la Declaración, representa la clave de la vigencia de una sociedad auténticamente libertaria.” La propiedad es, así, el sujeto de la libertad y de los derechos del hombre. Libertad, derecho, democracia, si, pero unidos a la realización y desarrollo de la propiedad que lleva implícito el del pro-

pio hombre. Pero ¿qué hombre? La propiedad designa aquella clase de la sociedad que es dueña de la riqueza, en nuestros días del capital, más exactamente de la concentración del capital, primero en el interior de los países y luego en el plano mundial, el capital multinacional. La propiedad es, por tanto, la burguesía, sus agentes empresariales, la burguesía que administra los grandes capitales, la que está conectada a la manipulación del capital financiero internacional y a las empresas multinacionales.

El antagonismo de clases no se explica como un conflicto real que emana de las relaciones de producción en la estructura capitalista, sino como algo introducido por una concepción ideológica. Mientras la democracia admite que se exprese dentro de sí el conflicto social, la dictadura (de tipo fascista) se caracteriza por enmascarar ideológicamente la dominación de clase, haciendo como que no existe el conflicto, o que es artificial, aplastando el movimiento social en nombre de algún ideal superior adecuadamente mistificado.

La Declaración de Principios considera también los derechos humanos. Se dice que el nuevo Estado de derecho deberá preservar la tradición chilena de respeto por los derechos humanos, entre ellos la libertad de conciencia y el derecho a discrepar. Sin embargo, de inmediato señala los límites que esto tendrá en la nueva constitución. No puede permitirse, precisa, nunca más que en nombre de un pluralismo mal entendido una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos "que fingiendo aceptar las reglas de la democracia sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario. En consecuencia, agrega, los partidos y movimientos marxistas no serán nuevamente admitidos en la vida cívica."

En ese momento la referencia al marxismo englobaba a los partidos de la Unidad Popular que en la última elec-

ción general anterior al golpe obtuvieron el 44 por ciento de la votación nacional, de modo que los derechos humanos, el derecho a discrepar, etc. no se reconocen a un sector considerable. El pluralismo "bien entendido" quedaba reducido de esta forma a las distintas fracciones de la derecha y a la parte más confiable (no ingenua) del centro. El resto quedaba fuera de la vida cívica. No es el pueblo ya quien genera sus partidos y los promueve con su apoyo, sino el poder autoritario el que señala al pueblo las opciones que le están permitidas. Tal es la filosofía de la llamada democracia protegida. ¿Protegida de quién? Pues, del pueblo.

Pero el integrismo fanático y triunfal del primer período posterior al golpe fue bruscamente traído a la realidad bajo el efecto del repudio internacional despertado por la brutalidad inusitada de la dictadura. En especial las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como decíamos, fueron un golpe demoledor sobre la cabeza del régimen quebrando su esquema ideológico, al comprobar por la matemática estricta de la votación que casi nadie en el mundo estaba con el gobierno militar, que pretendía ser tomado como modelo para salvar a la humanidad del comunismo. No solo los países marxistas sino los de Europa occidental, los del Tercer Mundo y otros como Canadá, Australia, Nueva Zelandia, formaban una masa abrumadora de la humanidad que lo censuraba y que ni siquiera la España de Franco o Estados Unidos lo respaldaban sino que optaban por abstenerse. Sólo estuvieron a su lado seis o siete gobiernos latinoamericanos, casi todos dictaduras militares.

No pudieron dejar de acusar el golpe quejándose de la incompreensión del mundo. Atribuyen la hostilidad internacional a toda clase de maniobras, pretextos, campañas, en su contra, y por cierto a la mano de Moscú manejando todos los hilos, pero no pueden admitir que la ver-

dadera razón de tal hostilidad no es otra que la magnitud de los crímenes contra los derechos humanos y contra los derechos ciudadanos que conmovieron a los pueblos y en general a la conciencia civilizada del mundo.

Le echan la culpa a la distensión. Les molesta que Estados Unidos dialogue y busque acuerdos de paz con los soviéticos. La idea de la coexistencia pacífica les parece una debilidad intolerable. Quieren permanecer en la guerra fría, en la tensión del enfrentamiento. Se resienten contra el gobierno norteamericano y critican la política de Kissinger que interpretan como consecuencia del fracaso en Vietnam y de la descomposición interna de sus fuerzas políticas.

Lo cierto es que los sueños eufóricos del comienzo no duraron mucho tiempo. El aislamiento internacional, del que nunca pudieron salir, empezó a desvanecerlos. Si bien el integrismo católico siguió siendo un elemento importante en la ideología del régimen, finalmente fue superado por el pragmatismo que sólo buscaba, a veces desesperadamente, la sobrevivencia recurriendo a los medios propios del Estado policial.

Lo que el integrismo no comprendió, sin embargo, es que ni aún por el camino tan afín del pinochetismo podía retomar e imponerse en un mundo cuyas convicciones democráticas y pluralistas lo habían dejado definitivamente en el pasado. Si bien nunca pueden descartarse reflujos momentáneos, todo indica que será la cultura democrática y no la autoritaria la que se afianzará y desarrollará con ímpetu en el siglo que comienza.

Que los poderes dominantes se empeñarán siempre en impedir los cambios que los perjudiquen, sea que estos cambios se inspiren en Marx, el evangelio, el Corán, u otros referentes y sea que se encaminen por vías pacíficas o armadas, legales o extralegales, es un hecho cierto que quedó una vez más demostrado con la experiencia chilena de los años 1970-73.

Pero no siempre las clases dominantes consiguen lo que quieren, no siempre pueden impedir los cambios sociales. No siempre y en todas partes son infalibles y todopoderosas. La historia está llena de ejemplos, aún la historia reciente. El problema para las fuerzas que están por el cambio de la sociedad es encontrar el camino justo, la brecha adecuada, las condiciones y modalidades oportunas, en la situación dada, a fin de que los poderes dominantes, en su globalidad, no puedan realizar su voluntad de impedir el cambio social y aplastar a quienes lo promueven.

En el caso de Chile (1970-73) ese camino era, según creemos, el camino institucional, que se desarrollaba dentro de la legalidad, no otro. Pese a sus evidentes dificultades, por ahí había avanzado y podía seguir avanzando el proceso que estaba en acción. En esa línea se situó el Presidente Allende, el programa de la Unidad Popular y buena parte de las fuerzas que apoyaban tal proceso. Al contrario, el camino de la ruptura o quebrantamiento institucional del enfrentamiento armado, era el camino funcional a la derecha y a los manejos urdidos a partir de Nixon, Kissinger, la CIA, la ITT, pues sabían bien y no se equivocaban, que en tal terreno contaban con las mayores ventajas.

El movimiento popular en Chile era, en efecto, un movimiento que tenía fuerte expresión política, social, sindical, ideológica, pero no armada. No era un movimiento armado y su influencia era mínima en las Fuerzas Armadas. De ahí que la estrategia de una parte de la izquierda que descalificaba moral y políticamente a la democracia,

por ser burguesa, y a la institucionalidad legal por considerarla una gran traba, una "camisa de fuerza de la revolución", concurría en cierta forma a crear condiciones favorables al desbordamiento o ruptura del marco institucional y a la definición por la fuerza, en consecuencia, del conflicto, que era, precisamente, lo que buscaban con ahínco las fuerzas sediciosas para derribar al gobierno.

Al mismo tiempo, el empeño que puso esta estrategia en radicalizar el proceso hacia el socialismo, contribuyó, a nuestro juicio, a cerrar la brecha entre la derecha y la democracia cristiana (brecha a través de la cual había avanzado la Unidad Popular en 1970 a la conquista del gobierno, al revés de lo ocurrido en 1964 en que tal brecha no existió) las que terminaron por reunirse en un solo bloque opositor dispuesto a todo con tal de "salvar" al país del socialismo que supuestamente avanzaba sin transar. Este revés político sentó las bases del revés militar. El virtual aislamiento, por así decirlo, en que quedó el gobierno, la clase obrera, frente a un bloque compacto de la oposición, que sumaba dos de los tres tercios tradicionales que hasta poco antes habían estado divididos, dejó en situación claramente vulnerable a la Unidad Popular. En tal condición el golpe se hizo viable y solo era cuestión de encontrar el momento más apropiado.

Si bien la estrategia de que hablamos no llegó a dominar en el gobierno y menos en el Presidente o en la masa popular, ejerció sin embargo una fuerte gravitación a través de sectores de dentro y fuera de la Unidad Popular que la asumieron con gran convicción y activismo. Allende se esforzó por atraer a estos sectores hacia su propia línea, sin conseguirlo, en tanto la izquierda en su conjunto no se percató con profundidad de los alcances y efectos de estas diferencias.

El análisis crítico o autocrítico contenido en estas líneas no pretende extenderse al conjunto de los factores internos y externos que incidieron en la caída de la Unidad

Popular. De lo que se trata, aquí, es de la incidencia de estas posiciones en el conjunto de hechos que llevaron a la situación crítica. No podemos decir que sin esta concurrencia el golpe militar no se habría producido, pero sí podemos decir que fue una contribución efectiva a la estrategia que generó el conjunto de condiciones que el golpe requería.

En principio, todos sostienen la necesidad de la autocrítica. A menudo, sin embargo, se confeccionan catálogos de errores donde se pone de todo y de un modo suficientemente abstracto (desviaciones de izquierda, desviaciones de derecha, etc.) más o menos compensados unos con otros, de suerte que todo queda confundido. En tanto se pasa de la autocrítica de catálogo, nominal, a la autocrítica real, que pone el dedo en la llaga y busca la raíz de los errores inventariados, el espíritu autocrítico se desvanece y cede el puesto al espíritu apologético.

Nos parece que había condiciones en Chile —aunque difíciles y complejas— para realizar cambios sociales profundos, contenidos en el programa de la Unidad Popular, como la nacionalización del cobre y otros recursos naturales, reforma agraria, área social de la economía delimitada según un consenso relativamente amplio, pero no había condiciones para desbordar dicho programa o sus métodos concebidos dentro de un proceso institucional. Menos aún para entrar en una confrontación definitiva del problema del poder, que diera por resultado el poder total para el bloque revolucionario, algo que se parecía mucho al concepto de la dictadura del proletariado, que horrorizaba no sólo a la burguesía sino a la gran mayoría de los sectores medios y para qué decir a las Fuerzas Armadas.

Ciertamente había poderosos enemigos internos y externos del proceso chileno empeñados en destruirlo. Eso está fuera de discusión. Nadie podía esperar que ellos ayudaran a la Unidad Popular. Por supuesto que no, la combatirían con todos los medios de que pudieran echar mano,

como ocurrió. El problema es decidir si estábamos en presencia de una fatalidad, o sea, si de todos modos ellos conseguirían su objetivo. Por nuestra parte creemos que no, que el destino no estaba fatalmente trazado. La acción de estos enemigos, por poderosos que fueren, podía contrarrestarse. Necesitaban crear condiciones necesarias para el golpe. En los papeles de la ITT eso está muy claro. No se trataba, pues, de un hecho fatal. Pero no había que seguir su juego. Al contrario, hacer lo que hizo Allende con su política exterior, que fue ejemplar en este sentido, al estar cuidadosamente dirigida a ganar aliados, a neutralizar adversarios, a evitar el choque frontal con un enemigo (el poder norteamericano) superior en fuerzas, y a no dar lugar a la creación de pretextos o condiciones que llevaran a un enfrentamiento desventajoso.

La sola voluntad de derribar al gobierno de Allende no era suficiente. De hecho durante la mitad del período no lo consiguieron. Antes no pudieron evitar que asumiera. Necesitaban determinadas condiciones para que las Fuerzas Armadas se decidieran a intervenir. Necesitaron cercar al gobierno por una oposición unida. Necesitaron trastornar y desequilibrar profundamente la economía hasta hacerla "aullar," como había dicho Nixon. Necesitaron producir un clima de enfrentamiento, de amenazas, de desorden agudo, de peligros de quebrantamiento institucional.

La verdad es que al interior de la Unidad Popular operaban dos tendencias. A causa de esta doble línea los partidos, como alianza de gobierno, no pudieron ponerse de acuerdo en una conducción homogénea. Sólo el Presidente Allende habría podido resolver el problema, asumiendo una conducción personal, por sobre los partidos, pero no lo hizo. Era imposible manejar la difícilísima situación que el gobierno debía afrontar sin una definición muy clara y coherente de su política. Si había dos líneas pudo adoptarse una u otra pero eso significaba el quiebre de la Unidad Popular

y el consiguiente debilitamiento del gobierno. Pero al no hacerlo se anularon recíprocamente en cuanto a conducción e iniciativa válidas para todos. El Presidente tenía personalmente una posición clara, pero siempre creyó que podría conciliar ambas tendencias. Sin embargo, las diferencias se demostraron irreductibles. El pueblo, al fin, estaba desorientado, confundido. Ausencia de conducción.

Pero en esto no hay sólo un problema de conducción. Era un problema más profundo que afectaba al conjunto de la izquierda y que trataremos de reseñar.

La experiencia chilena era inédita, sin antecedentes en la teoría ni en la historia. El movimiento popular asume el gobierno dentro de la institucionalidad. Ello no corresponde propiamente a una opción deliberada sino a las condiciones objetivas del desarrollo del movimiento popular en Chile. El conjunto de esas condiciones configura la vía institucional. Fue lo que se quiso caracterizar como "vía chilena". Sobre tal vía institucional se ha elaborado teóricamente muy poco y el recurso a las experiencias y teorías disponibles de la revolución socialista conducen más bien a negar tal camino o preparar la salida o desvío de él. Aparecía como no viable para hacer el tránsito al socialismo. El peso objetivo de los hechos impuso pragmáticamente la vía institucional pero sin que fuera asimilada teóricamente. Los conceptos consagrados sobre "vía pacífica" y "vía violenta" no ayudaban mucho en relación al camino institucional. Son conceptos referidos a la experiencia clásica revolucionaria como eventuales tramos de ella. La vía institucional se asimila a la vía pacífica pese a que no descarta el recurso a las armas del Estado institucional para enfrentar la sedición. Por otra parte se entiende normalmente por vía pacífica la ausencia –de hecho– de guerra o enfrentamiento armado, no obstante que las fuerzas populares, en tal hipótesis, están armadas o en capacidad de pasar a la lucha armada o cuentan con respaldo armado. En el caso de la vía

institucional, en cambio, el movimiento popular no era un movimiento armado. Ni podía serlo en tales condiciones. Su acceso al gobierno del país fue sin armas. Las armas estaban en poder de las Fuerzas Armadas institucionales, que tienen el monopolio constitucional de las armas y que si bien debían acatar la autoridad constitucional, obviamente no eran revolucionarias ni socialistas sino de composición social predominantemente media y bajo la influencia de la burguesía y del Pentágono. La vía institucional no corresponde tampoco a una situación de crisis revolucionaria con descomposición del aparato estatal y dispersión de las fuerzas sociales y militares. Al contrario, supone que el Estado y la sociedad en general se desenvuelven en términos relativamente normales (pese a los agudos conflictos sociales y políticos en curso) y que las Fuerzas Armadas institucionales están en condiciones de impedir la existencia o preparación de un cuerpo armado particular, de clase o partido, independiente o paralelo a ellas. La experiencia chilena parece indicar, además, que en las condiciones de la vía institucional sólo las Fuerzas Armadas institucionales pueden sostener al gobierno en un momento crítico de enfrentamiento militar. Si por lo menos un sector de dichas fuerzas no lo respalda, el gobierno carece de defensa efectiva.

En suma, a la izquierda lo menos que le convenía era echar agua al molino de una salida extrainstitucional. Al contrario, le correspondía empeñarse en robustecer, asumir como propio y cuidar el cauce institucional y legal, más aún, en desarrollar una estrategia institucional del proceso, en lugar de asegurar que era inviable. Para la derecha, en cambio, zafarse de la legalidad era no solo derribar al Presidente Allende sino quedar con las manos libres para empuñar el garrote, reprimir a las fuerzas populares hasta el extremo del genocidio político, someter al pueblo e imponerle un modelo económico de sobreexplotación del trabajador y sobreacumulación capitalista. Esto no habría

podido hacerlo dentro del régimen institucional. Son hechos que siguen a la caída de las instituciones chilenas.

A poco de entrar más en el examen de las dos orientaciones coexistentes al interior de las fuerzas populares advertimos que reflejan la incapacidad de asumir teórica y políticamente la vía institucional que era, sin embargo, la que el proceso seguía en la realidad, en la práctica. Una de las orientaciones se empeña con singular impaciencia en reconocer (y reproducir) en el proceso chileno las leyes generales de la revolución socialista (leninismo) aplicándolas como mejor corresponda a las particularidades del caso. La otra orientación se oponía a las precipitaciones, fundándose principalmente en que estábamos en la etapa democrática –no todavía en la socialista– del proceso, pero sin alcanzar una verdadera comprensión teórica de la vía institucional como experiencia nueva de la que no pueden dar cuenta las teorizaciones anteriores. Hubo mucha exégesis de los textos y del pensamiento de los maestros de la revolución y poca creatividad propia, en circunstancias que se requería mucho más de ésta para encontrar el camino justo, que de la aplicación de principios previos que por traer, además, una aureola científica intocable, entrababan más aún tal creatividad, que no pudo sentirse libre para apartarse de la dogmática sin que le cayera encima la tacha de desviación o herejía.

Un ejemplo puede ser ilustrativo a este respecto. El Presidente Salvador Allende en mayo de 1971, en su Mensaje al país leído ante el Congreso Nacional, apuntando a la necesidad de esbozar un pensamiento que correspondiera a la vía institucional, democrática, pluralista, en curso, planteó la idea de que en Chile el camino hacia el socialismo podía hacerse sin dictadura del proletariado. En relación a ello el Secretario General del P. Comunista, Luis Corvalán, señala: “Disentimos... de su criterio de que nuestra vía revolucionaria conformaría un segundo modelo de

realización del socialismo que excluiría o haría innecesaria la dictadura del proletariado en un período de transición determinado.” (Informe al Pleno del P. Comunista, agosto 1977) En buenas cuentas el modelo estaba ya establecido y no había que apartarse de él.

El que más percibió la necesidad de que la vía chilena adquiriera una consistencia conceptual fue el Presidente Allende. Justo es reconocerlo. Comprendió muy bien que el interés del gobierno popular estaba en robustecer la institucionalidad y no en debilitarla, que no había otro camino para el proceso que encabezaba y que la ruptura de la vía institucional sería fatal para el movimiento popular. Claro, no escapaba a Allende el hecho de que la vía institucional operaba dentro de límites. No tenía el poder absoluto. Había que medir la resistencia del edificio institucional. “Sabemos –decía Allende– que cambiar el sistema capitalista respetando la legalidad, institucionalidad y libertades políticas, exige adecuar nuestra acción en lo económico, político y social a ciertos límites.” (Mensaje del 21-06-71). Pero la intuición de Allende sobre la “vía chilena” no pasó más allá de lo folklórico o periodístico. No fue acogida como un llamado a desenvolver los principios propios de dicha experiencia, capaces de darle una orientación acertada. Se trataba de una experiencia democrática, institucional, de avanzadas reformas. Pero, cual más cual menos, creíamos encontrarnos ante una revolución socialista en marcha, y los principios manejados y discutidos eran los de la transición al socialismo, según la experiencia de las grandes revoluciones socialistas de nuestra época, la soviética, la china, la cubana. Se partía de la base de que los principios de la transición ya estaban definidos en el cuerpo teórico desprendido de tales experiencias. Una ardua discusión se llevaba a efecto al interior de este cuerpo a fin de establecer la fase del proceso en que nos encontrábamos y las consecuencias que de ello se deducían para

la acción. El esfuerzo por verificar, reproducir, aplicar, las leyes generales de la revolución socialista en el proceso chileno consumió las mejores energías de gran parte de la intelectualidad de izquierda.

Era un esfuerzo mal encaminado puesto que tales leyes tenían poco que ver en un proceso de carácter institucional y por lo mismo no podían orientarlo, o sólo podían orientarlo a la ruptura del contexto institucional, más pronto (polo más radical) o más tarde. En efecto, para decirlo brevemente, las revoluciones socialistas conocidas habían tomado por asalto el Estado, desde fuera de él y con apoyo de una fuerza armada propia, en tanto el movimiento chileno se verificaba al interior de un Estado institucional y a través de sus mecanismos, donde las fuerzas armadas que contaban eran las institucionales.

Ya en la discusión del Programa de la Unidad Popular se presentó el problema de la doble orientación. Las diferencias se manifestaron principalmente en dos puntos: a) el problema del socialismo, y b) el problema del poder. Los representantes del Partido Socialista procuraban acentuar el carácter socialista del programa, señalando que con él se iniciaba ya la construcción del socialismo en Chile. Los del Partido Comunista, en cambio, preferían dar al programa un carácter antiimperialista, antilatifundista y antimonopólico. Eran tareas previas al socialismo, de carácter democrático, que creaban las condiciones y abrían el paso al socialismo pero no eran aún la transición al socialismo. Esta discusión estuvo siempre latente. La posición comunista tenía en cuenta que la transición al socialismo sólo era posible cuando la clase obrera conquistaba el poder estatal en su conjunto, o mejor dicho, cuando establecía la dictadura del proletariado. Tal no era el caso de Chile ni aún ganando la elección presidencial. Los socialistas querían un programa revolucionario (no reformista) y pensaban que desde ya había que asumir la tarea

del socialismo y del Poder Popular. Existía la idea de que avanzando más drásticamente y rápidamente –profundizando y radicalizando el proceso– se movilizarían más fuerzas en el seno del pueblo, que serían ganadas por la Unidad Popular, fuerzas que aún estaban bajo la influencia de la burguesía y sus partidos (Nacional, DC, etc) En cuanto al problema del poder el P. Comunista optaba por un proceso más gradual de acumulación de fuerzas en la medida que se cumplía el programa acordado. Sin plantear abiertamente el abandono de la vía institucional, el punto de vista socialista era que muy pronto el dinamismo del proceso y las reacciones que éste generaría sobrepasarían los límites institucionales, por lo que se hacía necesario prever y preparar una estructura de poder popular (y militar) capaz de disuadir el enfrentamiento o de afrontarlo con éxito.

El siguiente juicio de Carlos Altamirano, entonces Secretario General del P.Socialista, confirma lo expuesto: “Creímos y creemos que la institucionalidad chilena era legítimamente aprovechable por el movimiento revolucionario. Pero no en la perspectiva de completar un ciclo histórico hasta la construcción del socialismo, sino solamente en la de enfrentar desde posiciones de fuerza más favorable –políticas, sociales y militares– la ruptura del Estado burgués. Intentar transitar el camino político institucional sin tropiezos hasta alcanzar el objetivo final, era sólo una ilusión, una frágil ilusión. El P.S. a partir del Congreso de Chillán en 1967, definió categóricamente su posición.” (“Dialéctica de una derrota”, pag.67) En el Pleno efectuado en Algarrobo, Altamirano ratifica: “El enfrentamiento es el problema central y básico de todo este período ... desde el 4 de setiembre de 1970 la lucha de clases ha desembocado en un enfrentamiento permanente de clases que tiende a agudizarse y a culminar en un conflicto armado ... No podemos caer en la ingenuidad de creer que podemos construir el socialismo a través de las actuales institu-

ciones...” (pag. 68) El llamado Poder Popular (cordones industriales y otros órganos) que Altamirano exalta como “la creación más original del proceso revolucionario chileno” (pag. 105) también es concebido como un poder que “rebasaba necesariamente las estructuras jurídico-institucionales” (pag. 108) Esta política de sobrepasamiento del régimen institucional llega incluso a subestimar las reformas que el gobierno llevaba a cabo, a causa de su origen ... superestructural. “Sólo las reformas que provienen de la acción de las masas tienen potencialidad revolucionaria. Las reformas superestructurales impuestas por la administración central tenderán inevitablemente a deformar el proceso revolucionario y concluirán por convertir al gobierno en un gobierno reformista, burocrático y paternalista.” (pag. 109) Demás está decir que la “administración central” era el gobierno de Allende.

En la discusión del Programa no se había podido resolver las divergencias. Se llegó, a la postre, a una solución de compromiso que de algún modo contuviera ambas tesis. Es decir, una solución que permitía seguir adelante pero que lejos de superar el problema lo agravaba, puesto que otorgaba mayor fundamento a la doble estrategia. No optaba. Cualquiera que analice con alguna atención el alcance de estas diferencias apreciará cómo ellas incidieron negativamente en los principales problemas que debió afrontar la Unidad Popular. Nos referiremos aunque de manera muy somera a algunos de ellos: a) el problema de la Democracia Cristiana; b) el de las Fuerzas Armadas; c) el de la política económica; d) el de la autoridad.

a.- El avance dentro de la vía institucional requiere naturalmente de una mayoría institucional o en otros términos de un frente político y social amplio, que supone la búsqueda de acuerdos ya que no hay cómo imponerlo por la fuerza. La Unidad Popular tuvo muy escasa conciencia de la necesidad de esta mayoría institucional, de la necesi-

dad de un frente amplio que fuera más allá de sí misma, ni menos de cómo marchar en tal dirección. Se explica así que la política hacia la DC y los sectores medios en general fuera muy pobre. No se dio la debida atención al problema en el momento oportuno. Cuando forzado por las circunstancias el gobierno U. P. buscó el diálogo con la DC, ello provocó fuertes resistencias al interior de la U.P. La línea estratégica que quería avanzar radicalizando el proceso hacia la conquista de todo el poder, veía en cualquier entendimiento con la DC un compromiso que detenía la marcha revolucionaria. Desde su punto de vista tenía razón. Pero estas resistencias (sumadas a las de la propia DC) bloqueaban el desarrollo de una política que impidiera por lo menos la alianza de ese partido con la derecha. En todo caso, lo que queremos anotar es que los esfuerzos hechos en esta materia, que respondían a una exigencia básica de la línea institucional, eran contraindicados para la otra estrategia que conforme a su lógica los descalificaba. En tales condiciones no había propiamente una política U.P. (un plan político sostenido, congruente, compartido) al respecto. Las diferencias internas mataban en su raíz esa posibilidad.

b.- Algo similar ocurre con las Fuerzas Armadas. En octubre de 1972, con motivo del primer paro de los camioneros, el jefe del Ejército, General Prats, es designado Ministro del Interior por el Presidente Allende. En un discurso público Prats hace suyos los objetivos más perfilados del Programa de la Unidad Popular. Era la circunstancia apropiada para vincular desde ese instante a una política definida al sector constitucionalista de las Fuerzas Armadas que tenía en Prats su más alta expresión. Naturalmente eso ponía limitaciones al proceso. Ese sector constitucionalista no estaba ciertamente por la revolución socialista y proletaria. Pero podía articularse un entendimiento en base a los objetivos del Programa U.P. que tenían una aceptación más

amplia, a saber, nacionalización del cobre, reforma agraria, área social previamente delimitada. Lo que era de por sí una tarea histórica. Sin embargo, tal posibilidad era mirada como un freno reformista y desmovilizador del pueblo, inaceptable para aquella estrategia que concebía el proceso como una marcha ininterrumpida hacia el socialismo y el poder total, única garantía de su irreversibilidad. Razonaban otra vez dentro de su lógica. Otra vez tenían razón pero de nuevo las diferencias estratégicas anulaban las posibilidades de implementar una política que ampliara la base de apoyo asegurando que la línea a seguir era la institucional. Se perdió, así, una extraordinaria oportunidad que vino a ser, a nuestro juicio, el más grave error de la política militar del gobierno U.P. Ello privó al gobierno y al pueblo del único sector militar (el constitucionalista) que pudo eventualmente ser el pilar de una defensa armada capaz de contrarrestar o disuadir la emergencia sediciosa. En efecto, en la agudización del conflicto por el "poder total" fatalmente las Fuerzas Armadas se ubicarían en el lado opuesto a la clase obrera y al poder revolucionario. Esperar otra cosa era absolutamente irreal. Podía concebirse que las Fuerzas Armadas estuvieran del lado del poder institucional (como ocurrió durante tres años) y que en caso de emergencia al menos una parte de ellas, la parte más democrática y constitucionalista, se mantuviera junto al gobierno para defender el régimen institucional. Pero no podía concebirse que en un contexto de enfrentamiento de clases para decidir el problema del poder, las Fuerzas Armadas se colocaran junto al poder revolucionario, junto a los partidos marxistas leninistas, a fin de aplastar el poder burgués y asegurar el poder proletario. Eso no podía esperarse ni siquiera del sector constitucionalista sino solo de los militares con conciencia revolucionaria y socialista, que eran poquitos y estaban muy aislados y vigilados al interior de sus instituciones. En definitiva, la salida de Prats del gobierno y los

ulteriores acontecimientos fueron debilitando por completo las posiciones constitucionalistas dentro de las Fuerzas Armadas.

c.- La política económica del ministro Vuskovic y su equipo de colaboradores nucleado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile estuvo en gran parte determinada por una estrategia de poder. Las medidas adoptadas, como el área social y el aumento del poder de compra de los trabajadores, si bien correspondían al programa U.P., fueron implementadas con la mira de ganar a corto plazo un apoyo substantivo de la población que permitiera contar con la mayoría y avanzar rápidamente en la lucha por el poder del Estado. La estrategia de la conquista de todo el poder estatal para el proletariado, ilusoria o no en las condiciones de Chile en ese período, jugó un papel importante en el enfoque de la política económica. En su fase inicial esta política estaba inserta en la línea radicalizadora que nunca contó con fuerzas suficientes como para dominar al gobierno U.P. pero sí para influir fuertemente sobre él. Con posterioridad esta política económica fue interrumpida por el propio gobierno pero ya había puesto en marcha tendencias que llegaron a ser incontrolables y que contribuyeron, escapando a los propósitos de sus autores, a crear desequilibrios y una desenfundada espiral inflacionista, muy bien aprovechados por la política "desestabilizadora" impulsada por Nixon, Kissinger, las multinacionales y sus aliados criollos. En verdad, la economía terminó por aullar.

d.- La lectura agudamente ideológica de los hechos repercutió también en una cierta inhibición del ejercicio de la autoridad. Una concepción errática del poder de las masas en orden a que éstas por sí mismas estaban ya en condiciones de administrar, autogobernar y resolver toda suerte de problemas, trajo serias perturbaciones. Desde luego la dificultad para advertir las tendencias disgregadoras, ne-

gativas y de intereses particulares que también existen en el seno del pueblo. Una cierta renuncia al carácter mismo del Estado, esto es, a su capacidad de mando y gobierno hasta el punto de proclamar que hacia el pueblo no se usaría otro medio que no fuera el convencimiento, fue produciendo un quiebre paulatino de la autoridad. Era como no darse cuenta que aún no estábamos en condiciones de prescindir del Estado o de sus funciones esenciales. Todo lo cual contribuyó ciertamente al creciente proceso de desorden y anarquía, de quebrantamiento y vacío de poder, que generó esa imagen caótica que vino de perillas al proyecto de regresión autoritaria que ya estaba en marcha.

En suma, una fuerte carga ideológica venida en el último tiempo de la Revolución Cubana fortaleció la concepción interiorizada de la revolución socialista en la conciencia dirigente, lo que obstaculizó el reconocimiento de una experiencia distinta, como la del proceso chileno, e impidió encontrar el camino apropiado a su desarrollo. Si es cierto que la legalidad era un "límite ceñidísimo" o una "camisa de fuerza de la revolución", mucho más lo era para la derecha. No hay más que ver lo que la derecha pudo hacer sin esa camisa de fuerza, con las manos libres, luego que el golpe la liberó de la legalidad. El enfrentamiento armado en un día solamente les dio el poder total. Respecto a la vapuleada línea institucional o legal habría que recordar que ya Engels, refiriéndose a Alemania de fines del siglo pasado, describía una situación similar en términos positivos "... en el momento presente, decía Engels, no nos hallamos en la situación en que la "legalidad mata", sino, por el contrario, la legalidad trabaja tan bien en beneficio nuestro que, mientras las cosas marchen de esta manera, seríamos unos necios si la violáramos. Sería más lógico preguntar si no vulnerarán la ley y el derecho precisamente la burguesía y su gobierno con el fin de aplastarnos por medio de la fuerza." (Federico Engels, El socialismo en

Alemania) Aún por aquello de que las condiciones de la historia no se eligen, hay que admitir que las condiciones de la institucionalidad son las que en general se dan objetivamente en sociedades más evolucionadas y complejas, y que en lugar de negarlas hay que asimilarlas y saber avanzar teórica y prácticamente dentro de ellas hacia la nueva sociedad y hacia el nuevo Estado.

El día crucial del anunciado enfrentamiento llegó al fin. Fue el 11 de setiembre de 1973. Antes que termine la mañana y ante la ausencia de un sector leal al gobierno en las Fuerzas Armadas, se llega a la conclusión de que no hay posibilidades de organizar una defensa. Altamirano reconoce que el P.Socialista no estuvo en condiciones de responder a lo que había previsto. En una dramática confesión revela la verdad sobre su partido en relación a este trance: "Su tradicional debilidad orgánica, dice, y la falta de formación de sus cuadros, no superadas al calor de la experiencia revolucionaria, le impedía implementar por si solo una estrategia armada. No era, por cierto, el partido de Lenin. Estaba muy lejos de constituir una expresión acurada, monolítica y disciplinada. No tenía experiencia alguna en la lucha clandestina ni dominio práctico de las formas de lucha armada." ("Dialéctica de una derrota", pag. 69)

La tesis del enfrentamiento y la lucha armada se derrumbaba antes de ponerse a prueba. No alcanzó a entablarse la lucha más allá de La Moneda donde Allende resistió con singular coraje y dignidad al poder de fuego combinado de las Fuerzas Armadas, siempre gloriosas y valientes. Nunca vencidas. Hubo también uno que otro episodio disperso de enfrentamiento. Nada más. El partido que más había hablado de enfrentamiento no podía "implementar por si solo una estrategia armada." No era el partido de Lenin. No estaba preparado. Lamentablemente lo descubrieron demasiado tarde, el mismo día del golpe.

De cualquier modo debe quedar claro, al concluir, que más allá de discusiones e hipótesis, lo importante y decisivo son los hechos. Los hechos nos dicen que el gobierno del Presidente Allende y las fuerzas que lo acompañaron, desde luego los partidos marxista leninistas (socialistas y comunistas), ampliamente mayoritarios dentro de la combinación, gobernaron durante tres años en plena libertad y pluralismo. El poder se ejerció a través de métodos democráticos y los cambios sociales y económicos, de real envergadura, fueron efectuados dentro de los cauces legales, sin ruptura con el régimen jurídico-institucional sino a partir de sus normas, pese a todas las discusiones que se quiera sobre la interpretación de éstas (los llamados "resquicios legales" u otras) El pueblo, el movimiento de masas, la clase obrera, junto a los demás que sostenían el proceso, no disponían de armas ni de fuerzas armadas propias. No hacía sus avances, ni los había hecho en la historia social y política del país, con las armas en la mano. De hecho su lucha, salvo en uno u otro momento, tomó el camino institucional. Hasta llegar a la Presidencia de la República con Allende. Tenía el gobierno pero no todo el poder ni la mayoría electoral que apoyaba a la oposición, lo que daba a ésta el poder en el Congreso. El Poder Judicial, la Contraloría, los medios de comunicación no estaban dominados por el gobierno. Era un proceso democrático.

Fueron las fuerzas contrarias al gobierno de la Unidad Popular, que resistieron por todos los medios el triunfo popular, las que derribaron violentamente, por la fuerza armada, al gobierno constitucional y destruyeron por completo la institucionalidad democrática del país. No fue el pueblo, ni el marxismo, ni el comunismo, sino la dictadura de Pinochet y las fuerzas que la generaron quienes terminaron con las libertades y el pluralismo en Chile. El gobierno popular de Allende para realizar su programa no montó un

aparato policial terrorista, como la DINA, ni envió a los opositores a campos de concentración, ni los hizo “desaparecer”, ni fue denunciado por la inmensa mayoría de los países de Naciones Unidas por crímenes, torturas, tratos crueles o degradantes y por hacer tabla rasa de los derechos humanos. Ha sido la dictadura militar-derechista la que ha tenido necesidad de recurrir a estos medios para imponer su poder y sus intereses. Para detener el avance del pueblo dentro de la democracia debieron destruir la democracia. Para retomar su camino el pueblo luchó por recuperar y renovar la democracia. El cabal funcionamiento de la democracia y la justicia no estorban, pues, al pueblo sino a sus enemigos. Basta ver lo que hoy ocurre. Aún más, el trayecto de la democratización de la sociedad y del Estado en Chile muestra que en esta conquista progresiva ha tenido mucho que ver la lucha y la presión venida desde abajo, desde el movimiento social y popular.

Un caracterizado exponente del gobierno de Allende, Clodomiro Almeyda, elogió la democracia como la mejor herencia recibida del pasado, precisando que la tarea de remodelar la sociedad chilena en términos de justicia y libertad, se haría “...de acuerdo con la tradición republicana y democrática de Chile, poniendo al servicio de una causa de futuro lo más grande que recibimos del pasado de Chile: su más que centenaria, robusta y siempre renovada democracia, que exhibimos con orgullo, como muestra de nuestro genio nacional.” (Discurso en Seminario Latinoamericano de Televisión, Santiago, Noviembre 1970) Así ocurrió en los hechos y así habría ocurrido hasta el fin del período constitucional del Presidente Allende, si el golpe militar apoyado por fuerzas de derecha y de centro no hubiera aniquilado la democracia por el largo espacio de 17 años, junto con desatar la incalificable represión que avergonzó al país ante el mundo y de cuyos efectos no ha podido reponerse.

Es de conocimiento público que el diario “El Mercurio” del 12 de noviembre de 1998 reprodujo que “el Vicepresidente del Senado, Mario Ríos, informó que un grupo de senadores de oposición le encomendó a Carlos Cantero que inicie un trabajo de estudio para conformar una Comisión multisectorial que conozca la Historia de Chile de los últimos años. Ríos explicó que el objetivo es establecer una Comisión de estudio de mayor extensión que la realizada durante el gobierno de Patricio Aylwin y que presidió Raúl Rettig, para que analice la historia política e institucional de los gobiernos de las tres últimas décadas”. Al día siguiente, en otra nota del mismo diario se señalaba: “un grupo de 24 senadores de oposición, independientes e institucionales, solicitó formalmente al Presidente de la República la conformación de una Comisión para analizar los hechos históricos ocurridos en los años previos al pronunciamiento militar”.

Ante esta proposición y otras como la del Almirante Arancibia en junio de 1999 –destinadas obviamente a justificar el golpe militar y consagrar su análisis sesgado e ideologizante como “la verdad oficial”– hemos formado un equipo de historiadores que haga las veces de Comisión Alternativa a la propuesta de la Derecha.

Nuestra interpretación global de estos últimos 30 años, que explicitamos en diferentes capítulos, es que en Chile se registraron procesos históricos de mediana y larga duración, con dos períodos: uno, de discontinuidad-continuidad y otro, de ruptura-continuidad. El primero fue inaugurado en 1964 por Eduardo Frei Montalva, iniciador de una nueva fase de democratización política, social y cultural en la Historia de Chile, que tuvo **continuidad histórica** en el gobierno de Salvador Allende, aunque en un

estadio más agudo de lucha social. El segundo, de **ruptura** y más tarde de **discontinuidad-continuidad**, comenzó con el golpe militar de 1973 y se prolongó con cierta discontinuidad y con importantes matices diferenciadores en los gobiernos de la Concertación.

A nuestro juicio, desde 1964 se abrió una fase histórica que culminó en septiembre de 1973, generando un proceso de discontinuidad respecto del gobierno derechista de Jorge Alessandri. Obviamente, los gobiernos de Frei y Allende tuvieron especificidades que derivaron del contexto internacional, latinoamericano, y concretamente de proyectos políticos diferentes: Democracia Cristiana y Unidad Popular. De todos modos, no podría explicarse la aplicación inmediata del programa allendista si no se toman en cuenta las medidas de Frei de “chilenización del cobre”, Reforma Agraria y Participación popular, proceso que caracterizamos de continuidad histórica, aunque hubo diferencias ostensibles entre ambos, expresadas en la política de Nacionalizaciones de Allende, en la profundidad de la Reforma Agraria y, sobre todo, en la creación del área social y la forma de Participación a través del control obrero y la administración de las empresas por los trabajadores, acelerando la creación de los Cordones Industriales, Comandos Comunales, Centros de Reforma Agraria y las Juntas de Abastecimiento y Precios.

Un análisis riguroso conduce a señalar que las medidas del gobierno de Allende constituyeron objetivamente una continuidad histórica, en un plano de mayor radicalización, del proceso abierto por la Democracia Cristiana. En términos de sociología política, se trataría de un proceso de revolución democrática que no alcanzó la fase socialista, porque la Unidad Popular ganó electoralmente el gobierno pero no el poder real.

Allende cumplió prácticamente todas las tareas democrático-burguesas, incumplidas por la clase dominante

de los siglos XIX y XX. Más aún, adoptó medidas que las rebasaron, como la expropiación de empresas privadas al crear el área social y otras mencionadas anteriormente, aunque era evidente –para quien quiera hacer un análisis objetivo– que la Unidad Popular no alcanzó la fase de transición al socialismo, por la sencilla razón de que nunca tuvo el poder real al permanecer intacto el Parlamento, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y otras instituciones burguesas, que en definitiva fueron los artífices del golpe militar. En rigor, la Unidad Popular no alcanzó a cambiar el carácter del Estado ni un nuevo tipo de institucionalidad, que formalizara los embriones de poder popular. Conclusivamente –y ateniéndonos a las tesis de los tratadistas mundiales del Estado, como Harold Laski, y del carácter de las revoluciones del siglo XX analizadas por el reciente libro de Hobsbawm– la Unidad Popular cumplió una parte de su estrategia de la revolución por etapas, primero la democrático-burguesa. Pero el cumplimiento de la primera nunca ha sido en la historia garantía para pasar a la segunda, la socialista, porque para ello hay que tomar realmente el poder.

Empleando una categoría histórica –sistematizada por Braudel y ampliada por otros investigadores– podríamos decir que de 1964 a 1973 hubo un tiempo de “**media duración**”, que fue drásticamente cortado en dos por el golpe castrense del 11 de septiembre.

El militarismo abrió un nuevo tiempo de ruptura-discontinuidad-continuidad, que podría calificarse de casi “**larga duración**”, pues engloba no sólo los 17 años del gobierno de las Fuerzas Armadas, como Institución, sino también los gobiernos de la Concertación, por estar sometidos a la Constitución de 1980 y al “poder fáctico” ejercido por los militares.

No se trata de afirmar que los gobiernos de la Concertación sean políticamente iguales al de Pinochet,

BALANCE HISTORIOGRÁFICO

SOBRE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS DE LA HISTORIA DE CHILE

LUIS MOULIAN

puesto que fueron elegidos democráticamente; pero su gestión ha estado entrampada por los acuerdos explícitos o tácitos de la Concertación con los militares –que recién están saliendo a la luz pública– y por las condiciones impuestas por Pinochet para ceder el poder, entre ellas la continuidad de la política económica, las privatizaciones, el sistema binominal de elecciones, los “senadores designados”, la autonomía de las Fuerzas Armadas y la inamovilidad de los funcionarios públicos nombrados por la dictadura, incluidos los profesores de los tres niveles de la Educación.

Por eso, el denominado “período de transición” no ha terminado, después de una década de gobiernos elegidos por votación popular. El país sigue atravesado por los mismos traumas surgidos abruptamente hace un cuarto de siglo, sin vislumbrarse todavía cuándo serán superados. A menos que eventuales estallidos sociales o nuevos gobiernos con mayorías parlamentarias, en ambas Cámaras, no se decidan a convocar a una Asamblea Constituyente que corte de raíz con la herencia militarista –que no sólo es propia de las Fuerzas Armadas sino que abarca a civiles de Derecha– este proceso histórico se puede transformar en un tiempo no de casi sino de “larga duración”.

Nuestro principal interés no es hacer una predicción de lo que hubiera ocurrido en Chile si los partidos de izquierda hubieran aplicado tal o cual táctica política, sino de analizar realmente lo que ocurrió en esos 30 años. Tampoco centrar nuestro análisis en una polémica con los escasos historiadores que han escrito sobre ese período. No somos depositarios de ninguna verdad absoluta. Tampoco imparciales, aunque aspiramos a ser objetivos en la investigación, no objetivistas.

Santiago, marzo de 1999.

Los últimos años de nuestra historia (1964-1994) están inscritos dentro de un período de importantes procesos históricos donde, queramos o no, se han producido cambios profundos en el plano de nuestra realidad económica, social, político-institucional y cultural. Es un período apasionante, con momentos de gran tensión y profundos desgarros en nuestro país. Tiempo de ampliación de la participación de las grandes mayorías nacionales, que llegaron a ser verdaderos protagonistas de su historia como nunca antes había sucedido; también se ha vivido una de las dictaduras más cruentas de la historia de América Latina, la cual se puede considerar –en el plano de los efectos en las estructuras de la sociedad chilena– como una contrarrevolución. En el ámbito político, esta contrarrevolución rompe con el proceso de democratización llevado a cabo durante los gobiernos de Frei y Allende, en tanto que en lo social esos mismos gobiernos habían canalizado las luchas reivindicativas de los trabajadores, logrando éstos tener un nivel económico relativamente alto en relación a los demás países del continente, junto a una fuerte participación a través de sus organizaciones sindicales y poblacionales.

Emprender un estudio historiográfico encierra enorme responsabilidad, pero también se presenta como un gran desafío. Por las mismas características del período, la historia fue un instrumento de conocimiento, que adqui-

rió mucha importancia para comprender y conocer los antecedentes históricos de cada una de las posiciones de los protagonistas sociales, en lucha por desarrollar sus proyectos de sociedad.

Queda más claro que nunca que la historia es un conocimiento de gran valor para cohesionar ideológicamente los intereses de los distintos proyectos sociales, presentados por los grupos en pugna.

Entre 1964 y 1994 hubo tres tendencias historiográficas absolutamente distintas una de otra, que correspondían a los intereses de diferentes grupos sociales. Todos los trabajos históricos relevantes de ese período se adscribieron a esas tendencias, presentando matices y compromisos distintos con los tres proyectos sociales, pero lo central es que ninguno quedó indiferente al debate.

La historia escrita fue determinante –en sus presupuestos teóricos y metodológicos– con una línea acorde a los tres proyectos, y el resultado de los trabajos históricos producidos sirvió para reforzar las ideas de los proyectos en juego. Pero no se trata de ver los trabajos de historia escrita en el período como mero instrumento de cada uno de los proyectos; no fueron solamente instrumento, sino que a cada grupo les dio armas muy eficaces para desarrollar la confrontación ideológica. Más, la calidad de la producción –aunque es duro reconocerlo para aquellos que tienen el prurito de la “objetividad en la historia”– no decayó en su calidad por estar al servicio de una de las tendencias en que se dividía y se divide el país.

El conocimiento de la historia en el período indicado, como lo fue durante parte importante del siglo XIX con la historiografía liberal-positivista de Barros Arana y los hermanos Amunátegui o en la primera mitad de este siglo con Encina, Jaime Eyzaguirre y Ramírez Necochea, tiene un papel relevante en los debates culturales. Ha sido muy discutido si somos un país de historiadores; en nues-

tra opinión, Chile por su clara diferenciación entre los grupos sociales existentes en el país y las fuertes contradicciones entre ellos ha hecho que cada grupo social, para lograr su hegemonía ideológica-política, tenga que usar todos los instrumentos para lograr su objetivo, entre ellos un buen uso del conocimiento de la historia.

También se puede decir que el nuestro es un país literariamente dotado y creemos que se debe a la misma causa: la fuerte lucha entre los distintos grupos sociales para alcanzar hegemonía. Es el todo o nada en el debate ideológico. En ese sentido, los tres grupos sociales existentes en el país: derecha, centro e izquierda en la producción de conocimiento histórico tienen cultores y producción de gran calidad, aunque sus objetivos sean distintos.

La producción historiográfica de derecha –a la que en el plano de la historiografía se puede denominar conservadora– en los últimos 30 años de la historia de Chile destaca y está bien representada por el historiador Gonzalo Vial Correa, que permanentemente ha estado presente en el debate historiográfico con sus actividades docentes, periodísticas y en la participación en Simposium, Conferencias, Seminarios o como Ministro de Educación durante el gobierno de Pinochet. También actúa como editor de libros relacionados con la historia de estos últimos 30 años.

Junto a Gonzalo Vial se encuentra Ricardo Krebs, también con múltiples iniciativas historiográficas. Como veremos en nuestro análisis, esta corriente conservadora adhiere a los valores del cristianismo occidental, inspirados en la vertiente española surgida en la mística de la contrarreforma en el siglo XVI y también con fuerte rechazo al proceso de secularización ilustrada del siglo XVIII. Igualmente les une el rechazo al intento de “aggiornamento” de la iglesia con el Concilio Vaticano II del Papa Juan XXIII.

Vial es profundamente anti-marxista y contrario a las

experiencias socialistas. Esto se manifiesta concretamente en su rechazo a la experiencia de la Revolución Cubana y sus efectos en América Latina y, en la década de los setenta, a la vía chilena al socialismo.

Vial y Krebs adhieren al proyecto de los militares entre 1973-1989. Nuestro estudio analizará su visión sobre los 30 últimos años, desde el mundo conservador o neoconservador. Antes de la llegada de los militares al poder en 1973, consideran que Chile había transitado por una paulatina decadencia, con riesgo de perder los valores nacionales más queridos por los chilenos. Rechaza Vial los proyectos reformistas de las capas medias y también el socialista de 1970-1973.

Otro grupo social presente en el debate historiográfico es el constituido por las capas medias, quienes también hacen historia o mesohistoria representados por Sergio Villalobos y Cristián Gazmuri. Esta reflexión también tiene sus raíces en el cristianismo occidental, aunque más cercana a la Doctrina Social de la Iglesia católica, surgida a partir de la Encíclica Rerum-Novarum de León XIII.

Villalobos y Gazmuri están conscientes de las injusticias de la sociedad chilena al iniciarse los últimos 30 años de nuestra historia, y están de acuerdo en la necesidad que tenía Chile de llevar a cabo una serie de reformas que mantengan a las capas medias como vanguardia de los procesos de cambios. Para la mesohistoria la historia de Chile tiene una evolución positiva, no solamente desde 1964 en adelante sino durante todo el siglo XX, especialmente con la llegada de Arturo Alessandri a la Presidencia en 1920, algunas realizaciones del Frente Popular como la creación de la CORFO y una mayor participación del Estado en la economía.

La mesohistoria comparte un proyecto de cambio graduado para terminar con las injusticias de la sociedad capitalista, tal como lo trató de hacer el gobierno de Frei

Montalva. Esta tendencia historiográfica sostiene la idea de que en los procesos históricos intervienen múltiples factores, no teniendo ninguno de ellos un papel determinante. Así y todo, la preocupación de la mesohistoria es destacar los hechos políticos por sobre otros factores y cuando incorporan la economía o la cultura no interrelacionan estos aspectos, apareciendo cada uno en compartimientos estancos.

La otra corriente historiográfica importante en los últimos 30 años es la marxista, que explica el trasfondo de los acontecimientos históricos apoyándose en los procesos económicos-sociales. Critica el sistema capitalista dependiente existente en el país por su incapacidad para solucionar los problemas de la pobreza y, en general, de las injusticias de la sociedad chilena. Se identifica con decisión en la experiencia de la vía chilena al socialismo encabezada por Allende en los años 70.

Los historiadores marxistas que incluiremos en nuestro ensayo sin menoscabar la importancia de Julio César Jobet, Marcelo Segall, Alejandro Chelén y Hernán Ramírez son Luis Vitale, Tomás Moulian y Gabriel Salazar, tres actores de la historia chilena del período elegido, pero también agudos y certeros historiadores del mismo.

Estas tres visiones historiográficas: conservadora, mesohistoria y marxista proporcionan claridad para la reflexión, así como para entender y aceptar sin traumas que sobre la historia de nuestro país hay distintas interpretaciones, que obedecen a la división en grupos sociales con intereses ideológicos contradictorios.

Nuestra interpretación no es ajena a la división de los grupos sociales existentes en el país. Somos adherentes a las posiciones sobre los procesos históricos que tiene la reflexión marxista, la cual proporciona una visión real y científica de los hechos históricos. Del marxismo tomamos la teoría de que los procesos sociales están determinados

en última instancia por lo económico, aunque también lo económico es fuertemente influenciado por factores políticos e ideológicos. El marxismo comprende la sociedad como una totalidad y la historia debe dar cuenta de esa totalidad, en movimiento permanente y con contradicciones que provocan cambios profundos, revolucionarios.

Las corrientes historiográficas anotadas corresponden a una mirada histórica que tiene por base supuestos teóricos y metodológicos, que recogen la acumulación de conocimientos historiográficos que ha tenido la humanidad. Gonzalo Vial afirma su mirada en el pensamiento católico que surge en el Concilio de Trento en el siglo XVI, bajo la influencia del rey español Carlos V, que tiene grandes añoranzas del pensamiento de la sociedad medieval, entre ellos San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Son concepciones conservadoras que tienen mucho miedo al cambio y a lo nuevo: prefieren lo que hay y no aventurarse en utopías. Por su parte, la mesohistoria se basa en la doctrina social de la Iglesia y el marxismo en la teoría y metodología de Marx y Engels.

Nuestro análisis será respetuoso con las ideas conservadoras y de la mesohistoria. Trataremos de reflejar fielmente el sentido y las orientaciones generales de las cuales son depositarias. Dentro de los elementos que componen la historiografía conservadora encontramos elementos teóricos sólidos, claros y acotados a diferencia de la mesohistoria, que es más vaga y ecléctica, fluctuando entre el tradicionalismo y un reformismo, situación que le resta claridad en sus objetivos teóricos.

Tenemos conciencia de que los últimos 30 años de la historia de Chile fueron tiempos de grandes cambios, reformas, revoluciones y contrarrevoluciones y que por ello el conocimiento histórico debe y tiene la obligación de explicar en profundidad lo sucedido. Queda mucho por explicar; hay hechos y zonas oscuras todavía, pero nuestra

opinión es que la historiografía conservadora y la marxista han realizado aportes importantes para dilucidar la historia reciente, no así la mesohistoria que ha logrado un certero relato de los hechos, pero no una explicación de las causas de lo sucedido. En ese sentido tanto los historiadores conservadores como los marxistas, a pesar de ser interpretaciones antitéticas y en contra de lo que suponen muchos sus explicaciones historiográficas han avanzado bastante, más de lo que se piensa al interior de los propios historiadores.

El período del reformismo del gobierno de Frei Montalva y la vía chilena al socialismo de Allende fueron períodos creativos, con gran participación del pueblo en las decisiones que se tomaban. El actor de la historia fue el pueblo, las grandes mayorías logrando una democratización nunca vista antes en el país. Ello en la interpretación conservadora de Vial y Krebs es sinónimo de anarquía, de caos, de un desorden permanente para la reproducción de la sociedad capitalista dependiente y nefasta para los valores cristianos. El período de Pinochet, en cambio, es una recuperación de los valores del mundo cristiano-occidental y la eliminación de cualquier posibilidad de que el país caiga en la órbita cubana-soviética. Chile vuelve con Pinochet a recuperar la "tranquilidad", tan cara a los sectores conservadores. La acción política desaparece al eliminarse la actividad de los partidos políticos, cerrar el Congreso y no permitir el reivindicacionismo sindical. Las organizaciones estudiantiles también deben desaparecer. Para Krebs, que es el historiador conservador que ha estudiado más sistemáticamente el período en el Manual "Nueva Historia de Chile", se recupera el alma nacional.

En cambio, para la mesohistoria hay un corte radical entre el proceso de reforma democristiano de Frei Montalva y la vía chilena al socialismo. Durante 1964-1970, según Gazmuri, el país avanza y progresa al ritmo acotado de las

reformas, en cambio en el gobierno de Allende se entra a un período de desintegración social y anarquía.

La dictadura pinochetista ha sido menos estudiada por esta corriente historiográfica, aunque sí lo han hecho científicos políticos vinculados en cierta medida con la línea de Gazmuri, como son Genaro Arriagada y Edgardo Boeninger. Sabemos que no se puede endosar a Gazmuri todo lo que dicen estos dos científicos políticos, por eso consideramos que la mesohistoria se encuentra en deuda en relación al período de Pinochet.

La postura de esta corriente en su análisis de la dictadura como del gobierno concertacionista de Aylwin, es de discrepancia con algunas acciones llevadas adelante por Pinochet, pero consideran en líneas generales que el autoritarismo tuvo un desempeño positivo al echar las bases de una economía sana –según ellos– superando las crónicas crisis del sistema capitalista en el país. Esto lleva a que el gobierno de Aylwin, llamado de transición, sea en lo económico respetuoso de las líneas económicas de la dictadura y haya llegado a acuerdos con las corrientes pinochetistas para admitir una democracia protegida.

Para la historiografía marxista el período freista se puede dividir en dos etapas: una que va entre 1964 a 1967, en que se realizan reformas importantes, radicales y otra de 1967 a 1970, en que se frena el proceso de reformas llegando a un gobierno de administración.

La vía chilena al socialismo para Luis Vitale, Tomás Moulian y Gabriel Salazar es una situación pre-revolucionaria de cambios profundos en la estructura económica, con miras a la constitución de una economía socialista pero que –según ellos– no tiene su correlato en una revolución política, lo que permite que los cambios introducidos sean interrumpidos por una contrarrevolución en 1973, que establece una larga dictadura de 17 años, que se apoya en un neoconservadurismo con un tipo de acumulación capita-

lista que abre un nuevo período de economía hacia fuera. La postura de la historiografía marxista en relación al período pinochetista es de crítica; abarca todos los planos, desde el económico hasta la violación permanente de los derechos humanos. Tampoco comparte la forma en que se lleva a cabo la llamada transición a la democracia, viendo en el gobierno de Aylwin continuidad objetiva con la dictadura al mantenerse importantes enclaves autoritarios.

La historiografía conservadora, la mesohistoria y la marxista son las grandes tendencias historiográficas –¿escuelas?– que se dan en Chile contemporáneo, lo que no quiere decir que no existan interpretaciones distintas a las anotadas, pero hay que aceptar que el abanico de posibilidades, en lo grueso, se encuentra en estas tres líneas de análisis.

Es importante y no es novedad en la historiografía chilena que amplios sectores ligados a la actividad, principalmente política, pidan que los historiadores den respuesta a las interrogantes sobre los últimos 30 años de nuestra historia. El conocimiento histórico en nuestro país tiene gran responsabilidad en dar respuesta a las inquietudes manifestadas por la élite política, pero también al conjunto de la sociedad para dar respuesta al por qué se rompió en Septiembre de 1973 con el sistema democrático; un proceso de éxitos en el plano de la justicia social y la igualdad de oportunidades, que se fue acelerado con los gobiernos posteriores, permitiendo a todos los sectores sociales manifestar y hacer efectivas sus reivindicaciones.

Responsable de este éxito de nuestra sociedad en los planos indicados fue todo el espectro político, incluso los sectores conservadores como Jorge Alessandri que mantuvieron fidelidad a la democracia –con algunas excepciones– hasta mediados de 1967, al desaparecer los partidos Conservador y Liberal.

Si en el campo de la política la derecha se vuelve par-

tidaria del autoritarismo y anti-democrática, en lo historiográfico también se produce un cambio hacia posiciones que desdeñan la democracia y partidarias del autoritarismo, como son los casos de Mario Góngora y Bernardino Bravo, procedentes de una vertiente conservadora nacionalista. Es lo que sucede también a quienes serán estudiados en este trabajo: Gonzalo Vial y Ricardo Krebs. Ambos luego del desastre electoral en las elecciones parlamentarias de 1965 empiezan a estudiar –como dice el propio Vial– el pensamiento nacionalista de Jorge Prat, político marginal a la política democrática desarrollada en la época. La derecha, luego de 1965 con su programa la Nueva República se empieza a deslizar hacia el autoritarismo y se convierte en factor principal de la ruptura democrática en Chile.

En nuestro trabajo nos detendremos más en relación a la historiografía conservadora, por las razones indicadas anteriormente y por la importancia en el debate actual de los últimos trabajos históricos de Gonzalo Vial.

El debate historiográfico chileno actual se da entre la historiografía conservadora, la mesohistoria y la historiografía marxista, como veremos a continuación.

La historiografía conservadora en los últimos 30 años: Gonzalo Vial y Ricardo Krebs.

Gonzalo Vial es abogado y profesor, tiene en su curriculum una larga vida en la docencia, primero en la Universidad Católica luego en lo que es hoy la Universidad Metropolitana de Educación y en la Universidad privada Finis Terrae.

En su formación intelectual influyen fuertemente Jaime Eyzaguirre y el sacerdote Osvaldo Lira. Con el primero mantiene un largo dialogo intelectual y muchas de sus concepciones historiográficas son recogidas del pensa-

miento de Eyzaguirre. Su fuerte religiosidad, buscar permanentemente la transcendencia, la admiración por la cultura hispana y su labor colonizadora en Chile, su defensa de la cultura cristiano occidental.

A Eyzaguirre la experiencia española frente populista y el triunfo de Franco le recuerda la España de la contrarreforma del tiempo de los Emperadores Carlos V y Felipe II en su lucha contra el luteranismo que destrozaba el dominio del catolicismo romano. Vial también recoge cierto desprecio que sentía Eyzaguirre hacia el mundo cultural anglosajón, por su pragmatismo y fuerte utilitarismo.

Para Vial la reflexión filosófica y teológica –tan marcada en Eyzaguirre– es una de las características más interesantes del mundo latino. Vial, al plantearse optar entre Franklin y el soñador, largo y enjuto don Quijote se queda con este último como ejemplo de vida.

El historiador Vial puede ser considerado el seguidor más importante que dejó Jaime Eyzaguirre, luego de su muerte trágica en 1964. Dentro de la escuela conservadora hispanista –a la que dio origen Eyzaguirre– en la práctica de conocimiento historiográfico en Chile, Vial es el que ejerce más influencia y quien tiene mayor presencia en el debate historiográfico. Esta escuela en la actualidad tiene una hegemonía dentro de la reflexión conservadora de la historia en Chile. Sus cultores y seguidores son Bernardino Bravo, Javier González Echeñique, Horacio Aránguiz, Adolfo Ibáñez, entre otros. Entre esta escuela y la conservadora nacionalista hay fuerte predominio de la hispanista, porque la nacionalista con la desaparición de Mario Góngora prácticamente no dejó seguidores de importancia.

Cuando decimos conservadora no lo hacemos en sentido peyorativo ni de descalificación, sino pensando que las vertientes conservadoras tienen mayor dificultad para entender los cambios y las contradicciones, como también la profunda laicización a que ha estado sometida la socie-

dad durante el siglo XX. En Vial, esta adscripción al conservadurismo se refleja en su trabajo histórico, cuando sostiene que durante los gobiernos liberales del siglo XIX de Domingo Santa María y Balmaceda, con las reformas laicas llevadas a cabo Chile perdió su "imagen de mundo" que le daba la hegemonía de la iglesia católica y ésta no fue sustituida, cayendo en una crisis histórica, moral y valórica. Desde ese momento nuestro país va de "tumbo en tumbo", en la concepción de Vial. También lo conservador se aquilata en su visión de las acciones desarrolladas por la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX, especialmente con las conclusiones y reformas que lleva a cabo el Concilio Vaticano II y las posiciones del pontificado de Juan XXIII y Pablo VI.

La escuela conservadora hispanista también es contraria a corrientes nihilistas que se manifiestan a principios de siglo en Europa, que hablan de la muerte de Dios y escepticismo frente a las posibilidades del conocer y de la reflexión teológica. La dialéctica, considerada como materialista, es antiteológica, atea, que ve a la religión como una ideología de dominación. Otra expresión filosófica que muestra signos de decadencia es el existencialismo, que ataca las formas tradicionales de las instituciones de la sociedad como la familia y la relación hombre-mujer.

Hasta 1973, Gonzalo Vial publica pocos trabajos. Su actividad principal es la docencia y la dirección desde 1971 de la revista semanal "Qué Pasa" que fue la primera revista de éxito en la segunda mitad del siglo XX y de larga duración que tiene el pensamiento de derecha en Chile. Marca un hito importante y junto al diario "El Mercurio" y en algunos momentos "La Tercera", más la revista PEC y "El Diario Ilustrado" defienden el pensamiento conservador. Gonzalo Vial fue su creador y por largo tiempo, al menos hasta 1973, su Director. El momento de nacer en 1971 era para los conservadores difícil, no obstante la re-

vista mantiene un buen nivel ideológico y da una discusión seria. Vial mantiene un debate sobre el momento político con pensadores y políticos de las tres tendencias más representativas en el país, lo que no era frecuente en esos momentos.

En relación a las concepciones corporativistas y nacionalistas, publica una serie de reflexiones sobre el tema, especialmente sobre la experiencia de la España de Franco. Otras temáticas que difunde la revista estuvieron relacionados con educación e historia. En el caso de la historia, "Qué Pasa" entrega una historia de las ciudades más importantes de Chile, una secuencia sobre guerras en Chile y también un pormenorizado análisis de la Guerra Civil de 1891.

En sus comienzos, Vial es partidario del corporativismo y dentro de sus ideólogos se encuentra Jorge Prat, quien se caracterizaba por hacer una crítica demoledora a las instituciones partidarias, al marxismo y al capitalismo liberal. Con frecuencia "Qué Pasa" adquiere un tono nacionalista y ve con preocupación que durante la Unidad Popular se haya debilitado nuestra capacidad persuasiva con los vecinos de Argentina, Perú y Bolivia.

Unos meses antes del Golpe de Estado de 1973, la revista pierde su tranquilidad habitual impulsando como toda la derecha una salida golpista.

En "Qué Pasa" durante el período previo al 11 de Septiembre de 1973 se publican dos o tres artículos de Jorge Cauas y de otros libre-mercadistas, pero está claro que no era el proyecto de Vial más afín con el corporativismo y la experiencia franquista española. En un análisis de las tendencias de la derecha que recoge la revista en un artículo se habla elogiosamente del gremialismo, que cobija tanto a profesores como estudiantes de la Universidad Católica, aunque la revista discrepa de sus dificultades para proyectarlo políticamente.

Al cumplir 100 números de circulación, la revista se consolida en el ambiente periodístico y aparece con un Comité Editorial Fundador con las siguientes personas: Jaime Martínez W., Víctor Manuel Muñoz, Hermógenes Pérez de Arce, Emilio Sanfuentes, Fernando Silva, Gonzalo Vial, Joaquín Villarino y Cristián Zegers. A cargo de la sección economía se encuentra Sergio de Castro.

En el Número 100 "Que Pasa" –siempre bajo la Dirección de Gonzalo Vial– hace una declaración de propósitos que "se define en la oposición democrática" y que esto no puede significar: 1) "deformar los hechos o practicar la "media verdad", destacando los hechos que beneficien nuestra posición y callando aquellos que la comprometan; 2) Silenciar la versión de los hechos que dé el adversario y 3) no enjuiciarlo.

El objetivo principal de "Que Pasa" es la "unidad nacional" de los chilenos, en momentos que se viven días críticos. Para cumplir esto la dirección de la revista considera muy importante el conocimiento de la historia. Llama la atención que en el Número 100, "Que Pasa" ponga un Comité Editorial Fundador y no antes, donde aparecía sólo el Director –Vial– y además no apareciera ningún autor como responsable de los artículos. Esta práctica de ocultar la identidad de las personas que escriben las colaboraciones es frecuente en Vial. Recordemos que sólo en este año 1999, 25 años después, Gonzalo Vial reconoce que fue él quien escribió el Libro Blanco en el que se da a conocer el Plan Zeta, con detalles que para cualquier persona resultan truculentos y dignos de una mente desquiciada, absolutamente faltos de asidero en la realidad.

"Qué Pasa" apoya la solución política del 11 de Septiembre de 1973 y llama a colaborar en "la reconstrucción de Chile" en su editorial.

Siguiendo de Director Gonzalo Vial, la línea de la revista experimenta un cambio: desaparecen obviamente los

debates entre las tres tendencias políticas que existían previo al 11 de Septiembre. Las columnas que ocuparon Rafael Agustín Gumucio, Julio Silva Solar, Jaime Castillo y en algunas ocasiones Orlando Millas desaparecen.

La revista siente como un triunfo a su espíritu de colaboración con el gobierno de Pinochet cuando en 1978 Gonzalo Vial pasa a ser Ministro de Educación.

Vuelto Vial a la revista, el corporativismo, el nacionalismo "pratista" y el gremialismo ocupan el debate de "Qué Pasa" apoyando la dictadura de Pinochet. En la revista se da amplio espacio a la discusión del sentido y orientación que debía tomar la dictadura. Es un lugar privilegiado de reflexión entre los conservadores de estas tres tendencias. Al final, aproximadamente en 1977, los corporativistas y nacionalistas, así como los seguidores de Jorge Prat ven disminuida su influencia y se va imponiendo la vertiente gremialista, que tiene la virtud política de aliarse con los libre-mercadistas o Chicago Boys, lo que le da una brillante cobertura para el control de las líneas centrales de la aplicación de la política económica en el período.

Otra iniciativa periodística, también con éxito, es la revista Portada cuyo primer número sale en Enero de 1969, de la cual su Director y Representante Legal es Gonzalo Vial. Se destacan artículos de Julio Philippi con unas reflexiones sobre la violencia, otro de Jaime Guzmán sobre el miedo.

Sus editoriales muestran a Chile como un país con "crisis de autoridad". Es demostrativa de su pensamiento la editorial aparecida en el N° 9 de 1973 poco antes del Golpe titulada "Desorden social y crisis política" donde destaca los elementos que ayudan a esta crisis política. En lugar destacado están los partidos políticos que son un "anacronismo vivo" y que pasan por una "degeneración".

En la contienda política para elegir nuevo presidente en Septiembre de 1970 Portada se definió por el "Hombre

Símbolo”: Alessandri, que es “la única candidatura que entraña la posibilidad de una Presidencia realmente exitosa”.

Una vez fracasada la candidatura Alessandri, saca un Número Especial el 24 de octubre de 1970 con una editorial titulada: “Lo que está en juego y las reglas del juego”. Quiere justificar una salida distinta a la tradicional y que el Congreso elija a la segunda mayoría relativa –o sea a Alessandri–, “ya que éste ha anunciado oportunamente su decisión de renunciar si es designado, haciendo camino a una nueva elección”.

La posición de Vial, ajustada en parte a los hechos históricos, porque el apoyo radical a Jorge Alessandri fue bastante tiempo después de haber sido ratificado su triunfo por el Congreso Pleno, no implicó en los dos casos elegir a la segunda mayoría. Tanto González Videla en 1946 como Alessandri el 58 fueron los ganadores en las urnas, en cambio Jorge Alessandri en 1970 había salido segundo y nunca el Congreso Pleno había elegido al segundo en la práctica política en Chile.

Vial escribe dos artículos con su firma en “Portada”: uno de ellos “Sobre el tema del Hombre Nuevo en la política”, sostiene que en la historia los intentos por un “Hombre Nuevo” han fracasado rotundamente, aunque “la idea original del ‘hombre nuevo’ es hondamente cristiana. Otro aparece en el número 10 titulado “El ‘turco Tarud’ y el socialismo a la chilena”, de una virulencia y descalificación personal del entonces senador Rafael Tarud que no es habitual en Vial. Las afirmaciones de Vial lo que tratan de hacer, en plena campaña presidencial de 1970, es vincular los supuestos negocios de Tarud con el socialismo que quería construir la Unidad Popular. Una maniobra, por decir lo menos, criticable en un historiador como Vial.

Sobre el período que cubre nuestro análisis historiográfico, los últimos 30 años de la historia de Chile, Gonzalo

lo Vial tiene bastantes escritos y dentro de los historiadores que analizamos es el que más ha escrito.

A través del diario “La Segunda” en fascículos publicó en orden temporal, primero una serie de 10 fascículos desde el 6 de Marzo de 1998 hasta el 8 de Mayo con la historia del gobierno autoritario de Pinochet. El primero de esta serie de 10 se titula “Pinochet: decisiones claves. El 11” y termina con el fascículo número 10 con el título del número, 1 pero con una bajada que dice: “La última decisión clave de Pinochet”. La otra serie es “Los 10 chilenos más importantes del siglo XX”; luego vienen otros 10 fascículos que cubren desde el 11 de Noviembre de 1998 hasta el 12 de Febrero de 1999, que lleva por título “1964-1973. La violencia pone a Chile al borde de la Guerra Civil”.

Para el estudio historiográfico de la obra de Vial de los últimos 30 años, nos ocuparemos principalmente de estos fascículos, pero también utilizaremos el libro editado por CIEPLAN “Democracia en Chile. Doce conferencias” donde Vial publica “Algunas condiciones para una democracia estable en Chile”, más el libro editado por la Universidad Finis Terrae bajo la dirección de Gonzalo Vial llamado “Análisis crítico del régimen militar”.

Tenemos que agregar que en los fascículos “Los 10 chilenos más importantes del siglo XX” aparecen cinco personajes que son relevantes para la historia de Chile de los últimos 30 años: Eduardo Frei, Salvador Allende, Augusto Pinochet, Raúl Silva Henríquez y Pablo Neruda.

La interpretación de la historia de Chile de los últimos 30 años de Gonzalo Vial se puede dividir –según él– en dos períodos: de 1964-1973, donde la violencia pone a Chile al borde de la guerra civil y un segundo período que va desde 1973 hasta el plebiscito de Octubre de 1988, que está marcado por una fuerte modificación de los patrones fundamentales de la sociedad chilena que conducen a una nueva orientación económica, con la implantación del sis-

tema neoliberal que implica un nuevo plan laboral, un nuevo sistema previsional, un nuevo sistema de salud y una nueva forma de acumulación capitalista. Incluye la creación de una nueva Constitución –en 1980– y una salida hacia la democracia protegida que asegura la transición que se da hasta hoy.

Para Vial, “Todos los años 60, la política y los partidos chilenos se fueron polarizando. Tal polarización asumió la forma de lo que Bernardino Bravo llama ‘partidos ideológicos’ que en la conocida frase de Mario Góngora poseen sus respectivas ‘planificaciones globales’. Son éstos ‘modelos’ o ‘utopías’ que cubren los diversos aspectos de la sociedad: políticos, sociales, económicos, culturales, etc., engranados unos con otros hasta formar una especie de puzzle, cualquiera de las piezas que se retire desarma el conjunto. Las planificaciones globales de los 60 fueron la demócratacristiana (los profundos cambios estructurales de la ‘revolución en libertad’, derivadas después a una forma extrema: el comunitarismo) y la unipolar (la revolución a secas, y además marxista-leninista, pero ‘con olor a empanada y vino tinto’)”.

Según Vial, la primera planificación y la segunda de Allende llegó un momento en que se trataron de imponer por la violencia. Relata como fue acogido este llamado en los distintos sectores del partidismo chileno. Por otro lado, también trata de entender cómo se quiso, según él, abanderizar a las Fuerzas Armadas en la polarización y en la violencia.

Para el historiador conservador la fase decisiva del proceso se vivió durante el lapso 1970-1973, aunque sus raíces alcanzaron a los años 60.

Según el autor hay quienes pugnaron por desencadenar la guerra civil, dividiendo a las FF.AA y quienes se opusieron y la impidieron. Entender los motivos de aquellos que empujaron un desenlace con Guerra Civil y quie-

nes la impidieron son elementos importantes para conocer el pasado reciente.

El historiador pone como elemento desencadenante de una posible guerra civil lo que el llama guevarismo, aludiendo al pensamiento y la práctica del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Da una detallada biografía del Che hasta su asesinato en Bolivia, sus reflexiones sobre las condiciones para la teoría del foco, la inevitabilidad del enfrentamiento armado entre burguesía latinoamericana y los pobres, para luego analizar sus efectos en la constitución del referente político chileno: el MIR.

Para Vial otro foco violento que prepara una posible guerra civil son los cristianos-revolucionarios, inspirados en la experiencia del cura Camilo Torres que en Chile se cubre en la experiencia de la Iglesia Joven y los Cristianos por el Socialismo. Otro foco violento, según el autor conservador, fue el partido Socialista chileno, especialmente su ala más radical que los identifica con los “elenos” y trotskistas, además de la corriente del Frente de Trabajadores que postulaba como no viable una alianza con los sectores medios.

Sin embargo, no es sólo en los elementos indicados donde se incuba la violencia conducente a la guerra civil, según Vial, sino también en “la polarización y violencia en la Democracia Cristiana y la Derecha”. Esta idea la desarrolla en el Capítulo II de los fascículos en La Segunda del 18 de Diciembre de 1998, aunque extrañamente parte con lo que Vial llama izquierda que no era guevarista como “la centroizquierda tradicional”, compuesta por el API de Rafael Tarud y el Partido Comunista de Chile.

El ingrediente violento de la DC y que era el real motivo del capítulo II y no el API y el PC, el historiador conservador lo ve junto al gobierno de Eduardo Frei Montalva y su política de reformas que se conoce como la

Revolución en Libertad. Motivo de la polarización es la Reforma Agraria, el nacimiento de las corrientes internas en la Democracia Cristiana de los rebeldes y terceristas, las organizaciones comunitarias como las Juntas de Vecinos, el apoyo del gobierno a la Reforma Universitaria especialmente la que se lleva a cabo en la Universidad Católica y el papel en ella del joven democristiano Miguel Angel Solar y del arquitecto Fernando Castillo Velasco. También es motivo de reflexión para el historiador la salida de los rebeldes de la DC para dar nacimiento al MAPU y más tarde la Izquierda Cristiana y la candidatura de Radomiro Tomić a la presidencia en 1970, con un programa de profundización de lo realizado por Frei Montalva.

Siguiendo con la línea de argumentación sobre la presencia de la violencia polarizadora, Vial estudia el comportamiento de la derecha con el nacimiento del partido Nacional, el asesinato del miembro de la CORA Hernán Mery y luego del triunfo de Allende el asesinato por la derecha de René Schneider. A ello se añade el nacimiento –luego del triunfo de Allende– del movimiento “Patria y Libertad”, dirigido por el abogado Pablo Rodríguez Grez.

Con la experiencia de la Unidad Popular y la aplicación de su programa de reformas se desarrolla con mayor fuerza la polarización y violencia en la sociedad chilena y las condiciones para que el conflicto tuviera una salida a través de la Guerra Civil, según Vial.

Para el autor de los fascículos, el Golpe de Estado del 11 de Septiembre lo realizan las fuerzas armadas para evitar la Guerra Civil. Quienes no querían la Guerra Civil en Chile, por los costos políticos y sociales eran las instituciones militares, ya que las fuerzas políticas con la aplicación de las planificaciones globales democristiana y socialista entre los años 1964 y 1973 no transan sus postulados programáticos de carácter polarizador, encontrándose entre las posibilidades una guerra civil.

La selección de los hechos es absolutamente deformadora de lo que sucedió en la vida real y cotidiana, dando la sensación de un país sumido en el desorden y la anarquía. En el período que Vial considera sumido en la violencia y en la polarización vemos que se hicieron dos elecciones presidenciales, la primera en 1964 en que sale elegido Presidente Eduardo Frei con cerca de 55% de los votos.

Como correspondía constitucionalmente, Jorge Alessandri entregó en el Congreso Nacional el mando de la nación a Eduardo Frei, quien en su programa había prometido realizar una Revolución en Libertad.

En el fondo, lo que rechaza Gonzalo Vial son las formas del gobierno de Frei y de Allende.

Gonzalo Vial en el artículo “Algunas condiciones para una democracia estable en Chile”, en el libro editado por CIEPLAN “Democracia en Chile. Doce conferencias” alude a que en Chile “no ha existido una estabilidad democrática. Existió, eso sí, una democracia formal muy perfecta, que el 11 de Septiembre de 1973 cayó como un castillo de naipes y que desapareció súbitamente sin dejar rastros. “Cuando hablo –agrega– de democracia formal no uso el término en un sentido despectivo o peyorativo... No basta con democracia formal...pero su primera base, su primera condición, es esta democracia formal”.

Según Vial, en el siglo XX en Chile “El porcentaje de chilenos que durante el presente siglo ha vivido y sigue viviendo en la miseria nunca fue inferior al 20% y probablemente nunca ha sido inferior al 30% de la población de nuestro país”. Los gobiernos de Frei y Allende hicieron esfuerzos al realizar una Reforma Agraria, mejorar las condiciones de vida de inquilinos y peones y ello iba en directo beneficio de este grupo social, lo que ayudó por lo menos a que el porcentaje de que habla Vial se mantuviera o bajara.

En los 10 fascículos que se publican en “La Segunda” desde Diciembre de 1998 a Febrero de 1999 con el título:

“1964-1973. La violencia pone a Chile al borde de la Guerra Civil”, aparece el país en un estado permanente de agitación y desorden, lo que no es un análisis correcto, desde el punto de vista de lo que se vivió y aconteció en la realidad chilena.

Nuestra hipótesis difiere de la de Gonzalo Vial: tanto el peligro de Guerra Civil y del cruento Golpe Militar de 1973 eran evitables. Había una seria posibilidad de mantener el proceso de democratización llevado a cabo por Allende hasta cumplir su mandato en 1976. Allende fue derrotado por errores estratégicos de la misma élite política del país que hemos nombrado.

Hubo errores que no permitieron acuerdo entre los sectores que estaban por los cambios y también una real incorporación al proceso de las FF.AA., no como objeto de uso de las corrientes políticas, sino manteniendo el respeto a las normas constitucionales y abiertas a las transformaciones que la sociedad necesitaba. Era necesario que las FF.AA. participaran en el proceso manteniendo su condición de defensoras de la soberanía, pero también de la democracia.

Las FF.AA dejaron de creer en la democracia y en ese proceso de pérdida de identificación de los institutos armados con la democracia hubo instrumentalización de Estados Unidos, la ultra-derecha y la derecha nacionalista de Chile: Onofre Jarpa, Mario Arnelo y Rodríguez Grez, entre otros, a más de un partido democristiano que se hundió en múltiples contradicciones que debilitaron la postura democrática en su interior y los transformó en seguidores de los golpistas.

Vial presenta en sus fascículos una sociedad violenta, pero si se analiza el período de la Unidad Popular no fue sólo violencia lo que se vivió, sino un proceso necesario para alcanzar la justicia social en libertad. Hubo democracia y cambios en democracia.

Gonzalo Vial también tiene dentro de los fascículos del diario La Segunda un estudio histórico sobre el gobierno de Pinochet.

Hay que partir por preguntarse por qué Vial –a diferencia del período 1964–1973 que llama con mucha más enjundia historiográfica “período de planificaciones globales” o de camino a la Guerra Civil por polarización y aceleración de la violencia– en el caso de los largos años de dictadura sólo se refiere a Pinochet y sus decisiones claves.

En los fascículos –diez en total– que abarcan desde el “11” hasta el plebiscito de 1988 Vial rompa su análisis del período anterior hasta 1973, no considerando que realmente aquí –luego del “11”– se inicia la escalada violentista, ejercida sistemáticamente por el Estado autoritario. Cabe discrepar de las hipótesis levantadas por Vial en su historia del período 1964-1973 en el sentido que la característica de ese período fue la escalada violentista. Ello a todas luces no fue así. Pese a las agudas tensiones sociales no puede caracterizarse el período 1964-1973 como violento o sumido en la violencia. Funcionaron todas las instituciones democráticas, se perfeccionaron y profundizaron.

Los dos gobiernos –el de 1964-1970 y el de 1970-1973– respetaron los Derechos Humanos, no hubo necesidad de escribir un Informe Rettig, en el cual participó el historiador Gonzalo Vial por las violaciones que hizo de ellos la dictadura de Pinochet.

En cambio, con el Golpe de Estado de 1973 se aplica un programa global de características represivas que el mismo Vial reconoce en las acciones de la DINA y en la concentración del poder en Augusto Pinochet tan incontrarrestable.

En síntesis, reconociendo que el historiador Vial trata de buscar las causas de fondo de los procesos históricos más que narrar y describir, aunque cuando narra entrega

información poco seria, como sucede en algunos casos con la figura de Allende en el capítulo III correspondiente al período histórico de 1964-1973, al apartado con el título “El enigma de Salvador Allende” y aludiendo a una supuesta inconsecuencia de éste con la vía no armada al socialismo y el respeto a la legalidad, dice que: “Después de su muerte, se halló en su caja de fondo personal esta cita anónima mecanografiada: “La lucha de clases continúa y debemos seguir poniendo bajo sus órdenes nuestra moral...Es moral lo que sirve para destruir la antigua sociedad explotadora hasta su más mínimo vestigio ideológico y cultural y... para crear una nueva sociedad en la que no quepan los egoísmos ni las pequeñeces humanas”.

No se puede dar crédito a un supuesto papel anónimo encontrado en una caja de fondos personal del presidente Allende para hablar de una traición a la línea política favorable a la construcción del socialismo por la vía no armada. Ese papel no corresponde a una fuente seria. Lo mismo sucede con una cita del libro en que Vial es editor llamado “Análisis crítico del Régimen Militar”, editado por la Universidad Finis Terrae. En ese libro Gonzalo Vial escribe dos artículos, el primero titulado “Causas y antecedentes del 11 de Septiembre de 1973”, en que entre las razones del golpe pone a la mayoría de la oposición que pidió el golpe agregando: “Pero esta actitud mayoritaria de la opinión pública, favorable a que los militares asumiera el poder, no era exclusiva de la oposición –cosa que se olvida frecuentemente– sino que estaba también en el Gobierno en parte importante de la Unidad Popular y, desde luego, era compartida por el presidente Salvador Allende, después por el partido Comunista y, en general, por los grupos políticos de la Unidad popular que no habían sido capturados ideológicamente por el guevarismo, o sea por la línea más radical de la Revolución Cubana”.

Esta conclusión de Vial la censuramos porque aparte

de ser ridícula es mal intencionada, al tratar de decir que Salvador Allende y el PC querían el Golpe de Estado, sobre todo teniendo en cuenta que con el Golpe perdió la vida Salvador Allende, precisamente por oponerse resueltamente a él.

Las hipótesis, ya pasando los errores propiamente de manejo de información, son de tendencia conservadora en lo político y en lo ideológico pero liberal en lo económico.

Dentro de la discusión historiográfica actual la tendencia representada por Vial tiene mucha importancia, y seguidores en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, como Ricardo Krebs que estuvo a cargo en “Nueva Historia de Chile” publicado en 1997 sobre el régimen de Pinochet (1973-1990) en el cual, en una narración plana y sin matices, da cuenta de las realizaciones de la dictadura.

Pone como ejemplo de la modernización del país las AFP. Los montos de las jubilaciones con el sistema privado de las AFP se está comprobando que son deficientes, más incluso que el sistema estatal y a la vez un sistema riesgoso, ya que el pensionado tiene que esperar un momento en que la rentabilidad de las AFP sea positivo para poder jubilar. No son las AFP ese ejemplo de modernización tan destacadas por Krebs.

Lo mismo sucede con otro punto de la modernización: el sistema privado de salud (ISAPRES) del cual los tramos de menos cotización quedan al margen de varios beneficios.

Lo mismo sucede con otra de las modernizaciones: el Plan Laboral del ministro José Piñera. La actividad reivindicativa de los trabajadores en Chile siempre fue respetada y también sus ideas políticas. Con la llegada de la dictadura de Pinochet esa rica expresión de una franja de la sociedad tan importantes como son los trabajadores fue reprimida, cuestión que Krebs reconoce.

Muchos países –especialmente europeos y la OIT– consideraron que la dictadura faltaba a las normas mínimas de respeto a la dignidad de los trabajadores y llamó a boicotear a la dictadura en 1978. Pinochet ante los reclamos internacionales y de la oposición interna inventa el Plan Laboral, que genera un proceso de negociación de los trabajadores absolutamente dañino hacia sus intereses y muy beneficioso para el empresario capitalista.

La visión de Krebs también deja un sabor amargo cuando en relación a las actuaciones de los aparatos represivos del gobierno autoritario da una excelente descripción “técnica” de la orgánica de la DINA, las fechas de su nacimiento y término y el director Manuel Contreras, actualmente en prisión. Ricardo Krebs no hace un recuerdo de su colega detenido-desaparecido, Fernando Ortíz, pero sí reclama en una entrevista con Nicolás Cruz en relación al Departamento de Historia del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que el Centro de Alumnos en una Convención en la que participaron alumnos, profesores y cuerpo administrativo, en la época de la UP, evaluara la gestión del Departamento, entre todos, lo que, por cierto, dejó de practicarse durante el gobierno de Pinochet. Entre los profesores consultados estaban Ricardo Krebs y Fernando Ortiz. El hecho que se le invitara a evaluar molestó a Ricardo Krebs y siempre lo destaca. Es el momento que Krebs ayude a encontrar a su colega.

Alfredo Jocelyn-Holt: interpretación liberal escéptica.

Desde la década de los 80 ha surgido en la historiografía de derecha la interpretación liberal escéptica de Alfredo Jocelyn-Holt, quien ha enriquecido la práctica historiográfica y ha llevado a las corrientes de derecha aquellas ideas de las cuales nunca debería haberse separado o desechado, como son el respeto y la tolerancia a las

ideas, un fuerte apego a las normas democráticas y lucha por la secularización de la sociedad chilena. Jocelyn-Holt puede considerarse un historiador liberal por la adscripción a una concepción de la historia “como hazaña de la libertad”, en que los márgenes de tolerancia y respeto a la persona humana son básicos para la sociedad. El historiador en su libro “Chile perplejo” define esta búsqueda como central para una buena convivencia social: en Chile –dice Jocelyn-Holt– “Hay signos claros que el dogmatismo y la intolerancia son aún porfiados, brotan como nunca en este valle claustrofóbico presidido por una enorme nube contaminante de desconfianza y miedo. Miedo a la auténtica libertad, es decir, a la tolerancia y al respeto por los derechos públicos. (...) La libertad supone poseer una perspectiva, un horizonte. Dicha perspectiva está al frente nuestro, en el futuro, también detrás nuestro, en el pasado”.

Podemos decir que con este historiador renace en Chile una discusión que la práctica de conocimiento histórico en nuestro país no ha resuelto y es de gran actualidad: el debate entre historia filosófica e historia narrativa. La confrontación en la década de los 50 del siglo pasado entre Andrés Bello y José Victorino Lastarria. Lastarria, liberal comprometido con su tiempo quería explicar las formas de dominio colonial en Chile y sus efectos en la sociedad de su tiempo. El jurista Bello estimaba que se debía narrar sin ninguna caracterización de los procesos ni juicios valorativos. Lastarria era escéptico, crítico desconfiado de las panonámicas transparentes, porque generalmente dejan sin descubrir las razones de los acontecimientos. El liberalismo escéptico de Lastarria lo recoge Jocelyn-Holt. Para éste el estudio de la historia debe ser reflexivo y explicar los procesos y acontecimientos más que narrar escuetamente los hechos.

Sin duda hay varios puntos de encuentro entre la crítica histórica de Lastarria y la de Jocelyn-Holt, quien quie-

re que los años finales de este siglo se entiendan a partir de la búsqueda de más libertad y tolerancia, donde el intelectual participe y observe con espíritu crítico.

¿Cómo analizamos a Jocelyn-Holt dentro de la historiografía chilena de estos últimos 30 años? Se da a conocer en la producción de conocimiento historiográfico con un texto sobre la Independencia de Chile, que abre variado número de interrogantes que los historiadores anteriores no se habían planteado. No es un texto que se pueda enmarcar dentro de la historiografía conservadora hispanista ni nacionalista. Quizás una identificación correcta del trabajo sobre la Independencia de Chile, como también su tesis en la Escuela de Derecho y los dos trabajos posteriores sean una fuerte resonancia de los principios que guiaron a los pensadores burgueses en el siglo XVIII y el XIX, aquellos que desarrollaron las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad.

Jocelyn-Holt se identifica con el pensamiento liberal de una burguesía en ascenso y partidaria de los cambios. Los orígenes del pensamiento ilustrado burgués fueron vanguardistas y críticos, con fuerte contenido humanista y de avanzada. Un buen ejemplo se puede encontrar en el historiador francés Michelet, el pensador contemporáneo Isaac Berlín o en la actitud de Schumpeter frente al marxismo.

No podemos hacer responsables a estos pensadores ni tampoco a Jocelyn-Holt de la pérdida de efectividad y prestigio de las corrientes liberales en el siglo XX, como tampoco con la ideología neoliberal de hoy que del liberalismo clásico no tiene prácticamente nada y sí mucho de neoconservador. Jocelyn-Holt no es responsable de las acciones que se han hecho en nombre del liberalismo ni la actuación política de la burguesía en la historia del siglo XX. Sus raíces son la filosofía francesa ilustrada y el liberalismo económico de Smith, Ricardo, aunque más vincula-

do y cercano a Stuart Mill. La reflexión del historiador liberal no tiene nada en común con las doctrinas neoliberales. Está absolutamente alejado de la ideología neoliberal e incluso la critica con fuerza. Además considera que el Estado es un buen "regulador" y redistribuidor de los excedentes generados por la sociedad.

No le tiene miedo a las crisis y los cambios. No es un historiador de la burguesía temerosa y a la defensiva, sino que mira de frente y no teme a la crítica, a la polémica, defensor del pluralismo y la tolerancia.

Efectúa un análisis de la historia de Chile de los últimos 30 años en el texto "Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar". Una mirada global al texto nos indica que estamos en presencia de un ensayo histórico, de esos que se unen a la calidad que tuvieron los de Alberto Edwards y Mario Góngora en su momento. Es un libro de ideas que interpreta y abre nuevas perspectivas de análisis.

Es un libro que abre problemáticas; que no está contento con lo que fuimos y estamos siendo. De lo que fuimos en la década de los 50 en Chile "...pareciera haberse producido un quiebre en los padrones sociales. Si al principio de la década la rigidez era fortísima al punto que uno podría hablar de cierto cierre social, hacia el final y comienzos de los 60 se produce un no despreciable grado de apertura. En las capas altas -agrega- más que pensar se tendió a gozar, pero ello no significa que no supieron en los recesos más íntimos qué era lo que estaba ocurriendo. Los '50 en los sectores altos -dice- es una década marcada por el exclusivismo y por el lujo pero un exclusivismo discreto".

En los 50 comienzan a perderse los ejes que hasta entonces hacían gravitar ordenado o, al menos previsiblemente, a la sociedad. En los años cincuenta se produce para el autor una transformación política que se manifiesta en un profundo sentido de malestar que comienza a embar-

gar a todos los sectores de opinión y reflexión. Un ejemplo de esto son las jornadas de protesta ocurridas en el centro de Santiago en Abril de 1957 que significaron cerca de treinta muertos, cuatrocientos heridos, detenidos, destrozados...

Luego de los '50 la política chilena para Jocelyn-Holt sufre un ajuste subterráneo significativo, cuyas consecuencias más evidentes comienzan a revelarse a partir del triunfo de Eduardo Frei en 1964.

Al equilibrio "frágil y gastado" de los 50, le seguirá el desenfreno eufórico de los 60. La frustración clamaba algo nuevo y en la Democracia Cristiana se encontraría el eco parlante adecuado. Se desarrolla por parte de la DC en el poder una política de cambios, donde sólo se consideraba lo revolucionario, no en capitalizar lo ya logrado sino en un mesianismo que cree que lo puede todo. Se consideró que a la clase dirigente había que aborrecerla por explotadora; sin embargo, la clase dirigente chilena era vista en términos comparativos –agrega Jocelyn-Holt– como excepcional en cuanto a ilustración, respeto al derecho y compromiso social. Para el historiador liberal "no cabe duda que en más de algún sentido las críticas al orden tradicional eran válidas. A lo que voy –dice– es que la coyuntura no admitía este tipo de matices. De una pluma se daba la espalda a la historia de este país. Y eso fue lo que desequilibró el orden político".

No se reparó, según Jocelyn-Holt, en que el grupo dirigente históricamente hablando, se relacionó frente al poder con cierto escepticismo respecto, por ejemplo, al Estado por la enorme fuerza que éste podía esgrimir. De la elite pragmática y no dogmática emanó el reformismo que posibilitó que en los 60 se pudiera profundizar dicho cambio, haciendo uso de los medios de legitimación. El mesianismo democristiano anti-oligárquico no contabilizó para nada –dice el autor de "Chile perplejo"– esta faceta crucial del orden establecido chileno.

Frei Montalva (1964-1970) habla para la historia, a partir de la historia, a propósito de la historia, para terminar con la historia. Este es un pensamiento atmosférico que asciende con simplismo lírico a las alturas hasta quedar confinado en las más altas cúpulas del firmamento celestial, dice el autor del "Chile perplejo". Esto es enteramente nuevo para el historiador. En el siglo XIX la política fue un medio para hacer país, fue una manera de pensar e imaginar el país. En cambio, en la década que se analiza la política se redujo a una mera fuerza de cambio y movilización. Al tener esta centralidad la política se tiende a olvidar que la realidad se está moldeando sola y no por causas motrices inducidas por la praxis o el discurso político.

Jocelyn-Holt cree que el gobierno democristiano desató dinámicas que luego no supo controlar. Ofreció más de lo que finalmente fue capaz de concretar. Desaprovechó ventajas comparativas –dice– históricamente inéditas, que inicialmente hicieron cifrar desmedidas esperanzas en el futuro. Pero la DC fracasó. Electoralmente hablando, los seis años de gobierno se tradujeron en un descenso abrupto en cifras globales de apoyo. Según Jocelyn-Holt hay en los seis años de gobierno realizaciones, no cabe duda, pero "el hecho es que hacia sus últimos días Chile bajo la DC ya estaba sumido en un clima odioso y de fuertes antagonismos. De la propuesta de una "Revolución en Libertad", que en realidad nunca se materializó plenamente más allá de los discursos, se saltó con inusitada brusquedad al voluntarismo intransigente. De ahí al libertarismo revolucionario era tan sólo un paso".

Antes de pasar al análisis que el autor hace de la Unidad Popular, es necesario aclarar que los juicios que emite en relación al gobierno de Frei Montalva son válidos desde la perspectiva de un burgués. Efectivamente, en los años de gobierno democristiano la política de reformas impulsadas por el gobierno dañaron los intereses de los "viejos

tercios" terratenientes en nuestro país, lo que significaba un paso adelante en una mayor incorporación de los campesinos a la vida moderna. Para el autor de "Chile perplejo" –que mira Chile desde el lado burgués– las reformas de Frei M. son desestabilizadoras del Antiguo Régimen con el cual se identifica, pero sus juicios negativos dicen relación con la forma de hacerlos.

Para él no fue en base a un gradualismo en que los terratenientes asimilaban el cambio "poco a poco", sino que fue un verdadero salto en el vacío que terminó en una desorganización de toda la sociedad.

El otro momento en que se detiene el libro de Jocelyn-Holt es el gobierno de Allende. Inicia el análisis diciendo que el período de la Unidad Popular "...es un momento especialmente denso, espeso, cargado de capital histórico acumulado. Quizá lo más extraordinario del período de la Unidad Popular es su capacidad de encapsular todas las tensiones y contradicciones de nuestro país. Todos esos conflictos latentes y arrastrados que esperaban definición". Agrega que los aspectos que más llaman la atención es que la UP exhibe una altísima densidad histórica y que "Me atrevería a sostener que la UP está más preñada de significación histórica, incluso que la versión demócratacristiana que le precede".

Efectivamente, la UP propuso como programa una transición al socialismo por la "vía chilena" y en corto tiempo cumplió lo que había prometido, en cambio la democracia cristiana no pasó de reformas.

Concordamos también con Jocelyn-Holt en que no es correcto vincular a Allende y a la UP con la Unión Soviética y la Guerra fría, y por último, con el impacto del castrismo cubano; ello es simplemente no entender el fenómeno y desatender toda una historia, a esas alturas, casi centenaria y con sólidas raíces nacionales. Como dice el historiador, la fuerzas que apoyaban la UP habían dado

suficientes demostraciones de civismo republicano en el pasado, la historia de Chile pasaba inexorablemente también por el conglomerado popular.

Para el autor del "Chile perplejo" la derrota de la UP se debe a que fue como gobierno un "desastre". Dice que "El balance final del gobierno arroja un saldo lamentable. En el plano económico la UP fue de una irresponsabilidad patente, y eso que heredó una hacienda pública aunque con problemas, con índices mejores que otros gobiernos en el pasado". Un problema más que tuvo fue un desorden permanente que para las autoridades se hizo inmanejable. Pero para el autor es necesario decir "que la UP no hace nada distinto a lo que desde 1967 se venía presentando. Ergo, es más que presumible que se le estén adjudicando al gobierno de Allende culpas acumuladas." Y agrega, "La UP, de hecho, nunca resolvió el problema de las dos vías. Unos se inclinaron por la vía armada, otros –entre ellos Allende– siguieron insistiendo hasta el último minuto en la 'vía chilena' o pacífica al socialismo."

Jocelyn-Holt estima que la UP no llevó al país a la guerra civil. Ni antes del '73 ni después cabe hablar de un escenario de tal magnitud. Las fuerzas armadas no se dividieron. El grueso de la población no estaba en pie de guerra y armado. La desproporción entre la capacidad de fuego de un lado y otro es notoria. Según el historiador las acusaciones que se le pueden hacer a la UP pueden ser extensiva de igual modo a la oposición. No se "percibieron debidamente las virtudes del equilibrio, la gran tradición escéptica del poder. El doctrinarismo arrasó con esa huella liberal, capital político que todos reconocían como propio y común no obstante su carácter oligárquico. Que tenía límites, por cierto. Que era reformable, conforme. Pero que era prescindible, eso fue simplemente una estupidez".

Para el autor, caben altos grados de responsabilidad

en los sucesos de 1973 a la derecha, que dejó de ser pragmática, que vinculaba a través de los partidos al sector agrario tradicional, al empresariado gerencial, a los principales gremios, las agencias estatales, las empresas estatales, a la administración pública y al Ejecutivo. Podía hacer, a través de los liberales, alianzas de gobierno con el partido radical, o bien, relacionarse con la jerarquía eclesiástica mediante los conservadores. Con el gobierno de Frei Montalva la derecha se recompone transformándose en una fuerza política autoritaria y antidemocrática.

"Ni el partido Nacional, ni Onofre Jarpa, ni los Rafael Cumsille, ni León Vilarin, Pablo Rodríguez, Patria y Libertad, Fiducia, el golpismo que cortejó al general Viaux y que luego asesinaron a René Schneider. (...) insisto, esta derecha no responde a ningún parámetro político tradicional anterior. Hasta los años 50 y 60 la derecha tradicional fue antimilitarista, antipopulista, partidista, frondista y liberal; desconfió siempre del corporativismo, del nacionalismo, y su inspiración parlamentarista la llevó a ser siempre pragmática, nunca doctrinaria". En el fondo, sucedió a esta derecha "una derecha restauradora, o lo que es lo mismo, potencialmente reaccionaria, militarista, corporativista, la antítesis de su antecesora".

Para el historiador, ésta es la derecha del Golpe de Estado de 1973, profundamente contraria a las prácticas democráticas que había desplazado de la hegemonía en ese sector social a la derecha pragmática, que por un largo período había aceptado la existencia de un izquierda contestataria y que luchaba por la construcción del socialismo.

Aquí discrepamos con Jocelyn-Holt. La derecha tradicional fue democrática y pragmática mientras la sociedad chilena no puso en cuestión su dominio de clase. Una vez que el movimiento popular quiso romper el dominio económico e ideológico de la derecha para hacer partici-

par de los beneficios sociales al pueblo, lo que implicaba tocar los intereses de la oligarquía, ésta dejó de ser partidaria de la democracia y buscó una "solución final", que vino a través de la utilización para realizar la tarea de los militares. La derecha tanto la "antigua" como la "nueva" se sintió absolutamente interpretada por el Golpe. El proceso antidemocrático se produjo en la medida que tanto a la "antigua" derecha como a la "nueva" el proceso de cambios chocaba con sus intereses de clase. Esto es así en la medida que ningún miembro de la "antigua" derecha levantó su voz para reclamar por las arbitrariedades cometidas por la dictadura de Pinochet. Es más, miembros de la derecha tradicional se incorporaron activamente a lo que llamaron la "reconstrucción".

En el "Chile perplejo" Jocelyn-Holt critica abiertamente a la dictadura de Pinochet. Un párrafo de su texto sirve para sintetizar la "otra revolución": la de Pinochet. "Los muros ya no hablan. Las consignas se borran. Los artífices de los mensajes desaparecen. Así y todo, los muros se vuelven elocuentes por lo mismo que son silenciosos. La diferencia estriba en que en un caso y en el otro el común denominador está dado por la necesidad de que existan muros. (...) Sirven aún para acallar los sonidos, para apuntalar la capitalización silenciosa, en fin, para contener las alzas repentinas de agua que amenazan destrucción. En eso consiste la transición que comienza hacia 1977: en convencer que los muros sirven 'ayer y hoy' para 'liberar'. (...) Si hasta el 73 hablar supuestamente liberaba; luego del 77, es el callar el que ahora supuestamente libera. En ambos casos, el precio a pagar consistía en aceptar los muros".

El análisis histórico del largo período de la dictadura del autor del "Chile perplejo" es crítico, sosteniendo una fuerte defensa de lo que a su gusto se perdió con la "otra revolución": el Antiguo Régimen que según él no era un orden tradicional estático ni tampoco nostálgico. Se trata

de un Antiguo Régimen que, lejos de volverse anacrónico, participa del mundo cada vez más moderno capitalizando sus logros. Lo que no significa dejar de condicionar su impacto. Ese punto medular del cual no se admitiría transacción alguna fue la pervivencia del núcleo social fundamental: que siguiera tratándose de una sociedad fundada en jerarquías, diferencias y privilegios, conforme a un modelo patronal-rural que venía del siglo XVII, y que había logrado constituirse, además, en nada menos que el único paradigma de cómo ejercer la autoridad entre nosotros. Para el historiador el mundo agrario tiene –debido a su larga duración– dos ejes a su favor: “el que históricamente hiciera posible las bases perdurables de la organización social, y el haber consagrado el paternalismo vertical como la modalidad más probadamente eficaz”.

Quizás la mejor caracterización que logra Jocelyn-Holt es que Chile tuvo una peculiar versión de libertad que fue la de “evangelizar y ser evangelizados”, conforme a múltiples credos que se fueron ofreciendo, o bien, gozar de una autonomía de facto, porque estábamos demasiado lejos del escrutinio fiscalizador de las autoridades metropolitanas de turno que pretendieron dominar o dominaron nuestro país.

Y agrega más adelante, haciéndose una pregunta ¿Qué lleva a un país tradicionalmente quieto si es que no sosegado, flemático según algunos, melancólico según otros a experimentar tantos vaivenes y tan súbitamente? Lo más probable es que en 50, 70 o 100 años más, redondeemos el período concibiéndolo como un todo, –el detalle seguramente importará menos– y lo etiquetemos por lo que es: el período más revolucionario de nuestra historia.

Puede –dice el autor– resultar un tanto antojadizo concebir todas estas fases como revolucionarias. El gobierno de Frei habría usado el término a modo de slogan; lo

que pretendía era más bien evitar la revolución. A su vez, la Unidad Popular ¿qué fue sino una revolución frustrada? Y ¿cómo es esto de que un gobierno militar, de las características del chileno, además, realiza una revolución?

Concluye “Chile perplejo” con una mirada a lo que se ha llamado los gobiernos de la Concertación. El balance es crítico y a la vez de preocupación. La crítica tiene que ver con la situación general de Chile, empezando por la acumulación de problemas sociales sin resolver, por el continuismo en relación a la dictadura en lo político: “Desde el ‘88 no hemos hecho nada tan distinto en lo esencial que no hayamos estado en-caminados antes. Del avanzar sin transar pasamos, a lo más, al transar sin parar, al ni un paso atrás o lo que es lo mismo, compañeros, camaradas, tropas –que más da– seguimos avanzando.”

Se desconfía de la política en su versión persuasiva, retórica, elocuente –dice Jocelyn-Holt–. De ahí que haga especial hincapié en su carácter técnico gerencial. Lo que se busca es condiciones de “gubernabilidad” que pasan por considerar que se está ante una civilidad debilitada, apática, agotada por la exacerbación ideológica que habría llevado al colapso de la institucionalidad y luego extenuada durante el gobierno militar.

Queremos terminar con el análisis de la visión liberal escéptica de Alfredo Jocelyn-Holt, que se puede considerar el aporte más interesante de la historiografía vinculada a la derecha burguesa, con una cita que resume el sentir del intelectual, “alerta” frente a los “nuevos tiempos”: “En el orden político, como ya he dicho, este empate está consagrado constitucionalmente. Desde el plebiscito del ‘88 lo que hemos ido constatando es su desenvolvimiento práctico. Por un lado, transitamos en ‘democracia’ es lo que nos dice; por el otro nos regimos por el sistema diseñado por Guzmán, centrado en el veto militar y el de sus socios fácticos. Este es el orden establecido, el único posi-

ble, el de 'la medida de lo posible'. No es que transitemos hacia la normalidad, sino que el mantener este equilibrio, entre un orden institucional y el fáctico, ésa es nuestra única versión aceptable de 'normalidad'. En palabras de nuestra 'carta magna', Chacarillas: Finalmente, entraremos en la etapa de normalidad, de consolidación, el Poder será ejercido directa y básicamente por la civilidad, reservándose constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad y la seguridad nacional en sus amplias y decisivas proyecciones modernas. (...) De lo que se deduce que ya llegamos 'Al alcalde en los desfiles/ ya no le dicen 'el relegado'/ y cuando tiene visitas/ se prueba el traje de diputado'. Estamos en normalidad. Nos hemos consolidado. Estamos en democracia. A la política la han 'profesionalizado'. Dobleemos la página. Dejémosnos de viejos cuentos. Sigamos, sigamos avanzando.."

El texto de Jocelyn-Holt que levanta una serie de hipótesis sobre nuestros últimos 30 años obedece a una nueva mirada de la historia de ese período por parte de la historiografía de la derecha. Una derecha que busca afianzar la libertad y la democracia y que está abierta al diálogo y la confrontación de ideas. Se diferencia de Vial y Krebs en que no cree que la sociedad chilena lo que necesita es orden y represión al que disiente. Vial fue parte de una dictadura en que se cometieron abusos contra los opositores, que luego de volver de la "burbuja" los reconoce al escribir una parte del Informe Rettig.

La interpretación de la mesohistoria.

Dentro de la producción historiográfica en Chile de estos últimos 30 años destaca la mesohistoria, es decir, la producción historiográfica que interpreta la visión —en el plano de la historia— que tienen de nuestro país las capas

medias. Este grupo social se caracteriza por ser heterogéneo, de pensamiento en uno de sus grupos muy conservador y otros de avanzada, pero con ciertas debilidades para desarrollar y sostener proyectos propios. En caso de agudización de las contradicciones entre los grupos sociales principales de la sociedad siempre toma el camino ligado a los intereses de las clases dominantes. Un ejemplo es lo que sucede durante el gobierno de Allende, donde las capas medias se unen a tendencias conservadoras contrarrevolucionarias.

Característica importante de la mesohistoria es su interés por la narración de los hechos y procesos históricos más que explicarlos. También son reacios a ver las contradicciones sociales y dar cuenta de su existencia. Actualmente son concertacionistas, propician las políticas de los grandes acuerdos y alianzas, tratan de llevar a la historia las ideas y enseñanzas de la doctrina social de la iglesia, cercanos al pensamiento humanista cristiano de Maritain. Entre ellos hay uno que otro agnóstico, pero la mayoría se identifica con el humanismo cristiano.

De la historia tienen la idea de que siempre el presente es mejor y una superación del pasado, lo que los une a las tendencias historiográficas que ven en la historia un progreso sostenido y permanente. En la mesohistoria existe una fuerte influencia de las corrientes positivistas de mediados del siglo XIX. En su formación y producción historiográfica está el legado de Barros Arana y los hermanos Amunátegui. Del primero tienen un fuerte interés por la historia política y los hechos culturales. En este sentido se confunden con concepciones idealistas, donde las ideas mueven la historia. La conciencia determina la existencia, lo que a todas luces es una visión parcial y errada.

Este grupo de historiadores, entre los que se encuentran Sergio Villalobos, Cristián Gazmuri, Rafael Sagredo, Carlos Bascuñán y Sol Serrano tiene, para el período que

estudiamos, trabajos que son escasos en número, pero significativos dentro de la producción de conocimiento histórico en Chile.

Sergio Villalobos es su figura más representativa. Es un historiador que en sus trabajos ha tocado problemáticas de la historia de Chile muy determinantes e importantes, que abarcan prácticamente toda nuestra evolución. En su "Historia de Chile" estudia nuestra historia desde los "pueblos originarios" hasta 1970. La "Historia del pueblo de Chile", que lleva varios volúmenes, es su obra más trascendente, a nuestro juicio.

Cristián Gazmuri, otro de los exponentes de la mesohistoria, es quien ha dado una visión integral de los gobiernos de Frei y Allende en el Manual de la "Nueva historia de Chile". Por la proximidad ideológica con la mesohistoria pueden ser considerados como una visión acorde con sus postulados los trabajos de los politólogos Edgardo Boeninger y Genaro Arriagada.

En el libro "Nueva Historia de Chile" Gazmuri hace un análisis histórico de todo el siglo XX en un tono objetivista, manteniéndose por encima de las luchas que se dieron en el siglo en Chile. Hay intención de mantener neutralidad y objetividad, ser fiel a los hechos y libre de juicios de valor. Aspira a mantenerse alejado del partidismo político y a conservar entre el sujeto (el historiador) y el objeto (la historia) una relación de carácter puramente contemplativo.

Gazmuri profesa un culto reverente al hecho histórico, al cual considera único criterio de verdad, desvinculando de las estructuras y el cambio. El estudio del gobierno de Frei (1964-1970) y también el de Allende (1970-1973) es notable en la narración de los hechos y datos, escueta y confiada en que ahí vamos a encontrar una explicación al acontecer del período. Es minucioso y paciente con la investigación de los hechos. Pero la investigación "exacta"

no es un fin en sí mismo: no es aún historia. Recordando el libro de Carr "¿Qué es la historia?" podemos decir que "La exactitud es un deber, no una virtud. Encomiar a un historiador por su exactitud es como exaltar a un arquitecto por usar buena madera y concreto bien mezclado en sus construcciones".

Gazmuri entrega los hechos básicos de los gobiernos de Frei y de Allende, que son los mismos para todos los historiadores: la Reforma Agraria, chilenización y nacionalización del Cobre, la Promoción Popular, formación del Area Social, pero la interpretación armada de una teoría permite descubrir el significado e importancia de estos hechos y establecer las relaciones que existen entre ellos, así como entre ese pasado democrático y libre (1964-1973) con la actualidad de democracia "protegida".

Pero estos hechos de gran significación (cada uno de ellos) se encuentran "secos", "muertos": lo que le da vida y los ordena en algo coherente es la investigación, la interpretación, los análisis para que expliquen e interpielen al presente. El hecho histórico concreto de los gobiernos de Frei y Allende y la dictadura de Pinochet sólo cobra sentido, sólo es inteligible en función de una serie de relaciones y determinantes ajenos a él mismo. Es la forma en que se hace evidente la necesidad de la teoría. Gazmuri quiere olvidarse que él también está inmerso en una teoría, de la cual es deudor y la interroga permanentemente.

Trata de ser objetivo y neutral, como también trataron de ser las capas medias frente al ascenso de las contradicciones sociales entre sectores dominantes y dominados durante los gobiernos de Frei y Allende, descontando que en el caso de Frei se quisieron levantar con una alternativa propia.

En su balance del gobierno freista -del cual hace una evaluación positiva- cree que hubo aumento de la violencia, que atribuye a una agitación de elementos ligados a la

izquierda, quienes veían en las reformas de Frei pérdida de influencia en los sectores beneficiados con las políticas reformistas. En este caso concreto, Gazmuri olvida que la izquierda apoyó el reformismo freista, pero estimó que no hubo correcta aplicación de las políticas que la Democracia Cristiana había ofrecido en su plataforma programática en la elección de 1964.

Para la izquierda, especialmente desde 1967, el ímpetu reformismo democristiano se detuvo, síntoma de ello es la propuesta del Ministro de Hacienda Sergio Molina de una política de reajuste de sueldos de los trabajadores en dos tramos: uno que se entregaría en dinero a los trabajadores y otro que sería un ahorro obligatorio en bonos (la idea fue conocida como chiribonos). La propuesta de Molina afectaba directamente la capacidad adquisitiva de los sectores populares. Fue rechazada y no se pudo aplicar, lo que llevó a su renuncia. En general, desde 1967 el gobierno de Frei Montalva paraliza el intento de Revolución en Libertad, lo que en un contexto mundial y especialmente latinoamericano que impulsaba reformas llevó a que en 1970 triunfara Allende.

Para Gazmuri, los motivos del aumento de la agitación social está en la izquierda, cuando la verdad es que Frei no cumplió sus objetivos programáticos.

La mesohistoria, al estimar que lo mejor para el país era un cambio graduado como intentó Frei Montalva olvida que en la sociedad chilena –al revés de las opiniones que vierte esta escuela en la Nueva Historia de Chile– la contradicción central se daba entre un pequeño sector dominante y la mayoría del pueblo que quería salir de la pobreza y para ello debían realizarse cambios revolucionarios. No cabía –como asevera Gazmuri– una salida liderada por el centro democristiano. La famosa tercera vía: la sociedad comunitaria, no era una posibilidad abierta en un mundo donde la lucha era entre capitalismo y socialismo.

El error más grande de la mesohistoria es reflexionar sobre el desarrollo de la historia en Chile en el siglo XX, aunque puede ser extendido también para el siglo XIX, como una perfecta evolución donde rara vez se produjeron cortes que salieron de los marcos de una convivencia pacífica. El rechazo a la polarización, a manifestaciones de violencia social es desde el punto de vista moral una salida válida, pero que no concuerda con lo que ha sido la historia chilena. Las contradicciones sociales se han resuelto la mayoría de las veces con las clases dominantes ejerciendo la violencia sobre el pueblo.

Si analizamos la interpretación histórica que hace Gazmuri del gobierno de Frei, como también su larga introducción a un estudio sobre Frei Montalva publicado con Patricia Arancibia y Alvaro Góngora, vemos un intento por posicionar a las capas medias como la “viga maestra” de la historia de Chile. Los gobiernos radicales y el de la democracia cristiana son muy bien evaluados por Gazmuri, e incluso a pesar de buscar afanosamente la “objetividad”, expresa una muy buena opinión de ellos.

Cuando Cristián Gazmuri explica el gobierno de Allende, manteniendo su línea de observador aparentemente neutral, esta condición que se ha impuesto le permite dar un cuadro bastante real de los hechos, con datos de los protagonistas y fichaje cronológico de los sucesos, aunque esto no indica que llegue a explicar y analizar la historia del período. Los hechos relatados por Gazmuri son ciertos, pero el historiador debe ir más allá y en ese intento es cuando Gazmuri muestra debilidades, y también algunos aciertos.

Para él, Allende puso en cuestión el dominio de las capas medias en el período del '40 al '70, lo que causó temor. “Por eso, cuando llegó el momento de decidir entre apoyar una revolución socialista, que amenazaba sus ahorros y bienestar, u oponerse a ésta, se optó por lo último”.

Empero, hay que aclarar algo que Gazmuri omite y es que la mayoría de las capas medias fueron instrumento utilizado por la clase dominante como carne de cañón para suprimir la democracia. Eso no lo hicieron por perversión, sino porque carecen de capacidad como grupo social para ser alternativa a la sociedad capitalista. No pudieron ser "camino propio" y frente a esa situación optaron por el capitalismo. Hay que agregar que también este grupo social, tan desconocido por los historiadores, pudo definirse— como lo hizo un segmento minoritario— por la alternativa socialista, aunque ello hubiera sido gran excepción histórica, como lo fue el propio gobierno de Allende.

La visión de la mesohistoria de la cual Gazmuri es un buen representante es distinta en muchos aspectos a la conservadora hispanista de Gonzalo Vial. Mientras el primero acepta los cambios y las "turbulencias" que ello genera, Vial prefiere una buena tradición y la conservación del dominio de añejas estructuras.

La mesohistoria tiene también un libro llamado "Chile en el siglo XX" que da una visión general de nuestra historia contemporánea. Gazmuri forma parte del equipo responsable de la autoría del libro que llega hasta 1970, y no difiere de las hipótesis generales que tiene sobre estos últimos 30 años.

Las tesis de la mesohistoria son recogidas en el área de la ciencia política y económica. En ciencia política afín a esta posición están los trabajos de Genaro Arriagada. El primero es publicado en 1974 con el nombre: "De la vía chilena a la vía insurreccional". Con un prólogo de Eduardo Frei Montalva sostiene que la experiencia de la Unidad Popular desde la Vía Chilena pasó a una estrategia violentista de carácter insurreccional, para hacerse de todo el poder en nuestro país durante el gobierno de Allende. La argumentación se hace con un estudio de los clásicos del marxismo, especialmente Trotsky y Lenin, como tam-

bién con las experiencias concretas de las revoluciones de Rusia, China y Cuba, que son tomadas como ejemplo para decir que el proceso abierto en Chile en 1970 conducía—según la teoría y la práctica— a que la Unidad Popular se tomara la totalidad del poder en Chile, quebrando su tradición democrática.

Arriagada pasa por alto los hechos históricos, construyendo un marco teórico en base a problemas que se presentaron en contextos históricos diferentes a la escena de la vía chilena al socialismo. ¿Qué tiene de común el gobierno de Allende con la experiencia revolucionarias en Rusia y otros países? Nada, absolutamente nada. La Unidad Popular se proponía construir una sociedad socialista por una vía distinta, y de acuerdo al balance que podemos hacer de los tres años de la Unidad Popular fue consecuente con ello.

La tesis del politólogo democristiano es seria en lo teórico y bien construida, pero no resiste confrontación con la realidad, sobre todo con aquella que surge en la mañana del 11 de Septiembre de 1973. Ahí sí que tenemos el nacimiento del poder total de las FF.AA apoyadas por la derecha y sectores democristianos, entre ellos el propio Frei Montalva, que escribe el prólogo al texto de Arriagada.

La Unidad Popular debería ser un modelo nuevo hacia una transición al socialismo, cuya base de sustentación está en que la nueva sociedad surge de las entrañas de la anterior, la cual se modifica respetando el marco político e institucional vigente. Esa era en esencia lo que quería realizar la Unidad Popular: una revolución sin resolución de las contradicciones sociales y políticas por vía violenta.

Las tesis de Arriagada—y en general de esta corriente— se afirman en argumentos que no estaban contemplados en la experiencia que se quiso hacer en Chile. De acuerdo al autor, Chile era un país con una economía sana e

instituciones políticas de larga data, que la Unidad Popular quiso destruir con la insurrección.

Es cierto que Chile –como sostiene Arriagada– era una sociedad con desigualdades e injusticias hasta el gobierno de Frei, pero que iba desarrollando cambios concurrentes a superarlos. Pero también había conciencia de que el país necesitaba profundizar la democracia y lograr, como la mayoría pidió en las elecciones del 70 con las candidaturas de Tomic y Allende, mayores grados de igualdad y eliminar las formas más extremas de pobreza.

También Arriagada apunta a destacar los éxitos del gobierno de Frei Montalva, innegables, pero hay que decir que quedaban muchos problemas sociales graves sin resolver. El gobierno de Frei claudicó frente a los intereses de los sectores económicos dominantes y también en relación a la política e intereses de Estados Unidos. La “chilenización del cobre” resultó una negociación donde los intereses de Chile no fueron lo suficientemente resguardados, por presiones de las grandes compañías norteamericanas.

El desarrollo de Chile era relativamente alto en comparación con algunos países latinoamericanos, pero tenía problemas y la Unidad Popular, en elecciones secretas e informadas, con un programa que no escondió su deseo de transitar al socialismo propuso una alternativa de desarrollo y solución a los problemas pendientes.

Arriagada coincide con los historiadores de las capas medias en la polarización de la sociedad chilena con la Unidad Popular y un aumento de la violencia. Pero en varios períodos la sociedad chilena ha sido quebrada y escindida en clases sociales, lo que trae polarización. Las diferencias sociales son polarizantes y tensionan a la sociedad, cualquiera sea su sistema de gobierno.

El libro de Arriagada, escrito poco después del Golpe, recoge las ideas que mantuvo la Democracia Cristiana

sobre la experiencia de la UP, pero corresponde a la visión de sus sectores más de derecha, los que olvidaron la idea de constituir al partido como alternativa al capitalismo y al socialismo. El olvido de las bases ideológicas que inspiraron a la DC como doctrina comunitaria se reflejan con nitidez en el análisis de Genaro Arriagada, poco después del Golpe de Estado.

Si bien el análisis es serio, con mucha documentación y respeto por las ideas básicas de la Unidad Popular, no se puede sostener que el conglomerado de izquierda fuera causante de la polarización. Esta polarización arrancaba de factores estructurales existentes en la sociedad chilena, que se arrastraban por lo menos desde el siglo XIX. Mientras en Chile existan diferencias económico-sociales la polarización existirá. Como indican las cifras la pobreza ha ido en aumento. Demás esta insistir en que la polarización tiene sus raíces en problemas de orden social y mientras no se solucionen adecuadamente la polarización no desaparecerá. Lo que hace Arriagada –y en general la reflexión que se ubica en alternativas centristas– es querer eliminar las polarizaciones, pero ello es una posibilidad fantástica si no se eliminan sus causas determinantes.

Durante la Unidad Popular –dice el autor– la izquierda en el gobierno quería llegar al “poder total” y eliminar cualquier oposición. Se pretendía establecer la dictadura del proletariado.

Había un sector importante partidario de transitar al socialismo por la “vía chilena”, como fue el caso del presidente Allende, el partido Comunista, el partido Radical y el API. Ese sector propuso permanentemente un acuerdo con el centro democristiano que disminuiría la polarización a través de un acuerdo amplio y de carácter mayoritario socialmente.

Mientras estuvieron en la presidencia de la Democracia Cristiana Benjamín Prado y luego Renán Fuentealba,

las posibilidades de acuerdo fueron ciertas, pero cuando al interior de la DC se hizo más influyente la derecha con Eduardo Frei y se instala en la presidencia del partido Patricio Aylwin, el acuerdo se truncó. El análisis de Arriagada no considera el papel que tiene en la derrota de la experiencia de la vía chilena al socialismo el paulatino acercamiento de la DC (y en Julio-Agosto de 1973 coincidencia total) con la derecha golpista y con militares anti-doctrina Schneider. Sabemos en que terminó la alianza derecha-militares golpistas-centro democristiano.

Aparte de este trabajo escrito a mediados de 1974, el cientista político Genaro Arriagada, luego de estudiar en documentos y libros a las FF.AA. publicó en 1998 un libro titulado "Por la Razón o la Fuerza. Chile bajo Pinochet", donde analiza los 17 años de dictadura.

Como varios estudios elaborados en la década de los noventa, Arriagada coincide en que Chile bajo Pinochet sufrió una revolución. Si somos rigurosos en la utilización del término tendremos que coincidir en que no se trata de una revolución en el sentido clásico. Con Pinochet no nace una sociedad nueva donde una clase social reemplace a otra. Lo que sí sucede es una contrarrevolución que desplaza a los sectores populares que habían conquistado el gobierno el 4 de Septiembre de 1970.

La revolución con Allende se convierte en contra-revolución autoritaria con Pinochet, que revierte la situación a formas ya superadas durante el siglo XX por la lucha popular en Chile. Había seguridad en el trabajo, seguridad previsional, sistema social de salud, proceso acelerado de industrialización, nacionalización de las riquezas minerales. Todas esas garantías para el conjunto de los chilenos las elimina la dictadura militar, volviendo nuestra sociedad a lo que sucedía a principios del siglo XX, tan patéticamente descrito por el doctor Valdés Canje.

Si se vuelve a leer con atención el libro de Valdés Canje

notamos que muchas de las reivindicaciones que los trabajadores pedían a principios de siglo, en 1910, y que mostraba "Chile íntimo, en 1910", luego del Golpe de Estado vuelven a fojas cero.

La dictadura borró de un plumazo todo el articulado de protección social que envolvía a los trabajadores y al conjunto de la sociedad chilena. Con Pinochet se perdió la democracia política y la protección social.

La dictadura implicó una contrarrevolución y no una revolución, tanto por sus efectos contrarios a la Unidad Popular como en la aplicación de un modelo socio-económico neo-liberal. El régimen de Pinochet fue un retroceso muy grande para la civilizada sociedad chilena.

El libro de Arriagada es la historia vista desde la perspectiva de lo que en la década de los 80 se conoció como la Alianza Democrática y luego el Acuerdo Nacional: la oposición da paso a una negociación concertada con la dictadura. Destaca aquello que sirve para explicar la solución a la cual se llegó: primero el plebiscito de 1988, luego las reformas constitucionales y los gobiernos de la Concertación. El autor presenta como la única salida exitosa aquella de la negociación, la transacción y marginación de proyectos más audaces para terminar con la dictadura. Dice que a partir del plebiscito nace una nueva situación política en el país. Chile cierra una época de gobierno autoritario para que renazca la democracia.

Termina su ensayo político afirmando que los gobiernos concertacionistas han sido un éxito. La sociedad chilena fue evolucionando hacia una cultura predominantemente secularizada, entendiéndose por tal aquella que en política se asume a partir de una ética de la responsabilidad y no de la convicción. Una cultura –dice Arriagada– que privilegia en política el logro y la eficacia y no la expresividad y el testimonio, que premia el sentido de la realidad frente al de la voluntad y el desprecio o la insensibilidad

por las restricciones, que privilegia la cooperación y ve en el conflicto no un valor, sino un dato de la realidad como fuente de problemas a resolver; que es sofisticada en el cálculo de riesgos; una cultura que ve en la política un instrumento para producir libertad, seguridad y prosperidad para el conjunto de la sociedad y no un medio para la salvación de las almas, la reforma de los corazones o un remedio para el tedio. Arriagada termina diciendo que la acción histórica de los gobiernos de la concertación es pobre en ideologías pero que procura ser fuerte en valores, en compromisos éticos en su lucha por la libertad y la justicia.

Esta es una buena síntesis por lo que han luchado quienes se ubican dentro de las contradicciones de clase en la sociedad chilena en una postura centrista moderada, pero que cuando por razones económicas hay aumento de las injusticias (pobreza, cesantía, marginalidad) como ha venido ocurriendo especialmente en los últimos años del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, quedan a la deriva, sin respuesta los dilemas centrales de la sociedad chilena.

Lo claro es que la reflexión tanto de la historia en el caso de Cristián Gazmuri como de la ciencia política en el caso de Arriagada es la expresión de un grupo social: las capas medias que buscan negociación para evitar el conflicto, pero cuando se trata de una aceleración de las contradicciones reales y concretas, producto de las contradicciones de clase y se hace posible su resolución en un sentido favorable al cambio quedan descolocados, porque ya no cabe la negociación.

La historiografía marxista clásica: Luis Vitale

La historiografía marxista de los últimos 30 años de nuestra historia es otro punto de anclaje. Tiene como sujeto a los sectores dominados en el camino de sus reivindi-

caciones para construir una sociedad más justa. Como modelo teórico tiene las concepciones de la historia de Marx, desarrollada en "La ideología Alemana", en el Prólogo a la "Contribución a la crítica de la economía política de 1857", en los "Grundrisse" y en su obra de madurez: "El Capital".

Luis Vitale, historiador marxista clásico, empieza su producción historiográfica en la década de los '50. Sus textos más conocidos son la "Interpretación marxista de la historia de Chile" que ya va en el sexto tomo, sus trabajos sobre el pensamiento de la democracia cristiana y de la historia de la clase obrera en la década de los sesenta. Un poco después del triunfo de Allende escribe un texto clarificador titulado "Después del 4 ¿qué?" En el plano de la reflexión teórica se encuentra su "Introducción a una Teoría de la Historia para América Latina". También analiza los gobiernos de Frei y Allende en los tomos VI y VII de su "Historia General de América Latina".

La posición de Vitale frente a estos 30 años es que el período de mediana duración constituye una continuidad, pero también una discontinuidad. Continuidad son los gobiernos de Frei Montalva y Allende, que termina con una fisura que discontinúa el proceso histórico chileno. Los gobiernos de Frei y Allende optan por cambios estructurales en la sociedad chilena subdesarrollada y dependiente, que desde el punto de vista del desarrollo económico estaba en un largo período de estancamiento. Con Frei se realiza un proceso de reformas, entre las que están la chilenización del cobre, la reforma agraria y un fuerte desarrollo de las organizaciones populares, entre las que destaca las Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Talleres Juveniles.

Según Vitale, las concepciones sociales del partido democristiano —que es parte y conductor del gobierno de Frei— se inspira en la doctrina social de la iglesia, en un

humanismo integral que de acuerdo a su concepción de lo que debe ser un orden social correcto debe luchar por construir una sociedad comunitaria. Para llegar a este objetivo Frei en su programa postula una Revolución en Libertad que daría paso a la sociedad comunitaria.

La Revolución en Libertad durante los seis años de gobierno democristiano no se realizó, lo que si se hizo fue una política reformista que no tuvo como objetivo la sociedad comunitaria sino perfeccionar el capitalismo en Chile. Según Vitale la esencia de la doctrina demócrata-cristiana es su reformismo para mejorar el funcionamiento del capitalismo.

En su artículo en este libro sobre el gobierno de Frei, Vitale considera que las críticas más fuertes al reformismo democristiano fueron hechas al interior de la propia democracia cristiana, por su sector más doctrinario y consecuente como era el grupo rebelde en el cual estaban figuras importantes en la conformación del programa de Frei Montalva para la elección de 1964. En este grupo estaban Jacques Chonchol, Rafael Agustín Gumucio, Julio Silva Solar, Alberto Jeréz, entre otros, quienes consideraron que cumplida la mitad del período de seis años del gobierno de Frei no se había llevado a cabo la Revolución en Libertad. El gobierno según los rebeldes había claudicado; sólo se había quedado en una experiencia reformista que no solucionaba los problemas más importantes de Chile.

En su libro "La Democracia Cristiana: esencia y apariencia" Vitale desenmascaró el reformismo del PDC en 1964, constituyéndose en un factor clarificador de las posiciones que en el período se levantaron por parte de la izquierda en relación al gobierno de Frei. Cabe preguntarse, como lo hace Vitale, si era posible que el gobierno de Frei M. llevara a cabo la Revolución en Libertad. El autor dice que no era posible por las relaciones que el PDC tenía con los intereses norteamericanos, con sectores de la bur-

guesía industrial y minera, con capas medias principalmente profesionales que le impedía alejarse de compromisos muy fuertes con estos sectores que no querían el cambio.

Hubo un momento –dice Vitale– en que el sector rebelde tuvo posiciones importantes al interior de la DC cuando asume la presidencia del partido Rafael Agustín Gumucio, pero las acciones del propio Frei como del sector oficialista que encabezaba Patricio Aylwin hizo pronto caer la directiva rebelde. Tan fuerte es la oposición del sector del Presidente Frei y Aylwin que al finalizar la presidencia del primero el grupo rebelde abandona el partido democristiano formando el MAPU.

Para Vitale el gobierno de Frei agota las posibilidades del reformismo en Chile, inspirado en la Alianza para el Progreso y en la influencia norteamericana. La frustración dejada por la experiencia de gobierno en la propia DC fue muy grande, tanto que en las elecciones de 1970 la candidatura de Radomiro Tomic presenta un programa radical de reformas que se acerca a la idea que inspiraba la línea rebelde que se había desprendido de la DC.

El historiador marxista insiste en la inconsecuencia de los sectores vinculados al freísmo con la idea de la sociedad comunitaria. Para Vitale, Frei representaba los intereses de la burguesía de un país semicolonial que es incapaz de liberarse del monopolio extranjero y que pretende jugar en forma activa el papel de socio menor, solicitando mejores precios para las materias primas, mercado permanente para las mismas, amplios créditos y aspirando a negociar en mejores condiciones con el imperialismo el reparto de la renta nacional.

En relación a la experiencia de la Unidad Popular, las posiciones de Vitale podemos estudiarlas en su libro "¿Y después del 4 qué?", agudo análisis que explica el triunfo electoral de Allende en Septiembre de 1970 y los efectos

en la política chilena en ese momento. Estudia las causas que permitieron el triunfo de Allende, tanto las de orden económico como las políticas. Entre estas últimas llama la atención que Vitale analice la división de la burguesía en dos candidaturas: la de Alessandri y la de Tomic en forma diferente al común de los análisis de la izquierda en esos momentos.

Vitale dice que los ataques formales de Tomic a la "oligarquía" y al sistema capitalista en muchas ocasiones fueron tan agudos como los de la Unidad Popular. Con esta táctica la candidatura de la "izquierda cristiana" pretendía perfilarse ante los trabajadores como antiderrechista y crítico duro del candidato de los patrones. El análisis que hace Vitale del triunfo de Allende es asombrosamente clarificador y se anticipa al comportamiento político de la Democracia Cristiana durante el gobierno de Allende. Para Vitale, poco tiempo después de haber triunfado la Unidad Popular, resultaba necesario ver el comportamiento de la democracia cristiana y explicar correctamente las características de la candidatura Tomic, porque una correcta caracterización de ella permitía a la Unidad Popular desarrollar una política de alianzas que tuviera en cuenta los lazos de la DC con un sector de la burguesía y el imperalismo, como elemento que impedía una alianza con la Democracia Cristiana.

El autor cree que la Unidad Popular fue una fase dentro del proceso de cambios iniciado con el gobierno de Frei. La UP realiza reformas de orden democrático-burgués hasta sus últimas consecuencias. Lo hace desde el aparato gubernamental conquistado con el triunfo del 4 de Septiembre de 1970. No fue una revolución de carácter socialista, no hubo reemplazo en el poder de la burguesía por el proletariado, aunque se trata de obtener por la agudización de la lucha de clases en Chile luego del triunfo popular. Se abre con Allende un período pre-revolucionario que

no necesariamente debía terminar en una dictadura fascista. Muchas situaciones pre-revolucionarias concluyeron con el triunfo del socialismo.

El historiador marxista, de acuerdo a su definición que se trata de una situación pre-revolucionaria, considera dentro de su análisis los intentos por constituir formas de poder popular como lo más interesante para pasar de una situación pre-revolucionaria a una de carácter revolucionaria, que hubiera dado paso al dominio del poder por el pueblo. Analiza en detalle las organizaciones poblacionales y los cordones industriales además de los comandos comunales, que para él sobrepasan el verticalismo de los partidos de la Unidad Popular.

En unas "Notas para un balance" Vitale sostiene que el Presidente Allende cumplió lo prometido en su campaña electoral. Nadie puede criticarle que no haya convertido a Chile en un país socialista: ello no estaba dentro de su proyecto. Cumplió la fase democrático-burguesa, acorde a la idea de que la revolución se hace por etapas, tan afín al partido Comunista y al grupo de influencia del presidente Salvador Allende.

Explica la derrota de la Unidad Popular por el erróneo cálculo del conglomerado de que utilizando la legalidad se podía consolidar el proceso. La legalidad demostró ser burguesa al servicio del capitalismo. Mientras la burguesía utilizaba mecanismos legales que ellos mismos crearon a lo largo del siglo XIX y XX para obstaculizar la consolidación de la revolución democrático-burguesa llevada a cabo por Allende, éste luchaba para que esa legalidad funcionara a su favor lo que era a todas luces un intento novedoso, pero que se mostró infecundo. Al final del período, las características que adquirió la lucha de clases entre el gobierno de la UP y la burguesía en los primeros meses de 1973, especialmente las elecciones parlamentarias de Marzo, la Unidad Popular obtiene el 44% de los votos.

El análisis de Vitale dentro de la historiografía marxista es el enfoque más ligado a la visión clásica del marxismo. Con la Unidad Popular no se abre paso una revolución socialista, ya que no se reemplaza el poder desde la clase burguesa al proletariado en la formación social chilena. Efectivamente, dentro de la teoría marxista clásica en la situación que se generó en 1970 en Chile con el triunfo de Allende no hay cambio de poder de una clase a otra. En rigor, la situación chilena fue una novedad en ese sentido como en otros. La vía chilena al socialismo era algo inédito que quedó inconcluso por la acción contrarrevolucionaria encabezada por Pinochet. En estricto rigor, Vitale tiene en su análisis del gobierno de Allende toda la razón, más todavía si vemos en qué terminó la experiencia pero queda la duda abierta si una vez cumplida, como lo hizo Allende, la etapa democrático-burguesa era posible consolidar esa fase y dar el paso siguiente: transitar al socialismo por la vía chilena.

El trabajo histórico de Vitale tiene una firme base documental. Las citas con declaraciones hechas por miembros del partido Nacional y la Democracia Cristiana, de las organizaciones como la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril y grupos extremistas como Patria y Libertad y la "rápida" reacción de Estados Unidos, demuestra que las fuerzas derechistas desde el primer momento accionan para que la vía chilena al socialismo termine en una derrota. La documentación utilizada por Vitale junto a su rigor conceptual es de mucho valor y será una fuente fundamental para el futuro de la historiografía chilena cuando se estudie el período.

El historiador es un marxista clásico como lo fueron Julio César Jobet, Marcelo Segall, Hernán Ramírez, Tulio Lagos, Fernando Ortiz y Jorge Barría. Ello no quiere decir que ha dejado de ser actual, quedándose atrás en los aportes que se ha hecho al conocimiento de la historia en el siglo XX; por el contrario, permanentemente incorpora

estudios recientes tanto de historiadores marxistas y cercanos al marxismo. Su conocimiento de la obra y trayectoria política de Perry Anderson, historiador inglés contemporáneo, es profunda. Anderson publica dos textos en los cuales pone atención el historiador chileno: uno es sobre la transición del esclavismo al feudalismo y otro sobre el Estado Absolutista, antes de que se consolidaran como textos de consulta de la mayoría de los historiadores.

Vitale como historiador tiene absoluta vigencia y en relación a Tomás Moulian y Gabriel Salazar sólo lo separa pertenecer a una generación anterior; por ello sus compromisos son más fuertes con la generación de Jobet, Ramírez y los otros nombrados. Sigue sintiéndose inspirado en la obra de Marx, pero también se enriquece con los estudios y reflexiones de G. Lukacs, K. Kosik y L. Trotsky. Para sus análisis económicos usa los ensayos de E. Mandel que captó lo que significaban los cambios de los últimos cuarenta años en el modo de producción capitalista.

Luis Vitale fue el primer historiador chileno en poner en el debate historiográfico los problemas ecológicos. También fue pionero en los estudios sobre la mujer. Su libro "La mitad invisible de la Historia" ejerce mucha influencia en los estudios sobre la mujer en América Latina a fines de los setenta y la década de los ochenta.

Según señala en su libro "Introducción para una Teoría de la Historia en América Latina", es un historiador que quiere dar cuenta de la sociedad como totalidad. Su interés es la historia de la sociedad, de todos los factores que intervienen en los procesos de cambio.

Tomás Moulian y Gabriel Salazar: historiadores con sensibilidad marxista.

Ambos historiadores se identifican con el legado de Marx; muchas de sus concepciones de lo que debe ser un

análisis acertado del acontecer en la historia de las sociedades recoge las propuesta marxista, como también incorporan el legado pensadores posteriores a Marx. En el caso de Salazar hay influencias de Max Weber y la historiografía inglesa contemporánea y Tomás Moulian incorpora a Gramsci, Poulantzas y el italiano Sartori.

Hablamos de sensibilidad marxista para referirnos a que en ambos historiadores el marxismo es un referente abierto, alejado de todo dogmatismo y sensible a que la realidad social actual no es, como se piensa, tan distinta a los diagnósticos realizados por Marx. Ambos son críticos del sistema capitalista y rebeldes a toda sumisión propuesta por poderes fácticos.

El sociólogo-historiador Tomás Moulian también intenta explicar en sus trabajos los últimos 30 años de nuestra historia. Sus obras más importantes son cuatro: "Forja de Ilusiones", "La Unidad Popular y el conflicto político en Chile", "Chile Actual: anatomía de un mito" y "Conversación interrumpida con Allende".

En el primero de estos trabajos analiza el período de los sesenta. Considera que fue una sociedad crítica de su realidad e inspirada en una política de cambios y reformas, pero que tuvo que cumplir una agenda de reformas muy importantes que se deberían haber hecho antes. En los sesenta las reformas fueron muchas, desestabilizaron el sistema democrático chileno y condujeron a una polarización. En "Forja de Ilusiones" hay un análisis histórico de este proceso, al cual lamentablemente se agrega un partido de centro como el demócrata cristiano de carácter ideológico y con muy poca flexibilidad.

La DC quiso ser "la alternativa" con el gobierno de Frei Montalva. Frei gobernó los seis años con el apoyo de su partido negándose a formar alianzas con otras identidades políticas. Este hecho es muy importante al hacer un balance de los sesenta y principios de los setenta, dice

Moulian. La DC con su alternativismo provocó la polarización, porque fue incapaz de buscar aliados en la izquierda con la cual tenía más afinidad que con la derecha. La derecha, el centro y la izquierda se recluyeron en sí mismas, no siendo capaces de formar alianzas amplias y mayoritarias dice el autor.

"Forja de Ilusiones" muestra el recorrido histórico de este desencuentro entre las tres tendencias, incorporando variado número de hechos que fueron moldeando el desencuentro.

El otro texto, escrito con Manuel Antonio Garretón: "La Unidad Popular y el conflicto político en Chile", sigue la línea argumentativa del texto anterior, viendo las causas del quiebre de la democracia en Chile en una polarización extrema de los conflictos políticos, a raíz de que el centro no fue un mediador lo suficientemente flexible y abierto para formar –en el caso de la experiencia de la Unidad Popular– alianzas estables con la izquierda que estaba en el gobierno.

Si la Democracia Cristiana hubiera comprendido que el programa de la Unidad Popular era una continuación y profundización de la política de reformas que estaba en el programa de Radomiro Tomic de Septiembre de 1970, hubiera sido posible un acercamiento y dar paso a una alianza entre el centro y la izquierda. Una vez desarrollado el argumento de que la democracia cristiana podría haber formado una alianza con la izquierda explican la caída de la Unidad Popular. Para los autores de "El conflicto..." el Golpe Militar se produce no porque el proceso fuera inviable, sino porque el centro político no entra en alianzas de mediano plazo con la izquierda en el poder para solucionar fuertes problemas de gobernabilidad.

El análisis de Moulian-Garretón es certero y apunta a un problema central del quiebre democrático de 1973, que luego muchos analistas han recogido. El gobierno de la UP

podía haber seguido si tanto la DC como el conglomerado de la Unidad Popular hubieran llegado a un acuerdo.

Para las fuerzas de izquierda en el exilio y en la clandestinidad en Chile el texto significó la entrega de elementos de análisis que explicaban a través de la sociología y la historia lo sucedido con la Unidad Popular. Se habían publicado análisis del 11 de Septiembre pero con un marcado sesgo partidista, en cambio el trabajo de Moulian-Garretón sin perder su simpatía por el proceso de la UP tomaba distancia de las esferas particularistas y entregaba una visión de conjunto, apoyada en una teoría sociológica e histórica.

Los otros trabajos de Tomás Moulian sobre los últimos 30 años son los que publica en la década de los 90. Uno es "Chile Actual: anatomía de un mito" y poco después "Conversación interrumpida con Allende".

"Chile Actual:..." estudia la dictadura (1973-1989) considerando que en el período se asiste en Chile a una revolución. En sus primeros capítulos explica los elementos que llevan a considerar que Chile vivió una revolución. No es la de Moulian una explicación "tradicional" y de fácil comprensión, más bien es original y se sale de los canones de las explicaciones que se han dado en relación a lo que es una revolución.

Quizás los argumentos no son lo suficientemente claros dentro de la "tradicición", pero queramos o no en 1973 en Chile se produce una ruptura que afecta el desenvolvimiento político, económico e ideológico. Es una ruptura que produce efectos profundos en el desarrollo del país. Todos hablan de antes y después del 11 de Septiembre. No hubo nadie indiferente a la ruptura y a la muerte del presidente Allende. Pero queda la duda de si se trata de una revolución.

Se puede coincidir en que es una revolución si nos salimos de los canones tradicionales de lo que define qué

es una revolución. Para que haya revolución una clase social debe reemplazar a otra en el poder. En el caso del golpe de 1973 no se reemplazó a una clase social en el poder por otra, ya que la burguesía siguió en el poder luego de estar a punto de perderlo entre 1970-1973 con la situación pre-revolucionaria generada por el gobierno de Allende.

Creemos encontrar rasgos no tradicionales en lo que pasó en Septiembre de 1973. Si la Unidad Popular fue un proceso inédito, lo que sucedió con la instalación de la dictadura de Pinochet es también inédito. En ese sentido se puede seguir la reflexión que hace Jocelyn-Holt de que en Chile se vivió "otra revolución".

Siguiendo con este razonamiento, Moulian tiene razón cuando dice que fue "otra revolución", que establece nuevas condiciones de acumulación capitalista con un gobierno totalitario.

El análisis de lo que fue ese gobierno totalitario realizado por Moulian es impecable, dando una interpretación general y de detalle sin vacíos y que es difícil de rebatir, incluso para aquellos que se encuentran en posiciones teóricas diferentes. Es un estudio convincente.

"Chile Actual:..." tiene un arsenal de información muy sólido que acompaña las argumentaciones. El uso que se hace de ellos permite juicios avalados que no dejan margen a la duda.

Este libro tiene también dentro de la obra general del autor una revisión de algunas hipótesis vertidas en libros anteriores, especialmente a los hechos históricos en relación con la Unidad Popular. En el capítulo dedicado a este período Moulian dice que se vivió la ilusión de hacer cambios estructurales respetando la democracia existente sin aplicar la vía armada, lo que era imposible. Las revoluciones, dice, son siempre con costos materiales y humanos. La UP no podía pensar que este factor se podía obviar. Las revoluciones son definidas por la fuerza, no son juegos de

artificio, se deciden militarmente utilizando una buena estrategia y con todo tipo de métodos ajustados a las necesidades de la victoria final. La salida política uniendo el centro con la izquierda impulsada por el Cardenal Silva Henríquez, el Partido Comunista y Salvador Allende en 1973 que Moulian, como vimos más arriba, asevera que podía haber parado el triunfo del gobierno totalitario de Pinochet ya no lo considera una fórmula eficaz. Dice que aquello era imposible. Las revoluciones se resuelven a través de la fuerza. Este es un cambio significativo en relación a lo que pensaba Tomás Moulian en sus textos anteriores. Puede explicarse como una variación en su concepción de la revolución y que es un proceso revolucionario en el sentido clásico, pero tenemos que considerar que la Unidad Popular no se puede medir con los padrones clásicos.

Más adelante, el libro analiza detenidamente la dictadura pinochetista y propone una interpretación de los gobiernos de la Concertación. Para Moulian tanto el gobierno de Aylwin como el de Frei son, en líneas generales, una continuación de la dictadura. Todo sigue igual aunque en las apariencias se está en una "transición" desde la dictadura a la democracia. Sigue en pie la Constitución del 80, igual sucede con la economía de características libre-mercadista excluyente e injusta, otro tanto sucede con las atribuciones de las FF.AA y la concentración de poder en el Poder Ejecutivo. La justicia a las víctimas por la violación de los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura no ha llegado, lo que sigue causando dolor y angustia en los familiares.

Para Moulian hay un continuismo en relación con la dictadura en los gobiernos de la Concertación. No ha cambiado Chile y las fuerzas concertacionistas desde las protestas de 1983-1985, en la cual la Alianza Democrática -antecesora de la Concertación por la Democracia- pedía el

término inmediato de la dictadura, o con el Plebiscito de 1988 en que también se decía que el 6 de Octubre de 1988, triunfante la Concertación debía en el momento constituirse una Asamblea Constituyente. Han ido claudicando, lo que lleva a concluir que fueron cooptados por el sistema impuesto por la dictadura, quedando en un "transformismo".

Chile está, dice el autor, viviendo una democracia protegida al gusto de los intereses de los sectores vinculados a la dictadura. Se dijo por parte de la Concertación que era necesario dejar atrás el modelo político-institucional nacido en la dictadura y también que era necesario en lo económico llevar a cabo reformas que permitieran un desarrollo con equidad. No se ha hecho nada de eso y el gobierno de Aylwin se ajustó a una línea continuista.

Para comprender el Chile Actual -dice Moulian- es necesario establecer el lazo, el vínculo histórico, que une a este Chile del post-autoritarismo, con el Chile Pasado, el de la dictadura. El Chile Actual es la culminación exitosa del "transformismo".

Para el autor, "transformismo" es "el largo proceso de preparación durante la dictadura, de una salida de la dictadura, destinada a permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros ropajes políticos: las vestimentas democráticas. El objetivo es el "gatopardismo", cambiar para permanecer".

El análisis de Tomás Moulian es acertado en registrar y dar cuenta de lo que es el Chile Actual. Este Chile es bajo los aspectos principales de orden político, económico e ideológico lo mismo, con "aggiornamento" que lo hacen más digerible, aunque hay que decir que para la mayoría de la población el drama para subsistir adquiere un signo de desencanto y escepticismo mayor. Antes se decía: cuando logremos echar a la dictadura llegará la alegría, hoy ni aquello es una esperanza.

Dentro de los estudios del período que abarcamos en este trabajo, los de Moulian guardan una sensibilidad en relación a concepciones marxistas. Sigue una línea de crítica al capitalismo como sistema de organización de la sociedad, reconociendo en él una sociedad dividida en sectores sociales irreconciliables y que es necesario seguir dando una lucha popular en su contra.

Su apoyo para las elecciones presidenciales a efectuarse en Diciembre de 1999 a una alternativa de izquierda y popular es el resultado de los enfoques históricos-sociológicos realizados en sus dos últimos textos "Chile Actual: anatomía de un mito" y "Conversaciones interrumpidas con Allende". Sus estudios muestran que hay que buscar caminos alternativos a la situación actual al desarrollo capitalista.

Como él ha reconocido, la alternativa se encuentra en la formación de un movimiento popular que recoga la experiencia popular que está en la historia de Chile con Balmaceda, Recabarren, Aguirre Cerda y Allende. En la historia de Chile el movimiento popular tiene una larga tradición. Tradición donde los valores de la solidaridad con los pobres, los excluidos, los marginales, los trabajadores, con las reivindicación de los estudiantes, las mujeres es el eje que guía su acción en la historia de Chile. Para Moulian la Concertación no ha resuelto los problemas del pueblo.

También en esta línea de sensibilidad marxista se encuentran los trabajos de Gabriel Salazar. Sus enfoques recorren toda su obra, que es extensa. Para el análisis historiográfico que desarrollaremos aquí utilizaremos dos textos: "Violencia política popular en las 'Grandes Alamedas'" y el libro publicado este año: "Seis asedios a la historia. Historia desde abajo. Conversaciones con Gabriel Salazar", del cual soy autor.

No cabe duda que la obra historiográfica salazariana

está muy influenciada por los hechos históricos de estos últimos años. No se entiende la nueva propuesta historiográfica de Salazar sin los cambios radicales ocurridos en nuestro país desde la década de los 60 para adelante.

Gabriel Salazar empieza a escribir luego del Golpe de Estado de 1973. Su primer trabajo lo escribe en el campo de concentración de Tres Alamos cuyo título es "Aspectos fundamentales del desarrollo del capitalismo en Chile". Luego sale al exilio, viviendo en Inglaterra donde publica el libro "Labradores, peones y proletarios". Al volver a Chile escribe para SUR Profesionales "Violencia política popular en las Grandes Alamedas", que toca el período de nuestro estudio desde el punto de vista de la violencia política popular. Según dice el texto, Chile es un país donde los sectores populares han ejercido violencia para exigir sus reivindicaciones, ya que el Estado en manos de las clases dominantes ha sido insensible a las demandas del pueblo. De allí que sean frecuentes los "reventones históricos", tanto espontáneos como organizados.

En las décadas de los sesenta y principios de los setenta, para Salazar el país intenta una reformulación nacional-desarrollista para responder a las inquietudes de los sectores populares. La "...política del gobierno de E. Frei descansaba en el reconocimiento de dos parámetros fundamentales: el equilibrio exterior del capitalismo mercantil-financiero chileno, y la validez interior de la democracia liberal de 1925. Ambas 'vigas maestras' eran, a la vez, el talón de Aquiles de la propuesta".

Según el libro, la primera se rompió porque Estados Unidos abandonó su política de colaboración desarrollista después de 1967. La democracia liberal de 1925 tampoco pudo sostenerse por mucho tiempo ante el fracaso económico. Lo que sigue cerrando el ciclo es el nacional-populismo con Allende, "al jugar el incómodo rol de administrador y conservador de un sistema político técnicamente

agotado (por sus crisis de 1954, 1953 y 1967). De ese modo, en lugar de dirigir el encolerizado movimiento de masas contra el Estado, tuvo que salvar a éste mientras procuraba destruirlo, para, en el final de juego, ser juzgado por el conjunto de la clase política en función de su lealtad para hacer bien lo primero (que era de importancia nacional) y no lo segundo (que era trascendental para el movimiento popular).

Esa es en síntesis muy abigarrada cómo analiza Salazar los gobiernos de Frei y Allende. Ambos responderían a movimientos de reformas que tenían, por las características del desarrollo del capitalismo mercantil-financiero y del sistema político liberal de 1925, sus días contados. Los problemas se presentaron por la necesidad de inducir un acelerado proceso de desarrollo productivo que no podía ser sino tardío, sin tradición sólida, bajo situación de dependencia. Paralelo a ello un movimiento social en ascenso obligó a la clase política civil a abusar de las limitadas capacidades del aparato productivo del Estado de 1925. El resultado –dice Salazar– fue que esa máquina de poder “fue sobrecalentada y sobrepasada por el burocratismo, por los movimientos sociales y por el número abrumador de sus enemigos abiertos y encubiertos”.

En ese contexto, la territorialización y posterior militarización del conflicto era un remate lógico. Casi indispensable.

La “revolución liberal” impuesta por las Fuerzas Armadas y sus asesores civiles desde 1973, dice el autor, “constituye pues, en gran medida una revolución restauradora, modernizante en su conexión externa, pero antihistoricista en su conexión interna. Su efecto global fue introducir una ruptura histórica de dramáticos aunque coherentes resultados en el corto plazo (neoliberalismo) y de consecuencias impredecibles para el largo plazo”.

Aquí interesa ver la posición de Salazar en relación a

la Unidad Popular más que su posición sobre la dictadura de Pinochet. El estudio acabado de esta fase de la historia de Chile es un tema detallado en su libro “Historia contemporánea de Chile”, escrito junto a Julio Pinto.

En el libro “6 asedios a la historia”, Salazar remarca que el proyecto que se inicia con la Unidad Popular iba hacia el fracaso. Según su parecer, las condiciones de acumulación capitalista tanto en Chile como el resto del mundo estaban cambiando, lo que hacía que la burguesías locales como de los capitalismo avanzados actuaran no solamente para la sobrevivencia, sino para no quedar fuera de la nueva perspectiva que se abría a la nueva forma de acumulación del capitalismo. La “vía chilena” era en el contexto capitalista inaceptable.

Para el autor el movimiento popular se equivocó en centrar sus esfuerzos en la conquista del Estado cuando el camino era la autonomía, el camino propio fuera del Estado y de los partidos políticos tradicionales como también de las élites políticas.

Gabriel Salazar como también Tomás Moulian en sus últimos análisis y Luis Vitale son críticos a la experiencia tanto del gobierno reformista democristiano –especialmente hasta 1967– y de la “vía chilena” de la Unidad Popular, lo que no deja de llamar la atención. Es más, dentro de los historiadores vinculados a la izquierda como Alejandro Chelén, el mismo Julio César Jobet en sus pocos textos luego del golpe han sido críticos hacia la experiencia de los sesenta y principios de los setenta. Las razones pueden explicarse por tratarse de una experiencia que terminó derrotada, lo que hace que se busque las causas de la ruptura más que la viabilidad del proyecto.

A nuestro juicio, hay que observar también qué era posible dentro del acontecer de la historia de Chile –aunque resulta más difícil ponerse en esa situación– que la experiencia inédita en la historia de las revoluciones como

era la Unidad Popular, hubiera terminado exitosamente. Hubo situaciones en que el proyecto podría haber tenido otro fin si hubiera sido capaz de desarrollar su programa aunando alrededor de él a las mayorías, si cada medida tomada contara con gran apoyo de los sectores beneficiados y si la conducción del conglomerado de la Unidad Popular hubiera actuado cohesionadamente. No estaba escrito en la historia de antemano que la Unidad Popular iba a caer derrotada. No se explica la derrota porque el sistema democrático chileno ya estaba agotado desde principios de los sesenta. El sistema no estaba agotado y resistió acciones en su contra de gran gravedad durante el gobierno de Allende y salió de ellas con éxito. El Golpe de Estado era evitable, lo que agranda el valor de la inédita "vía chilena al socialismo" como camino hacia una sociedad mejor.

Queremos terminar el análisis de los últimos 30 años como problema historiográfico diciendo que la calidad de los trabajos aquí expuestos son desiguales, notándose en los estudios de los historiadores conservadores y de la mesohistoria algunos problemas que tienen que ver con su postura de clases al interior de la estructura social de la sociedad chilena, que los hace reacios a los cambios y muy temerosos a la entrada de nuevas ideas. Se les hace difícil mirar seguros y optimistas el futuro, porque se refugian más en el pasado que en el futuro. Para esta corriente la mirada al pasado es recreativa y de afirmación, con miedo al futuro.

Es distinto lo que sucede con la historiografía marxista, que tiene propuestas que se afincan en la experiencia pasada, pero poniendo la vista en la tareas de construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Capítulo II

EL PRIMER GOBIERNO DC: EDUARDO FREI MONTALVA

LUIS VITALE

Los dirigentes demócrata-cristianos, que por primera vez en la historia de Chile asumieron el gobierno en 1964, eran los mismos de la generación socialcristiana de principios de la década de 1930, pero otros, con más experiencia pero con menos convicción en la realización de facetas de su utopía y, sobre todo, con esa ambición de poder que emanaba de sus tres décadas de compromisos políticos con fuerzas extrañas a su estrategia comunitaria.

Fueron inspirados por el contenido social de la Encíclica *Rerum Novarum* (1891), por Juan Concha y Tizzoni, precursores chilenos de ideas sociales cristianas a principios del siglo XX. Habían leído con pasión las críticas de la Iglesia al régimen liberal burgués, conmovidos por la encíclica *Quadragesimo Anno* (1931), por la acción de Marc Sagnier, organizador del grupo "Le Sillón" –aunque diferían de él por sus críticas a la Iglesia– y especialmente influidos por la revista "Esprit" dirigida desde 1932 por Emmanuel Mounier; seguían con atención las experiencias sociales de las Juventudes Obreras Católicas y la formación del Secretariado Internacional de Gremios Cristianos.

El pensamiento de Jacques Maritain¹ fue determinante en la formación política de la generación chilena socialcristiana, especialmente por sus sugerencias prácticas para llevar adelante la filosofía neotomista, entre ellas: la sociedad no será individualista ni colectivista, no supresión sino paso del capitalismo privado al servicio del

trabajo, la copropiedad de los medios de trabajo² y otros postulados que oscilaban entre la utopía y la ingenuidad ante los capitalistas. Sin embargo, una idea clave de Maritain sedujo a la generación de Ignacio Palma, Manuel Garretón, Eduardo Frei y Bernardo Leighton: crear partidos socialcristianos pero no confesionales como eran los partidos conservadores, cuyos afiliados debían ser obligadamente católicos e incondicionales de la Iglesia. A esa idea de Maritain apostó la generación chilena del 30, creando un partido de inspiración cristiana pero con la amplitud suficiente como para integrar a protestantes y otros no muy creyentes.

Basados en esta táctica, los líderes de la juventud del Partido Conservador (Frei tenía 27 años) fundaron la Falange Nacional en 1935, escindiéndose del tronco pelucón en 1938, como protesta por el apoyo de su partido al magnate Gustavo Ross Santa María, con el fin de apoyar al gobierno del Frente Popular, presidido por Pedro Aguirre Cerda, con la intención de limar algunas aristas demasiosas filudas levantadas por cierta izquierda socialista, objetivo que hizo explícito un sacerdote en carta al Papa: "En realidad creo que la actitud de la Falange, discutible políticamente, no ha podido tacharse de anticatólica en ningún momento y ha procurado proceder de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica; su política a veces demasiado candorosa y crédula, ha sido tender la mano a las izquierdas para suavizar la situación e impedir un rompimiento con la Iglesia y una revolución social, y creo que puede decirse que lo han conseguido; han sido un elemento de pacificación"³

El apoyo de la Falange al Frente Popular, acogido con beneplácito por Aguirre Cerda, un radical no hostil con la Iglesia, volvió a ratificarse con ocasión de la candidatura presidencial de Juan Antonio Ríos, quien designó en 1945 Ministro de Fomento al joven Frei, de 34 años, que pronto

renunció ante la masacre de la Plaza Bulnes ordenada por el Vice-Presidente A. Duhalde en 1946. No obstante, la Falange, que ya contaba con tres diputados, Manuel Garretón, Radomiro Tomic y Jorge Ceardi, dio un nuevo viraje optando por uno de los candidatos presidenciales de la Derecha: Eduardo Cruz-Coke, conservador socialcristiano.

Aunque derrotada en esa contienda electoral, la Falange continuó ejerciendo influencia política e intelectual al crear, por iniciativa de Mario Aguirre y Gabriel Valdés, la importante Editorial del Pacífico y generar nuevos pensamientos con los libros de Alejandro Magnet, Ismael Bustos, Jaime Castillo V. y los jóvenes investigadores Jacques Chonchol y Julio Silva Solar, además de la producción intelectual de Eduardo Frei.

Bajo el gobierno de Gabriel González Videla, la Falange prosiguió su trayectoria zigzagueante. De la oposición cerrada pasó a integrar el gobierno. Haciendo caso omiso de la política autoritaria de González Videla, que había expulsado de su administración a los tres ministros comunistas, apoyó el Pacto Militar con los Estados Unidos, terminando por incorporarse al gobierno a través de Bernardo Leighton, designado Ministro de Educación, e Ignacio Palma V. / M. de Tierras y Colonización.

"De nuevo nos encontramos –dijo Leighton– con los conservadores en una misma línea. Entramos al gobierno para continuar sosteniendo una interpretación de la doctrina socialcristiana, en el sentido de que ella sirviera de instrumento a los trabajadores. Fue, sin duda, una actitud responsable la nuestra, políticamente responsable; tal vez partidistamente pudo ser un error, porque el chileno común no comprendió que un partido como el nuestro, que estaba en la oposición, se trasladara al gobierno"⁴. Asimismo, Frei trató de justificar este comportamiento político en los siguientes términos: "es un hecho real que cualquiera que sean los errores, que no ignoramos, ni las limitaciones

que reconocemos de la actual fórmula política de centroizquierda, ella representa potencialmente la solución más equilibrada y posible para gobernar”⁵

Años más tarde, Rafael Agustín Gumucio reflexionaba sobre los pasos de estos dirigentes no tan jóvenes de la Falange: “al integrarse con otros partidos perdió singularidad ideológica. Aún cuando debe anotarse que desde 1957 a 1964 esa pérdida de singularidad rupturista fue más leve que en el futuro”,⁶ refiriéndose, quizás, a la campaña presidencial de Frei en 1958, teñida de reformismo y concesiones políticas a su Comando de Independientes⁷ para restar votos a la candidatura derechista de J. Alessandri.

Durante la década de 1950, el socialcristianismo chileno se convirtió en un partido con vasta influencia popular. Para enfrentar la candidatura presidencial de Ibáñez en 1952 intentó levantar una coalición de centro-izquierda con el Partido Radical, llegando Frei a la última vuelta, pero el PR quebró la alianza. En 1953, fue creada la Federación Socialcristiana con la Falange Nacional y el nuevo grupo escindido del conservantismo –liderado por Horacio Walker, Pablo Larraín, Pedro Undurraga y Jorge Mardones Restat– Partido Conservador Socialcristiano, los cuales se fusionaron en julio de 1957, dando nacimiento al Partido Demócrata Cristiano. Pronto se sumó un sector del Partido Democrático Nacional (PADENA), el diputado ibañista José Musalem y el ex-conservador Tomás Pablo, con lo cual la representación parlamentaria de la flamante DC alcanzó a 14 diputados y un senador por Santiago: Eduardo Frei, elegido en tal cargo por segunda vez, pues la primera se dio en 1949 por Coquimbo y Atacama. La militancia de nuevos y connotados políticos, provenientes de otras tiendas aumentaba, al mismo tiempo que se resentían los queridos ideales de antaño.

La generación del 30 comenzó a vislumbrar la posibilidad de convertirse en alternativa de poder, estimulada

por las tendencias políticas europeas de postguerra. Las grandes potencias mantenían su política de “guerra fría” para frenar la revolución anticolonial asiática y africana, que en algunos países, como China, Corea e Indochina transitaba por el camino de la liberación tanto nacional como social. La burguesía comprendió que no podía seguir dando apoyo a partidos derechistas desprestigiados e incapaces de mediatizar las grandes movilizaciones de los trabajadores de Italia, Francia, Alemania y Bélgica

Se necesitaba, entonces, alentar la creación de nuevos partidos capaces de canalizar las protestas populares; partidos que disputaran la hegemonía a los socialistas y comunistas; nuevos partidos con una ética e ideología coherente que pudiera dar renovada esperanza a la frustrada generación de postguerra; partidos, en fin, que fueran parte de una corriente mundial de pensamiento capaz de disputar el apoyo popular a la otra corriente, también mundial: el socialismo, en pujante ascenso.

Así comenzó a estimularse el desarrollo de los Partidos Demócrata Cristianos, sin desechar alianzas con las corrientes tradicionales de derecha. Pronto se formó la Unión Mundial Demócrata Cristiana (UMDC), conquistando rápidamente el gobierno en Alemania en 1950 con la CDU, dirigida por Konrad Adenauer; en Italia con Alcides de Gásperi y Amintore Fanfani; en Francia en 1947 con el Movimiento Republicano Popular (MRP) de Robert Schuman, en coalición con los radicales y socialdemócratas; en Bélgica en 1950, luego de la renuncia del rey Leopoldo en favor de su hijo Balduino, convirtiéndose el partido social-cristiano en la primera fuerza electoral en las elecciones de 1958.

Este avance también se empezaba a dar en América Latina, con la fundación de la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América) y el papel desempeñado por el COPEI venezolano después de la caída del dictador

Pérez Jiménez en 1958, encabezado por Rafael Caldera, dando respaldo al gobierno electo de Rómulo Betancourt de Acción Democrática; del Movimiento Demócrata Cristiano (1955) en Paraguay, el Partido Social Cristiano de Nicaragua, constituido en 1955, el PDC guatemalteco, fundado ese mismo año, el PDC peruano, que dio apoyo a Belaúnde Terry, el PDC uruguayo, organizado por Juan Pablo Terra, los núcleos DC de Argentina, dirigidos por Juan T. Lewis y después por Horacio Sueldo, la Unión Cívica Nacional de Panamá creado en 1955, al igual que el PDC boliviano y la Democracia Cristiana Ecuatoriana, además del Partido Revolucionario Social Cristiano de República Dominicana, organizado en 1962. Al mismo tiempo, se creaba la Central Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (CLASC), que luego se llamó CLAT.⁸

En Chile, el PDC experimentó en pocos años un notable avance, influenciando a vastos sectores de trabajadores y capas medias, que simpatizaban con postulados de la Declaración de Principios de la Primera Convención Nacional, efectuada en 1957: "La DC afirma que el poder económico no debe descansar ni en los individuos animados por el afán de ganancia ilimitada ni en el Estado monopolista. La economía humana tiende a agrupar a los hombres en comunidades de trabajo, dueños del capital y de los medios de producción y concordante en sus objetivos, y a convertir el Estado, como rector del bien común, en expresión superior de esa vida comunitaria".

En la elección presidencial de 1958 Frei, al calor de la consigna "La Verdad tiene su hora", el mismo nombre que su libro, obtuvo cerca de 250.000 votos, creciendo en número de afiliados con la incorporación de un sector de medianos propietarios agrícolas del Partido Agrario Laborista, pero perdiendo en homogeneidad social. A principios de la década de 1960 era una de las fuerzas principales en el movimiento estudiantil, cooperativo, sindical,

de pobladores y, sobre todo, en los gremios de empleados, profesionales y técnicos. Esta influencia lo convirtió en el primer partido político del país en las elecciones a regidores de abril 1963, al obtener el 23% de los votos.

Una novela de época nos cuenta el fervor de los jóvenes socialcristianos de capas medias por estar junto a los pobres. Se trata de la novela **Mara**, de Carmen Valle, seudónimo de Blanca Subercaseaux de Valdés (Ed. Del Pacífico, Stgo., 1965). Transcurre en Santiago, a principios de los '60, retratando a una joven de origen pequeño burgués, llamada Mara, que después de haber conocido a muchachos católicos decide ir a vivir a una población "marginal" de los areneros de Las Condes. En la novela se aprecia que este acercamiento a los pobres tenía un carácter paternalista. El joven ideólogo, Marcos, deja luego sus ideales por una frustración amorosa y se convierte en empresario. Y así sucede con varios de los personajes socialcristianos. La única consecuente es Mara.

El libro **Las Fuentes de la Democracia Cristiana** de uno de sus principales teóricos, Jaime Castillo Velasco, editado en 1963, dio mayor densidad de pensamiento a la DC, mística de cambio y una estrategia hacia la sociedad comunitaria, pero dialécticamente ahondó la contradicción entre la dirección y la base que empezó a creer en una nueva utopía, en una sociedad distinta a la del capitalismo. Castillo se remontó a la historia para demostrar la rebeldía de los tiempos de Jesús, diferenciando los momentos en que el "Cristianismo actúa en calidad de ideología rebelde" y los períodos de una "cierta realización de las ideas cristianas" (página 31) y otros temas que me permitieron polemizar en mi libro **Esencia y Apariencia de la Democracia Cristiana**, publicado en 1964 por la Imprenta Arancibia. Esta contradicción entre el ideal comunitario y la praxis concreta de la DC en el gobierno se hizo permanente durante y después de la presidencia de Eduardo Frei, porque

la Juventud creyó realmente en una “revolución en libertad” y en el humanismo integral que sus maestros predicaron.

Mi libro sobre la Democracia Cristiana fue el resultado de una larga investigación iniciada a mediados de la década de 1950, cuyo primer avance fue un artículo que publiqué en enero de 1957 en el periódico “Frente Obrero”, órgano del POR. Enterado Allende de este trabajo, por intermedio de su amigo Labarca, me invitó en febrero de 1964 a su casa de Guardia Vieja.

De inmediato me preguntó: ¿Usted cree que la candidatura de Frei es la nueva cara de la Derecha, como dicen mis compañeros de izquierda? Le respondí con otra pregunta: ¿Y usted que opina? –No pus hombre, cómo voy a decir semejante barrabasada, cuando es público y notorio que el programa de Frei significa una ruptura con la tradicional posición de la Derecha. Lo que hay que hacer de inmediato es dar una batalla en el frente ideológico, desentrañando el verdadero pensamiento de la DC y sus diferencias con nosotros. Por eso, le pido que termine lo más rápidamente posible su investigación. –Mire, compañero Allende, yo no hago libros por encargo. Lo que podría intentar es un resumen de unas 300 páginas que tengo escritas para ser entregadas luego a la Imprenta Arancibia, porque usted sabe que he sido condenado y relegado a Curepto, a raíz de la huelga general que convocó el presidente de la CUT, nuestro querido amigo Clotario Blest, para impedir que Alessandri rompiera las relaciones diplomáticas con Cuba.

Ciertas contradicciones las había detectado Julio Silva Solar, primero como coautor con Jacques Chonchol en **Hacia un mundo comunitario** (1950) y luego en su libro **A través del marxismo**: “Sería insensato suponer que un movimiento histórico de esta envergadura va a concluir en alguna de la variada gama de reformas de la empresa,

participaciones, cogestiones y demás ofrecimientos que se proponen como solución. E incluso, la misma propiedad comunitaria se falsifica al plantearla en el terreno de la empresa.”⁹

Ante la incapacidad de los partidos tradicionales para mediatizar las luchas sociales, miembros de la Cámara de Comercio, agricultores de nuevo cuño y, sobre todo, empresarios industriales vieron en la DC la mejor salida para consolidar y modernizar la estructura capitalista, pues garantizaba las relaciones comerciales con Estados Unidos y Europa occidental, como lo había demostrado la bancada falangista en 1955 al votar favorablemente la ley del “Nuevo Trato al Cobre” y el “Referéndum Salitrero”, que beneficiaban a las Compañías extranjeras. Paralelamente, gran parte de la pequeña burguesía e intelectuales, profesionales y técnicos, desilusionados del PR, comenzaron a polarizarse en torno al PDC.

Casi coetáneamente, las administraciones norteamericanas, en particular el presidente John Kennedy, aconsejaron a las clases dominantes y, especialmente, a los partidos de Centro, un plan de reformas destinadas a neutralizar el impacto de la Revolución Cubana, condensadas en el proyecto denominado “Alianza para el Progreso”.

Mientras tanto, la izquierda, especialmente el PC, exploraba la posibilidad de levantar un candidato de transacción entre el FRAP y la DC, cuyo nombre podría ser Baltazar Castro. Inclusive, un ala del PS cuestionaba a Salvador Allende. A fines de 1963, Allende nos invitó a su oficina del Senado a Clotario Blest, Enrique Sepúlveda y a mí para comunicarnos el curso de estas negociaciones y su decisión de presentarse, aunque fuera sin el apoyo de esos partidos, como candidato a las elecciones presidenciales, para lo cual solicitaba el apoyo de Clotario Blest, que recién había dejado la presidencia de la CUT.

Rechazada por la DC la negociación de un candidato

independiente, Allende fue proclamado por el FRAP y los independientes, que en julio de 1964 crearon el Movimiento de Independientes de Izquierda (MIDA), integrado por figuras como Guillermo García Burr, Carlos Vasallo R., Max Nolff, José Santos González Vera, Gonzalo Rojas, el Dr. Alfonso Asenjo y por un importante sector de militares en retiro, encabezados por Teodoro Ruiz, Oscar Squella, Ernesto Rejman y por un Frente Cívico Militar, representado por Manlio Bustos. La campaña de Allende iba creciendo a través de la propaganda de miles de Comités Independientes que se fueron creando.

En ese momento, se dio amplia publicidad a un libro firmado con el seudónimo de Perceval, titulado **¡Ganó Allende!**, donde se presentaba a un Chile imaginario arrasado en lo político, económico y cultural por un gobierno extremista; formaba parte de la “campaña del terror”, instrumentada por la Derecha y el Centro.

Para las elecciones presidenciales de 1964, Frei levantó un programa destinado, a ganar los votos de las capas medias, obreros, pobladores y campesinos con el fin de disputarle ese electorado a la izquierda, representada por Allende. Los votos de la Derecha ya los había ganado con el pronunciamiento de los Partidos Conservador y Liberal que después del “Naranjazo” –o triunfo de la izquierda el 15 de marzo de 1964 con la elección extraordinaria del diputado Oscar Naranjo en Curicó– resolvieron romper la alianza con el PR y su candidato Julio Durán.

Los “slogans” populares de la DC calaron hondo en vastos sectores de la población oprimida, especialmente el compromiso de concretar la “promoción popular”, “casa para todos”, la reforma agraria, aumento de sueldos y salarios y una reforma educacional que facilitara el acceso a la Universidad. La consigna de “Revolución en Libertad” prendió en la Juventud ansiosa de cambios, que fue plé-gándose a la “Marcha de la Patria Joven” que caminó de

Arica a Magallanes, culminando en la populosa concentración del Parque Cousiño, hoy O’Higgins: “alguien dirá medio millón de personas. Otros entre ochenta y cien mil”.¹⁰ No obstante, Clotario Blest tenía sus reservas: “La tan mentada Revolución en Libertad sólo será un nuevo chiste para el sufrido pueblo trabajador (...) No tengo dudas que este gobierno terminará no siendo ni demócrata ni cristiano”.¹¹

La gestión presidencial de Eduardo Frei M.

La DC triunfó en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1964 con el apoyo explícito de los Partidos Conservador y Liberal, obteniendo Frei 1.409.012 votos (56%) sobre los 977.902 (39%) de Salvador Allende, candidato del Frente de Acción Popular, y los 125.233 votos (5%) de Julio Durán, en representación del Partido Radical. Cabe destacar que los partidos Conservador y Liberal representaron en las elecciones a diputados de 1961 el 31,2% del electorado.

La DC se jugó para tener mayoría en ambas Cámaras con el fin de aprobar las leyes radicales que se había propuesto. Por eso, una vez ganada la Presidencia, inició la campaña de un “Parlamento para Frei”. Las elecciones de 1965 le dieron un gran triunfo electoral ganando por mayoría absoluta en Diputados, pero quedando en minoría en el Senado, resultado que limitó las posibilidades de hacer las reformas anheladas.

El plan “desarrollista” del gobierno de Frei consistió fundamentalmente en promover la producción de cobre mediante una asociación del Estado con las empresas extranjeras; en aumentar la producción agropecuaria por medio de la Reforma Agraria y en estimular el desarrollo de ciertas ramas industriales a través de la fusión de empresas chilenas con el capital monopólico internacional.

La DC había recogido desde 1955 las concepciones desarrollistas de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Según Alberto Sepúlveda Almarza, "Frei había colaborado con la CEPAL. Uno de los personeros más importantes de esta oficina de las Naciones Unidas, el chileno Jorge Ahumada, se convirtió en uno de los inspiradores del programa presidencial de Frei en 1964".¹²

El plan de Frei estuvo basado –como todos los modelos "desarrollistas"– en las nuevas funciones asumidas por el Estado desde la década de 1930, claramente diseñadas por el Congreso Nacional de 1966 de la DC: "control del Estado sobre los instrumentos y mecanismos del sistema económico", es decir, el Estado planificador y regulador de la economía, asociado con los grandes propietarios a través de empresas mixtas, "delimitar campos de trabajo y reglas del juego entre el sector público y el sector privado". En el Mensaje al Congreso (1969), Frei manifestó: "Más del 70% de los recursos de inversión nacional está, de hecho, en manos del Estado, que tiene el control directo sobre el 50% del crédito. Ejerce un control completo sobre las operaciones de comercio exterior. Sectores básicos de la economía, como ferrocarriles, la electricidad, las líneas aéreas y el petróleo están en manos del Estado".

Con el objeto de obtener más recursos para el Estado y sus proyectos sociales, el gobierno demócrata-cristiano presentó al Parlamento un proyecto, llamado "Impuesto al Patrimonio", que fue obviamente bloqueado por los diputados y senadores de la Derecha. El plan de Frei no contemplaba introducir reformas constitucionales de fondo y menos la elaboración de una nueva Constitución. De todos modos, las escasas reformas constitucionales que envió al Congreso fueron rechazadas.

Tuvo entonces que solicitar nuevos empréstitos, que fueron rápidamente concedidos por gobiernos democristianos de Europa y por Estados Unidos, interesados en ga-

rantizar la gestión de este nuevo partido de recambio, además del incremento de relaciones económicas con la URSS, llegando Chile a ser, después de Cuba, "el país de América Latina que recibió mayor cantidad de asistencia soviética".¹³ Todos los informes coinciden en que durante la gestión Frei, fueron frecuentes los empréstitos de EE.UU., como lo certifica Kissinger en sus "Memorias": el presidente Johnson autorizó dos préstamos al gobierno de Frei, uno de 40 millones de dólares en 1969 y otro de 70 millones en 1970; además de otros empréstitos concedidos en 1965 y 1967. Así, la Deuda Externa aumentó vertiginosamente de 1.869 millones de dólares en 1964 a 3.886 millones en 1970, según el informe de 1971 de la Oficina de Planificación Nacional.

Al mismo tiempo, Frei promovió con los presidentes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú la reactivación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), aunque sin mayor éxito, salvo avances en la integración financiera.

Durante los primeros años de su administración, Frei pudo implementar parte de su plan de desarrollo gracias a la buena situación económica del país. A nuestro juicio, hubo dos fases: una, de bonanza durante 1965 y 1966 y otra, de estancamiento con visos de recesión, de 1967 a 1970. En la primera fase, el precio del cobre subió a un nivel jamás alcanzado: 70 centavos de dólar la libra como promedio anual, a raíz de la demanda registrada por la guerra de Vietnam y la expansión de la economía norteamericana, además de un crecimiento en la producción y exportación de hierro, acero, celulosa, madera y harina de pescado. El Producto Interno Bruto creció de 5% en 1965 a 6,6% en 1966.

Los primeros síntomas de deterioro comenzaron en 1967, según Informe de la CEPAL. El PIB sólo creció un 3% en 1967. En 1968 se acentuó el deterioro por la sequía que asoló a Chile desde el Norte Chico hasta Chillán. El

desmejoramiento económico prosiguió durante 1969 y 1970, subiendo la curva inflacionaria a más del 30% anual.

El ascenso de la DC al gobierno afianzó el papel hegemónico de la burguesía industrial en el bloque de poder de la clase dominante, que se vio favorecida por el respaldo del Presidente a las industrias de exportación. Así se aceleró la inversión de capital financiero extranjero en industrias claves, como la metalúrgica, automotriz, petroquímica, electrónica y celulosa. En la metalurgia, los capitales norteamericanos se apoderaron de Inchalam, American Screw y Siam di Tella; el consorcio ADELA compró la mayoría de las acciones de CINTAC y COMPAC. La General Motors y la Ford Motors Co. empezaron a monopolizar la producción y distribución de automóviles.

“La industria automotriz –afirmaban Caputo y Pizarro– constituye uno de los más claros ejemplos del proceso de monopolización industrial sobre la base de la empresa extranjera”.¹⁴

Una apreciación similar hizo Pedro Vuskovic en una investigación realizada en 1970: “consideradas las 160 principales sociedades anónimas industriales, más de la mitad resulta tener participación extranjera”.¹⁵ En 1969, la empresa IANSA, fundada en 1941 por la CORFO, había dejado de ser nacional, pasando la mayoría de las acciones a manos de la General Ire and Rubber Co.

El objetivo de esta política económica era intentar una reformulación del patrón o modelo de acumulación, que presentaba signos de debilitamiento en América Latina y, particularmente, en Chile desde principios de la década de 1960.

La “chilenización” del cobre

Una larga aspiración de la mayoría del pueblo chileno, planteada por destacados políticos de las décadas del

20, 30 y 40 y agitada por Ibáñez en su campaña presidencial de 1952, fue que la riqueza cuprífera brotada en nuestro territorio pasara de manos de las Compañías norteamericanas al Estado. Esta demanda nacional empezó a concretarse, en parte, por el gobierno de Frei, que abrió un proceso que desembocó en una de las medidas más patrióticas de Allende

Considerando al cobre, como la “viga maestra” de la economía, en 1965 la administración DC planteó la adquisición del 51% de las acciones de empresas extranjeras que, desde principios de siglo, se fueron apoderando del cobre, designando como intermediario ante las empresas a Radomiro Tomic. En 1959, la Braden Copper Co., dueña de El Teniente, filial chilena de la Kennecott Copper Co., tenía una inversión cuprífera de 86,8 millones de dólares, la Chile Exploración 280,2 millones y la Andes Mining Co. 170 millones, ambas filiales de la Anaconda Copper Mining.

El proyecto de “chilenización” de las minas de cobre no constituyó un total nacionalización, pero fue un significativo paso. El convenio que propuso el gobierno a las Compañías que lo aceptaran establecía la compra del 51% de las acciones, según el valor neto de los libros de las empresas al 31 de diciembre de 1969. El precio sería pagado en un plazo de 12 años, en cuotas semestrales, con un interés del 6%. Hubo empresas que no lo aceptaron, como la Anaconda, que controlaba los minerales de Chuquicamata y El Salvador, pero con ella se formó una Compañía mixta, la Explotadora Cordillera, con 25% de participación del Estado para explotar una nueva mina, la Exótica, cerca de Chuquicamata, encargada además de hacer prospecciones geológicas, incluyendo un acuerdo por el cual el Estado chileno quedaba asociado en la explotación de las eventuales minas que se descubrieran. Con otras, como la Corporación Cerro, se aceptó formar la Sociedad Minera

Andina, en la que el Estado chileno participaría hasta con el 25% del capital. Con la Corporación Kennecott se acordó que el Estado compraría el 51% de la Braden Copper Co., formándose una Compañía mixta para explotar la mina El Teniente.

Una cláusula era importantísima: la transferencia del otro 49% de las acciones de la Anaconda se efectuaría a partir del 31 de diciembre de 1972, aunque habría que pagarle el 60% del saldo insoluto del precio de compra del 51% de las acciones. El precio del 49% sería la cantidad resultante de multiplicar el promedio de las utilidades anuales del 49% entre 1970 y la fecha de la venta con un factor.

Este factor multiplicador sería 8, y si la venta se concretare en 1973 disminuiría medio punto por cada año hasta 1977. Es decir, el pago del 49% resultaría casi tres veces superior al precio del 51% de las acciones, operación que no se alcanzó a consumir porque Allende decidió en 1971 decretar lisa y llanamente la nacionalización total del cobre. Además otorgaba a dichas empresas una rebaja tributaria y aduanera durante varios años y la comercialización del mercado quedaba monopolizada por las compañías, cuya administración se mantendría en sus manos.

Esta asociación del capital estatal con el capital monopólico internacional fue denominada "nacionalización pactada", siendo criticada por la derecha y, en algunos puntos, por el PR y la alianza de izquierda (FRAP); inclusive por Diputados de la DC, como Julio Silva Solar, en la sesión de la Cámara del 27 de julio de 1965.

Un especialista del tema, Mario Vega, dijo entonces: "se pagó por el valor del yacimiento, considerando la rentabilidad; de modo que si el yacimiento era de alta calidad, los costos de extracción eran bajos y, por consiguiente, la rentabilidad resultaba alta. Sobre esta base favorable

a las empresas, se fijó el precio que debía pagar el estado chileno por el 51% de las acciones.¹⁶

Otros economistas calcularon que por este convenio, Chile perdió porcentajes en el negocio del cobre, pues antes se recibían 183 dólares por cada tonelada de cobre y, a partir de esa firma, se comenzarían a recibir sólo 157. Las Compañías foráneas podrían llevarse en pocos años unos 4.500 millones de dólares de utilidades, o sea 1.000 millones más de lo que obtuvieron en medio siglo de explotación de nuestra riqueza.

La Reforma Agraria.

Fue otra tarea democrático-burguesa –como así fue calificada la realizada por la Revolución Francesa de 1789– del gobierno DC, largamente esperada por los campesinos. Agitada durante décadas por los partidos de izquierda y planteada por la "República Socialista" de 1932, replanteada en palabras por el Frente Popular y por Ibáñez en su campaña presidencial de 1952 e iniciada en forma tan pequeña por Jorge Alessandri en 1960 que se conoció popularmente con el nombre de "reforma de macetero".

Hacia comienzos de la década de 1960, los latifundistas habían dejado millones de hectáreas sin cultivar. Los predios superiores a 1.000 hectáreas, según el Censo de 1965, monopolizaban más del 72% de la propiedad territorial, pero menos tierras que los productores medianos y pequeños dedicadas a cultivos intensivos.

En el momento de iniciarse la reforma agraria, la distribución de la tierra, según el Censo Agrario de 1965 era la siguiente:

Tamaño de las explotaciones	Nº explotaciones	Superficie (Hect)
Menos de 5 Hectáreas	123.036	207.000
de 5 a 50 "	92.408	1.156.000
de 51 a 200 "	23.959	2.284.000
de 201 a 1.000 "	10.158	4.310.000
de 1.001 a 5.000 "	2.601	5.495.400
de más de 5.000 "	730	16.795.400

La Ley de Reforma Agraria limitaba la propiedad a un máximo de 80 hectáreas de riego de buena calidad o de superficie equivalente a ella; de modo que en tierras de secano o de montaña el equivalente a las 80 hectáreas podía quintuplicarse o más. Entonces, los terratenientes se quedaron con las mejores tierras y vendieron las incultivadas. Al mismo tiempo, subdividieron sus fundos en parcelas de 80 hectáreas que colocaron a nombre de sus familiares. La ley no era imperativa, es decir, no obligaba al gobierno a expropiar sino que lo facultaba para proceder a la entrega de tierra. Las tierras expropiadas debían ser indemnizadas mediante un pago inicial en efectivo y el resto en cuotas.

Connotados especialistas, como Aranda y Martínez, señalaron oportunamente: "Aunque la reforma agraria ha sido un duro golpe para los sectores latifundistas y, desde este ángulo, no debe subestimarse su desarrollo (...) En efecto, las expropiaciones acordadas por el Consejo de la Corporación de Reforma Agraria hasta el 30 de diciembre de 1969, alcanzan a 248,900 hectáreas de riego y a 2.620.500 hectáreas de secano, es decir, el 20,1 % del total de la tierra de riego y el 9,4 % del área nacional en fincas (...) Al cabo de más de cuatro años de reforma agraria, lapso en el que se suponía que el proceso tendría la mayor velocidad y agresividad, el latifundio sigue imperando en el campo

chileno con más de 5.300 unidades y con una superficie mayor de veintidos millones de hectáreas".¹⁷ Efectivamente, a fines de 1969 sólo se habían beneficiado 17.400 familias, de un total de 100.000 pequeños propietarios que se había propuesto concretar el gobierno de la Democracia Cristiana.

Las limitaciones de esta Reforma Agraria que abrió un proceso histórico en el agro chileno, fueron analizadas por Jacques Chonchol, que conoció por dentro el proceso en calidad de Director de INDAP del gobierno de Frei: "Por un lado, se trataba de una reforma agraria comprendida en un programa de acción social orientada a un cambio profundo y, por otro, de un programa de aceleramiento del desarrollo económico dentro de los moldes de la sociedad que existía antes (...) No es de extrañar pues que el programa de reforma agraria resultara un proceso bastante difícil de negociación política y social; por un lado, había que concretar suficientes realizaciones como para responder a las aspiraciones que existían y que se habían creado; por otro, se procuraba conciliar al grupo empresarial existente con el programa de cambio. Precisemos ahora -sigue Chonchol- cuáles eran estos aspectos en que era necesario buscar una conciliación. En primer lugar se intentaba mantener, dentro de la agricultura, un sector capitalista privado, notoriamente más moderno, más eficiente. (...) Un segundo aspecto entraba en juego para la conciliación entre la reforma agraria y grupos empresariales. El programa global incluía una aceleración del proceso de desarrollo económico y ello suponía no atemorizar a los grupos empresariales no agrícolas, llamados a incorporarse a dicho desarrollo por el proceso paralelo de reforma agraria (...) Los intentos, pues, se orientaron a demostrar a los industriales que, incluso la reforma agraria, era un buen negocio para ellos dado que, tanto cuanto significara una redistribución del ingreso, significaría una ampliación del

estrecho mercado interno, una posibilidad de expansión industrial (...) El tercer aspecto que hay que destacar estriba en que se pretendía dar, del modo más rápidamente posible, propiedad a los campesinos, para dar estabilidad social al agro y al sistema político general".¹⁸

La distribución de tierras despertó grandes expectativas en los trabajadores agrícolas. Las huelgas agrarias, las ocupaciones de tierras y la sindicalización fueron signos elocuentes de este proceso. En tal sentido, son muy ilustrativas –como testigos de época– las reflexiones del equipo de la Pastoral Rural de Talca: "A partir de 1966, nos dimos cuenta que los campesinos se comprometían cada vez más con sus deseos de liberación y de justicia, y que así comenzaba un gran movimiento que llamamos de 'despertar campesino'. Desde ese momento comenzamos a través de la Acción Católica Rural a apoyar ese despertar campesino, y así organizamos un plan de reuniones con dirigentes campesinos ayudados con unos folletos sobre el progreso como algo bueno y querido por Dios (...) Después de dos años de Reforma Agraria, los asentados ya tienen conciencia clara de que son un movimiento. Juntos han formado una Cooperativa Regional".¹⁹ Los asentamientos, inaugurados por Frei, fueron el resultado de acuerdos de la CORA, creada por Alessandri en su mini-reforma agraria, con los campesinos y jornaleros.

La reacción de la oligarquía terrateniente –adornada de los apellidos vinosos heredados de la época colonial, además de otros adquiridos con enlaces matrimoniales y dinero fresco– fue tan violenta que desbordó el sentido tradicional del ser profundo chileno, según las normas de comportamiento establecidas por el "Manual de Carreño". Los cortes y bloqueo de caminos, instrumentados por los latifundistas y apoyados por el flamante Partido Nacional– fusión del P. Conservador y Liberal– fueron frecuentes y violentos, rompiendo la propia legalidad que forja-

ron desde la era portaliana. Hasta llegaron a cometer asesinatos, como el del militante demócrata- cristiano Hernán Mery, consumado en abril de 1970 por elementos de Derecha. Cumpliendo labores de funcionario de la CORA (Corporación de Reforma Agraria), Mery se había trasladado a Linares para tomar posesión de un fundo, "acción que fue repelida violentamente por los ex-propietarios del predio hasta ocasionarle la muerte".²⁰

En síntesis, esta reforma agraria, recomendada por la "Alianza para el Progreso", fue importante por el proceso social que abrió en el agro, pero limitada en cuanto a transformar radicalmente la estructura agraria. En el fondo, el reparto de tierras incultivadas tuvo como finalidad promover un desarrollo del capitalismo agrario, tratando de ampliar el mercado interno de la industria de bienes de consumo, además de canalizar el ascenso del movimiento campesino creando una especie de "colchón social" con los pequeños propietarios favorecidos por la entrega de tierras.

Promoción Popular

Fue uno de los puntos sociales prioritarios que se propuso el gobierno de Frei para integrar a su programa de realizaciones a los habitantes de las poblaciones urbano-periféricas pobres, preferentemente, aunque también se irradió a sectores campesinos cercanos a los pueblos rurales. En la implementación de este plan social contó con la colaboración del jesuita belga Roger Vekemans, quien después de su llegada a Chile a fines de la década de 1950, ejerció notoria influencia con la difusión de su "Teoría de la Marginalidad". El Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL), dirigido por Vekemans, colaborador al mismo tiempo de la revista "Mensaje", fue uno de los importantes organismos de in-

vestigación que difundió su pensamiento acuñado en la Universidad de Lovaina.

Para este sacerdote y sociólogo “uno de los principales problemas que afrontaba la democracia en los países subdesarrollados era la existencia de grandes sectores de la población (...) en una situación de marginalidad. Los ‘marginales’ eran los modernos ‘proletarios’, los sin casa, sin educación ni participación. El estado de marginalidad era ‘radical’; es decir, la única forma de cambiar esta situación era mediante la participación de un ‘agente externo’ que le haga tomar conciencia de su estado. Por ello, era necesaria una política de Promoción Popular”.²¹

Para implementar este plan, la DC contó con la ayuda de 820.000 dólares en 1965 acordada por el gobierno de Bélgica, donde los democristianos ejercían notoria influencia. Uno de los epicentros de esta actividad fueron las Juntas de Vecinos, creadas desde la década de 1940-50. Hasta principios de los ‘60, estas organizaciones funcionaban sin formalidades legales ni apoyo fiscal o municipal, preocupadas por el bienestar y adelanto de las poblaciones que habían crecido “como callampas” con la masiva migración campo-ciudad, estimulada por el auge del fenómeno Industrialización-Urbanización. En 1964 se presentó un proyecto de ley para legalizarlas, otorgándoles Personalidad Jurídica con el fin de que tuvieran acceso a recursos económicos fiscales, proyecto que después de una tramitación de cuatro años en el Parlamento fue promulgado por el Presidente Frei el 19 de julio de 1968.

Avances en Derechos Humanos: Vivienda, Salud, Educación

El gobierno de Frei profundizó un proceso que abrió el Frente Popular y continuaron Ibáñez y Jorge Alessandri respecto de los más elementales Derechos Humanos exi-

gidos por los sectores más desposeídos y que, posteriormente, alcanzó una mayor proyección en el gobierno de Salvador de Allende.

El Plan Habitacional constituyó objetivamente una continuidad del practicado por J. Alessandri, especialmente en la construcción de viviendas de nuevo tipo para las capas medias, favorecidas por las Asociaciones de Ahorro y Préstamos. Así, a las casas de las villas de comunas de Santiago, como Ñuñoa, Vitacura, San Miguel, San Bernardo, y otras de Valparaíso, Concepción y Talca construídas bajo la administración Alessandri, se sumaron las nuevas levantadas por el gobierno DC

Frei no sólo aceleró la construcción de este tipo de casas para los sectores medios sino que se preocupó de crear y mejorar viviendas para las poblaciones llamadas “callampas”, en muchos casos presionado por las ocupaciones de terreno de los “sin casa”, particularmente en las comunas de Santiago (Barrancas, La Reina, Conchalí, La Granja) en Concepción (Partal) y en otras provincias. Se estimuló la “operación sitio” y la auto-construcción de vivienda por los propios habitantes. En 1968 se fundó la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), que inició un plan de remodelamiento de Santiago.

El área de la Salud mereció especial atención, fortaleciendo el Servicio Nacional de Salud e invirtiendo parte del presupuesto nacional en la atención médica de los sectores populares. La medicina chilena, prestigiada durante décadas, se situó a la par de las mejores de América Latina, mostrando sus médicos tanto sentido comunitario como capacidad científica, en los numerosos Policlínicos que se abrieron en las zonas barriales. En 1966 se aprobó el Plan Decenal, que definía la Salud como Derecho Básico de los habitantes, desde el nacimiento garantizado por el Estado. Al año siguiente, un Decreto dio a conocer el Formulario Nacional de Medicamentos; en 1968 se dictó una

Ley de Medicina Curativa para los Empleados y en 1969 Programas de Desarrollo Comunitario en Consultorios.

Se aprobaron nuevas leyes laborales, como la Ley N° 16.744 de 1968 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, fusionando la ex-Caja de Accidentes del Trabajo con el Servicio de Seguro Social y estableciendo en el Artículo 3° el Seguro Escolar de Accidentes. También se aprobó la inamovilidad al término del contrato de trabajo, se introdujeron modificaciones a la ley de sindicalización campesina y se fijó en 1965 el salario mínimo campesino. Otra iniciativa importante en el proceso de democratización política del país fue la aprobación en 1969 del voto a los mayores de 18 años, incluido los analfabetos.

Cultura-vida cotidiana

Se aceleró la Reforma Educacional que venían exigiendo las capas medias y el movimiento estudiantil desde hacía décadas. Además de la construcción de nuevas escuelas y Liceos, inclusive vespertinos, se concretó un plan de becas para los estudiantes, especialmente de hogares pobres, un incremento de los desayunos y almuerzos escolares. En lo pedagógico, se implementó un plan para modernizar la enseñanza en función de las necesidades del avance industrial y comercial. Se reemplazaron los 6 años de enseñanza primaria y 6 de secundaria por un ciclo básico de 8 años, rebajando a 4 años la enseñanza media, antesala de la universidad; en todo caso, si no podían ingresar saldrían mejor capacitados para los trabajos calificados; luego se perfeccionaron en Institutos como INACAP. Paralelamente, se ampliaron los cursos de perfeccionamiento para profesores de enseñanza media y primaria, creando organismos especiales como el Centro de Perfeccionamiento de Profesores. "Los Centros de Educación Básica y las Escuelas de Adultos atendieron entre 1965 y

1969 a un total de 350.000 personas, lo que ha permitido reducir la tasa de analfabetismo de un 16,4% en 1964 a un 11%.²²

Al mismo tiempo –de acuerdo a la concepción democristiana– se dio gran respaldo a la Educación particular, creciendo a tal punto que los colegios de enseñanza privada alcanzaron al 25% de la educación que se impartía en el país, con prejuicios que se pretendían imponer a una juventud que había dicho basta a la moralina y los tabúes sexuales.

En relación a la Educación Superior, se produjeron avances muy importantes, muchos de ellos producto de la nueva Reforma Universitaria generada por los estudiantes en la propia Universidad Católica y la Chile.

En otras áreas culturales también se produjeron avances, continuando el proceso de democratización de la Cultura abierto por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Todavía quedan en la memoria de las generaciones de los 40 y 50 gratos recuerdos de los conciertos de la Orquesta Sinfónica, el Coro de la Universidad de Chile, dirigido por el inolvidable Mario Baeza –que se nos acaba de ir– y el Ballet Nacional, orientado por Ernest Uthoff, en los parques, a los cuales asistían miles de personas sentadas en los pastos, sin advertir que ya se hacía difícil respirar normalmente por la contaminación que estaba invadiendo Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades, como producto del proceso de industrialización y de los problemas de la urbanización, con sus secuelas de contaminación sónica y escape de gases por el crecimiento exponencial de automóviles y buses. La población de Santiago había aumentado de 1.390.000 habitantes en 1952 a 2.220.000 en 1960 y a 2.780.000 en 1970.

A través de la metodología de Historia Oral, sabemos del impacto que producían las funciones del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, calificado como

uno de los mejores y permanentes conjuntos teatrales de América Latina, con directores de alta calidad como los dos Pedro (de la Barra y Ortous), con actrices y actorazos de la talla de Rubén Sotoconil, Agustín Siré, Bélgica Castro, Roberto Parada, la Marées González, Franklin Caicedo, y luego la Compañía de los Cuatro de Humberto y el Pepe Duvauchelle, Angela y Orieta Escámez. Y dramaturgos de calidad: Luis Alberto Heiremans, Isidora Aguirre, Jorge Díaz, Eric Wolf y otros.

También se hizo popular la visita al Museo de Bellas Artes para ver no sólo la pintura de los clásicos sino la nuestra, la de Roberto Matta, Camilo Mori, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios, José Venturelli y José Balmes; las esculturas de dos notables mujeres: Lily Garafulic y Marta Colvin. La magia del Cine se amplió a los cines de barrios, con funciones de matiné, tarde y noche, recreándonos con las mejores escenas del rebelde James Dean o de Ives Montand en el "Salario del miedo" y las películas chilenas "El chacal de Nahuel Toro" de Miguel Littin y del criollo adusto Nelson Villagra, como signos del tiempo social que vivíamos, la de Naum Kramarenko "Deja que los perros ladren", "Tres tristes tigres" de Raúl Ruiz, "Valparaíso, mi amor" de Aldo Francia y "Largo Viaje" de Patricio Kaulen, que abieron una nueva era de nuestro cine.

- Las Ferias anuales del Libro en el Parque Forestal, que congregaban al aire libre a cientos de miles de personas de los sectores medios y pobres, constituyendo una felicidad tanto para ellos como para los escritores, que de ese modo podían dar a un vasto público y recibir de él las mejores energías para seguir creando; todos viendo en el atardecer del Mapocho los mejores conjuntos artísticos. Allí se hizo popular el canto de Margot Loyola y de Violeta Parra, que dio su última despedida en su carpa de Plaza Almagro en pleno gobierno de la DC. Las peñas prolifera-

ron en esta fase de auge de lo mejor del folklore chileno, con letras que rememoraban las angustias y amores de nuestro pueblo, rebasando el mero lamento campesino de los tiempos huasos del patrón de fundo. La cueca invadió locales y espacios a cielo abierto, generalizándose su aprendizaje por las nuevas generaciones, abiertas a lo mejor del pasado y de un presente con el cual vibraban.

Un apreciable número de lectores gozaba y se angustiaba con las novelas, como "Hijo de Ladrón" de Manuel Rojas, "Coronación" de José Donoso, "Eloy" de Carlos Droguet, "Según el orden del tiempo" de José Agustín Palazuelos, "El peso de la noche" de Jorge Edwards, "Los últimos días" de Fernando Rivas, "A la sombra de los días" de Guillermo Atías, "La fiesta del rey Acab" y "Frecuencia modulada" de Enrique Lafourcade, "Caballo de copas", "Amerika, Amérika, Amérika" y "Mañana los guerreros" de Fernando Alegría y otras de esa prolífica generación de novelistas chilenos, contemporáneos de poetas nuevos del estilo de Jorge Narváez, Jaime Quezada, Jorge Tellier, Miguel Arteche, Efraín Barquero, Oscar Hahn, Mahfud Massis, los dos Gonzalos-Rojas y Millán. Muchos de ellos apasionados nerudistas o rokhistas o parristas, de esos grandes para quienes, como decía Enrique Lhin, la literatura "no es ajena al pueblo, no pertenece a una élite, habla claro u oscuro, tiene su propia historia".²³

Entre otros progresos de la relación cultura-vida cotidiana, que hace y constituye historia –a pesar de la resistencia de los historiadores tradicionales a considerarlas como fuentes– cabe destacar la revolución desencadenada por el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, que facilitó relaciones más libres y relativamente más seguras; revolución sobre todo para la mujer que pudo explorar toda su capacidad de goce, placer sexual y no mera reproducción. Lo que antes había sido alcanzado a medias por un sector minoritario de mujeres, en la década de los '60 co-

menzó a generalizarse, fenómeno aceptado por sectores democristianos y, con reservas, por su gobierno.

La insurgencia de los Movimientos Sociales

La irrupción de los antiguos y nuevos movimientos se vio estimulada no sólo por la consolidación de la Revolución Cubana sino también por el Mayo francés del '68, el ascenso de los trabajadores y estudiantes argentinos, expresado en el "cordobazo" y "chaqueñazo" de 1969, las cuatro huelgas generales de Uruguay (1967-69), respaldadas por los Tupamaros, las luchas de la Central Obrera Boliviana, las movilizaciones populares contra la visita de Rockefeller a su "patio trasero" y por el ejemplo del Che, caído en combate en el octubre rojinegro de 1967.

Los movimientos sociales de Chile vislumbraron entonces la posibilidad de avanzar más allá de lo prometido, para concretar las expectativas que despertó el programa de la DC.

El **campesinado**, hambriento de tierras, que se había puesto de pie en la década de 1930, apoyado por la Liga de los Campesinos Pobres; frenado por los acuerdos del Frente Popular con los agricultores, que en 1940 suspendió por cinco años la discusión de un proyecto de sindicalización campesina, formulado limitadamente en 1947 por la Ley N° 8811; reanimado por la convocatoria de la CUT, presidida por Clotario Blest, al primer Congreso Nacional Campesino de 1960 y la pronta fundación de la Federación Campesina e Indígena en 1961, y por sus luchas durante el gobierno de Jorge Alessandri, bajo el lema "Tierra o muerte", retomó su marcha bajo Frei. Al calor de la Revolución Cubana y tomándose en serio la Reforma Agraria DC, se lanzó a la toma de tierras y a la presentación de pliegos de peticiones. Entre 1965 y 1966 hubo más de 500 huelgas; en 31 de ellas hubo toma de fundos, de las

cuales 10 eran integradas por mapuches que deseaban recuperar sus tierras de antaño.

Las huelgas más importantes fueron las de Molina en 1967 y San Miguel (Aconcagua) en junio de 1968, ocupando los miembros del Sindicato Alianza el fundo de Ruperto Toro Bayle y resistiendo la represión del Grupo Móvil, nueva fuerza de Carabineros; lucha que constituyó un jalón importante en la unidad obrero-campesina-estudiantil por la amplia solidaridad del movimiento estudiantil, incluida la Juventud demócrata cristiana. Paralelamente, el proceso de sindicalización campesina fue acelerado; de un par de miles de trabajadores agrícolas organizados en 24 sindicatos en 1964 con 1.658 afiliados, se llegó en 1969 a 394 sindicatos con 103.644 asociados.

Los jornaleros agrícolas comprendieron más rápidamente que los obreros fabriles la necesidad de luchar unificadamente por medio de la presentación de Pliegos Unicos por provincia, que tuvo uno de sus mayores momentos de auge en la Huelga Nacional de mayo de 1969, la huelga general más importante hasta ese momento de la historia del campesinado chileno. Las ocupaciones se generalizaron en 1969 con la toma de 25 fundos en el Norte Chico, 44 en Melipilla y más de 40 en Curicó. La combatividad se expresó también en el apresamiento de patronos, en calidad de rehenes, para enfrentar la represión, además de barricadas y cortes de líneas telegráficas y telefónicas.

Al año y medio de gobierno DC, los trabajadores -tanto los que habían votado por Allende como los que apoyaron a Frei- comenzaron a soldar su fisura político-electoral y a unirse en la acción por sus reivindicaciones inmediatas, fenómeno divulgado masivamente por el popular diario "El Clarín" que -con la dirección del discutido Darío Saint Marie y Alberto Gamboa, acompañados en la redacción por Oscar Waiss, Agapito (Hernán Millas) y

Sherlock Holmes (Raúl Morales Alvarez)– tenía un tiraje de 150.000 ejemplares– superior, menos el domingo, a “El Mercurio”.

Desde principios de 1966, se produjo una lenta reanimación del **proletariado urbano y minero** y una radicalización de las **capas medias asalariadas**, expresada en las huelgas de los profesores y empleados bancarios, proceso global que se acentuó en 1967. De 723 huelgas en 1965 se pasó a 1.142 en 1967, luchas que culminaron en la Huelga General del 23 de noviembre de 1967 contra el proyecto de reajustes aprobado para el año siguiente, que al ser reprimida dejó un saldo de 5 muertos y más de un centenar de heridos. El ascenso continuó en 1968, con los Paros de los textiles, de los metalúrgicos de Huachipato y, sobre todo, con la huelga con ocupación de la fábrica de Saba, en la que también se hizo presente la solidaridad estudiantil y la naciente Iglesia Joven cuando fueron detenidos durante nueve meses 34 obreros acusados de incendiar la empresa. Ese año, sectores de Trabajadores del Estado declararon huelgas en Correos y Telégrafos, que impactaron por su decisión y combatividad.

Para dar una idea aproximada de la magnitud de estas luchas, reproducimos un cuadro comparativo de 1970 emitido por la Dirección General del Trabajo:

	1951-54	1967	1968 (agosto)
Días hombre en huelga legal	984.482	1.289.000	3.024.000
Días hombre en huelga ilegal	443.245	700.000	931.000

El proceso de ascenso de la clase trabajadora prosiguió en 1969 con las huelgas de Mademsa, Madeco, Fensa y ocupaciones de las fábricas Metalpar, Famela y Somela. De mayo a junio se produjo el momento álgido con la huel-

ga de la Marina Mercante Nacional, de INDAP, ferroviarios y empleados públicos, representados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, además de la Huelga General Campesina, ya mencionada.

De acuerdo a un estudio de Clotario Blest, al 31 de diciembre de 1968 existían 2.420.000 trabajadores, entre obreros y empleados, de los cuales 472.481, estaban sindicalizados, cifra que se eleva al sumar los 250.000 empleados públicos, en un 90% asociados a sus Federaciones

En total: 19% de sindicalizados en el sector privado, que sumados al sector público arrojaba un porcentaje de sindicalización de la fuerza de trabajo del orden del 25%, cifra bastante elevada si se la compara con cualquier país latinoamericano e inclusive con algunos europeos.²⁴

Del 20 al 24 de noviembre se realizó el V Congreso Nacional de la CUT, que consolidó la unidad del movimiento sindical, significando una derrota de la línea de “paralelismo sindical” promovida por la Democracia Cristiana. En la Comisión N°1, los delegados socialistas, del MIR e independientes rechazaron la Cuenta de la Dirección Nacional saliente, presidida por Luis Figueroa, del PC. No obstante, se aprobó la “vía de desarrollo no capitalista”, que plantearon los delegados del PC y de la DC. La votación por una nueva Directiva, que expresaba el número de votos por delegado de cada sindicato, arrojó el siguiente resultado, PC: 134.250, PS: 63.818, DC: 30.165, P.Radical: 23.825, Unión Socialista Popular: 11.511 y MIR: 4.667 votos. En la noche de inauguración de este Congreso, funcionarios de Investigaciones detuvieron a Patricio Figueroa y Norman Gamboa, delegado por la Federación de Trabajadores de la Salud, miembros del equipo de apoyo a los delegados sindicales del MIR.

Los **pobladores** “sin casa” hicieron más de cien “tomas”, según Duque y Pastrana²⁵ en Santiago (comunales de Barranca, La Reina, Conchalí, La Granja), en Concepción

(Partal, San Miguel) y en Puerto Montt, donde las fuerzas represivas consumaron una masacre. Comenzó a generalizarse el nombre de “Campamentos”, algunos levantados en relación a la “Operación Sitio”, terminología usada por la CORVI. Enero de 1970 fue el comienzo de un “verano caliente”: el día 2 cerca de 600 familias ocuparon terrenos adyacentes a la población La Bandera, siendo detenido el diputado Mario Palestro. En ese lugar, se realizó el 27 de marzo de 1970 el Congreso de los Pobladores Sin Casa con la asistencia de 39 Comités:

Sectores de pobladores lograron organizar embriones de “milicias populares” en el Campamento “Lenin” de Talcahuano y en Santiago los campamentos “26 de enero” y Población Santa Adriana, donde una mujer tuvo actuación sobresaliente, Herminia Concha, una de las primeras mujeres dirigentes del movimiento de pobladores. El 1° de septiembre de 1966, los pobladores de Santa Adriana –informaba el periódico El Rebelde– “organizaron un desfile por el centro de Santiago, en el cual chocaron violentamente con los Carabineros. El 3 de septiembre de 1966, cuando Frei recorría las poblaciones de La Cisterna se encontró con un cartel que decía: ‘Por la Razón y la Fuerza, la chacra Santa Elena será nuestra’. Frei mostró su enojo diciendo que no aceptaba presiones, comprometiéndose a solucionar el problema en 3 días”.²⁶

La dirigencia del PDC, a contracorriente de su Juventud, trató de contener este ascenso popular empleando diversas tácticas. En el movimiento de los trabajadores organizados trató de implementar el llamado “paralelismo sindical”, política que consistía en promover en cada empresa o lugar de trabajo la creación de tantos sindicatos como corrientes ideológicas existieran. Con esta supuesta defensa de la libertad sindical, se trataba de dividir no sólo los sindicatos por empresa sino también las Federaciones y la propia CUT, línea de acción propiciada por el Minis-

tro del Trabajo, William Thayer Ojeda. El Presidente de la República llegó a presidir, durante la celebración del 1° de Mayo, actos paralelos a los convocados por la CUT. Aunque no se logró ese objetivo en el sector urbano, la táctica divisionista se consumó en el agro con la creación de varias centrales sindicales, como “Triunfo Campesino”, “Libertad” y “Provincias Agrarias Unidas”, paralelas a la Federación Campesina e Indígena de la CUT.

Similar procedimiento se aplicó en las Juntas de Vecinos, dividiéndolas por razones ideológicas –las controladas por la DC o la Izquierda– para cuyos fines se usó la Promoción Popular, instalación de alcantarillados, agua potable, luz y casas prefabricadas, tan anheladas por los pobladores de las zonas urbano-periféricas pobres.

La represión a las movilizaciones fue desdibujando la cara populista de la DC, sobre todo por la masacre de Puerto Montt de 1969, en Pampa Irigoín, donde fueron asesinados 10 pobladores, que demandaban su derecho a tener vivienda propia. También cayeron el 11 de marzo de 1966, seis mineros y dos mujeres en la huelga de la mina El Salvador, en solidaridad con sus compañeros de El Teniente; entonces, el Ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, “ordenó el traslado de efectivos militares para tomar el control del mineral (...) en la mañana del 11 de marzo los trabajadores recibieron la orden de desalojar su local sindical, a lo que éstos respondieron con una negativa. En ese momento se encontraban en el interior muchos obreros, sus mujeres y numerosos niños (...) Las tropas emplazaron sus armas en la plaza apuntando al sindicato y abrieron fuego (...) Dos mujeres y seis trabajadores cayeron asesinados y otros 37 recibieron heridas”²⁷

Una nueva masacre se consumó el 23 de noviembre de 1967 durante la huelga general convocada por la CUT para protestar contra el plan salarial. El gobierno entregó prácticamente la situación a los militares durante 24 ho-

ras. El Ejército y la Aviación atacaron por tierra y aire a una población desarmada, matando a 4 trabajadores y un niño de ocho años, según cifras oficiales, que no siempre registran la verdad cuando se trata de represiones masivas.

Asimismo, se ordenó reprimir la huelga de los obreros del Cuero y Calzado y la marcha de miles de campesinos de Talca y Curicó hacia Santiago, además de la intervención militar en el conflicto huelguístico de Correos y Telégrafo. Paralelamente, se sentaba un precedente de censura a las ideas políticas al aprobarse el desafuero del senador socialista Carlos Altamirano, después de haber sido encarcelado el 25 de marzo de 1968. Poco antes, en 1965, la joven luchadora social, Magaly Honorato, fue incomunicada en la cárcel de mujeres y hostilizada hasta que tomó la extrema resolución de suicidarse.

El **movimiento de mujeres** comenzó a releer la teoría feminista, retomando el protagonismo social del MEMCH –orientado por Elena Caffarena, Olga Poblete, Graciela Mandujano y otras defensoras de su género en las décadas del '30 y '40– a pesar de que la ideología neotomista de la DC en el gobierno bloqueaba el avance antipatriarcal, mediatizando la conciencia de género y de clase con políticas paternalistas en las Juntas de Vecinos, haciendo un frente único con la Derecha contra el divorcio, además de perpetuar en los hechos la opresión machista y las múltiples manifestaciones de discriminación hacia la mujer, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, temas que serán profundizados por Sandra Palestro en un capítulo especial de este libro.

Esta concepción de la Democracia Cristiana acerca del papel de la mujer estaba inspirada en la tradicional filosofía de Tomás de Aquino y los neotomistas como Berdiaeff, quien llegó a sostener: “El principio masculino debe dominar al principio femenino, pero no ser éste esclavo. No

es la mujer emancipada semejante al hombre, sino el eterno femenino el que tendrá un gran papel que desempeñar en el período futuro de la sociedad”.²⁸ En el fondo, “el eterno femenino” servía para adornar la eterna opresión de la mitad de la población mundial, en la versión de Berdiaeff sobre la “nueva cristiandad” por venir. Posteriormente, el ideólogo más importante del socialcristianismo, Jacques Maritain, fue más enfático: “la mujer casada no desempeña las mismas funciones económicas que el hombre sino que cuida del hogar doméstico (...) Suponiendo que en el orden de las relaciones económicas la mujer casada fuera alimentada por el hombre, no perdería por esto el sentido de la libertad de persona, que además debería llevar consigo un pleno reconocimiento jurídico para realizar aquella función que insiste la Biblia, o sea ayudar al hombre.”²⁹

Fundamentada en estos principios, la Declaración de Principios del Partido Demócrata Cristiano (1957), estableció en el acápite IV un concepto patriarcal de la “dignificación de la mujer”, además de oponerse al divorcio y al control de la natalidad, como lo demostró en su gestión gubernamental.

El movimiento estudiantil

Desde la Reforma Universitaria chilena de la década de 1920, el estudiantado fue logrando conquistas, sobre todo en 1932 y 1944, pero quedando reducido al activismo de los militantes de partidos políticos hasta la década de 1960, en que los nuevos ideales trajeron aire fresco y entusiasmo con el lema del mayo francés del '68: “prohibido prohibir”. El número de estudiantes universitarios había aumentado de cerca de 10.000 en 1952 a 42.000 en 1965.

La nueva Reforma Universitaria, iniciada en junio de 1967 en Valparaíso, de inmediato tuvo una explosión

casi insólita en la Universidad Católica, al exigir los estudiantes por plebiscito la salida del obispo Alfredo Silva Santiago, al mismo tiempo que ocupaban el recinto de la Universidad el 11 de agosto. Para tratar de amortiguar esta crisis, que se producía en un país gobernado por la Democracia Cristiana, el Vaticano nombró como mediador al arzobispo Raúl Silva Henríquez quien, de común acuerdo con los estudiantes, liderados por Miguel Angel Solar, designó nuevo rector a Fernando Castillo Velasco.

El movimiento se propagó a la Universidad de Concepción. Los estudiantes, liderados por Luciano Cruz Aguayo, conquistaron un 25% de representación en las decisiones de su comunidad y en la Universidad de Chile un 20%, junto con el 10% para los empleados administrativos. Nuevos programas de estudio fueron aprobados en las Asambleas docente-estudiantiles, como también la apertura de Concursos y Cátedras paralelas, modificación del régimen de evaluación, asistencia libre, aumento de Seminarios con un cambio de metodología por parte de los profesores para permitir una participación activa del alumnado, además de la organización docente e investigativa en Departamentos con relativa autonomía.³⁰

Se planteó la autonomía territorial, aspiración largamente anhelada que se puso a la orden del día en 1968, cuando el recién creado Grupo Móvil de Carabineros entró a la Universidad de Chile, especialmente al Pedagógico, a reprimir una movilización de estudiantes.

Otro paso importante fue la apertura de las universidades a los trabajadores, con horarios vespertinos para facilitar su asistencia. El área de Difusión o Extensión se irradió a los sectores populares mediante conferencias y exposiciones de arte, canto y danza. Sin embargo, sectores de estudiantes confundieron los Centros de alumnos con

lugares de micropoder de sus respectivos partidos, tratando de imponer los llamados "cursos de concientización", llegando a plantear sectariamente el concepto de Universidad Militante para todos, olvidándose de la sugerencia del líder estudiantil cubano de 1923, Julio Antonio Mella: para hacer la Reforma Universitaria integral, primero hay que hacer la revolución social.

El estudiantado amplió su radio de acción a los sectores populares, consolidando su solidaridad con los conflictos de trabajadores y pobladores, en pos de la unidad obrero-campesina-estudiantil. En la madrugada del 11 de agosto de 1968, miembros del flamante Movimiento Iglesia Joven, mayoritariamente universitarios, se tomaron la Catedral de Santiago, acompañados por sacerdotes progresistas y por Clotario Blest, pidiendo un mayor acercamiento de la Iglesia en los problemas reales de los oprimidos.

La Democracia Cristiana, luego de haber ganado la mayoría de las Federaciones Universitarias, fue descendiendo en las votaciones de los Centros de Alumnos y, finalmente, perdiendo las elecciones de la FECH en 1969 ante el avance de la izquierda socialista, miristas, comunistas y los rebeldes democristianos disconformes con la política de su partido.

El descenso electoral de la DC

El análisis comparativo de las elecciones parlamentarias, especialmente de diputados, muestra que el Partido Demócrata Cristiano tuvo una ostensible baja de un 42,3% en 1965 a un 29,8% en 1969, como puede apreciarse en el siguiente cuadro comparativo que hemos confeccionado en base a los datos de la Dirección del Registro Electoral:

Partidos	1965 (porcentaje)	1969 (porcentaje)
PDC	42,3	29,8
Comunista	12,4	16,6
Radical	13,3	12,9
Socialista	10,3	12,8
Conservador	5,2	
Liberal	7,3	
Nacional		20,0
Democrático Nacional	3,2	1,9
Unión Socialista Popular	2,2	
Nulos y Blancos	3,0	4,2
Abstención	19,4	26,4

Cabe aclarar que los votos de los Partidos Conservador y Liberal en 1969 se canalizaron en el Partido Nacional, que nació después de 1965; y que la Unión Socialista Popular (USOPO) recién se fundó en 1967, luego de la escisión de Raúl Ampuero, Tomás Chadwick, Ramón Silva Ulloa, Fermín Fierro, Eduardo Osorio y otros. La Derecha sufrió en 1965 la peor derrota electoral desde 1938.

La procesión por dentro

La política gubernamental, especialmente las concesiones a sectores de la Derecha y a los inversionistas norteamericanos y europeos y, sobre todo, la reacción autoritaria y represiva ante las movilizaciones de los Movimientos Sociales, fueron gestando tendencias al interior de la DC, que se transformaron en fracciones casi irreconciliables. Después de los primeros meses de gobierno, hubo luchas por la dirección del partido entre la tendencia oficialista, encabezada por Patricio Aylwin y William Thayer Arteaga –reforzados por la segunda generación, En-

rique Krauss y Andrés Zaldívar– y las pujantes tendencias críticas en ascenso. Aylwin fue elegido presidente del partido en 1965 con 220 votos contra 188 del joven diputado Alberto Jerez; pero dos años después fue reemplazado por Rafael Agustín Gumucio al aprobarse en junio de 1967 la estrategia de desarrollo por la “vía no capitalista”.

En enero de 1968, al discutirse en la Junta Nacional las relaciones del Partido con el Gobierno, asumió la presidencia partidaria Jaime Castillo Velasco, quien pronto dio paso a Renán Fuentealba, crítico de ciertas políticas de la administración Frei.³¹ Tomic había advertido en 1965 que de no cumplirse el programa de gobierno “la Revolución en Libertad quedaría reducida a la cháchara inofensiva de un reformismo emasculado”.³²

La corriente llamada “tercerista”, integrada en su mayoría por jóvenes universitarios, se nucleaba en torno a Luis Maira, Pedro Felipe Ramírez, Antonio Cavalla, José Miguel Insulza y Juan Enrique Miquel, acompañados de militantes más experimentados, como Bosco Parra y Jacques Chonchol. La tendencia llamada “rebelde” era orientada por Rafael Agustín Gumucio, Julio Silva Solar, Alberto Jerez y Vicente Sota, respaldados por la juventud, principalmente Rodrigo Ambrosio, Enrique Correa y Juan Enrique Vega. En ese entonces, la militancia activa de la DC fluctuaba entre 60 y 70 mil personas que tenían influencia en los movimientos sociales.

En 1969, un sector importante de militantes, orientados por Rodrigo Ambrosio, secretario general de la Juventud, el diputado Alberto Jerez, Julio Silva Solar, Jacques Chonchol y otros destacados dirigentes políticos y sociales, resolvieron separarse del partido, levantando una plataforma política claramente de izquierda, como expresión del descontento de las bases que paulatinamente fueron agudizando la contradicción que se arrastraba por años entre la dirección y las bases. La Juventud universitaria

exigía mayor compromiso con los explotados y oprimidos y una política más autónoma ante los centros del capital monopólico. La base obrera y campesina aspiraba a una lucha menos mediatizada contra los patrones. La ruptura dio origen a un partido, el MAPU, que pronto se definió como marxista. Dos años antes se había desprendido de la DC un pequeño grupo, que luego se denominó Camilo Torres, en homenaje al cura guerrillero colombiano de principios de la década de 1960, conmovido por el triunfo de la Revolución Cubana.

La política de los partidos de izquierda: el MIR

–Quiero señalar algunos momentos de la izquierda que conocí por dentro, en mi carácter ahora de investigador-testigo de época.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue la culminación de un proceso de unificación de 8 organizaciones revolucionarias, estimulado por Clotario Blest, fundador en 1961 del Movimiento “3 de Noviembre” (M3N) y del Movimiento de Fuerzas Revolucionarias en 1962, integrado por organizaciones de larga praxis junto a los trabajadores –como el grupo anarquista Libertario “7 de julio”, el Movimiento Social Progresista, liderado por Julio Stuardo, escindido del P. Radical, el Movimiento de Resistencia Antiimperialista (MRA), orientado por Luis Reinoso, ex-secretario de organización del PC y expulsado por “desviaciones militaristas”, la revista “Polémica”, dirigida por Tito Stefoni, la Oposición Socialista de Izquierda (OSI), de Gonzalo Villalón y Oscar Waiss, y el Partido Obrero Revolucionario (POR), que había levantado a Humberto Valenzuela como candidato obrero a la presidencia en 1942, obteniendo 5.170 votos y que llegó a elegir un Dirigente Nacional de la Central Unica de Trabajadores, Luis Vitale, para el período 1958-62.

Estas organizaciones se fueron uniendo hasta quedar dos en 1964: a) el Partido Socialista Popular –integrado por la mayoría de los Comités Regionales, escindidos del PS, de Talca y Coquimbo y su principal dirigente Mario Lobos; por jóvenes en ruptura con la Juventud Socialista, como Dantón Chelén Rojas; por un sector de pobladores, liderado por Víctor Toro y Herminia Concha; una tendencia que provenía del Movimiento de Independientes de Izquierda (MIDA), orientada por el Dr. Enrique Reyes; y b) Vanguardia Revolucionaria Marxista, a la cual se habían incorporado “reinosistas”, como Martín Salas, el grupo trotskista PRT, encabezado por Chipó Cereceda, ex-miembros de la Juventud Comunista, como Gabriel Smirnow, escindidos del grupo pro-chino “Espartaco” que habían constituido el MRC en 1963 y el ERTE, donde militaba Miguel Enríquez y Bautista van Schouwen, escindidos de la Juventud Socialista.

Los militantes que provenían del PS, PC, del trotskismo, de la Juventud Radical Revolucionaria y algunos anarquistas, tenían importantes experiencias de lucha social, además de Clotario Blest, 9 años presidente de la CUT. Su presencia en el Congreso de Fundación del MIR (15 de agosto 1965) y su elección en un cargo del Comité Central demuestran que es equivocada la versión –difundida en el exilio, después de la muerte de Miguel Enríquez– que el MIR fue creado por un grupo de estudiantes de Concepción, pues a los 15 días de su fundación el MIR llevó 32 delegados al IV Congreso Nacional de la CUT, presentando una lista encabezada por Humberto Valenzuela, Dirigente Nacional de los Obreros Municipales y de la CUT provincial Santiago.

También es errónea la apreciación de que el MIR surgió como un grupo foquista, con jóvenes sin teoría y armados solamente por anhelos de redención social. Su programa fundacional estableció que luchaba por el carácter

socialista, permanente e ininterrumpido de la revolución, rechazando la teoría de la "revolución por etapas", propiciada por el PC, además de puntos coyunturales para los diferentes movimientos sociales, que permitirían avanzar en la tarea central: actividad militante en las organizaciones de la clase trabajadora. Por consiguiente, fue y es falso decir –como lo ha propalado la prensa burguesa con el fin de justificar el golpe militar– que el MIR se dedicó, desde su nacimiento, al terrorismo y a operaciones foquistas armadas al margen de las luchas de los explotados, como era la práctica general de las corrientes autodenominadas castristas en los primeros años de la década de 1960, que no comprendieron a cabalidad los aspectos tácticos y estratégicos de la Revolución de los barbudos de Fidel.

Desde 1965 hasta 1967, el MIR atravesó por un período de estructuración orgánica por la base, de homogeneización política y de crecimiento en sectores populares. En la Federación de Obreros Estucadores fue elegido Juan Ramos, en la Federación de Trabajadores de la Salud los dirigentes Norman Gamboa y Héctor Villalón, en la zona del Carbón importantes militantes miristas, en la Federación de Obreros de la Construcción, Luis Concha. En el movimiento estudiantil, el MIR creció rápidamente, sobre todo en la Universidad de Concepción donde fue elegido presidente de la FEC en 1967 Luciano Cruz Aguayo, que pronto se convirtió en el principal dirigente de masas del MIR; también aumentó la votación del MIR en Santiago en la Federación de Estudiantes de Chile, obteniendo 1.260 votos en las elecciones de 1968, sacando por primera vez un vocal en la FECH, y primeras mayorías en Sociología, Psicología y en el Centro de Medicina en alianza con el PS. En Derecho, se destacó Alvaro Rodas, quien también era dirigente de los Empleados de Contraloría.

La libre expresión de las ideas y la práctica diaria de la democracia interna, garantizada por su primer secreta-

rio general, Enrique Sepúlveda, permitieron ir decantando las posiciones políticas expresadas en el periódico El Rebelde y la revista teórica Estrategia, aunque se retardaba la adopción de medidas prácticas. La persistencia de estas debilidades obligó a un cambio de Directiva en el III Congreso (diciembre 1967), siendo elegido Miguel Enríquez, apoyado por Bautista van Schouwen, Luciano Cruz y muchos delegados nuevos y, en particular, por los que provenían del trotskismo, hecho demostrado en la no aceptación a la secretaría general de Luis Vitale, postulado en dicho congreso por el encargado del aparato militar que actuaba con el seudónimo de Zapata.

El MIR no sólo se constituyó en la primera fuerza estudiantil en la Universidad de Concepción y con avances en la Universidad de Chile y otras, sino que fue creciendo en sectores de la clase trabajadora y de las poblaciones más pobres, participando con una importante cuota de delegados en el V Congreso Nacional de la CUT, efectuado en noviembre de 1968, y en los Encuentros de Pobladores, en brazos del ascenso popular de aquel período. Su militancia, que sobrepasaba los 2.000 miembros, era compuesta mayoritariamente por jóvenes no sólo estudiantes sino también obreros, empleados y profesionales, pobladores y algunos campesinos, junto a la generación anterior experimentada en la lucha social.

Sin embargo, las posibilidades de crecimiento se vieron interrumpidas momentáneamente por la premura de iniciar acciones, como la expropiación de Bancos con el fin de obtener fondos para la lucha armada, precisamente en momentos que prendía en amplios sectores populares la candidatura de Salvador Allende. El secuestro por un comando mirista del periodista Osses, en mayo de 1969, fue el pretexto utilizado por el gobierno DC para desencadenar la persecución del MIR, que obligó a su dirección a pasar a la clandestinidad.

Entonces, surgieron diferencias que se esperaban superar en el IV Congreso Nacional que debía realizarse el 20 de agosto de 1969, pero que nunca se realizó. Sorpresivamente en una reunión del Comité Central, efectuada el 27 de julio de ese año, el sector mayoritario, integrado por 9 miembros, planteó la división, a la cual se opuso la minoría que sumaba 6 representantes, varios de ellos tan jóvenes como los de la mayoría, señalando que constituía un grave error dividirse sin existir grandes diferencias políticas y que lo importante era apoyar, aunque críticamente, la candidatura popular de Salvador Allende. La tendencia mayoritaria insistió en “depurar” el partido de dirigentes que se oponían a las acciones armadas, a pesar de que la minoría no había renunciado a ellas siempre que estuvieran ligadas a las luchas de los oprimidos, aclarando que las primeras armas que tuvo el MIR provinieron de una expropiación a una armería que hizo un comando trotskista, encabezado por “Mondiola”. La mayoría se opuso a participar en el proceso electoral, levantando la consigna del boicot: “no a las elecciones”. En fin, no haber apoyado a Salvador Allende fue, a mi juicio, el principal error político cometido por el MIR en toda su historia.

De la oposición parlamentaria a la conspiración

Los partidos Conservador y Liberal pasaron de una política expectante, por haber apoyado a Frei, a una confrontacional: golpear a las puertas de los cuarteles.

Un sector del Partido Radical se pasó a la Derecha cuando en la Convención Nacional de 1965 el sector de centro-izquierda, encabezado por Luis Bossay, derrotó a Julio Durán, quien se fue del partido junto con Raúl Rettig, Pedro Enrique Alfonso, Edwin Lathrop y otros militantes de larga y destacada militancia política, que más tarde for-

maron el partido Democracia Radical con otros expulsados en 1969: Angel Faivovich, Germán Picó, Jaime Tormo, Campos, Mercado y Señoret.³³

Durante los primeros años, se hizo una campaña, con visos de terrorismo ideológico, basada en especulaciones, destinada a alertar a los empresarios acerca de proyectos gubernamentales que podrían cuestionar el derecho de propiedad, como también la posibilidad de que se implantaran elevados impuestos al capital.

Los parlamentarios de los partidos Conservador y Liberal se opusieron a que el Gobierno interviniera en las denuncias sobre hechos ocurridos en la Colonia Dignidad, como la fuga del colono Wolfgang Müller, perseguido por los líderes nazis por haber sido el primero en denunciar prácticas brutales de homosexualismo con menores y secuestro de personas y homicidios. Por otra parte, nunca pudo comprobarse la intervención de la Derecha en el “Plan Camelot”, denunciado por el sociólogo Hugo Nuttini, chileno nacionalizado norteamericano, que tenía como objetivo obtener información sobre supuestos actos terroristas de la izquierda. Como señaló Dooner, en libro citado, p. 71: “Se descubrió que el proyecto, llamado Plan Camelot era patrocinado por el Pentágono”.

“El Mercurio” empezó apoyando con reservas al gobierno, pero fue gradualmente quitándole el respaldo, sobre todo después de la promulgación de la ley de reforma agraria y el aumento de la tributación: “En los últimos 3 años se produjo el mayor aumento tributario de todo el período analizado desde 1940. Los impuestos pasaron de 3.460 millones de escudos a 5.979. Se concluye así que de 1964 a 1967 la carga tributaria ha crecido a una velocidad de 222% más rápido que el ingreso”.³⁴ La SOFOFA sobredimensionó este comentario: “una carga tributaria asfixiante”,³⁵ manifestando además críticas a la política salarial de Frei y participando en actos públicos de crítica al go-

bierno, al igual que la Sociedad Nacional de Agricultura, exigiendo la libertad de precios.

Entonces, la Derecha empezó a conspirar, a tal punto que el Ministro del Interior, Bernardo Leighton, tuvo que ordenar el encarcelamiento y proceso de Víctor García Garcena, presidente del recién constituido Partido Nacional, acaudillado por Sergio Onofre Jarpa e integrado por los partidarios de Jorge Prat de tendencia autoritaria y corporativista de corte mussoliniano.

En entrevista a Jarpa, un periodista preguntó: "ustedes fueron acusados de golpistas cuando Leighton detuvo a su directiva. Varias veces después se ha insistido en que hay ruido de sables", a lo cual Jarpa respondió, según su versión: "La acusación de golpismo hecha al Partido Nacional fue una farsa montada por el ex-ministro señor Leighton".³⁶ A fines del gobierno DC, Jarpa llegó a sostener que "Chile vive una etapa de decadencia".³⁷

El grupo "Fiducia", que en 1967 se denominó Sociedad chilena de Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad, se opuso frontalmente a la Reforma Agraria por intermedio de dos publicaciones: "Manifiesto a la Nación chilena" y "¿Es lícito a los católicos discordar del proyecto de Reforma Agraria del Presidente Frei?", calificándolo de "dirigismo estatista" y de ser "persecutorio, socialista y confiscatorio", contrario a la "ley natural y la ley divina".³⁸

La Derecha acusó a Frei de abrirle el camino al comunismo, llegando a calificarlo de "Kerensky chileno", por el papel que este dirigente ruso jugó entre febrero y octubre de 1917, antes del estallido de la Revolución de los Soviets encabezada por el partido bolchevique de Lenin y Trotsky. No por azar, la Derecha se encargó de distribuir en Chile el libro titulado *Frei, el Kerensky chileno* del brasileno Fabio Vidigal Xabier Da Silveira, cuyo original en portugués fue: *Frei, o Kerensky chileno*. El título citado anteriormente se lo puso la editorial argentina Cruzada, cuyas

ediciones de la 1ª en 1967 a la 5ª en junio de 1968 sumaron 23.000 ejemplares, muchos de los cuales fueron distribuidos en Chile por los canales controlados por la Derecha.

En ese momento, era "vox populi" que la derecha estaba mirando a los cuarteles por intermedio del "marqués Bulnes", que no vacilaba en proclamar "el derecho" al golpe de Estado. Esta ideología se había nutrido de las ideas totalitarias de González von Marées, el estanquero Jorge Prat y Ramón Callís del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista. Un sector tuvo en 1963 la intención de presentar a Jorge Prat Echaurren como candidato a la presidencia de la República, basado en un "Estado nuevo", que rememoraba la tradición portaliana. Retirada esa candidatura, Jorge Prat volvió a presentarse, sin éxito, como candidato a Senador, junto con Hugo Gálvez, en las elecciones parlamentarias de 1965.

En agosto de 1966, el fascista Sergio Miranda Carrington en un acto en el Club Audax Italiano dijo en tono apocalíptico: "Ha llegado la hora de la acción", coreado por un centenar de asistentes que de pie hicieron el saludo nazi. Al año siguiente se fundó el Partido Nacional Socialista Obrero, dirigido por Franz Pfeiffer, nazi confeso, autonombrado "canciller del gobierno de Danzing en el exilio".³⁹ Ese año, se creó en Valparaíso el grupo ultraconservador denominado "Tizona", orientado por Gonzalo Santa María y Juan Antonio Widow, cuyo hermano Andrés estuvo, posteriormente, implicado en el asesinato del general Schneider. Asimismo, hubo un remozamiento de la Derecha con la insurgencia del Movimiento Gremialista en la Universidad Católica, liderado por Jaime Guzmán, después de la crisis en 1967.

La prensa hizo comentarios acerca de la posibilidad tanto del golpe como del autogolpe, veladamente sugerido por El Mercurio. Ante la crisis del Parlamento con el "poder fáctico" militar, el Presidente Frei barajó la idea de

incorporar nuevos miembros de las Fuerzas Armadas a su Gabinete. Trascendente fue su decisión de crear el Comité Superior de Seguridad Nacional (CONSUSENA), integrado por el Ministro de Defensa, los Comandantes en Jefe del Ejército, la Marina y la Aviación, legalizando de hecho la participación de los militares en la política.

El conato golpista del general Viaux

El estallido de este conato de golpe se produjo en un contexto latinoamericano especial, una de cuyas características era la existencia de gobiernos militares en el Cono Sur: Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia, respaldados por la reunión de Comandantes en Jefe de América Latina, promovida por el Jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, quien declaró en esa sesión que la única manera de detener el avance del comunismo en América Latina era el establecimiento de gobiernos dirigidos por los militares. A esta reunión, celebrada en 1968, asistió el general chileno Sergio Castillo Aránguiz.

En abril de ese mismo año, "unos 80 oficiales alumnos de la Academia de Guerra presentaron solicitudes individuales de retiro en forma simultánea, justificando la petición en las bajas remuneraciones y la falta de perspectivas profesionales. Las solicitudes de renuncia provocaron una conmoción institucional. El general Miquelès fue sustituido por el general Sergio Castillo Aránguiz; el ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, fue reemplazado por el general en retiro Tulio Marambio".⁴⁰ Durante la Parada Militar de 1969, el mayor Arturo Marshall se negó a desfilar frente al Palco presidencial de Frei.

En sus inicios, el movimiento en los cuarteles tuvo aparentemente un carácter de reivindicaciones corporativas, en particular de aumento de sueldos y compra de armamentos para resguardar la seguridad exterior del país,

expresados por su portavoz, el general Roberto Viaux, entonces Comandante de la Primera División del Ejército en Antofagasta, quien solicitó la renuncia del general Tulio Marambio, ministro de Defensa. Al ser llamado a Santiago para que explicara su actitud, se acuarteló el 21 de octubre de 1969 en el Regimiento Tacna. El gobierno decretó Estado de Sitio. Con el fin de acumular fuerzas al interior del ejército, Viaux insistió en su petitorio aparentemente corporativo, poniendo énfasis en el aumento de sueldos para los militares.

Pero la causa real era política: su crítica a la incapacidad del gobierno para enfrentar la movilización popular y solucionar los roces interburgueses ante las próximas elecciones presidenciales en las que podía triunfar el socialista Salvador Allende. El sector castrense, liderado por Viaux, se levantó como alternativa dentro de un contexto latinoamericano en que la tendencia hacia la militarización era manifiesta, luego del golpe de Brasil de 1964 contra el presidente Goulart.

Empero, Viaux tuvo menos apoyo del que esperaba de sus camaradas de armas, viéndose obligado a reducir el intento de golpe a un emplazamiento al gobierno para solucionar sus problemas corporativos. Frei llamó entonces al pueblo a defender la legalidad y la constitucionalidad. La CUT, la FECH, el Colegio de Profesores, la DC y la izquierda convocaron a un Paro General para defender al gobierno. Los militares, amotinados en el Tacna, se rindieron sin combate. En la mesa de negociaciones, el gobierno aceptó gran parte de las peticiones económicas de los militares insubordinados, dejando a la mayoría en libertad, mientras otros, como el propio Viaux, pasaron a retiro. El general René Schneider fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército.

Frustrado el "tacnazo", Viaux se convirtió en un golpista profesional que, desde el primer día del triunfo

de la Unidad Popular, comenzó a conspirar con el fin de impedir que Allende se hiciera cargo de la presidencia. Está totalmente comprobado que el asesinato del general Schneider en octubre de 1970 fue planificado por Viaux para provocar una intervención militar antes de que Allende asumiera el gobierno el 4 de noviembre de ese año. A nuestro juicio, existió una continuidad política entre los objetivos encubiertos del "tacnazo" y los intentos golpistas para impedir que Allende llegara al gobierno.

Los últimos meses del gobierno DC estuvieron cruzados por las elecciones internas de los candidatos a presidente. Mientras la Derecha se pronunció una vez más por Jorge Alessandri y el sector progresista de la DC logró imponer la candidatura de Radomiro Tomic, la izquierda tuvo que dirimir entre cinco nombres: Salvador Allende (PS), Jacques Chonchol (MAPU), Pablo Neruda (PC) Alberto Baltra (PR) y Rafael Tarud (Acción Popular Independiente, API) terminando el proceso de selección el 22 de enero de 1970 con la designación de Salvador Allende como candidato a la presidencia.

Opiniones de analistas y ex-DC sobre el gobierno de Frei.

Más elocuente que nuestra interpretación –que obviamente se desprende del análisis que hemos hecho en este capítulo– es el balance político de los propios militantes y ex-partidarios de la Democracia Cristiana.

Uno de los más connotados dirigentes, **Andrés Zaldívar** –en un reportaje del diario El Mercurio, 7-julio-1991, Cuerpo D, p.10 y 11– manifestó que el gobierno del PDC fue demasiado lejos en la adopción de medidas radicales: "un error en un momento en que el mundo estaba brutalmente ideologizado". Para **Rafael Agustín Gumucio**, este período mostró que "el capitalismo y el imperialismo habían resultado reforzados al término del gobierno de Frei (**Apuntes de medio siglo**, obra ya citada, p.164).

Luis Quiros Varela: "El Programa de la Promoción Popular, a pesar de su orientación partidista, hizo que la DC no se comprometiera firmemente con él. El enfoque paternalista de los programas y también de los promotores creó la desconfianza entre los pobladores". ("La Evolución Política de Chile", artículo en Revista Mensaje N°202-203, Santiago, septiembre-octubre de 1971, p.418).

Alberto Sepúlveda Almarza: "El PDC adoptó un camino solitario sin buscar alianzas con otras combinaciones políticas. El mesianismo de la Democracia Cristiana y la solidez de los bloques en pugna se conjugaron para producir este resultado". (**Los años de la Patria Joven: La política chilena entre 1938-1970**, Ed. CESOC, Santiago 1996, p.40)

Jorge Guarello Fitz-Henry: "La Cámara de Diputados, no obstante la mayoría demócrata, no cumplió su función fiscalizadora, y la responsabilidad es imputable a esa

mayoría, por ser su deber haber empleado mucha más severidad frente a los funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros casi todos del propio Partido. Faltó aquello de ejemplo de autoridad, de sobriedad, de honradez en los que mandan" (**Nuestros paisanos demócrata cristianos**, Viña del Mar, 1968, p.61).

Manuel Ossa: "Este programa de gobierno o este programa político no fue realizado directamente por la ética cristiana que inspiraba a la primitiva Falange, sino que pudo bosquejarse gracias principalmente a la incorporación de un cuerpo extraño con respecto a la ética primera, a lo más no contradictoria pero ciertamente no inspirada en la ética cristiana (...) la DC apareció como un partido y una ideología tendiente a un cierto tipo de desarrollo, pero no a una verdadera revolución (...) el slogan de la Revolución en Libertad comenzó a parecerles una cubierta racionalizadora porque les parecía que no había tal revolución" ("Cristianos que actualmente se comprometen en política", artículo en Revista Pastoral Popular, N°115, enero-febrero 1970, p.41)

Equipo de Pastoral Rural de la Diócesis de Talca - Teno, Molina y Talca: "La Reforma Agraria es un proceso que no creemos que haya llegado a ser 'drástico y masivo' como lo anunciaron en un principio, pero de todos modos creemos que ha sido lo suficiente para dejarse sentir en el campesinado chileno (...) Los cambios más profundos que está realizando la Reforma Agraria son de orden social. De una estructura paternalista y jerarquizada en poco tiempo se está pasando a una estructura democrática y de participación comunitaria (...) en los asentamientos, el plan de explotación se piensa entre todos y ya no es una sola persona la que dirige e impulsa todo, ahora todos los campesinos participan en el asentamiento como motores a través del Consejo de Administración y el Comité de la Cooperativa (...) Los asentados ya tienen conciencia clara de

que son un movimiento. Juntos han formado una cooperativa Regional multiactiva de insospechadas proyecciones; ellos a través de sus directivas participan en la expropiación de tierras, en la programación de cursos, en la marcha de los asentamientos". ("Cambios de mentalidad en el campesinado chileno por la Reforma Agraria, artículo en la Revista Pastoral Popular, N°115, enero-febrero 1970, p.25, 26, 27 y 32")

Periodista cristiano: "Hace sólo seis años que Chile, por una mayoría abrumadora (55% del electorado) se pronunció en favor de los cambios prometidos por la Democracia Cristiana que iniciaba entonces 'la Revolución en Libertad'. Esta se planteó como una alternativa a la revolución cubana. Haría cambios estructurales profundos, sin menoscabar la libertad de nadie. Pero la revolución prometida se fue traduciendo a lo largo de los seis años en medidas típicamente reformistas. La Revolución en Libertad se tradujo en el empeño de mejorar el sistema, pero básicamente afianzó el sistema capitalista a través de la apertura de oportunidades para la burguesía nacional y para los sectores inversionistas extranjeros. Así, el país al final de esta 'revolución' exhibe un índice más alto de dependencia externa, mayor afianzamiento de los sectores que detentan el poder económico nacional y progresivo abandono de las políticas sociales. A su haber muestra el crecimiento de la organización en lo sindical y comunitario, situación que a pesar de los mecanismos de control y manipulación del gobierno, se volvió contra el mismo gobierno por las inmensas expectativas que despertaron en estos sectores y que no fueron satisfechas". (artículo "¿Construirá Chile el Socialismo?", en Pastoral Popular, N° especial: "La Iglesia: ¿Para qué?, ¿Opio-Política?", N°119, Santiago octubre 1970, p.12).

Conversando con historiadores y otros analistas sobre aspectos del primer gobierno Demócrata Cristiano

Queremos conversar-escuchando con colegas que han dado opiniones generales o parciales sobre el gobierno de Frei, aclarando que el Balance Historiográfico del período 1964-94 ha sido elaborado por el historiador Luis Moulian en uno de los capítulos del presente libro.

A **Alfredo Jocelyn-Holt**: te pasaste con el subtítulo **Del avanzar sin transar al transar sin parar** que le pusiste a tu libro **El Chile perplejo** porque con él sintetizas no todo sino un aspecto importante del período, desde la UP hasta la Concertación, especialmente en lo referente a la evolución de cierta izquierda. Sin embargo, tu aporte más importante, a mi juicio, es que tratas de señalar las tendencias generales, sobre todo cuando afirmas que el gobierno de Frei abrió un proceso; tu dices “revolucionario”, pero creo que no alcanzó esa fase sino que más bien fue prevolucionario, particularmente bajo la UP. Como verás en mi Nota Introductoria a este libro, prefiero hablar de un proceso de continuidad histórica entre los gobiernos de Frei y Allende, con sus diferencias y sus propias especificidades, que podría caracterizarse como de una cierta discontinuidad coyuntural. En fin, se puede diferir de tu análisis, pero nadie podría desconocer que tu enfoque del período es una las primeras interpretaciones globales acerca de los acontecimientos ocurridos en Chile durante las últimas décadas.

Sin pretender comentar la totalidad de tu texto, quisiera hacerte algunas observaciones puntuales: Sostienes que desde la década del 50 surgió una nueva clase media con la integración de los comerciantes y profesionales, distinta de la tradicional. Podríamos estar de acuerdo siempre que coincidiéramos en la caracterización de lo que se entiende por “clase media”. Me parece que sigues

utilizando un concepto cuestionado por ciertos sociólogos.

A mi modo de comprender, ese sector social se divide fundamentalmente en dos: a) la pequeña burguesía, propietaria de algún medio de producción y/o distribución (pequeños propietarios rurales y urbanos, comerciantes, dueños de microempresas y de medianos talleres artesanales) y b) las capas medias asalariadas, que venden por un sueldo su fuerza de trabajo y que, por ende, pertenecen a la clase trabajadora, con sus propias especificidades. Entonces, no está claro qué quieres decir con una nueva clase media. Para mí, ese sector nuevo lo constituyen mayoritariamente las capas medias asalariadas, en las que incluyo a los profesionales que se emplean por un sueldo, aunque existe un sector minoritario que ejercen de manera privada su profesión. Respecto de los inmigrantes y comerciantes no son un sector nuevo de la llamada clase media, pues tienen una antigüedad, que tu sabes, se remonta a más de un siglo, aunque numéricamente hayan aumentado; por lo tanto es tradicional, no como tu dices que es distinta de la tradicional.

Pues bien, te invito a conversar acerca de cómo se expresaron estos sectores sociales en el Chile de 1920 hasta la actualidad. Opino que la llamada “clase media” irrumpe en política con Arturo Alessandri Palma, pero no comparte el poder—como han dicho algunos historiadores y cientistas sociales— pues el poder siguió en manos de la clase dominante, para lo cual te remito, a fin de abreviar este comentario, a los tomos V y VI de mi **Interpretación marxista de la Historia de Chile**. En las décadas del ‘30 al 50’ se incrementa este peso social específico de las “capas medias”, en especial los empleados particulares, organizados en la CEPCH, y los públicos en la ANEF, llegando a cumplir un papel muy importante en los conflictos sociales del Frente Popular hasta la Unidad Popular, menos-

preciados entonces por casi todos los autodenominados marxistas que los consideraban pequeño-burgueses y no parte de la clase trabajadora, magnificando el papel del proletariado, como única fuerza motriz del cambio social.

Tienes razón cuando afirmas que esta “clase media” se encarnó en el primer gobierno de la DC, aunque vuelves a repetir que tomó el poder, cuando tu bien sabes que bajo Frei el poder real estuvo en manos de los grandes empresarios nacionales, íntimamente ligados al capital monopólico foráneo.

Es relativamente correcta tu caracterización de que la administración democristiana fue “populista”, pero habría que relativizar esa afirmación o, al menos, diferenciar el populismo de Vargas, Perón y otros con el populismo freísta, una de cuyas diferencias sustanciales fue que Frei nunca tuvo un apoyo mayoritario de los trabajadores organizados y menos de la CUT. Por consiguiente, no pudo implementar como otros gobiernos populistas la política de estatización sindical, es decir no pudo integrar ni controlar al movimiento sindical por medio de instituciones del Estado, como la Dirección General del Trabajo.

También sostienes, con tu concepción decimonónica liberal del Estado, que Frei incentivó un Estado interventor; correcto, pero te faltó aclarar que esta nueva función del Estado no fue creada en Chile sino que se generalizó en todo el mundo, particularmente en América Latina, desde la década de 1930, a la luz de las teorías keynesianas. Por lo tanto, desde esa década hubo en Chile una mayor intervención del Estado en la economía, básicamente para fomentar el proceso de industrialización, tanto en los gobiernos del Frente Popular como bajo Ibáñez y el propio gobierno de los gerentes: Jorge Alessandri.

Es cierto lo que tu dices respecto de que Frei incentivó esa intervención, pero habría que señalar el alcance de la misma. A mi juicio, la incentivación significó un nuevo

salto: no se trataba solamente de intervenir regulando la economía, sino de convertir al Estado en inversionista directo en aspectos claves de la economía, como lo hicieron los gobiernos mexicanos y venezolanos con el petróleo. El Estado-inversor no constituyó una forma de capitalismo de Estado, como han dicho muchos analistas de este proceso que se generalizó durante las décadas de 1960 y 70 en América Latina, porque el capitalismo no tiene apellidos. Se ha confundido entre Estado y Gobierno, como dijo Harold Laski, error que cometieron quienes han pontificado acerca del “Estado benefactor”, cuando lo correcto es decir: gobierno con características de benefactor.

Siguiendo con el tema de la “clase media”, haces una apreciación interesante de discutir cuando afirmas que el sector de profesionales en vez de volcarse hacia la DC apoyó a una derecha marginal, nacionalista, golpista y militarista. Creo que es generalizar demasiado, porque es obvio que Frei y Allende tuvieron el apoyo de un vasto sector de profesionales y técnicos. Podrías tener razón si dijeras que un sector de la pequeña burguesía, temerosa de que el ascenso popular pudiera trastocarle su orden, vida cotidiana y modesta situación económica, comenzó a respaldar a quienes buscaban una salida autoritaria de corte militar. Ese sector fue, a mi juicio, parte sustancial del apoyo social que tuvo Pinochet.

Finalmente –por ahora– coincido con tu apreciación sobre la Reforma Agraria de la DC, pero creo que tuvo un significación más allá de tu mera afirmación de que se hizo con el fin de “expropiarle” el voto campesino a los sectores tradicionales. Ese término podrías haberlo empleado en su real sentido: expropiación de tierras a los latifundistas que controlaban en 1964 el 72% de las tierras, lo que abrió un proceso nuevo –que culminó con el gobierno de Allende– tanto en lo que se refiere a la tenencia de la tierra como al despertar de la conciencia campesina, tema sobre

el cual existen serios trabajos de investigación que tu seguramente conoces.

A **Cristián Gazmuri**: Aunque no nos conocemos personalmente, permíteme tutearte porque quiero darle un tono más coloquial a ciertas apreciaciones sobre tu capítulo acerca del gobierno de Frei en el libro **Nueva Historia de Chile**, publicado por la Universidad Católica en 1996. Al igual que lo hice con Alfredo Jocelyn-Holt, después de escucharte quiero conversar contigo sobre los siguientes temas específicos:

Tus simpatías por el gobierno de Frei —en muchos casos explicables respecto de las trascendentales medidas de Reforma Agraria y “chilenización” del cobre— te conduce a describir las masacres de El Salvador y Puerto Montt (Pampa Irigoin) como una respuesta de las fuerzas represivas a la violencia y al enfrentamiento provocado por los propios trabajadores y pobladores, cuando los hechos demuestran lo contrario. Siguiendo tu hilo de pensamiento afirmas rotundamente que el MIR —fundado en 1965 y no en 1969, como tu dices— planteó el “asalto armado al Estado” (p.482). La verdad es que esta estrategia no alcanzó ni siquiera a implementarse en su fase más embrionaria durante el gobierno DC, salvo una que otra expropiación de Bancos. Tú sabes que el quehacer de un investigador es describir lo que pasó y no las intenciones o proyectos futuros transmitidos en discursos o declaraciones. La estrategia del MIR fue procurar llegar al auténtico socialismo a través de la lucha armada, que es el único camino que han seguido en la historia los pueblos para reemplazar un sistema de dominación de clase por otro. Es sabido que así sucedió con la gran Revolución Francesa de 1789; de otra manera nunca la burguesía industrial hubiera derrocado a la monarquía feudal. Dicho objetivo no se logró de la noche a la mañana, sino que fue producto de un largo proceso de acumulación de fuerzas, que partió de un fortale-

cimiento de la burguesía, inspirada en el pensamiento de Voltaire, Rousseau y Montesquieu.

Similar estrategia de poder se trazó el MIR, además de sectores del PS, pero nadie puede demostrar que durante el gobierno de Frei, el MIR estaba en condiciones de lanzarse a la lucha insurreccional, para la cual es necesario contar con el respaldo de vastos sectores populares, cosa que el MIR no tenía. Tampoco pasó a la clandestinidad porque se lo hubiera propuesto sino porque se vio obligado a hacerlo ante la persecución del gobierno, desatada en 1969, por el error de compañeros penquista que, a espaldas de la dirección nacional, secuestraron por algunas horas al periodista Osses. Esto te lo puedo asegurar porque en ese momento era miembro del Comité Central del MIR y profesor de la Universidad de Concepción.

Cuando analizas la oposición de la izquierda al proyecto de ley sobre la “nacionalización pactada” del cobre, sostienes que las modificaciones a la ley propuestas por la izquierda, planteadas luego en el programa de la Unidad Popular, ya constituida no sólo por el PS y PC sino también por el MAPU y la mayoría del PR, “era una clara aproximación al esquema de las democracias populares y socialismo centralizados” (p.487). Esta argumentación puede esgrimirse en una polémica entre partidos, donde siempre se deforman y exageran las diferencias, pero un historiador debe atenerse a los hechos. Y estos indican, inequívocamente, que nunca la UP, bajo Frei ni en el gobierno, se planteó la instauración inmediata del socialismo en Chile porque sabía que para eso no bastaba conquistar el gobierno por la vía electoral sino que era fundamental tomar realmente el poder, terminando con las instituciones burguesas, incluidas las Fuerzas Armadas tradicionales. Por otra parte, las estatizaciones y nacionalizaciones no significan necesariamente expresión de genuino socialismo, como ha quedado en evidencia con la adop-

ción de estas medidas por los gobiernos socialdemócratas europeos, a quienes ningún cientista político podría caracterizar de socialistas o comunistas revolucionarios.

Otro error que cometes –no sólo de apreciación política sino de carácter histórico– es afirmar rotundamente que la “realidad rural chilena hasta los años 50, no había cambiado mucho desde el siglo XIX” (p. 499). Por más deseos que tengas de enaltecer la política agraria de Frei –que nadie discute su importancia– los trabajos de investigación sobre el agro han demostrado cambios ocurridos desde muchas décadas antes, como el desarrollo del capitalismo agrario, el aumento de la tasa de productividad por la mecanización del agro y el aumento significativo del regadío artificial, la ampliación del área cultivada y, sobre todo, el cambio de las relaciones de producción con el aumento del número de asalariados jornaleros y la disminución acentuada del inquilinaje, como lo muestra el Censo Agropecuario de 1955: 180.000 asalariados, 80.000 inquilinos, 14.000 obreros especializados y 11.000 técnicos y empleados. Una década más tarde, el inquilinaje se redujo a la mitad mientras los jornaleros aumentaron a 193.586, según el Censo de 1965.

NOTAS

1. JACQUES MARITAIN: **Humanismo Integral**, Ed. Ercilla, Santiago, 1941; **Para una Filosofía de la Persona Humana**, Ed. Letras, Santiago, 1938; **Problemas espirituales y Temporales de una nueva cristiandad**, Ed. Fides, Buenos Aires, 1936.

2. Idem, especialmente **Humanismo Integral**, p.116, 158, 185, 261.

3. ALEJANDRO MAGNET: **El Padre Hurtado**, Ed. del Pacífico, Santiago, p. 254.

4. BERNARDO LEIGHTON: “Partido Demócrata Cristiano”, en el libro **Pensamiento de los Partidos Políticos de Chile**, Ed. Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, 1952, p. 9.

5. EDUARDO FREI M.: **El socialcristianismo**, Ed. del Pacífico, Santiago, 1961, p. 4.

6. RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO: **Apuntes de medio siglo**, Ed. Chile América-CESOC, Santiago, 1994, p. 133.

7. RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO: “De la Falange a la Democracia Cristiana”, Apéndice al libro de RICARDO BOIZARD: **La Democracia Cristiana en Chile**, Ed. del Pacífico, Santiago, Santiago, 1963, p. 321, 323 y especialmente 324: “El falangista común no se sentía a gusto al verse frenado en sus impulsos naturales y no comprendía a algunos dirigentes independientes, cuya idiosincracia los movía a desear un reformismo moderado (...) Con razón, muchos se preguntarán por qué, si la Falange tenía reservas de la forma como se estaba llevando la campaña, no reaccionó contra esos errores imponiendo otra línea”.

8. Ver la génesis y evolución de estos PDC en los siguientes textos. J.E. RIVERA OVIEDO: **Los socialcristianos en Venezuela**, Ed. Centauro, 2ª edición, Caracas, 1977. CALDERA, Rafael: **Especificidades de la Democracia Cristiana**, Caracas, 1961. BLANCA, Carlos: **Construir el Partido: nuestra tarea**. Comité Dep. PDC, Lima, Lima. BARRIGA, Luis: **Notas sobre la Democracia Cristiana en Ecuador**, Caracas, 1984. PARERA, Ricardo: **La Democracia Cristiana en Argentina**, Ed. Nahuel, Bs.As. 1967. JARAMILLO, Francisco: **La Democracia Cristiana colombiana**, Ed. del Caribe, Bogotá, 1962. BRENA, Tomás: **La Democracia Cristiana em Uruguay**, Montevideo, 1946.

9. JULIO SILVA SOLAR: **A través del marxismo**, Ed. del Pacífico, Santiago, 1951, p. 132.

10. GUILLERMO BLANCO: **Eduardo Frei. El hombre de la Patria Joven**, Ed. Aconcagua, Santiago, 1984, p. 54.

11. MONICA ECHEVERRIA: **Antihistoria de un luchador, Clotario Blest**, Ed. LOM, Santiago, 1993, p. 260.

12. ALBERTO SEPULVEDA ALMARZA: **Los años de la Patria Joven: la Política chilena entre 1938-1970**, Ed. Chile América-CESOC, Santiago, 1996, p.51.

13. ALBERTO SEPULVEDA A.: obra citada, p. 69.
14. O. CAPUTO y R. PIZARRO: "Dependencia e inversión extranjera", en *Chile Hoy*, Ed. Siglo XXI, México, 1970, p. 197.
15. Artículo de Pedro Vuskovic en la revista "Punto Final", N° 112, p.13 del 1° de septiembre de 1970.
16. MARIO VERA: "Detrás del cobre", en Cuadernos de la Realidad Nacional, Santiago, enero 1970.
17. SERGIO ARANDA y ALBERTO MARTINEZ: "Estructura Económica: algunas características fundamentales", en el libro *Chile hoy*, Ed. Siglo XXI, México-Chile, 1970, p. 146-148.
18. JACQUES CHONCHOL: "Poder y reforma agraria en la experiencia chilena", en *Chile hoy*, Ed. Siglo XXI, México-Chile, 1970, p.271 a 274.
19. Equipo de Pastoral Rural de Talca: "Cambios de mentalidad en el campesinado chileno por la Reforma Agraria", en Revista Pastoral Popular, N° 115, enero-febrero 1970, Santiago, p. 23.
20. **El Pensamiento de la Democracia Cristiana**, Ed. Dirección Nacional de Capacitación Doctrinaria, Santiago, 1973, p. 14.
21. ALBERTO SEPULVEDA A.: obra citada, p. 52. Estos conceptos de Vekemans fueron elaborados y difundidos en y por el Centro Bellarmino, la DESAL y la revista Mensaje, constituyendo uno de los elementos más novedosos de la campaña presidencial de Frei.
22. CARLOS CARIOLA: "Los últimos 20 años de la Educación chilena", en Revista "Mensaje", N° 202-203, Septiembre-Octubre 1971, p. 463.
23. ENRIQUE LHIN: "20 años de poesía chilena", en la revista "Mensaje", N° 202-203, Septiembre-Octubre 1971, p. 491.
24. CLOTARIO BLEST: "Organización de la Clase Trabajadora", en revista Punto Final, Santiago, 22 de abril de 1969, p.22 a 25.
25. J. DUQUE y E. PASTRANA: "La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile. 1969-1972", Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, N°4, FLACSO, Santiago, diciembre 1972, p. 259 y 293. Ver, asimismo, VICENTE ESPINOZA: **Para una historia de los pobres de la ciudad**, Ed. SUR, Santiago, 1988.
26. Periódico "El Rebelde", N°39, septiembre 1966, p.4.
27. PATRICIO MANNS: **Las grandes masacres**, Colección "Nosotros los chilenos", Ed. Quimantú, Santiago, 1970, p. 74 a 77.
28. NICOLAS BERDIAEFF: **Una nueva Edad Media**, Ed. Ercilla, Santiago, 1933, p. 73. En este libro. que reiteramos fue publicado en Chile en 1933, se inspiraba sobre el papel de la mujer la generación socialcristiana de la Falange que llegó al gobierno en 1964.
29. JACQUES MARITAIN: **Problemas espirituales y temporales de una nueva cristiandad**, Ed. FIDES, Buenos Aires, 1934, p. 164.
30. MANUEL BARRERA: **La Universidad chilena**, Ed. INSORA, Santiago, 1969.
31. Dirección Nacional de Capacitación Doctrinaria: **El Pensamiento de la Democracia Cristiana. Dimensiones del Socialismo Comunitario**. Santiago, 1973, p. 14. Otro libro escrito por un hombre DC es el de JORGE GUARELLO: **Nuestros paisanos demócrata cristianos**, Viña del Mar, 1968.
32. Discurso en el Segundo Congreso Mundial de la Unión Internacional de Jóvenes Demócrata Cristianos, efectuado el 10 de junio de 1965 en Berlín, reproducido en RADOMIRO TOMIC: **Testimonios**, Ed. Emisión, Santiago, 1988, p. 89.
33. PATRICIO DOONER: **Cambios sociales y Conflicto político**, Ed. CPU-ICHEH, Santiago, 1984, p. 52 y 174.
34. "El Mercurio", fines de febrero de 1968.
35. Declaración del 17 de marzo de 1968 de la Sociedad de Fomento fabril.
36. SERGIO ONOFRE JARPA: **Creo en Chile**, Soc. Impresora Chile Ltda., Santiago, 1973, p. 79.
37. Idem., p. 91.
38. PATRICIO DOONER: **Cambios Sociales y Conflicto Político**, Ed. CPO-ICHEN, Santiago, 1984, p. 75 y 76.
39. Antecedentes suministrados por la revista "Mayoría", enero 1973, Santiago, en PAULA RIVERA y MARTA SANCHEZ: "La evolución Política de la Derecha en el período 1958-1990, trabajo de investigación presentado a la Cátedra sobre América Latina del Prof. Luis Vitale, Universidad ARCIS, 1993.
40. HERNAN SOTO: "Las armas constitucionales", artículo en la revista "Punto Final", Santiago, marzo 1999.

EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE

LUIS VITALE

Aunque la campaña presidencial de 1970 y el ascenso al poder de Salvador Allende correspondería cronológicamente tratarlos durante el período gubernamental de Frei, nos permitimos –con una concepción distinta del “tiempo histórico”– analizarlos en este capítulo, porque lo sucedido entre el 4 de septiembre (triumfo electoral de la UP) y el 4 de noviembre (toma de posesión de Allende de la presidencia) tuvo repercusiones trascendentales en la gestión del presidente inmolado el 11 de septiembre de 1973.

La presentación de las candidaturas de Derecha –Jorge Alessandri– y de Centro –Radomiro Tomic– como alternativas a la de Salvador Allende, fue entonces interpretada por varios analistas como un error político de la centro-derecha. A su vez, años más tarde, prominentes dirigentes de la ex-UP, como Carlos Altamirano, sostuvieron enfáticamente que hubiera sido más conveniente que la izquierda se hubiese aliado con la DC: “Debimos apoyar la candidatura de Tomic y su programa”.¹

Algunos sociólogos trataron de explicarse la división de las candidaturas con los siguientes argumentos: “El Partido Nacional –que apoya a Jorge Alessandri– extrae su votación de los estratos tradicionales altos, ubicándose éstos en las zonas de actividad agraria preferentemente. Sin embargo, la presencia de sectores empresariales que corresponden a las actividades industriales más tradicio-

nales, le permite mantenerse en los centros de mayor concentración industrial (...) La DC –que postula a Tomic– representaría a una burguesía industrial moderna”.²

Aunque correcto en ciertos aspectos, este análisis establecía una cesura sobremanera estructuralista entre la llamada sociedad moderna y la tradicional, pregonada por Gino Germani, además de una división estática entre los terratenientes y la burguesía industrial y entre la industria manufacturera tradicional y la del área dinámica e intermedia, que desde el gobierno de Jorge Alessandri promovía las industrias de exportación. Tampoco contabilizaba que, a raíz del desarrollo desigual y combinado del capitalismo, los empresarios agrícolas tenían fuertes inversiones en textiles, metalurgia liviana y productos alimenticios; mientras los industriales compraban fondos. Así, la burguesía industrial y la burguesía agraria se entrelazaban mediante la capitalización de la renta agraria en la industria y la territorialización de la ganancia industrial.

La explicación de ese grupo de sociólogos acerca de las motivos por los cuales se produjo la división electoral de la Derecha y el Centro, no satisfacía a quienes estimaban que la lucha social había adquirido una dimensión insospechada, a raíz de las medidas del gobierno de Frei, como la Reforma Agraria, la “chilenización del cobre” y la promoción popular. Este equipo de científicos políticos opinaba que el ascenso popular había agudizado la lucha de tendencias al interior de la Democracia Cristiana, fortaleciéndose el ala izquierda que, en definitiva, impuso la candidatura de Radomiro Tomic, como única manera de canalizar los amplios sectores populares que estaba ganando la candidatura Allende.³

Otro equipo de investigadores, encabezado por Fernando Castillo L., reflexionaba: “Se sostiene que el triunfo electoral de la izquierda en 1970 se debió a la división de la burguesía en dos candidaturas (...) Esta hipótesis se si-

túa en dos niveles. En el nivel de la apariencia electoral da cuenta de la división en dos del frente electoral de la burguesía. En otro nivel, más profundo, explica este hecho por la existencia de una contradicción insuperable entre las dos alas de la burguesía. Sin embargo, si se observa el nivel ideológico de la confrontación electoral de 1970, podría decirse, en cambio, que lo que allí ocurrió fue un intento fracasado, por parte de la burguesía, de dividir a las masas populares levantando una candidatura populista como la de Tomic" (nota de Fernando Castillo: "de algún modo puede verse esta posición en Luis Vitale: **Y después del 4, ¿qué?**). Si se examina más detenidamente lo que ambas hipótesis intentan decir, se puede observar que no resultan tan excluyentes entre sí".⁴

Posteriormente, Manuel Castells dijo acerca de la candidatura Tomic: "Restando algún electorado a la Derecha, de hecho restó lo esencial de los votos a la izquierda".⁵

Divididas las preferencias de los trabajadores, pobladores, capas medias radicalizadas y campesinos entre Allende y Tomic, el triunfo de Alessandri parecía estar asegurado. Para reforzarlo, los medios de comunicación en manos de la Derecha instrumentalizaron una "campana del terror", llegando a decir que si ganaba Allende los tanques rusos entrarían a la Moneda y los niños chilenos serían enviados a Rusia. El Mercurio publicó un aviso de "Chile Joven" en el que aparecía en la puerta de La Moneda un tanque soviético con la hoz y el martillo, con una leyenda que decía: "En Checoslovaquia tampoco pensaban que esto sucedería. Pero los tanques rusos llegaron". A lo cual Allende respondía: el terror "no hay que buscarlo fuera de nuestras fronteras sino en Chile. El terror se encuentra en la enfermedad de los niños, en la desnutrición, en los 600.000 niños con insuficiencias intelectuales a causa de la mala alimentación".

Tomic fue elevando el tono de su discurso populista

a medida que crecía el apoyo popular a Salvador Allende. Sus ataques formales a la oligarquía y al capitalismo fueron en muchas ocasiones tan agudos como los de la UP, al punto de que varios analistas no encontraban diferencias sustanciales entre Tomic y Allende. Varios periódicos hicieron una comparación entre ambos, colocando en una columna el programa de Tomic y en la otra el de Allende, remarcando la similitud programática.

Si quedaba alguna duda sobre si la burguesía se había dividido en dos candidatos, la concentración final de Alessandri, efectuada el domingo 30 de agosto, despejó todo equívoco, pues allí se volcó íntegramente la clase dominante y la pequeña burguesía acomodada. Casi la totalidad de los habitantes de Las Condes, Providencia, Vitacura y parte de Ñuñoa y del centro de Santiago, se descolgaron de sus zonas residenciales para asistir en masa a la más grande concentración realizada hasta entonces por la burguesía chilena. A su vez, las multitudinarias concentraciones de Allende en el Norte, Valparaíso, Concepción y, sobre todo, Santiago, hacían conjeturar una llegada muy estrecha, como en definitiva ocurrió:

	Hombres	Mujeres	Total	%
Allende	631.863	443.753	1.075.616	36,30
Alessandri	479.204	557.174	1.036.000	34,98
Tomic	392.736	432.113	824.849	27,84

Allende triunfó en 10 provincias: en las 4 del Norte con aplastante mayoría de obreros mineros, marítimos, pescadores y portuarios; en O'Higgins, provincia minera y campesina; en Curicó y Talca, con fuerte concentración de jornaleros agrícolas; en Concepción, segundo centro del proletariado fabril y minero; en Arauco, con predominio

casi absoluto de mineros, y en Magallanes, donde había una mayoría de trabajadores petroleros y campesinos.

Alessandri ganó en Santiago y en 12 provincias, del centro-sur, fundamentalmente con mayoría rural. Tomic fue primero en Valparaíso y en Aysén, segundo en Concepción, Cautín y Malleco, obteniendo porcentajes superiores a su promedio general en las mesas de mujeres de comunas pobres de ciudades y pueblos rurales.

Al no haber obtenido mayoría absoluta ningún candidato, correspondía al Congreso Pleno decidir por uno de los dos primeros, según lo establecido por la Constitución reformada de 1925. Hasta ese entonces, cuando se presentó el caso de votar por las dos primeras mayorías, como fue la situación que se dio con la elección de 1958, entre Alessandri y Allende, había sido normal que se aceptara de antemano el criterio de votar en el Congreso Pleno por la primera mayoría. Pero, en 1970 la coyuntura política fue distinta, pues la Derecha no estaba dispuestas a permitir que la Izquierda asumiera el gobierno.

Entonces se abrió un **proceso histórico entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre**, en el que se jugaron por parte de la Derecha y el Centro tres opciones: a) condicionar el apoyo de la DC a un compromiso de Allende para cumplir las bases de un documento denominado Estatuto de las Garantías Constitucionales; b) votar por la segunda mayoría, es decir, por Alessandri, proposición de la bancada parlamentaria de Derecha, –con un eventual respaldo de la DC si Allende no aceptaba las condiciones mencionadas anteriormente– que consistía en votar por Alessandri, quien después de asumir la Presidencia por un corto período renunciaría para dar lugar a una convocatoria a elecciones de nuevo presidente, donde se estudiaría la posibilidad de que Frei aceptara ser candidato. c) promover un golpe militar para impedir que Allende asumiera como presidente, variante que contaba con el apoyo

del Departamento de Estado Norteamericano. El detalle de cada una de estas alternativas fue el siguiente:

a) A los siete días del triunfo de Allende, Benjamín Prado, presidente del PDC, manifestó públicamente: “La DC constituye la única fuerza política democrática capaz de oponer su solidez ideológica y el respaldo de sus bases, convirtiéndose en el más firme baluarte defensor de la libertad y de las garantías individuales”.⁶

Paralelamente y de manera sincronizada, Andrés Zaldívar, Ministro de Hacienda del gobierno DC, dio a la publicidad un informe alarmante sobre el estado de la economía nacional: “Con posterioridad al acto electoral, el comportamiento de la economía ha cambiado radicalmente (...) El primer impacto se reflejó esencialmente en una violenta presión ejercida por depositantes y ahorrantes para retirar sus recursos (...) Por otra parte, la corriente de ingresos de capitales se detuvo bruscamente y no muestra síntomas de recuperación (...) Ciertas empresas han procedido a suspender sus planes de expansión y aún paralizar algunos que están en marcha (...) Con posterioridad al 4 de septiembre, se ha visto seriamente afectada la construcción de viviendas financiadas por el sector privado”.

El anuncio catastrofista de Zaldívar constituía una nueva versión de la “campaña del terror” sobre el destino que correría Chile si Allende llegara a hacerse cargo de la Presidencia. A esta campaña contribuyó con 1.800.000 dólares la CIA, apoyada en un Memorándum de la ITT: “Las actuales posibilidades de evitar la asunción al poder de Allende se sostienen fundamentalmente en un colapso económico (...) Se realizan esfuerzos clandestinos para lograr la quiebra de una o dos de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos más importantes. Se espera que esto desencadene una corrida bancaria y el cierre de algunas fábricas (...) El desempleo y la intranquilidad podrían pro-

ducir suficiente violencia para obligar a los militares a moverse".⁷

"El Mercurio" aprovechó la coyuntura para decir el 25 de septiembre: "La opinión pública advierte ahora que en pocos días el pánico ha destruido una prosperidad que parecía avanzar con firmeza, en tanto que el empleo de medidas como las que aconseja la UP sería capaz de acelerar la inflación a velocidades imprevisibles, aniquilando capitales que han tardado muchos años en formarse (...) La economía está gravemente amenazada por un cambio de sistema que se orienta hacia el aniquilamiento de la propiedad de los particulares sobre los bienes de producción (...) Está Chile en riesgo de deslizarse hacia una catástrofe económica". El aviso era claro: había que evitar de cualquier manera que Allende asumiera la Presidencia.

Semanas después, la Democracia Cristiana presentó al candidato que había vencido democráticamente, un documento denominado **Estatuto de las Garantías Constitucionales** con el objeto de que Allende se comprometiera a cumplir los puntos allí enumerados, proposición que se hizo pública el 24 de septiembre. Sólo en el caso de que se aceptara esta exigencia, los 75 parlamentarios DC votarían a favor de Allende en el Congreso Pleno.

Este condicionamiento a quien había obtenido la primera mayoría electoral, contenía un punto de grave trascendencia para el futuro del país: el concepto de "**autonomía de las Fuerzas Armadas**", no contemplado ni siquiera en la Constitución de 1833 y menos en la vigente Constitución de 1925. Esta exigencia de las máximas autoridades de la DC se expresó taxativamente de la forma siguiente: "Nos interesa que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros sigan siendo una garantía de nuestra convivencia democrática. Esto exige que se respeten las estructuras orgánicas y Jerarquías de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, los sistemas de selección, requisi-

tos y normas disciplinarias vigentes, se les asegure un equipamiento adecuado a su misión de velar por la seguridad nacional, no se utilicen las tareas de participación que se les asignen en el desarrollo nacional para desviarlas de sus funciones específicas, ni comprometer sus presupuestos".⁸

Este punto –que desconocía las atribuciones constitucionales del Presidente, en su carácter de máxima autoridad para nombrar los altos mandos y reemplazar a cualquier general o cuerpo militar que no reconociera la obediencia al Presidente– se presentó luego como Reforma Constitucional, aprobada por el Congreso el 22 de octubre de 1970.

Es creencia generalizada que la autonomía de las FF.AA. fue sancionada recién por la Constitución de 1980. La verdad, probada con fuentes documentales, muestra de manera inequívoca que su origen se remonta a la Reforma Constitucional del 22 de octubre de 1970. Se estableció, entonces, de manera explícita que las Fuerzas Armadas serán garantía de "nuestra convivencia democrática", atribución que excedía su función tradicional de garantizar y defender la integridad territorial y la Seguridad nacional ante cualquier amenaza exterior. Con el objeto de apreciar el significado trascendental de dicha Reforma, transcribimos el artículo 22, capítulo III sobre Garantías constitucionales, de la Constitución de 1925: "La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar".

El nuevo concepto sobre el papel de las FF.AA. de intervenir para garantizar la seguridad interna se adscribía a la Doctrina de Seguridad Nacional recomendada por el Departamento de Estado norteamericano a principios de la década de 1960 y practicada en Brasil con el golpe militar contra el presidente Joao Goulart en 1964.

Esta intervención política de las Fuerzas Armadas

desconocía su papel de obediencia al Poder Ejecutivo y estaba avalada por la resolución de “autonomía” que se les había otorgado en la nueva Reforma Constitucional y, en última instancia, por el poder de la clase dominante que podía sentirse amenazada por un eventual cambio de sistema político y social. Esa fue la justificación que se utilizó para dar el golpe militar contra el gobierno de Allende.

Cabe señalar que éste y otros puntos del Estatuto de las Garantías fue resuelto por el Consejo Nacional de la DC, con la oposición de la mayoría de sus bases y, sobre todo, con la oposición de Radomiro Tomic, quien en su condición de candidato que obtuvo la tercera mayoría reconoció públicamente el triunfo de Salvador Allende y su derecho a ser Presidente, como tradicionalmente había sucedido en anteriores elecciones presidenciales en las que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos.

Comentando esta anómala situación, Clodomiro Almeyda publicó un sesudo artículo en el diario “Las Últimas Noticias”: “El introducir al vocabulario político el inusitado concepto de “autonomía” de las Fuerzas Armadas y el colocar en un mismo plano este concepto con el de la autonomía universitaria, como si fueran ideas análogas, encierra –para decir lo menos– una peligrosa confusión conceptual y teórica de inesquivables consecuencias políticas (...) Las Fuerzas Armadas por definición no son autónomas en el sentido en que lo son las universidades. Por la esencia de la Institución militar, el estar ligada al Poder Ejecutivo, vale decir, a la autoridad superior del Estado, por el vínculo de la obediencia”.⁹

Más de un cuarto de siglo después, el 10 de septiembre de 1995, el senador Bruno Siebert, general retirado, manifestó: “Las disposiciones constitucionales de las FF.AA. no son herencia del régimen militar que simple-

mente las recogió y ordenó (...) Son la buena herencia del partido mayoritario de gobierno, la DC, recogiendo el fruto de una evolución del régimen democrático chileno”,¹⁰ expresadas en las Garantías Constitucionales planteadas por la DC a Salvador Allende.

Otro de los puntos de las denominadas Garantías Constitucionales era prohibir cualquier intervención de “otros organismos de hecho, que actúen en nombre de un supuesto poder popular”, con la obvia intención de impedir que Allende fortaleciera el poder de su base social. Otros acápites se referían a la “inexpropiabilidad” de cualquier medio de comunicación; a la libertad de expresión, a la inviolabilidad de la correspondencia, a la libertad de trabajo: a no obstaculizar la creación y el desarrollo de los Colegios Particulares de enseñanza privada; no modificar los textos y manuales tradicionales de la educación primaria y secundaria. La negociación para llevar estas proposiciones al Congreso Nacional fueron llevadas a cabo por Renán Fuentealba, Bernardo Leighton y Luis Maira por el PDC y Anselmo Sule, Orlando Millas y Luis Herrera por la Unidad Popular, siendo aprobadas por 94 votos y 10 abstenciones, en sesión del 15 de octubre de 1970.

b) La opción de la Derecha, representada por el Partido Nacional, fue llamar a los Senadores y Diputados a votar en el Congreso Pleno por la segunda mayoría, Jorge Alessandri. Esta maniobra política fracasó, cuando Alessandri, en un gesto democrático, hizo una declaración pública el 19 de octubre en la que renunció a esa postulación, llamando abiertamente a los parlamentarios a no votar por él, con el propósito manifiesto de contribuir a que (textualmente) “don Salvador Allende asuma el mando supremo en un clima de la mayor tranquilidad”.¹¹ Según Rafael Agustín Gumucio, “la maniobra fracasó porque la gran mayoría de la Junta Nacional del PDC se inclinó por respetar la tradición”.¹²

No obstante, Francisco Bulnes Sanfuentes y Sergio Onofre Jarpa, altos dirigentes del Partido Nacional, insistieron en votar por Alessandri en el Congreso Pleno y en el caso de que éste renunciara al cargo de Presidente, se llamaría a una nueva elección presidencial, donde se exploraría la posibilidad de que Eduardo Frei aceptara ser candidato, hecho que no constituiría reelección, pues existiría el breve interregno de la presidencia de Alessandri; maniobra que fracasó por la insistencia de Jorge Alessandri a respetar la primera mayoría obtenida por Allende.

c) La opción del golpe militar se jugó desde el primer día que triunfó Allende. En esa noche del 4 de septiembre, mientras se anunciaban oficialmente los cómputos casi finales de los escrutinios, que daban una mayoría a Salvador Allende, se vivió un momento angustiante cuando tanques y militares, dirigidos por el general Camilo Valenzuela, avanzaron hacia el Palacio Presidencial de La Moneda, obligando a periodistas, como Augusto Olivares del Canal 9 de TV de la Universidad de Chile, a dirigirse al escenario de los extraños sucesos, preocupado por la movilización militar. En ese momento, ningún político relacionó el insólito movimiento de tanques con un intento golpista, aunque documentos posteriores demostraron que en ese momento el general Camilo Valenzuela ya estaba ligado a la CIA, llegando a ser poco después una pieza clave en los planes de secuestro del general Schneider, según los propios documentos de la CIA.

A las 22,30 horas, "el Ministerio del Interior prometió, tras dar las últimas cifras parciales, que 'en cinco minutos más' se entregaría el escrutinio final. Fueron, acotó Hernán Millas, 'los cinco minutos más largos del año'. Sólo a las 1,45 de la madrugada del día siguiente, el ministro Rojas entregó los resultados".¹³

Al mismo tiempo, connotados dirigentes políticos se dirigieron esa noche a la calle Phillip, residencia de Jorge

Alessandri, para conocer su opinión sobre el resultado de las elecciones. Contestó que su Comando Electoral reconocía el triunfo de Allende y que si había alguna intención de desconocer al vencedor que lo pensarán dos veces porque se podría producir una rebelión popular.¹⁴

En las primeras semanas de octubre se produjeron hechos alarmantes: el atentado contra Allende del ex-mayor Arturo Marshall con un fusil de mira telescópica, el intento dinamitero en el Aeropuerto de Pudahuel, el atentado a Aniceto Rodríguez, secretario general del Partido Socialista, y el complot de militares retirados, entre los cuales destacaban Héctor Martínez Amaro, Manuel Mayorga y Hugo Schmidt. En agosto de 1970, el Mayor López había publicado un artículo en el órgano oficial del Estado Mayor, la revista "Memorial del Ejército de Chile", en el que manifestaba: "Es más importante evitar el desencadenamiento de la violencia que reprimirla o planificar la represión".¹⁵ Y antes, en marzo de 1970, cuando se vislumbraba el triunfo de Allende, se produjo "el complot de Semana Santa", dirigido por el ex-general ibañista Horacio Gamboa Núñez y el mayor Arturo Marshall, que habían suscrito un Acta de Deposition del Presidente Frei.

Desde las primeras semanas de septiembre 1970, la Derecha trató de ganar base social en la pequeña burguesía y las capas medias asalariadas para impedir que Allende asumiera como Presidente. El principal diario de Chile, "El Mercurio", en su edición del 13 de septiembre llamó a estos sectores a exigir mayores garantías para conservar sus casas y autos, como si Allende hubiera declarado alguna vez que se las quitaría: "Resulta conveniente que los sectores medios analicen en su significado y alcance exacto las garantías que se les ofrecen". El mismo día, "El Mercurio" procuraba en su editorial sembrar el pánico en los dueños de camiones, autobuses y del comercio detallista.

El intento de ampliar la base social pequeño burgue-

sa lo hizo más claramente el grupo fascistoide "Patria y Libertad", consciente de la táctica utilizada por Mussolini y Hitler para ganar a los estratos medios conservadores, ansiosos de un gobierno autoritario. Su jefe, Pablo Rodríguez G., llamó en la Concentración del 14 de septiembre, efectuada en el Estadio Chile, a crear una "espada civil": "No pasarán, ¡no pueden pasar! (...) Este proceso electoral terminará pese a quien pese y pase lo que pase (...) Los que piensan que llevamos a Chile a una guerra civil es porque tienen temor de ejercer los derechos, porque tienen miedo y son cobardes (...) Si quieren la guerra civil, aquí nos encontrarán de pie (...) Les advertimos que restableceremos el orden en Chile y usaremos la fuerza si es necesario"¹⁶

El general Viaux manifestó el 16 de septiembre que la "Patria no se negocia ni se transa" y que estaba dispuesto a luchar "con sus compañeros de armas". Por su parte, la FEUC (Federación de Estudiantes de la Universidad Católica), en su Declaración del 14 de septiembre hizo un llamado a los católicos "a despertar su conciencia religiosa y a pedir a Dios -con fe pública y profunda- que su Providencia interceda para salvar a Chile del marxismo (...) No escatimaremos esfuerzos, sacrificios ni riesgos, cualquiera que éstos fueren, porque es la Patria misma la que está en juego".¹⁷

Documentos de Octubre 1970, prueban que la CIA estaba ligada a un sector de militares, mientras sus agentes trataban de provocar una respuesta terrorista de la izquierda, como dice uno de sus documentos: "También continúan los esfuerzos para provocar en la extrema izquierda una reacción violenta, que produciría el ambiente necesario para una intervención militar".¹⁸ A mediados de Octubre, altos oficiales de la Armada comunicaron a Allende "la existencia de insospechadas marejadas: el Comandante en Jefe, Almirante Porta Angulo, fue reemplazado

por el Jefe de la Zona Naval de Valparaíso, Almirante Barrios Tirado".¹⁹

La escalada golpista tuvo su punto más álgido en el atentado a René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército el día 22 de octubre a las 8,45 horas. La operación fue dirigida y ejecutada por el general Roberto Viaux, el mismo autor del conato de golpe contra Frei, analizado en páginas anteriores. El atentado, efectuado pocas horas antes de la sesión del Congreso Pleno, terminó en un enfrentamiento en el que fue herido de gravedad el general Schneider, que había mostrado una vocación democrática tan manifiesta en favor del gobierno legítimamente elegido que llegó a denominarse "Doctrina Schneider".

A las 21.30 horas del 22 de octubre, el Presidente Frei se dirigió al país por cadena nacional. Cuando pronunciaba sus primeras frases fue interrumpido en el momento que decía: el atentado a Schneider "al igual que otros..." se oyeron voces, cortándose de inmediato la transmisión. Media hora después, Frei retomó su discurso omitiendo la primera frase. Esta situación insólita fue escuchada por miles de personas, pero curiosa y decididamente no fue comentada por la prensa.²⁰

Fuentes documentales prueban que el Departamento de Estado y la CIA (Central de Inteligencia Americana) desempeñaron un papel activo en la preparación de un golpe militar entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre, hecho investigado por la Comisión del Congreso, presidida por el senador Frank Church.²¹ Los agentes de la ITT (International Telephone and Telegraph), Berrelex y Hendrix, consignaron en sus informes del 15 de septiembre que "el Embajador Edward Korry recibió finalmente un mensaje del Departamento de Estado dándole luz verde para actuar en nombre del Presidente Nixon. El mensaje le dio autoridad máxima para hacer todo lo posible

—menos una acción tipo República Dominicana— para impedir que Allende tomara el poder”.²²

El Embajador Edward Korry, periodista y corresponsal de guerra en Europa a fines la II guerra mundial, en su informe al presidente Nixon advertía acerca del peligro de que Allende tomara la Presidencia: “Chile votó con calma para tener un Estado marxista-leninista, la primera nación del mundo en hacer esta elección libremente y con conocimiento. Tendrá un efecto muy profundo en América Latina”. En sus “Memorias”, Henry Kissinger escribió que inmediatamente después del triunfo electoral de Allende, Nixon “estaba fuera de sí. Por más de una década había criticado duramente las administraciones demócratas por permitir el establecimiento del poder comunista en Cuba. Y ahora, otra Cuba había surgido a la vida durante su propia administración”.²³

Documentos desclasificados de los Archivos de EE.UU. en noviembre de 1998, revelan que en septiembre de 1970 el Presidente Richard Nixon dio Visto Bueno al Proyecto “Fubelt”, programado por Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional, y Richard Holmes, Director de la CIA, de impedir que Allende se hiciera cargo del gobierno de Chile, para cuyo fin se destinaron 10 millones de dólares. Además, señalaba que dicho Proyecto quedó bajo la supervisión de Thomas Karamessines, jefe de Planes de la CIA, quien respaldaba las actividades conspirativas del general Roberto Viaux, plan denominado “Track II”. En esos 20 documentos desclasificados —algunos borroneados— se decía que la Derecha chilena era ciega y “deambulaba en una miopía de arrogante estupidez”, pues predicaba “la venganza contra los democristianos, a quienes consideraban como un enemigo más justificable, por su traición a su clase, que su enemigo de clase”.²⁴

Veinticuatro años después, William Colby, Director de la CIA (1973-76), bajo Richard Nixon y Gerald Ford,

manifestó el 26 de mayo de 1994 en el Canal 7 de Televisión en un reportaje del programa “El Mirador”, conducido por Patricio Bañados, cuestiones importantes. Ante la pregunta del periodista sobre si la CIA había intervenido en el golpe militar de 1973, respondió que efectivamente la CIA respaldó esta intervención de las FF.AA., pero que su mayor intervención se produjo inmediatamente después de conocido el triunfo de de la Unidad Popular porque EE.UU. no estaba dispuesto a permitir una nueva Cuba; estrategia que se logró concretar en octubre de 1970 con el atentado al general Schneider: “Se pensó que si se lo quitaba de en medio, no asesinandolo, sino que con un secuestro, el resto de los militares accedería a llevar a cabo un golpe contra el señor Allende. Pero lo que sucedió fue que el grupo que ayudamos con armas, porque eran dos los grupos que planeaban secuestrar al general Schneider, no participó en el asalto. Quien efectivamente lo realizó fue el otro grupo, con el que habíamos cortado relaciones porque eran muy irresponsables”.²⁵

Colby aludía al general Roberto Viaux, a Mario Igualt, Luis Binet, Raúl Cosmelli y otros, que fueron detenidos, procesados y condenados, principalmente Viaux, quien salió al Paraguay de Stroessner y más tarde retornó a Chile durante el gobierno militar. Finalmente, Colby reconoció que la CIA entregó dinero para evitar que Allende subiera al gobierno: “No era dinero para sobornar ni para beneficio personal, sino para activistas y publicaciones. Pero siempre manteníamos control sobre cómo se usaba ese dinero, y teníamos maneras de verificar si efectivamente un diario aumentaba su tiraje gracias a nuestra ayuda”.²⁶

Schneider falleció el 23 de octubre, quedando paralizada la estrategia de la CIA que, según Colby, consistía en secuestrar por unos días al general Schneider, culpando del atentado a la izquierda, con el fin de cerrar las fisuras que existían en el Ejército y homogeneizar sus cuadros para

encauzar el golpe sin divisiones internas. Pero el plan fracasó al adelantarse el comando de Viaux; el crimen de un general contra otro general agudizó la división en las filas del Ejército, haciendo imposible la consumación del golpe que meticulosamente había planificado la CIA.

Uno de los mejores periodistas que ha tenido Chile, Luis Hernández Parker, dijo entonces en un artículo de la revista "Ercilla": "Schneider pagó con su vida ser obediente a la Constitución (...) Quedó demostrado que el asesinato de Schneider fue un pretexto y que el verdadero objetivo fue comprometer a las FF.AA. en un golpe de Estado".²⁷

El Congreso Nacional aprobó la Reforma Constitucional el 22 de octubre, luego que Allende modificara en parte las condiciones exigidas por la DC, lo que explica que los 80 parlamentarios de la Unidad Popular votaran a favor, absteniéndose los 45 diputados y senadores del Partido Nacional. Allende quedó proclamado Presidente por el Congreso Pleno el 24 de octubre, asumiendo el gobierno el 4 de noviembre.

Las primeras medidas del Presidente Allende

Con las principales medidas adoptadas por Allende desde el 4 de noviembre hasta mediados de 1972 se cumplió, a nuestro juicio, la primera fase del gobierno de la Unidad Popular. La segunda, se inició con el Paro Patronal de octubre de ese año hasta el conato de golpe expresado en el llamado "tanquetazo" de junio 1973. Y la tercera terminó con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973; fases que pasamos a desarrollar en detalle.

El triunfo de la Unidad Popular se dio en una coyuntura de ascenso de los Movimientos Sociales de América Latina: la rebelión de los estudiantes y trabajadores argentinos, expresada en el "cordobazo" de 1968, varias huelgas generales en Uruguay, luchas de los campesinos y obre-

ros de Bolivia que culminaron en la Asamblea Popular, durante el gobierno nacional-antiimperialista del general Torres y las acciones de protesta en casi todas las naciones latinoamericanas con ocasión de la gira de Rockefeller. De hecho, en el Cono Sur se estaba produciendo un proceso de regionalización hacia el cambio social. Chile no era una excepción con la "vía chilena hacia el socialismo".

Los partidarios de la UP caracterizaron a la administración Allende como un gobierno de "transición en la transición"; otros, como un gobierno de trabajadores, no faltando quienes hablaron de un gobierno burgués de corte frente-populista, caracterización incorrecta históricamente, porque en el Frente Popular de 1938 hubo un partido burgués, como el Radical, que dirigió la alianza. En cambio, el gobierno de la UP fue el resultado de una coalición hegemónica por los partidos de izquierda, PC y PS. Los sectores residuales de la burguesía, que en un principio respaldaron a Allende, como el PR se desgajaron al dividirse ese partido, pasando una fracción a la oposición.

El PC interpretó el triunfo de Allende como la confirmación de su tesis de la "vía pacífica" al socialismo, cuando era evidente que los empresarios y el capital foráneo, respaldado por EE.UU., cuestionaron desde el comienzo la victoria político-electoral de la izquierda, amenazando con la intervención armada. Durante 1971 destinaron 2.500 millones de dólares para subvencionar la prensa opositora.²⁸ Redujeron la asistencia económica norteamericana de 80 millones de dólares en 1969 a 8,6 millones en 1971; la asistencia militar de 11,8 millones en 1969 a 5,7 millones en 1971 y el total de asistencia de otros organismos internacionales de 76,4 millones en 1970 a 15,4 millones en 1971, cifras que descendieron en 1972 y 1973.

Las "Primeras cuarenta medidas básicas" anunciadas por Allende se reflejaron pronto en las inversiones sociales en Educación, Salud y Vivienda y en el respeto a las

leyes laborales, hasta entonces vulneradas por los empresarios del campo y la ciudad. Chile restableció las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. El gobierno de Allende se adhirió a los principios universales de la no intervención y el derecho a la autodeterminación de las naciones, proclamando a Chile como un País no alineado.

En 1971 se aprobó la principal medida prometida por Allende: la Nacionalización de las minas de Cobre, prosiguiendo con el salitre y el carbón, la estatización de la Banca y la nacionalización de la Compañía de Teléfonos (ITT).²⁹

La Nacionalización del Cobre

En enero de 1971, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de Reforma Constitucional relacionado con la gran minería del cobre, que planteaba básicamente la estatización de las minas explotadas por las empresas extranjeras, descontando de la indemnización anterior las utilidades contables excesivas logradas por las Compañías en la Ley del Nuevo Trato. Luego de un prolongado debate, el 11 de julio de 1971 el Congreso Pleno aprobó por unanimidad la histórica proposición del presidente Allende.

La indemnización a pagar por las minas estatizadas debía pasar por los siguientes trámites: la Contraloría General de la República estaba encargada de avaluar el valor de libro de las empresas al 31 de diciembre de 1970, descontando de esta cifra las revalorizaciones efectuadas a partir del 1° de enero de 1965, el valor de los bienes mal aprovechados y lo que el presidente estimara como rentabilidad excesiva: recuperar para el Estado la "renta económica" percibida en los últimos años por las empresas foráneas. Asimismo, la Reforma Constitucional estableció que las partes tenían derecho a apelar de la decisión del Contralor ante un tribunal especial.

De acuerdo con esto, la indemnización que correspondió a cada empresa fue la siguiente, en dólares:

Cía. de Cobre Chuquicamata S.A.	menos	76.500.937,07
Cía. de Cobre El Salvador	menos	1.577.634,58
Cía. Minera exótica S.A.	más	10.010.445,11
Cía. Minera El Teniente S.A.	menos	310.426.417,21
Cía. Minera Andina S.A.	más	18.269.701,35

"Las Compañías Exótica y Andina entraron en operación en 1971, por lo cual no estaban afectas al descuento por rentabilidad excesiva. En la Exótica, Anaconda era dueña del 75%, correspondiéndole 7,6 millones de dólares como indemnización; Cerro era propietaria del 70% de Andina, correspondiéndole una indemnización de 12,8 millones de dólares. De acuerdo a lo resuelto por el Contralor, no correspondía pagar indemnización en los casos de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente".³⁰

Estas cifras fueron el resultado de descontar de la indemnización fijada la suma de 774 millones de dólares por concepto de rentabilidades excesivas, cantidad que sumada a los descuentos establecidos por el Contralor, determinó que las Compañías foráneas quedaran adeudando 375 millones de dólares al Estado chileno. Cabe señalar que este total no incluyó unos 100 millones de dólares que las Compañías debían por concepto de participación de utilidades ni los metales nobles como el oro, plata, molibdeno y otros que sacaron de nuestro país sin que el Estado recibiera retribución alguna.

Aunque en algunas minas hubo mayor producción, la baja del precio del cobre en el mercado mundial afectó la rentabilidad de las empresas, a lo cual se sumó la escasez de insumos y de tecnología antes importada de Esta-

dos Unidos y el tradicional intercambio desigual de las grandes naciones capitalistas con las del Tercer Mundo.

Otras medidas de nacionalización: Salitre, Hierro y Carbón

En 1971, el gobierno allendista procedió a culminar el proceso de nacionalización del salitre, al estatizar la Compañía Salitrera Alemania y la Sociedad Química y Minera, sociedad mixta de capitales norteamericanos con el Estado, en cual éste participaba con un 37%. La compra de SOQUIMICH, que poseía las salitreras de la Anglo-Lautaro y Victoria, significó que toda la producción salitrera quedara en manos del Estado chileno.

Asimismo, se completó el proceso de estatización de las empresas explotadoras de hierro, que antes se limitaba al yacimiento Algarrobo, administrado por la Cía. de Acero del Pacífico (CAP). En 1971, el Estado pasó a controlar, a través de la CORFO, la totalidad de las acciones de la CAP, nacionalizando las operaciones de la Bethlehem Iron Mines, que operaba en los minerales de El Tofo y Romeral, además de la estatización de las Compañías Santa Bárbara y Santa Fe. Entonces, el Estado pasó a controlar en 1971 el 95% de la producción de hierro y de su proceso de comercialización, si se agrega la estatización de la Compañía Carbonífera de Lota-Schwager.

La profundización de la Reforma Agraria

En los primeros 18 meses de su gobierno, Allende procedió a expropiar 371.229 Hás. de riego, 877.553 Hás. de secano arables y 4.045.974 Hás. de riego básico; en total: 5.294.756 hectáreas. Las subdivisiones de tierras del gobierno de Frei se duplicaron.³¹ En los meses siguientes hasta agosto de 1973, estas cifras subieron hasta sobrepasar 5 millones y medio de hectáreas expropiadas y distri-

buidas a los campesinos que, sumadas a las expropiadas por el gobierno de Frei, conducían a la cuasi extinción del latifundio incultivado en Chile. Una investigación de principios de 1972 señalaba: "El gobierno ha hecho pública su voluntad de terminar con el latifundio –lo que significa expropiar aún unos 2.000 a 2.500 predios– en dos años más, o sea, a fines de 1973".³²

Cabe destacar que las expropiaciones de tierras se ajustaron estrictamente a los disposiciones de la Ley de Reforma Agraria de 1967 y a las recomendaciones de la Conferencia Regional de la CEPAL de 1970.

Según connotados especialistas del tema: "el área sembrada no bajó en las unidades reformadas, sino más bien aumentó en algunos rubros, mientras que el valor de la producción agropecuaria global aumentó aproximadamente en un 5% en 1970-71 y en un 1,6% en 1971-72 (...) Si uno compara el proceso de reforma agraria en Chile con procesos parecidos en otros países de América Latina o del mundo, se queda impresionado con el éxito relativo alcanzado (...) En Chile se ha efectuado un cambio rápido en el sistema de tenencia de la tierra eliminando virtualmente los latifundios definidos legalmente como propiedades de más de 80 Hás. Además, se han efectuado ciertos cambios en las relaciones de crédito, en la comercialización y en los precios. Los campesinos han participado en el proceso más que antes (...) Los campesinos y el Estado controlan aproximadamente el 35% de la tierra agrícola (cultivada). Sin embargo, casi un 30% de la tierra agrícola está en manos de particulares de predios entre las 40 y las 80 Hás (...) En 1965 existían alrededor de 4.876 predios mayores de 80 Hás. equivalentes al 2% de las propiedades, comprendiendo alrededor del 55% de la tierra productiva. A mediados de 1972 quedaban unos 200 de estos latifundios con menos del 3% de la superficie productiva".³³

Sin embargo, los ingresos agrícolas promedios por

persona continuaban más bajos que el promedio nacional, a pesar de los sustanciosos subsidios del gobierno; la planificación agrícola gubernamental era apreciablemente ineficaz; la tecnología aún tradicional, la organización económica y social de los campesinos beneficiados presentaba serias debilidades, en gran medida porque los partidos de la UP no se ponían de acuerdo para establecer claras reglas institucionales en los Asentamientos y Centros de Reforma Agraria (CERA). Además, “la concentración en las ciudades de la inmensa mayoría de la burocracia ha conducido a una estructura administrativa que tiene poco que ver con las necesidades actuales del país, paralizando muchas de las iniciativas del Presidente”.³⁴

Los Centros de Reforma fueron concebidos como “una gran cooperativa” que unificaría varias parcelas “en un predio de tamaño económico óptimo”, incorporando el máximo de miembros permanentes, con el fin de resolver el problema del desempleo. A diferencia del asentamiento, “el CERA se caracterizaba por la igualdad económica y social de los diferentes grupos campesinos que trabajaban en el predio, todos los cuales eran miembros igualitarios de la cooperativa. En contraste con el asentamiento, “el CERA da a la mujer los mismos derechos que a los hombres por primera vez en la historia rural chilena (...) era una combinación de moralidad socialista con incentivos capitalistas. A los trabajadores se les garantizaba el mismo salario mínimo igualitario, pagando dividendos por mayor productividad.³⁵ Aunque el número de familias que agruparon los CERAS fue menos de lo esperado, pues en 1973 apenas sobrepasó las 3.000 familias, fue una relevante experiencia de autogestión campesina.

Los Centros de Producción eran empresas estatales con mejor tecnología y un mayor cuidado por el ecosistema, dando mayores posibilidades de trabajo estable. Era una variante de hacienda estatal, pero sin la traba burocrática

de la administración tradicional y con una activa participación de los trabajadores. También se agruparon minifundios en cooperativas, en particular en la zona mapuche. Otra medida importante, adoptada en abril de 1972, fue transformar los grandes viñedos en empresas mixtas.

De todos modos, quedó un alto porcentaje de minifundios y un número apreciable del tradicional desempleo campesino, pues el gobierno no pudo disponer de recursos para modernizar las actividades agrícolas, a pesar de que el presupuesto para la reforma agraria fue duplicado en 1971 respecto de 1970.

La estatización de la Banca y de la Cía. de Teléfonos ITT

Los principales Bancos pasaron a manos del Estado, a raíz de la medida de Estatización de los Bancos extranjeros y de la banca privada chilena. Hasta 1970, el 10% de estos bancos monopolizaba más del 50% de las colocaciones e inversiones; solamente 3 bancos concentraban un 45% de los depósitos, 55,1% de las utilidades y 44,3% de las colocaciones.³⁶ Asimismo, 52 directores de los 5 mayores bancos privados ocupaban 316 puestos en los directorios de Sociedades Anónimas, mientras un Director del Banco Chile en febrero de 1971 ejercía esa misma función en 113 Sociedades Anónimas.³⁷ Por su parte, los inversionistas extranjeros se beneficiaban de la obtención de créditos con tasas más bajas que las vigentes en sus países.

La estatización de los bancos privados comenzó en enero de 1971, a través de la compra de acciones por la CORFO, organismo facultado por gobiernos anteriores para cumplir esa función, que delegó poderes en el Banco Central, el cual destinó 400 millones de escudos para tal efecto. Mediante esta acción legalmente estatuida, en la mitad de los 23 bancos privados nacionales, el Estado pasó a ser dueño de más del 50% de las acciones.

Al mismo tiempo, se inició la compra de las acciones de los bancos extranjeros más importantes, como el First National City Bank, el Banco de Londres y el Francés e Italiano. "La operación se llevó a efecto con el total acuerdo entre las partes. La compra de estos bancos se hizo a través de un crédito que los bancos extranjeros concedieron a los bancos nacionales compradores y con un plazo que varió, en cada caso, entre 5 y 7 años".³⁸

Como resultado, cambió el destino de los créditos, en un sentido favorable a los medianos y pequeños productores urbanos y rurales, con tasas rebajadas de un 18% a un 12% si el crédito era solicitado por asentamientos, cooperativas y otras organizaciones agrarias coordinadas por INDAP. Así comenzó a implementarse la política de democratización en la distribución del crédito.

Paralelamente, fue nacionalizada la Compañía de Teléfono y Telégrafo, propiedad de la ITT, afectando las cuantiosas inversiones que tenía EE.UU. en Chile, hecho que recrudeció la ofensiva del Departamento de Estado contra el gobierno de la UP.

Cambios en el área de la Comercialización y Distribución

Hasta fines de 1970, estas actividades eran monopolizadas por empresas oligopólicas, como Williamson Balfour, Weir Scott, Gibbs, Duncan Fox y Codina. El gobierno de Allende decidió en 1971 crear empresas del Estado encargadas de la comercialización y distribución, creando organismos, como ENAVI, ECA, DINAC, SOCOAGRO, DINATEX, para garantizar la comercialización por sectores productivos y reorientar la distribución nacional, que lesionó los intereses de los monopolios pero sin reemplazar a los comerciantes minoristas.

El gobierno promovió la creación de Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), integradas en cada Comuna

por sus mismos habitantes, generando un proceso de autogestión en la distribución de alimentos a los sectores más necesitados. Las empresas del Area Social distribuían directamente sus productos a las Poblaciones de acuerdo al monto que las JAP habían solicitado a los organismos estatales mencionados anteriormente, al que pronto se sumó DIRINCO.³⁹

Creación del Area de Propiedad Social

El Area de Propiedad Social (APS) se constituyó con las empresas nacionalizadas, como el cobre, salitre, carbón, teléfonos y telégrafo, junto con las que ya existían estatizadas más 90 nuevas empresas estatizadas entre noviembre de 1970 y fines de 1972.

En el Mensaje del 4 de marzo de 1971 al Congreso Nacional, el presidente Salvador Allende manifestó: "La construcción del área de Propiedad Social es uno de nuestros objetivos. La incorporación a ella de la mayor parte de nuestras riquezas básicas, del sistema bancario, del latifundio, de la mayor parte de nuestro comercio exterior, de los monopolios industriales y de distribución, es un área ya iniciada, que debemos profundizar (...) La importancia del sector público es tradicional en nuestro país. Aproximadamente el 40% del gasto es público. Más del 70% de la inversión es de origen estatal. El sector público fue creado por la burguesía nacional para favorecer la acumulación privada, para consolidar las estructuras productivas concentradas desde el punto de vista tecnológico y patrimonial (...) Nuestro Gobierno pretende hacerlo cuantitativamente más importante todavía, pero también cualitativamente distinto".

El proceso de estatización de empresas provenía de anteriores gobiernos como resultado de las nuevas funciones que había asumido el Estado desde la década de

1930 hasta la propia administración derechista de Jorge Alessandri, acelerándose bajo el gobierno de Eduardo Frei con la “chilenización” o “nacionalización pactada” de las empresas extranjeras del cobre. Por consiguiente, el Estado estaba facultado para nacionalizar y comprar empresas, según las pre-existentes reformas constitucionales aprobadas por el Congreso Nacional.

La justificación de esta medida estaba fundamentada en el proceso de concentración monopólica que se había producido desde la década de 1950, especialmente, hasta fines de 1970. Contradictoriamente, el proceso de estatización y concentración monopólica industrial, concretado anteriormente por los gobiernos de la clase dominante, facilitaron a la UP la creación del Area de Propiedad Social, fundamentada sobre bases legales y estrictamente constitucionales.⁴⁰ Se rescataron leyes olvidadas y nunca derogadas –entre ellas la dictada no durante la breve “República Socialista” (4 al 16 junio 1932), como se ha dicho, sino en el también breve gobierno de centro de Carlos Dávila: Decreto Ley N° 520 del 30 de agosto de 1932 dando origen al Comisariato General de Subsistencia y Precios– que se popularizaron con el nombre de “resquicios legales”.

En el área de propiedad social y mixta se hicieron operaciones de “mercado abierto” efectuadas por el Estado a través de la CORFO, como sucedió con la Banca; intervención directa en ciertas empresas, avaladas en disposiciones constitucionales⁴¹, además de intervenir las empresas que entraran en receso, no cumplieran con la obligación de producir y distribuir artículos de primera necesidad, además de especular con los precios.

El gobierno de Allende presentó al Parlamento a fines de 1971 un Proyecto de Ley sobre las áreas de la Economía y la participación de los trabajadores, que fue explicitado a principios de abril de 1972 como agregado a

las observaciones del Poder Ejecutivo de dos senadores de la Derecha al Proyecto de Reforma Constitucional.

Los parlamentarios de la Derecha y el Centro trataron de obstaculizar su aprobación y de limitar los recursos, obstruyendo el despacho de la Ley de Presupuesto de 1972. Más aún, el PDC presentó en 1972 un Proyecto de Ley destinado a bloquear el desarrollo del Area de Propiedad Social y Mixta, modificando el inciso 10, párrafo 10, referente a las Garantías Constitucionales sobre la propiedad, y el artículo 44 sobre atribuciones del Congreso Nacional. El objetivo de la DC era “privar al gobierno de la posibilidad de decisión acerca de cuáles son las empresas que deben ser estatizadas. Por otra parte, también le quita los mecanismos que necesita para efectuar las estatizaciones sin pasar por el Parlamento, ya que según ese proyecto tampoco podrá el Ejecutivo adquirir acciones o derechos sobre empresas sin la autorización del Parlamento”. Como justificación, el senador Hamilton argumentó “ineficiencia y despilfarro”, además de una crítica insólita: “el manejo estatal y centralizado comienza a asfixiar la libre creatividad de los trabajadores”.⁴²

De las 90 empresas a estatizar, 74 eran del sector industrial, 6 del comercio mayorista, 4 de electricidad, gas y agua y 6 de transporte y comunicaciones. Encargada de canalizar el Area de Propiedad Social y Mixta fue la Corporación de Fomento (CORFO), creadora de los Comités Sectoriales de Desarrollo: Agro-industria, Sidero-metalúrgico, Textil, Energía, Forestal, Pesquero, Automotriz y Químico. En las industrias del Area Social, la producción aumentó un 15% durante 1971, según el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, con mayores aumentos en el sector químico y alimenticio y, sobre todo, en una de las zonas industriales más importante: Concepción, donde la producción creció un 21% en 1971 contra menos del 3% en el período 1967-70.⁴³

La participación de los trabajadores en estas empre-

sas fue desigual, entre otras causas por la diferencia de opiniones dentro de la (CUT) y en los sindicatos de base, donde se disputaban el control los militantes de los partidos de la UP, actuando de manera sectaria y verticalista. De todos modos, la presión de los trabajadores interesados en esta alternativa –que rebasaba el control obrero y facilitaba gestiones de administración de las empresas– logró en 1972 la participación activa de 150.000 asalariados en 120 empresas del área social, de las cuales 35 tenían Comités de Producción, 30 los Comités Coordinadores de Trabajadores y más de 40 con Comités de Administración, especialmente en textiles y metalurgia.⁴⁴

Esta cantidad era superior si se considera otras áreas de propiedad social: 71.000 trabajadores que habían llegado a la administración de empresas a través de los Consejos de Administración, 44.000 obreros y empleados en Comités Coordinadores y cerca de 100.000 representados en los Comités de Producción. Sin embargo, esta cifra era escasa en comparación con el total de la fuerza de trabajo y con la cantidad de afiliados a los sindicatos y a la CUT.

Los Movimientos Sociales y su grado de Autonomía.

Los **Asalariados**, tanto los obreros como los empleados alcanzaron en este período un alto grado de conciencia de clase como también de conciencia política de clase, pues no sólo tuvieron más claras sus reivindicaciones económicas (salariales y previsionales) sino un programa político para el cambio social, conciencia política masiva de clase, raras veces alcanzada en procesos que no desembocan en Revolución y toma real del poder, hecho que no sucedió bajo la Unidad Popular en la cual se vivió una coyuntura pre-revolucionaria frustrada por la política “etapista” de los partidos de izquierda y el golpe militar.

La conciencia política de clase se había dado en cier-

tos períodos de la historia chilena con la creación del POS, liderado por Recabarren, del PC en la década de 1920 y del PS en los años 30, interrumpida por la política de colaboración de clases bajo el Frente Popular. Renació con la creación de la CUT, presidida por Clotario Blest, que rebasó los tradicionales marcos del economicismo sindical para elevarse a un plano político nacional con la Declaración de Principios de 1953 al plantear que la CUT aspiraba a reemplazar el sistema capitalista. Y adquirió mayor grado de conciencia política cuando los explotados y oprimidos le dieron la primera mayoría electoral a Allende y lograron una mayor identidad cuando identificaron a la clase dominante como golpista, en alianza con las FF.AA.

La conciencia de clase se reforzó durante la Unidad Popular con varios avances. Uno de ellos fue el proceso de sindicalización que aumentó al 27% en el sector privado y en el sector de Trabajadores del Estado al 95,7%, según el estudio de Clotario Blest,⁴⁵ cifra alcanzada en ese entonces por pocos países, incluso aquellos como los de Europa.

Otro paso en la identidad de clase y de pertenencia al sindicato fue el proceso acelerado de huelgas. En 1971 se produjeron 2.709 y en el primer semestre de 1972 unas 1.760 huelgas no sólo por reivindicaciones económicas sino también por su intervención en la expropiación de empresas monopólicas. El movimiento se propagó al campo, donde en 1971 hubo huelgas en 1.758 predios, efectuando 1.278 “tomas” de fundos, muchas de ellas “a puertas cerradas” para impedir que los patrones sacaran maquinarias y ganado, antes de ser afectados por las disposiciones de la Reforma Agraria. Los mapuches volvieron a su ancestral lucha por la recuperación de sus tierras, arrebatadas por los explotadores “huincas” desde hacía más de cuatro siglos. A partir de mayo 1972, se produjo un aumento significativo de las ocupación de fábricas, de fundos y de terrenos en las poblaciones urbano-periféricas pobres.

Los Cordones Industriales y los Comandos Comunales sobrepasan el verticalismo de los partidos de la UP.

Los Cordones industriales fueron las organizaciones de base más importantes del movimiento sindical durante el gobierno de Allende, retomando la experiencia territorial de las Mancomunales de principios del siglo XX. Se estructuraron con un criterio zonal, como los siete Cordones de Santiago, entre ellos el de Vicuña Mackenna, San Joaquín, Cerrillos y otras comunas de Santiago, además de los de provincias, especialmente Concepción y Valparaíso. No se organizaron por gremios sino por sindicatos de base de todas las fábricas y empresas de la Comuna. Por eso, resultó equivocada la respuesta de la CUT: los Cordones Industriales están provocando la división del movimiento sindical; crítica contestada por los dirigentes de los Cordones: los sindicatos de distintos gremios de la Comuna, agrupados en nuestra organización territorial, no se han desafiado de sus respectivas Federaciones integradas a la CUT sino que, por ejemplo, el Sindicato textil Hirmas, Yarur y otros siguen perteneciendo a la Federación Textil de la CUT, al igual que los sindicatos de la Federación Metalúrgica, de la Química y Alimentación.

Para reforzar su organización territorial, los Cordones Industriales se relacionaron con los Comandos Comunales formados por los pobladores de la misma Comuna o zona que los sindicatos. De ese modo, lograron formar un vigoroso movimiento local, que a medida que se agudizaba la lucha de clases, se fueron convirtiendo en embriones de poder local, que algunos confundieron con una dualidad de poder con el gobierno allendista, cuando en rigor apoyaban, con algunas críticas, al Presidente de la República.

Efectivamente, los Cordones sobrepasaron en varias ocasiones a los partidos de la UP porque se estructuraron desde la base, con sindicalistas combativos sin partido o

simpatizantes de izquierda. Sus resoluciones no se adaptaron a los vaivenes y tácticas coyunturales del gobierno y de la CUT, sino a las decisiones democráticas de las bases, que anhelaban caminar hacia metas más definidas y radicales que las del propio gobierno, reafirmando así su autonomía. Existen investigaciones exhaustivas sobre el tema —especialmente el voluminoso y documentado libro de Miguel Silva: **Los Cordones Industriales y el socialismo desde abajo**— que demuestran el papel fundamental que jugaron estas organizaciones en el control obrero y administración de empresas del área de propiedad social.

Más aún, frecuentemente rebasaban las demandas económicas, elevándose a un plano político-social de trascendencia nacional ante coyunturas cruciales. El periódico "Aurora de Chile", en su edición de julio 1973, luego del "tanquetazo" o intento golpista de Supper, manifestaba: "Los Cordones Industriales (CI) incorporan nuevos contingentes de clase que la CUT no integra, sindicatos no afiliados, trabajadores sin organización sindical, empleados del sector terciario. Los CI no están incorporados a la legalidad burguesa (...) Son los únicos organismos de clase capaces de incorporarse a un poder territorial, en una situación de enfrentamiento directo con la burguesía, con todas las ventajas estratégicas que ello significa".⁴⁶

Cuando los partidos de la UP hablaban de clase trabajadora se referían solamente a los obreros y empleados organizados en los sindicatos. Por eso, una de sus debilidades fue no haber contemplado las aspiraciones de los trabajadores inorganizados, sobre todo de las pequeñas empresas, donde laboraban 101.000 en el sector artesanal y 175.000 en la pequeña y mediana empresa, además de decenas de miles de trabajadores urbanos no fabriles, como los del comercio. Mario Durán decía: el proyecto de la UP de crear el Área de Propiedad Social sólo interesaba apenas a 180.000 trabajadores. "La cifra de trabajadores de la

pequeña empresa y artesanos alcanzaba a 280.000 aproximadamente y la gran mayoría de la clase obrera, sumados a la enorme cantidad de subocupados y desocupados, unos 400.000 quizá, daba una suma aproximada a los 700.000 trabajadores ajenos al proyecto político".⁴⁷

De todos modos, se dio en 1972 un paso importante de democratización sindical al convocar la CUT a elecciones nacionales directas para elegir una nueva directiva. Hasta entonces, y como era tradicional en todos los países, se elegía la Dirección nacional de la Central Sindical, indirectamente, por intermedio de delegados que representaban a un determinado número de afiliados. En 1972, los trabajadores chilenos votaron en sus sitios de trabajo, hecho democrático sin precedentes en la historia del movimiento sindical mundial. El resultado fue el siguiente: los delegados sindicales influidos por el PC obtuvieron 173.068 votos, los del PS 143.140, los del PDC 147.531, los del MAPU 25.983, los del P.Radical 21.910, los del FTR (MIR, FR y otros grupos) 10.192, los de la USOPO 5.420, los del PCR 3.390 y los de la Izquierda Cristiana 3.216.⁴⁸

Esta elección democrática mostró que la izquierda tradicional mantenía sus fuerzas en la CUT mientras la DC aumentaba su influencia en las bases sindicales, al igual que la flamante organización política, el MAPU. Lo más impactante fue la escasa votación de la izquierda revolucionaria, mostrando una débil influencia en el sector de los trabajadores organizados.

El proceso de radicalización de los trabajadores, tanto en conciencia de clase como en conciencia política, culminó con la respuesta combativa al Paro Patronal de octubre 1972, logrando los trabajadores abrir los candados de las fábricas para ponerlas en funcionamiento por vía autogestionaria, demostrando que las empresas pueden llegar a funcionar sin la necesidad de sus patrones, hecho inédito en la historia del movimiento obrero mundial. La

derrota social del lock-out patronal por la decidida acción de la clase trabajadora desarrolló un embrión de conciencia revolucionaria de clase, que es uno de los grados más alto de la conciencia asalariada. Este embrión tuvo su culminación en junio-julio de 1973, luego del abortado golpe militar de Souper. En ese momento, vastos sectores de la clase trabajadora tomaron conciencia de que se estaba jugando el poder y de que si no se armaban masivamente, la burguesía asestaría el golpe decisivo.

Algunas corrientes políticas opinaron que ese fue el momento clave para avanzar hacia la toma real del poder, aunque contrariaba la estrategia de la UP, cuyos dirigentes, en su gran mayoría, optaron en esa fase por la negociación con la DC. Otros analistas opinaron que el momento decisivo para avanzar políticamente fue la derrota del Paro Patronal de octubre 1972 porque la relación de fuerzas era todavía favorable a los oprimidos, pues la oposición no tenía definida la táctica del golpe militar a causa de la división en las FF.AA. entre el sector constitucionalista, encabezado por el general Carlos Prats, y los militares convencidos de la ilegitimidad del gobierno allendista.

Por otra parte, hubo analistas –a posteriori de los acontecimientos– que estimaron que el momento clave para avanzar dentro de la legalidad fue el resultado de las elecciones de abril 1971, donde la UP obtuvo el 50,01 por ciento de la votación a regidores, votación democrática nunca alcanzada por la izquierda mundial. Sin subestimar la importancia de la derrota del Paro Patronal de 1972, Gabriel Smirnow sostuvo que en abril de 1971 se reunieron tres condiciones que no se volverían a dar: "La mayoría del electorado se encontraba en las posiciones de la UP, la oposición burguesa no había logrado reconstituir su unidad puesto que los dos modelos alternativos se conservaban vigentes y diferenciados y la mayoría de los aparatos represivos se mantenía leal al régimen constitucional."⁴⁹

Salvador Allende respaldó el **movimiento de mujeres**, como ninguno de los anteriores presidentes de Chile, con hechos y no con promesas paternalistas, a pesar del rechazo del P.Nacional y el PDC, e inclusive con el desagrado de la mayoría de los dirigentes de la propia UP, atravesados por la tradicional ideología patriarcal.

Sensible a las demandas femeninas, Allende estimuló la participación de la mujer en varias áreas: a) en las empresas en que se desarrollaba el control y la administración de la producción; b) en las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP); c) en la autoconstrucción de viviendas y policlínicos; d) en las Juntas de Vecinos y los comandos comunales. Así, se fueron generando relaciones más transparentes entre mujer y hombre, aunque éstos mostraban un cierto resentimiento cuando la mujer, por ejemplo, se adelantaba a pagar el cine o la invitación a cenar, pues estaba en condiciones de hacerlo por el aumento de salarios durante los dos primeros años de gobierno.

Allende llegó a proponer la creación del Ministerio de la Mujer, pensando en designar ministra a Carmen Gloria Aguayo, aunque no pudo concretarlo a causa de la resistencia de los propios partidos de la UP. De todos modos, creó la Secretaría de la Mujer en 1971 como organismo integrante del gobierno. Ese mismo año, alentó un nuevo estatuto de la familia que contemplaba: derecho de las mujeres a celebrar contratos, enajenar e hipotecar sus bienes, sin autorización del marido; compartir con su pareja el cuidado y la mantención de los hijos; filiación única, terminando con las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos; una nueva juriricidad para la unión estable de la pareja no casada oficialmente por el Registro Civil; Tribunales de Familia integrados por un psicólogo, una asistente social y un abogado para promover el divorcio, luego de un tiempo prudencial de separación, sin obligarlos a rendir testimonios humillantes.

Paralelamente, el gobierno procuró aliviar la pesada carga de la mujer en el hogar, financiando Comedores Populares en las fábricas y en el concurrido edificio de la UNCTAD, en pleno centro de Santiago, además del "Programa de comidas preparadas", que puso a disposición de las mujeres asalariadas del área social más de 150.000 raciones de comida para que las comprasen y pudieran llevarlas a sus hogares. Se abrieron 467.000 nuevas plazas de trabajo destinadas sólo para mujeres.

Otras medidas fueron: el medio litro de leche para las mujeres embarazadas y lactantes, aumento del fuero maternal y obligación de las empresas, con más de 20 mujeres, a tener Salas-Cunas, aumento de 45 a 90 días del permiso post-natal; inauguración en 1971 del primer centro de atención post-natal para campesinas. Edificación de 73 nuevos jardines infantiles y refacción de 400 más. Inauguración del espacio denominado "Torre de la mujer" en el edificio de la UNCTAD, más tarde llamado Diego Portales; estímulo a la sindicalización de las empleadas domésticas, recomendando 8 horas de trabajo y permisos para estudiar en los colegios cercanos al trabajo.

Muchas mujeres formaron en 1971 Brigadas de Salud, que colaboraban con los policlínicos de las poblaciones más necesitadas. Durante 1972, las mujeres de la comuna de Barrancas de Santiago fundaron un Centro piloto para atender colectivamente los problemas de Salud, Vivienda, Educación y Transporte. Estas y otras iniciativas fueron respaldadas entusiastamente por las parlamentarias María Elena Carrera y Laura Allende, quien fue agredida en 1973 por un comando derechista cuando se movilizaba en su citroneta. En agosto de ese año, asambleas de mujeres campesinas se reunieron en las orillas del Bío-Bío para impulsar los Centros de Reforma Agraria (CERA), donde las mujeres tuvieron, por primera vez en la Historia de Chile, los mismos derechos a la tierra que los hom-

bres. “La participación de la mujer se hizo posible en razón de la necesidad de definir tanto la pertenencia a las unidades reformadas como al alcance del proceso de toma de decisiones (...) Una de las críticas más frecuentes hechas a los CERA era precisamente que permitían la participación de la mujer”.⁵⁰

A raíz del paro patronal de Octubre 1972, las mujeres de las poblaciones José María Caro y Santa Rosa con Joaquín (Santiago) rompieron los candados de los locales comerciales UNICOOP para contrarrestar el desabastecimiento, desencadenado artificialmente por la Derecha. Asimismo, trabajadoras de SOPROLE se tomaron la empresa para garantizar la distribución de leche, aumentando durante algunos días a 70.000 litros la producción, mediante trabajo voluntario. Agrupadas en un Frente Patriótico, las mujeres se pronunciaron contra las amenazas de golpe de estado. Durante 1972 y 1973 fueron corrientes los enfrentamientos entre mujeres antiallendistas de la alta y mediana burguesía con mujeres pobladoras y asalariadas en el centro de Santiago, primando los intereses políticos por encima de los de género.

En síntesis, el protagonismo social de la mujer bajo la Unidad Popular adquirió dimensiones masivas como nunca hubo en la historia chilena. Así se fue profundizando una conciencia política de clase a un nivel superior al de conciencia de género, debido a la ausencia de poderosas organizaciones feministas, aunque se asomaban ya teóricas de alta calidad como Julieta Kirkwood y feministas de la experiencia de Elena Caffarena y Olga Poblete, fundadoras del Movimiento de Emancipación de la Mujer (MEMCH) en la década de 1930.

Otro de los sectores discriminados, los **Pueblos Originarios**, tuvieron más espacios para manifestar las ancestrales demandas por su territorio o hábitat milenario. Los Mapuches ocuparon fundos que habían sido de

ellos, consolidaron nuevas organizaciones, salieron a la palestra nuevos lonkos, weipifes y machis, que conservaban la tradición oral de las luchas desde Lautaro hasta Panguilef, inspirador de la República Indígena, bajo la “República Socialista” de 1932. Conquistaron nuevas áreas públicas para expresar su cosmovisión y lograron que los Centros de Reforma Agraria escucharan y en algunos casos aceptaran sus peticiones. En septiembre de 1972, Salvador Allende —que fue el primer presidente en visitar oficialmente al pueblo mapuche, según un testimonio oral comunicado a este autor— promulgó una nueva Ley Indígena, que modificaba progresivamente la aprobada en 1961.

No obstante estos avances, los mapuches todavía no reivindicaban su carácter de nacionalidad originaria o Pueblo-Nación dentro del Estado chileno, planteamiento que recién va a surgir bajo un nuevo liderazgo en las décadas de 1980-90. Por otra parte, durante la Unidad Popular veían con desagrado que los militantes de los partidos de izquierda trataran de inmiscuirse en sus problemas internos, procurando liderar desde afuera de su hábitat las luchas por la recuperación de tierras, según confesión posterior de algunos mapuches en el exilio y de escritos que publicaron durante los primeros años de los gobiernos post-dictadura militar.

En el Norte Grande, los Aymaras volvieron a hacer sentir su presencia, deliberadamente omitida después de la Guerra del Pacífico por haber habitado también en Bolivia y Perú, surgiendo un nuevo liderazgo del seno de la comunidad donde naciera Pedro Humires, poeta y maestro ejemplar de escuelas primarias. Desde la postergada provincia de Magallanes hicieron oír su voz los últimos descendientes de los onas, alacalufes (kaweskar), una rama de los tehuelches (selk’nam) y los yámanas o yaganes, cuyas familias ancestrales habían sido exterminadas por la

conquista de tierras para explotar el nuevo “vellocino blanco”: las ovejas, importadas por los Menéndez Behety y Menéndez Braun, portavoces del capitalismo británico.

Durante el gobierno allendista tuvo amplia participación el movimiento de pobladores, ya sea en renovadas “tomas” de terrenos, por primera vez no reprimidas arbitrariamente, levantando organizaciones como el “Campamento Lenin” en Talcahuano y “Che Guevara” en Santiago, más tarde denominado “Nueva La Habana”, y otros donde se ejercían actividades autogestionarias, autoconstrucción y reparación de viviendas, comedores colectivos y cursos de enseñanza primaria y para analfabetos. En varios de estos campamentos, donde el MIR había logrado influencia bajo la orientación de Víctor Toro y Herminia Concha se organizaron milicias populares, aunque con una débil estructura político-militar como para enfrentar el golpe que se avecinaba. Empero, la más importante actividad del movimiento de pobladores fue coordinar sus Comandos Comunales con los Cordones Industriales, a nivel zonal, base de un embrión de poder popular que comenzó a surgir con relativa fuerza durante 1972.⁵¹

El movimiento estudiantil tuvo un desarrollo desigual. Por una parte, logró consolidar sus organizaciones universitarias y secundarias durante la UP, reafirmar su demanda de autonomía universitaria alentada por el propio gobierno, lograr el llamado a Concursos para dar paso a nuevos y mejores profesores, crear nuevas Cátedras paralelas, ejercer concretamente su participación del 25% en las decisiones de la comunidad universitaria, obtener clases vespertinas para los trabajadores que deseaban ingresar a la Universidad, ampliar las tareas de Difusión o Extensión a los sectores populares, ocupar nuevos espacios de libertad, reforzar la unidad obrero-campesina-estudiantil conquistada bajo la administración Frei. Sin embargo,

al confundir el conjunto del estudiantado con la vanguardia estudiantil se cometieron graves errores de sectarismo con los estudiantes que no compartían las posiciones de los partidos de izquierda, llegando a crear formalmente “cursos de concientización”, aceptados por las autoridades de varias universidades, con el obvio desagrado de los estudiantes sin partido o de oposición que notaban que se les quería hacer “un lavado de cabeza”.

Esta actitud sectaria y el desgaste que tuvo el gobierno en las capas medias –cuyos hijos asistían a las universidades, constituyendo la mayoría del estudiantado– fueron produciendo una profunda división en el movimiento estudiantil no tanto por reivindicaciones académicas sino por razones de polarización política.

Este fenómeno se pudo apreciar claramente en mayo de 1972 con ocasión de las elecciones a Rector de la Universidad de Chile, donde el candidato de la DC y la Derecha, Edgardo Boeninger, triunfó no sólo en el estamento de profesores sino, con gran sorpresa, en el estudiantado sobre el total de votos obtenidos por los otros candidatos: Felipe Herrera por los partidos de la UP, socialistas, comunistas y radicales, Andrés Pascal del MIR y Luis Vitale por el F.R. y el PCR. La división del movimiento estudiantil se fue agudizando en 1973 hasta provocar enfrentamientos entre estudiantes secundarios y universitarios. Este lamentable proceso fue también sectariamente estimulado por la oposición y derecha golpista, complacida por el desarrollo del “gremialismo”, liderado por Jaime Guzmán, que había logrado influencia no sólo en la Universidad Católica sino en muchas universidades del país. A su vez, la FESES controlaba los secundarios a través de su presidente DC: G. Yungue.

El movimiento de los **Cristianos por el socialismo**, gestado durante el gobierno DC, tuvo un relativo auge impactando a sectores de la población de inspiración cris-

tiana y especialmente a la base del PDC, que terminó rompiendo con su partido y formando la Izquierda Cristiana. Pero el sectarismo de los partidos de la UP estimuló verticalmente la división en el seno del MAPU.

A fines de abril de 1971, el grupo "Cristianos por el socialismo" organizó un Encuentro con la asistencia de los sacerdotes Gonzalo Arroyo, Pablo Richard, Santiago Thijsen, Renato Giavio de la Población La Victoria, Esteban Gumucio de la Población Joao Goulart, Alfonso Baeza del MOAC, Nelson Soucy de la Población Mussa, José Arellano de la Población San Joaquín, Hernan Leenrijse de San Bernardo y otros, siendo invitado especial Gustavo Gutiérrez del Perú, uno de los teóricos más importantes de la Teología de la Liberación. Uno de sus principales acuerdos fue respaldar las medidas del Presidente Allende. Pronto se extendieron a Valparaíso, Antofagasta, Curicó, Talca, Concepción y Puerto Montt. En dicho Encuentro, Santiago Thijsen dijo: "No somos del MAPU, no queremos serlo, como grupo no somos de ningún partido, nos pronunciamos por el socialismo".

El 2 de abril de 1972, se efectuó el Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo, que se realizó en el Sindicato Hirmas con 400 delegados, de los cuales 250 eran sacerdotes, entre ellos el destacado teólogo mexicano Sergio Méndez Arceo, acordando apoyar la gestión de Salvador Allende. El 17 de octubre de 1971 nació en Viña del Mar el grupo "Comunidad de Cristianos Revolucionarios". Del 24 al 26 de noviembre de ese año se realizó la Asamblea de los Cristianos por el Socialismo en Padre Hurtado, a la cual asistieron 140 sacerdotes, 80 monjas, 20 pastores evangélicos y 130 laicos. El 7 de julio de 1972 se inauguró el Encuentro "Lucha de Clases y Evangelio de Jesucristo", donde fue invitado el padre Roberto Bolton, registrándose un interesante diálogo entre cristianos y marxistas. En el Teatro Municipal de Santiago, en

febrero 1973, hubo un acto de homenaje al cura guerrillero colombiano Camilo Torres; el discurso de fondo estuvo a cargo del padre Martín Gárate, secretario general de "Cristianos por el Socialismo", quien manifestó: "los cristianos ya no seremos más utilizados por las clases dominantes" (Diario "La Nación", febrero 1973).

Ante la agudización de la lucha política y la ofensiva derechista, "Cristianos por el Socialismo" hizo una importante declaración el 19 de abril de 1973 en la manifestaba: "No queremos decir que el cristianismo y el marxismo sean una misma cosa. Sólo queremos mostrar que el cristianismo nunca puede ser un obstáculo para que los pobres salgan de su situación de miseria" (Diario "Noticias de Última Hora", 19 de abril de 1973). Días después, el 27 del mismo mes, ante las amenazas de golpe de Estado, señalaron enfáticamente: "Es nuestro deber mostrar a nuestros compañeros y compañeras, evangélicos y católicos, que el uso de la religión, que quiere hacer la Derecha, va contra la liberación del pueblo y, por lo tanto, contra la liberación que Cristo predicó".

Con posterioridad al golpe militar, militantes del movimiento "Cristianos por la Liberación y el Socialismo" señalaron que se sintieron utilizados en algunas ocasiones por los partidos de la UP quienes, a pesar de su desconfianza a todo lo que oliera a sotana, los utilizaban, sin comprender el aporte político que hacían a la izquierda y al pueblo los partidarios de Teología de la Liberación.

Al respecto, cabe recordar que la izquierda chilena fue "consecuente" heredera de la tradición liberal del siglo XIX, y continuó siendo "come-frailles", sobre todo aquellos socialistas miembros de la masonería. Es sabido que varios Presidentes de Chile fueron simpatizantes de la masonería —por decir lo menos— entre ellos Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla y, como es de conocimiento pú-

blico, Salvador Allende. Chile es uno de los pocos países de América Latina, donde la Masonería ejerció un cierto "poder fáctico" en el plano de la política, alcanzando notoria influencia en las Universidades y, en general, en las diversas áreas de la Cultura. Inclusive, tuvo influencia en sectores del Ejército, la Marina y la Aviación, como la generación de 1920-30, comenzando por los jóvenes militares que, prácticamente, gobernaron el país desde 1925 hasta 1932, desde Ibáñez hasta Grove. No es extraño, entonces, que los Cristianos por la Liberación fueran observados con desconfianza por la izquierda. Recuerdo que cuando planteamos en 1966, en el Comité Central del MIR, trabajar junto a los simpatizantes de Teología de la Liberación fuimos mirados como "bichos raros", precisamente por jóvenes cuyos padres eran masones. Años después se incorporaron al MIR un grupo de "cristianos por el socialismo", incluidos curas y monjas.

Avances en la Democratización de la Cultura y en los Derechos Humanos más elementales: Salud, Vivienda y Educación

El gobierno de Salvador Allende continuó el proceso de democratización de la Cultura –que venía desde los gobiernos del Frente Popular hasta Eduardo Frei Montalva– tanto en los tres niveles de la Enseñanza como en el estímulo a las diversas manifestaciones artísticas, promoviendo el acceso a los Conciertos públicos, a las obras de Teatro, a las exposiciones de pintura y otras expresiones plásticas.

Puso especial énfasis en la difusión de libros a niveles nunca alcanzados en América Latina, respaldando la publicación de los clásicos de la Literatura universal y de obras de Ciencias Sociales en ediciones que sobrepasaron los 50.000 ejemplares por autor.

Amplió los Servicios de Salud, Vivienda y Educación. En 1971 se construyeron 131 escuelas, con 1.844 aulas para atender el ingreso de 83.000 nuevos alumnos, además del desayuno escolar garantizado, medidas que se amplificaron durante 1972 y 1973. En el primer año de gobierno de la UP comenzó la construcción de 76.000 viviendas.

Solamente en el año 1971, se edificaron seis nuevos hospitales y se hicieron obras de reparación en la mayoría de los antiguos hospitales del Servicio Nacional de Salud, estimulando la participación de las y los enfermeros y funcionarios en la gestión de todas las áreas de la Salud. Muchos de ellos, incluido un importante sector de médicos, participaron activamente en la creación de Centros de Salud en las Comunas más necesitadas de atención médica en Santiago, Valparaíso, Concepción y otras provincias.

Abrió nuevos espacios de libertad a la mitad de la población, las Mujeres, y a otros sectores discriminados, como los mapuches, aymaras y otros Pueblos Originarios, aspectos que evidenciaron una constante preocupación por los Derechos Humanos más esenciales de la ciudadanía.

El comportamiento de la oposición civil y los preparativos para el golpe militar

Durante los primeros meses de gobierno, uno de los principales ideólogos de la DC, Claudio Orrego, planteó la necesidad de aplicar en Chile la táctica de los "mariscales rusos" de replegarse para proteger Moscú en la lucha contra el ejército nazi. Según él, la Moscú que debía defenderse en Chile era la institucionalidad. Orrego confiaba en que el gobierno de la UP terminaría por empantanarse, deteriorándose gradualmente su imagen ante las masas. Pero esta fase de repliegue tuvo una corta duración.

La burguesía chilena y el Departamento de Estado norteamericano pasaron pronto a la contraofensiva. Nixon

ordenó al Director de la CIA, Richard Holmes, que acelerara las operaciones anti-UP. El Comité Especial aprobó el 28 de enero de 1971 la cantidad de 1.240.000 dólares y luego medio millón más, que se sumaron a 1.700.000 destinados a ciertos medios de comunicación con el fin de desestabilizar al gobierno de Allende. El 26 de octubre de 1972, en pleno Paro Patronal, el Comité Especial de los EE.UU. autorizó la entrega de 1.427.000 dólares a los golpistas chilenos y después otras sumas que sobrepasaron el millón doscientos mil dólares.⁵²

La táctica de la oposición se fue configurando a mediados de 1972, aunque su estrategia estaba decidida desde las elecciones de abril del año anterior donde la UP obtuvo el 50,1% de los votos, cuando dieron por cancelada la vía electoral ante el masivo respaldo a la gestión de Salvador Allende. Sin embargo, en 1972 subsistían ciertas contradicciones entre el P. Nacional y el PDC y, en particular, en el interior de la DC. Un fuerte sector, encabezado por Tomic, Leighton y Fuentealba, quería negociar con los dirigentes de la UP para evitar la salida del golpe militar, como lo había hecho Tomic con Allende en diciembre 1971 y Fuentealba en mayo de 1972. No por casualidad, en los informes de los Servicios de Inteligencia norteamericanos existía preocupación por una eventual negociación entre la DC y la UP, aunque estaban esperanzados en que "la creciente polarización de la sociedad está descartando la predilección chilena por el compromiso político".

Varios dirigentes de la izquierda tradicional han manifestado que la UP no dio los pasos necesarios para llegar a un acuerdo con la DC; sin embargo, existen pruebas de que la UP, con ciertas reticencias del PS, hizo lo posible para llegar a un "compromiso" que sabían que era "histórico". El propio Altamirano ha confesado que el PS planteó matices de desacuerdo con esa política, pero "aceptamos democráticamente el criterio de la mayoría y no existió un solo

acto nuestro orientado a obstruir el diálogo".⁵³ Inclusive, la jerarquía de la Iglesia Católica estimuló el acuerdo; el 30 de julio de 1973, a instancias del Cardenal, se dio otro intento de aproximación entre el gobierno y la DC.

Precisamente, la incorporación de militares al gabinete en agosto de 1972 había obedecido a la línea del diálogo con la DC. El 5 de abril de 1973, el general Carlos Prats escribía en su diario: "Hace falta un acuerdo con los demócratacristianos. El presidente nos ha dicho que él es un firme convencido de la necesidad del diálogo".⁵⁴ Sin embargo, a esa altura del proceso, Prats había perdido una parte apreciable del respaldo de sus compañeros de armas. El Gabinete UP-Militares de 1973 no era el mismo que el de 1972, porque el cuerpo mayoritario de generales estaba ya embarcado en los preparativos del golpe. El mismo Prats escribía el 19 de mayo de 1973 en su Diario: "El tiempo dirá si las Fuerzas Armadas van a mantenerse unidas. En su interior, cada día se hace más evidente un proceso de polarización. Por primera vez desde la subida de la UP al poder muchos miembros de institutos armados exponen con franqueza, y a veces con rudeza, su desacuerdo con la política del gobierno".⁵⁵

Un destacado sociólogo francés, testigo de los hechos, Alain Touraine, anotaba en su Diario que la DC estaba decidida a "que los militares reemplacen a los ministros de la UP e incluso, si es del todo indispensable, al propio Allende (...) O la alianza actual se mantiene con la ayuda de los militares que rechazan la fragmentación de la sociedad, o esta alianza revienta sola y es el golpe de Estado. Lo cual da su sentido real a esta presión política posible de la Democracia Cristiana: esperar la ruptura social, alentar un golpe de estado militar, con la esperanza de que el Ejército se limite a imponer el orden y, eliminado el presidente, organice al cabo de unos meses una nueva elección presidencial de la que saldrá victoriosa la DC".⁵⁶

El 14 de mayo de 1973, al interior de la DC, los “duros” triunfaron en la Junta Nacional, logrando reemplazar a Fuentealba por Aylwin en la presidencia del partido, con lo cual se cerraba el camino de la negociación.

Los empresarios, que palpaban más la realidad de la lucha social que la cúpula de los partidos, se daban cuenta que cada día estaba más en crisis su sistema de acumulación capitalista, como dice agudamente Mario Durán Vidal al referirse a la situación en 1972: “el proceso cíclico Dinero-Mercancía sufre una ruptura. El próximo ciclo de reproducción Dinero-Mercancía no va a estar compuesto por inversiones, ni consecuente compra de objetos de trabajo. La fase Dinero-Mercancía pasa a ser de carácter especulativo”.⁵⁷

Enfrentados a los aumentos de salarios y los crecientes aportes a la previsión, que afectaban la tasa de ganancia en el área de la producción, la burguesía buscó compensar esta falencia con la especulación y el “mercado negro”, comenzando por operar en el área de la distribución de mercancías, menospreciada por la mayoría de los marxistas. Si bien es cierto que la producción es la columna vertebral del sistema, en determinadas coyunturas la circulación de mercancías juega un papel relevante. Así lo comprendieron los empresarios, aplicando la táctica de sabotaje del abastecimiento y el acaparamiento de productos de consumo popular. El área de la especulación y del mercado negro, que pertenece a la esfera de la circulación, fue utilizada para pavimentar el camino del golpe.

La burguesía desplazó capitales al área especulativa, pero sin descuidar el capital productivo, porque para especular con productos había que producirlos, según las leyes de la reproducción ampliada. No dejó de cumplir este ciclo –inclusive en un régimen como el de la UP, que seguía siendo capitalista– porque hubiera sido negarse como clase social dueña de los medios de producción y

succionadora de plusvalía. La prueba es que la producción industrial había subido un 10% en 1971, según la Sociedad de Fomento Fabril, que también estimó un aumento del 22% en la industria de bienes de consumo durable en 1972. Pedro Vuskovic me dijo en México, en el exilio, que el gobierno de la UP no pudo alterar las tendencias generales del mercado interno, basadas en la compra de productos de consumo durables, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por promover prioritariamente la compra de artículos de la industria liviana.

Esta operación especulativa se hizo extensiva a la mediana y pequeña burguesía, que también satisfacía la demanda creciente de productos, debido al aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. Se configuró así, el cuadro paradójico de un “desabastecimiento” generalizado, que motivó largas “colas” y dificultades de aprovisionamiento.

La política económica de la UP precipitó una crisis del modo de funcionamiento capitalista, dándose la situación de un aparato estatal, administrado por la izquierda, que enfrenta una crisis del sistema económico dominante sin que estuviera resuelto el problema del poder.

El clima pre-golpe se fue preparando con acciones parlamentarias y extraparlamentarias; mientras el P.N. y el PDC obstruían los proyectos del Poder Ejecutivo, las señoras de la burguesía y de las capas medias acomodadas desfilaban con cacerolas. Al mismo tiempo, se impulsó el llamado Poder Gremial, promoviendo huelgas en el sector de transportistas y camioneros.⁵⁸ Inclusive, fueron arrastrados a la huelga los obreros de la mina de cobre “El Teniente”,⁵⁹ sin que la dirección de la UP diera un paso para responder al Pliego de Peticiones, con excepción de Allende, muy sensible a solucionar el conflicto, advirtiendo que era necesario llegar a un acuerdo con los mismos trabajadores que habían votado por él. Empero, los esfuer-

zos del Presidente para solucionar esta huelga no fueron compartidos por los partidos de gobierno, que confundían las protestas de los mineros con los movimientos sediciosos de los camioneros (MOPARE) y del comercio detallista, liderado por Cumsille. Un testigo de época, Rafael Agustín Gumucio, señaló: “Se puede afirmar categóricamente que las huelgas del mineral de cobre El Teniente y de los camioneros fueron financiadas por la CIA”.⁶⁰

El cronograma diseñado era el siguiente: a) preparar las condiciones para exigir la capitulación de la UP; b) declarar la ilegitimidad del gobierno; c) renuncia del presidente Allende y entrega del poder a la oposición y si no, d) golpe militar. Esta estrategia y los pasos tácticos fueron similares a los implementados por los opositores al gobierno de Balmaceda en 1891

De este plan se deduce que la salida de fuerza no fue exclusivamente asumida por las FF.AA. sino que fue una combinación de civiles derechistas con militares golpistas. Para desarmar entretanto a los escasos grupos que tenían algún armamento, que apenas contaban con fusiles y ametralladoras livianas, como el ala izquierda del PS y el MIR, los derechistas de la DC y el P.Nacional hicieron aprobar la Ley de Control de Armas, propuesta por el parlamentario DC, Juan de Dios Carmona, procediendo de inmediato a efectuar allanamientos en los Cordones Industriales, en ASMAR y Lanera Austral.

Las esperadas elecciones parlamentarias de marzo 1973 dieron un resultado que aceleró los planes golpistas porque la votación de los partidos de la UP alcanzó a un 46,5%, apenas cuatro puntos menos que en las elecciones a regidores de 1971, mostrando a la Derecha y la DC que por la “vía pacífica” electoral sería casi imposible que venciera en las elecciones presidenciales de 1976.

Paralelamente, se agudizaba la polarización en las Fuerzas Armadas, donde se llegó a plantear votaciones

abiertas en los regimientos, buques y bases aéreas. En el acorazado Almirante Latorre y en la base aérea El Belloto, los militares constitucionalistas lograron en 1973 casi tantos votos como los que consideraban ilegítimo el gobierno de la UP. Por lo demás, se sabía que en el Cuerpo de Carabineros existía un apreciable número de partidarios de respetar la Constitución y al presidente elegido legalmente.

Y sobrevino el **Tanquetazo**. El conato de golpe, encabezado por el coronel Supper el 29 de junio de 1973 fue rápidamente derrotado por la acción del general Prats cerca de La Moneda, pero constituyó un ensayo de gran importancia táctica para los golpistas, porque les permitió apreciar las vacilaciones de la UP y la falta de preparación para enfrentar un golpe. Fidel Castro, en su visita a Chile a fines de noviembre de 1971, tuvo razón cuando ante más de 70.000 personas en el Estadio Nacional, dijo: “no son los revolucionarios los que en la actual situación de Chile crean la violencia. Y si ustedes no lo saben, seguramente que la propa vida se encargará de demostrárselos”.⁶¹

El PC analizó el “tanquetazo” de manera equívoca: “Los planes de la derecha para implicar a las FF.AA. en una aventura partidista han fracasado. La solidez de nuestras instituciones armadas que cumplieron con patriotismo e intransigencia la misión que les confiere la Constitución (...) La dignidad y firmeza con que ha respondido a esta ofensiva el Comandante en Jefe adjunto del Ejército, Augusto Pinochet, merece ser destacada porque constituye un duro golpe a los politicastros que intentan atacar el prestigio de los soldados chilenos (...) Los trabajadores tienen plena confianza en los soldados de la patria y respetan su sobriedad, disciplina, honestidad y patriotismo. Los que atacan a las FF.AA. son aventureros reaccionarios y fascistas”.⁶² Casi sin comentarios, salvo recordar que la izquierda rayaba las paredes con la consigna: “soldado amigo...” y de que en diciembre de 1973, Pinochet reveló a un

periodista de la agencia Reuter que los preparativos del golpe se diseñaron en reuniones secretas desde 1972.

El general Prats percibió con claridad la situación al escribir el 1° de julio de 1973 en su Diario: "La intentona ha sido conjurada, pero en las pocas horas transcurridas ya vemos que su efecto ha sido el de dar paso a una deliberación abierta en el interior de las Fuerzas Armadas, que por mucho que se hagan valer las normas disciplinarias será imposible contener (...) ¿Por qué no hablar de política en los cuarteles, si un regimiento con su comandante a la cabeza ha salido a la calle para atacar el Palacio Presidencial y el Ministerio de Defensa, y si el Comandante en Jefe ha tenido que salir también a la calle para defender al gobierno constitucional con una ametralladora en la mano (...) Jamás el Ejército y las Fuerzas Armadas estuvieron tan politizadas como después de los dramáticos hechos del 29 de junio".⁶³

A su vez, nunca vastos sectores de mujeres, trabajadores, pobladores, campesinos, ciertas capas medias asalariadas y estudiantes habían estado tan politizados, reclamando armas para derrotar a los golpistas en la concentración del atardecer del "tanquetazo" frente a los balcones donde habló Allende. Pocos días después, resolvieron, en algunas empresas del área social que administraban, inversión de capital no en maquinarias sino en armas, como lo hizo público el sindicato Socometal. De todos modos, conocían las insuficiencias de la UP para enfrentar el golpe. Una semana antes, los organismos de "poder popular" enviaron una carta al presidente Allende, en la que proféticamente dijeron: "En este país no habrá Guerra Civil sino una masacre fría y planificada de la clase obrera más conciente y organizada de América Latina y la destrucción y el descabezamiento quizá a qué plazo y a qué costo sangriento".⁶⁴

Durante los meses siguientes, los acontecimientos se

agravaron, sin que la Derecha renunciara al golpe de estado ni la UP diera pasos concretos de solución. Por el contrario, el discurso encendido de Carlos Altamirano en el Estadio Chile agudizó el conflicto. Cuando la situación estaba casi perdida –no por falta de combatividad de los trabajadores sino por la política derrotista de los partidos de la inmovilizada UP– el Presidente Allende intentó dar una salida mediante la convocatoria a un plebiscito que resolviera el conflicto de poderes.

Enterados los altos mandos militares que se pensaba llamar a plebiscito entre el 10 y el 12 de septiembre, resolvieron adelantar el golpe para el día 11. A esta altura de los acontecimientos, la DC había perdido el control político en la conducción del proceso. Pinochet, Merino y Leigh habían logrado suficiente autonomía como para dar el golpe sin consultar fecha y hora a las directivas de los partidos que participaban de la conspiración. Ni siquiera el Presidente del Senado fue consultado sobre el día del "pronunciamiento". En una de las tantas ironías de la historia, cuando Frei fue el día 11 al anochecer a la Escuela Militar a pedir la libertad de un pariente suyo, que por equivocación estaba preso, un simple teniente le ordenó entregar el automóvil del Senado. Así caía el telón de la farsa y comenzaba la tragedia.

Notas para un Balance

Si de algo no puede criticarse al Presidente Allende es no haber cumplido lo prometido en su campaña electoral, porque durante su gobierno realizó íntegramente su propuesta programática. Nadie puede criticarle que no haya convertido a Chile en un país socialista, en el sentido más profundo del concepto, es decir, de un cambio del sistema capitalista a un modo de producción socialista, porque nunca hizo esa promesa.

En términos de Sociología Política, agotó en lo fundamental el programa de cambios que caracteriza a una revolución democrático-burguesa –así concebida en la historia después de la Revolución Francesa de 1789– porque realizó la Nacionalización de las materias primas básicas de la minería, del sistema financiero y de telecomunicaciones, logrando la estatización de la Banca y la nacionalización de la Compañía de Teléfonos, la ITT, además de crear un sector económico, denominado “área social”. Terminó con el latifundio a través de una Reforma Agraria que condujo a la expropiación de 5 millones y medio de hectáreas y su inmediata entrega a los campesinos, uno de los puntos fundamentales que caracterizan un proceso democrático-burgués.

La Nacionalización del cobre fue la medida más importante adoptada en el gobierno de Salvador Allende:

- a) por haber reafirmado el derecho de nuestros países latinoamericanos a recuperar sus riquezas enajenadas por la clase dominante al capital monopolístico extranjero;
- b) por haber dado concreción histórica, en un país determinado de nuestra América –Chile– a uno de los puntos claves del proceso de Liberación Nacional, inspirado en la concepción bolivariana y en el pensamiento nacional-antiimperialista de precursores de nuestra soberanía como José Martí, Eloy Alfaro, José María Vargas Vila, Manuel Ugarte, César Augusto Sandino, José Carlos Mariátegui, Salvador de la Plaza y Julio Antonio Mella;
- c) por haber recuperado la memoria histórica de chilenos que supieron defender la soberanía de las riquezas nacionales, como Pedro Félix Vicuña, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, José Manuel Balmaceda, Luis Emilio Recabarren, Marcial Martínez, Tancredo Pinochet Le Brun, Eugenio Matte Hurtado y Ricardo A. Latcham;

- d) por haber puesto de manifiesto que los gobiernos de los países altamente industrializados, como los de Europa y Estados Unidos, protegen los intereses de las transnacionales, violando la Declaración Universal aprobada por las Naciones Unidas, en orden a reconocer el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a darse el gobierno que libremente escojan;
- e) por haber puesto de relieve que las grandes potencias, en nombre de su particular concepción de Democracia, se arrogan el derecho a intervenir en los países del llamado Tercer Mundo, directamente con tropas, bombardeando y afectando gravemente la propia Declaración sobre los Derechos Humanos, o promoviendo golpes militares, como sucedió en Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Centroamérica, Jamaica, Granada y Guyana, además de naciones de África y del Asia, desconociendo la Constitución y las leyes que esos pueblos aprobaron democráticamente, y legitimando largas dictaduras militares.

Puede criticarse la gestión gubernamental de la Unidad Popular por cierta falta de eficiencia en la administración de algunas empresas nacionalizadas, además de expresiones de sectarismo político con la oposición y entre los mismos partidos de izquierda, ratificadas por el propio ex-secretario del PC, Luis Corvalán en sus Memorias: “El sectarismo hizo mucho daño. Las conductas sectarias y prepotentes tomaron cuerpo en una parte de la Unidad Popular”.⁶⁵ Además, hubo debilidades tácticas y pasos inoportunos, especialmente haber lanzado el proyecto de Educación Nacional Unificada (ENU) que, sin proponérselo, fue utilizado por la oposición política como pretexto para acusar a la UP de terminar con la enseñanza privada o de los Colegios particulares, propuesta que nunca hizo la ENU.

Del mismo modo, fue una argucia sostener que Allende estaba entregado al "bloque socialista", cuando está plenamente demostrado que proclamó a Chile como país no alineado, junto a los pueblos del "tercer mundo". Menos aún, fue títere de la Unión Soviética para implantar el "comunismo"; la prueba es que Chile entre 1970 y 1973 no recibió ninguna ayuda económica sustancial de los países autodenominados "socialistas", como lo dijo el propio Allende en reuniones privadas al regreso de su gira por Europa ("sólo he recibido 20 millones de marcos del gobierno de la Rep.Federal Alemana, Willy Brandt"). Información confirmada después, en 1997 y 1998 por un alto miembro de la KGB, general Nikolai Leonov, ex-subdirector de Inteligencia del Comité de Seguridad Estatal Soviético.⁶⁶ Entre otras cosas, manifestó al reportero italiano de "L'Unitá", Giancarlo Summa: "El gobierno de la Unidad Popular solicitó 30 millones de dólares en 1973. El Comité Central nos pidió la opinión y nosotros, después de largas discusiones y consultas, dimos una respuesta negativa".⁶⁷

No existe ningún fundamento serio –a la luz de una aproximación a la verdad histórica– para acusar a Salvador de arrasar con el Estado burgués y el sistema capitalista, instaurando el Socialismo en el sentido más riguroso del término; objetivos que, salvo el MIR, el FR y un sector del PS, nunca pretendieron aplicar los partidos de gobierno, especialmente el PC, que se limitaba a realizar la fase democrático-burguesa, consecuente con su concepción de "revolución por etapas". El plan de la UP, explicitado en las fuentes de la época, era llegar lo más fortalecida posible a las elecciones presidenciales de 1976. Cualquier otra especulación política acerca de un supuesto autogolpe fue otro de los tantos pretextos para justificar el golpe militar.

Por lo tanto, las acusaciones formuladas al gobierno de Allende sólo tuvieron como finalidad crear un ambien-

te favorable al Golpe Militar, que restaurara el antiguo y tradicional sistema de dominación de clase practicado por los gobiernos oligárquicos de los siglos XIX y XX.

La estrategia de la UP de utilizar la legalidad para consolidar el proceso actuó como un verdadero "boomerang", pues los partidos de la oposición se basaron en mecanismos legales que ellos mismos crearon, para imponer paradójicamente una salida ilegal. Mientras la UP juraba fidelidad a la legalidad, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana utilizaban el serrucho legal para atacar contra la Constitución y el gobierno elegido con la más amplia mayoría democrática de la historia chilena. Al mantenerse intacto el edificio de la institucionalidad creada por la clase dominante (Parlamento, Poder Judicial, Contraloría y Fuerzas), se dieron objetivamente las condiciones para el derrocamiento del gobierno de la UP.

Conclusivamente, el análisis objetivo de los hechos, por encima de cualquier enfoque ideologizante, nos permite afirmar que en los 1.004 días del gobierno de Allende se mantuvieron las reglas generales del sistema capitalista, aunque con el cumplimiento acabado de las tareas democrático-burguesas no resueltas por anteriores Presidentes de la República. Por lo tanto, no se pasó, en rigor, del capitalismo al socialismo, entendiéndose que una Revolución Socialista significa el reemplazo de la clase dominante por la clase trabajadora, el desmantelamiento de las instituciones del Estado burgués, principalmente sus Fuerzas Armadas y el Parlamento.

Por consiguiente, también fue y es equivocado caracterizar el gobierno de la UP como fase de "transición al socialismo" porque la Ciencia Política y los clásicos del marxismo, desde Marx hasta Lenin y Trotsky, han demostrado que el período de transición al socialismo comienza con la toma del poder por la clase trabajadora, junto a otros movimientos sociales, generando un Estado de nuevo tipo,

gobernado por organismos representativos de los trabajadores. Se toman medidas de nacionalización, sin confundir socialización con estatización de empresas, conceptos que frecuentemente han confundido a los analistas del gobierno de Allende, donde efectivamente se estatizaron grandes empresas, sin que ello faculte para hablar de socialismo en Chile, pues hubo estatizaciones en la Argentina de Perón, en la Bolivia de Paz Estenssoro, en el México de Cárdenas, sin que por ello se los pueda calificar de socialistas.

Durante ese período se van tomando medidas de carácter socialista como la administración de las empresas por los trabajadores, creación de granjas colectivas, abolición de la propiedad privada de los medios de producción en manos de los grandes empresarios, pudiendo subsistir los pequeños propietarios urbanos y rurales. No existen precedentes de que dicha transición culmine en el establecimiento de la Sociedad plenamente Socialista, fenómeno que no ha ocurrido en ningún país, incluyendo a Rusia, China, Europa Oriental, Corea, Vietnam y Cuba. Este período de transición puede durar muchos años, como se prolongaron otros periodos de transición en la historia, como los siglos de transición del modo de producción esclavista al feudal y del modo de producción feudal al capitalista. Ningún científico político riguroso podría probar con hechos que Chile bajo la UP vivió esta fase de transición al socialismo.

En la buena senda de la autocrítica: Pedro Vuskovic

Uno de los mejores balances del gobierno de la UP fue hecho por el destacado ministro de Allende, el economista Pedro Vuskovic. En su trabajo **Política económica y Poder político**, publicado en 1976, fue uno de los pocos dirigentes de la UP que se atrevió a formular una rigurosa

autocrítica, dentro de una evaluación positiva de las medidas adoptadas por el Presidente Allende.

Comienza diciendo que "se deja sentir la necesidad de análisis críticos y autocríticos que surjan desde las propias fuerzas populares (...) esa tarea de evaluación está todavía pendiente (...) lo primero que se destaca en la experiencia del Gobierno Popular es la confrontación de unas tareas muy grandes y decisivas, que quedaban entregadas a la política económica, y la relativa debilidad de la base de sustentación política en que debía desenvolverse".

Vuskovic manifiesta que los partidos de la UP no comprendieron la íntima relación entre los objetivos de largo alcance y los de corta duración: "De un lado, se puso en duda la necesidad del entrelazamiento y simultaneidad de ambos objetivos, sugiriendo que representaban la coexistencia de dos políticas diversas. Una "reformista", que acentuaba los objetivos de estabilidad, redistribución y ascenso en los niveles de vida material; y otra "revolucionaria", de expropiación de la burguesía e inicio de transformaciones socialistas. De otra parte, se valoraba como fundamental la aportación política que venía representando la política económica de corto plazo, cuyos resultados inmediatos se los visualizaba como apoyos que no debían arriesgarse en un avance rápido de las expropiaciones y el área social, que pudiera deteriorar las posibilidades de neutralizar y ganar más fuerza en la pequeña burguesía; en consecuencia, tendía a frenarse la segunda (...) Como en otros aspectos, las diferencias de entendimiento político del proceso al interior de la UP obstaculizaron una decisión política definida y la conducción de la política económica osciló erráticamente entre ambas opciones".

Actor y testigo de los debates ministeriales, Vuskovic señala con franqueza que la UP no fue capaz de actuar con rapidez frente a la cerrada oposición burguesa: "Todo el proceso estaba llamado inevitablemente a desenvolverse

en los marcos de una creciente agudización de la lucha de clases y de confrontación con el imperialismo. Este era el hecho central al que debía responder la dirección política en sus diversos planos y desde luego, en el más restringido de la política económica. En este sentido, si se lo hubiera tomado con la consecuencia necesaria, la preparación para esa confrontación inevitable debió y pudo expresarse en una diversidad de aspectos: en la velocidad con que se afectaban las bases de sustentación económica de la burguesía, en el grado de reorientación de las vinculaciones económicas externas, en una variedad de decisiones sobre la conformación y manejo del Área de Propiedad Social, y hasta en una utilización más cautelosa de las reservas en previsión del cerco financiero que tendería el imperialismo”.

Respecto de la participación popular y el papel de los Cordones Industriales manifiesta que había ideas contrapuestas dentro de los partidos de la UP: “Los encuentros sectoriales de los trabajadores llegaron a significar un poder real, pero sin que fueran reconocidos formalmente ni estimulados y apoyados por la estructura administrativa y la dirección política, al reproducir también a este propósito las discrepancias internas respecto a la concepción de la política de masas. Con mayor razón sucedió así cuando se trató de iniciativas que excedían la esfera de la producción para constituirse en expresiones más generales de poder en un sentido más amplio, como ocurrió con los Comandos Comunales y los Cordones Industriales” (...) El acceso a la participación fue relativamente amplio en el caso de las empresas del área social, pero muy limitado en el de las empresas del área privada, en las cuales se propició sólo la constitución de unos ‘comités de vigilancia’, con escaso poder y a cuya formación y estímulo se dedicó en la práctica muy poca atención”.

Vuskovic es transparente en el señalamiento de que al interior de la UP “se confrontaban discrepancias entre

concepciones que atribuían más importancia a una política de masas y a una política de alianzas, discrepancias que en los hechos fueron resueltas generalmente a favor de las últimas (...) La política de alianzas (con sectores de centro) sacrificaba el desarrollo de una política de masas (...) No se percibió suficientemente la potencialidad de movilización de masas y de gestación y desarrollo de nuevas formas de poder popular”.⁶⁸

NOTAS

1. PATRICIA POLITZER: Carlos Altamirano, Ed. Melquía-des, Santiago, 1989, p. 119.

2. **Conflicto Político y Estructura Social**, documento elaborado por un grupo de profesores del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Instituto Central de Sociología de la Universidad de Concepción, s/f, elaborado a mediados de 1970.

3. LUIS VITALE: **Y después del 4, ¿qué?**, Ed. PLA, Santiago, 20 de septiembre de 1970.

4. FERNANDO CASTILLO V., RAFAEL ECHEVERRIA y JORGE LARRAIN: “Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile”, en Cuadernos de la Realidad Nacional (CEREN), N° 16, Santiago, 1973.

5. MANUEL CASTELLS: **La lucha de clases en Chile**, Ed. Siglo XXI, México, 1974, p. 337.

6. Declaración de Benjamín Prado, presidente del PDC, en “El Mercurio” y otros diarios, Santiago, 11 de septiembre de 1970.

7. **Documentos Secretos de la ITT**, Empresa Editora Nacional Quimantú Ltda., Santiago, 1972, p. 24.

8. “El Mercurio”, “El Clarín” y el resto de los diarios de Chile, 24 de septiembre de 1970.

9. Diario “Las Noticias de Última Hora”, 25 de septiembre de 1970.

10. Declaración del senador Bruno Siebert, general retirado, en el diario "La Epoca", 10 de septiembre de 1995.

11. Declaración de Jorge Alessandri R., publicada por "El Mercurio" y otros diarios, Santiago, 19 de octubre de 1970.

12. RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO: **Apuntes de medio siglo**, Ed. Chile América-CESOC, Santiago, 1994, p. 195.

13. LUIS ALVAREZ, FRANCISCO CASTILLO y ABRAHAM SANTIBAÑEZ: **Septiembre 73. Martes 11. Auge y caída de Allende**, Ed. Triunfo, Santiago-Barcelona-Buenos Aires, Noviembre de 1973, p. 12.

14. Esta información fue entregada a personas de absoluta confianza por familiares de Alessandri, presentes en esa conversación efectuada a las 22 horas del 4 de septiembre de 1970.

15. CATHERINE LAMOUR: **Le pari chilien**, Ed. Stock, París, enero 1972, citado por Hernán Soto en el artículo "René Schneider: el soldado y sus ideas", revista "Punto Final", marzo 1999.

16. "El Mercurio", 15 de septiembre de 1970, p.24

17. "El Diario Ilustrado" y "El Mercurio", 14-09-1970.

18. LORETO DAZA: "El Golpe de Estado que la CIA organizó contra Allende", Capítulo VII de la serie publicada en la revista "Qué Pasa", pág., 3, Santiago, 1989.

19. L.ALVAREZ, F.CASTILLO y A. SANTIBAÑEZ: op.cit., p. 24.

20. El autor de este capítulo tiene el texto completo, cuya grabación se efectuó esa noche en la sala de profesores del Instituto Central de Sociología de la Universidad de Concepción, con la presencia de dirigentes de la Federación de Estudiantes.

21. AUGUSTO ZIMMERMANN: "El fallido intento para frenar a Allende", en el diario "La República", Lima, 21-09-1995. Zimmermann es un periodista militante de la Democracia Cristiana del Perú, según información del diario "La Epoca", Santiago, 22 de septiembre de 1995.

22. **La CIA, 10 años contra Chile**, Documentos del Senado de los Estados Unidos, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1973.

23. HENRY KISSINGER: **Mis Memorias**, Vol. I, Ed. Atlántida, Buenos Aires, 1979.

24. Reproducido por el diario "El Mercurio", 20-12-1998,

artículo de Eduardo Sepúlveda: "El país según EE.UU. Chilenos X en los Archivos Secretos".

25. Declaraciones de William Colby en TV el 26-05-94 y reproducidas por el diario "La Nación" del 27 de mayo de 1994. En 1970, la máxima autoridad de la CIA era Holmes y Colby un alto funcionario, que más tarde fue Jefe de la CIA. Murió ahogado años después de esta declaración, encontrándose su cuerpo, sin saberse hasta el día de hoy las causas de su misteriosa muerte.

26. Reportaje en el programa de Televisión mencionado, reproducido en el diario "La Nación", 27 de mayo de 1994.

27. **El caso Schneider. La operación ALFA**, Ed. QUIMANTU, Santiago, 1972.

28. GONZALO MARTNER: **Chile, un país no alineado. 1970-73**, Santiago, 1988.

29. SERGIO RAMOS: **Chile ¿Una economía de transición?**, Cuadernos CESO, Universidad de Chile, Santiago, 1972.

30. Instituto de Economía de la Universidad de Chile: **La Economía chilena en 1971**, Santiago, 1971, p. 569 y 570.

31. SOLON BARRACLOUGH y ALMINO AFFONSO: "Diagnóstico de la Reforma Agraria (noviembre 1970-junio 1972)", en Cuadernos de la Realidad Nacional (CEREN), N°16, abril 1973, p.71.

32. RENE BILLAZ y EUGENIO MAFFEI: "La Reforma Agraria chilena y el camino hacia el socialismo. Algunas consideraciones", en Cuadernos de la Realidad Nacional(CEREN), N°11, enero 1972,p.69.

33. *Ibid.*, p. 72, 75 y 77.

34. *Ibid.*, p. 75 y 76.

35. CRISTOBAL KAY y PETER WINN: "La Reforma Agraria en el gobierno de la Unidad Popular", en revista "Sociedad y Desarrollo", N°3, Julio-Septiembre 1972, CESO, Universidad de Chile, p. 14 y 15.

36. Informe del CIAP, Banco Central, Santiago, febrero 1971.

37. JORGE LEIVA y ALEJANDRO GUTIERREZ: "Consideraciones acerca de la estatización de la banca", en Revista "Mensaje", N° 197, Santiago, 1971.

38. LILLIAN COLLYER y ELIANA SINAY: "Proceso de

Estatización del Sistema Bancario”, en **La Economía chilena en 1971**, Instituto de Economía, Universidad de Chile, Santiago, 1972, p. 580 a 585.

39. Para mayor información, consultar el excelente artículo de MARTA HARNECKER: “JAP y Poder Popular”, en revista “Chile Hoy”, N° 39, Santiago, 15-03-1973.

40. KALKI GLAUSER: “Areas de Propiedad bajo el Gobierno de la Unidad Popular”, en Cuadernos de la Realidad Nacional (CEREN), N° 9, Santiago, 1971, y OSCAR G. GARRETON: “La importancia del Area de Propiedad Social y la definición de las áreas”, *Ibid.*, N°11, p. 251.

41. EDUARDO NOVOA MONREAL: “Vías legales para avanzar hacia el socialismo”, revista “Mensaje, N° 167, y del mismo autor una separata de la Revista de Derecho Económico de marzo 1971.

42. DANIELLE PONCHELET: “El proyecto de Reforma Constitucional de la Democracia Cristiana: una crítica”, en el libro **La Economía chilena en 1971**, op., cit. p. 466 y 467.

43. CLAES CRONER y ORIANA LAZO: “El área de Propiedad Social en la Industria”, en el libro **La Economía chilena en 1971**, op. cit., p. 421.

44. **La Economía chilena...**, op. cit., p. 423.

45. CLOTARIO BLEST: “El estado actual de la clase trabajadora”, en revista “Punto Final”, N°177, Stgo, febrero 1973.

46. “Aurora de Chile”, N° 33, Santiago, 27-07-1973.

47. MARIO DURAN VIDAL: **El proceso político de la UP**, Bielefeld, Rep.Federal Alemana, 1978, p. 69.

48. FRANCISCO ZAPATA: **Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende**, Ed. El Colegio de México, 1974, p. 26.

49. GABRIEL SMIRNOW: **La Revolución Desarmada. Chile 1970-73**. Ed. ERA, México, 1977, p. 28.

50. PATRICIA GARRET: “La Reforma Agraria, organización popular y participación de la mujer en Chile (1964-1973)”, en MAGDALENA LEON: **Las trabajadoras del agro**, Ed. ACEP, Bogotá, 1982, tomo I, p. 288.

51. E. PASTRANA y M. THRELFALL: **Pan, techo y poder. El movimiento de pobladores en Chile (1970-1973)**, Ed. Siap-

Planteos, Buenos Aires, 1974 y JORGE GIUSTI: **Organización y Participación Popular en Chile**, Ed. FLACSO, Buenos Aires, 1973.

52. Servicio de Documentación del Congreso de Estados Unidos, en **Chile, 1960-70: a chronology, Chile since the election of Salvador Allende**. Además, materiales incluidos en el Informe del 21 de junio de 1973 del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano sobre las Corporaciones Multinacionales, editado con el título **ITT and Chile**, parte del cual ha sido editado en castellano: **La CIA, 10 años contra Chile**, Bogotá, 1973.

53. CARLOS ALTAMIRANO: **Dialéctica de una derrota**, op.cit., p.89

54. CARLOS PRATS: **Una vida por la legalidad** (Diario), Ed. FCE, México, 1976, p. 45.

55. *Ibid.*, p. 52.

56. ALAIN TOURAINE: **Vida y muerte del Chile popular**, Diario del 29 de julio de 1972 al 28 de noviembre de 1973, Ed. Siglo XXI, México, 1974, p. 38 y 40. Nota del mismo autor del 28-09-73, después del golpe militar: “La política de la DC parece retrospectivamente insensata (...) Ha apelado al golpe de estado, pero sin tomar su dirección o su control, de suerte que se halla engullida por él (...) Allende intentó la negociación, aceptando incluso al final volver a poner en juego su poder ante los electores. En cuanto a la DC ha hurtado el cuerpo constantemente. No ha querido negociar en agosto”. (*Ibid.*, p.40).

57. MARIO DURAN VIDAL: op. cit., p. 69.

58. **Los Gremios Patronales**, Documentos, Ed. QUIMANTU, Santiago, 1972, y CLAUDIO DURAN: **Propaganda de agitación en el período agosto 1972-marzo 1973**, Ed. Chile América-CESOC, Santiago, 1995.

59. SERGIO BITAR y CRISOSTOMO PIZARRO: **La caída de Allende y la Huelga de El Teniente**, Ed. Ornitorrinco, Santiago, 1987.

60. RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO: **Apuntes de medio siglo**, Ed. CESOC-Chile América, Santiago, 1994, p. 137.

61. Diarios “Noticias de Ultima Hora” y “El Siglo”, 4-12-1971.

62. El Siglo, 29 de junio de 1973.
63. CARLOS PRATS: op. cit., p. 59 y 62.
64. Declaración reproducida por CARLOS ALTAMIRANO: *Dialéctica de una derrota*, Ed. Siglo XXI, México, 1977, p. 114.
65. LUIS CORVALAN: *De lo vivido y lo peleado*, Ed. LOM, Santiago, 1997. Asimismo, el reportaje que le hizo Hernán Millas con el título "Los porfiados hechos de Lucho Corvalán", diario La Epoca, 21-09-1997, p.11.
66. Entrevista de la periodista Tamara Avetikian, "El Mercurio", Santiago, 26-09-1998, Cuerpo D, p. 1.
67. Reportaje reproducido por la revista chilena "Punto Final", Santiago, agosto 1997, p. 27.
68. PEDRO VUSKOVIC: *Obras escogidas sobre Chile (1964-1992)*, compilador: Raúl Maldonado, Ed. del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar", CEPLA, Santiago, 1993.

GOBIERNO DE PINOCHET Y DE LAS FUERZAS ARMADAS COMO INSTITUCIÓN

LUIS VITALE

Contexto latinoamericano

El golpe de Estado chileno, aunque con especificidades relevantes, formó parte de un proceso con características generales en la mayoría de los países latinoamericanos, especialmente en Brasil y el Cono Sur.

Las tendencias generales se produjeron hacia mediados de la década de 1960 a raíz de la implementación de la política de Seguridad Nacional, inspirada por el Departamento de Estado norteamericano. Esta política cambió las funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas latinoamericanas que, de garantes de la Seguridad Exterior y defensoras de la integridad territorial de cada nación, se transformaron en garantía de la Seguridad Interior, además de su histórico papel de defensoras de las fronteras limítrofes. Para implementar este proyecto político-militar, el Departamento de Estado norteamericano, asesorado por los Servicios de Inteligencia y las FF.AA., abrió centros de entrenamiento tanto militar como de estrategia política para oficiales de las FF.AA. latinoamericanas, basada en la novísima concepción de que el enemigo está en el interior de cada país.

Después de su gira por América Latina en 1969, Rockefeller sostuvo sin ambigüedades que, ante la crisis de conducción política de los partidos del sistema en América Latina, la única alternativa para contener el ascenso

popular era la instauración de gobiernos militares; estrategia que pronto adoptaron las presidencias de Johnson, Nixon, Ford y Reagan, aumentando los préstamos con fines logísticos militares y la participación de los militares en empresas industriales con el fin de acentuar su "poder fáctico". La alta oficialidad pasó a constituir un estrato social más definido, directamente ligada a los intereses del capital monopólico y a sus socios menores "nacionales". De hecho, esta nueva burocracia tecno-militar comenzó a involucrarse en el proceso productivo y financiero.

La clase dominante, viendo la debilidad de sus propios partidos para superar la crisis política, decidió en la mayoría de los países delegar el poder en las Fuerzas Armadas. De "facto", los partidos fueron suplantados por los militares y por las Instituciones corporativas como las Sociedades de la Industria, Agricultura y Cámara de Comercio. Así se fue legitimando la salida inconstitucional y se fue institucionalizando la ilegitimidad política.

La nueva función de contra-insurgencia interior tuvo como finalidad impedir el surgimiento de una alternativa anticapitalista similar a la inaugurada por la Revolución Cubana. La "Alianza para el Progreso" había logrado mediatizar, aunque por breve lapso, las reivindicaciones de algunos sectores oprimidos, particularmente el campesinado a raíz de una limitada Reforma Agraria recomendada por John Kennedy. Estos planes de transformación gradual "progresista" estimularon la creación de nuevos partidos políticos de Centro, en particular Demócrata Cristianos, Radicales-Liberales como alternativa a la Derecha tradicional y oligárquica. Pero, contradictoriamente, generaron expectativas que pronto se tradujeron en nuevas movilizaciones sociales, influenciadas por los avances hacia el socialismo de la isla de Martí.

Precisamente, para detener este proceso de ascenso popular, que en algunos países latinoamericanos se com-

binaba con guerrillas y acciones armadas, el Departamento de Estado norteamericano decidió estimular los cambios mencionados anteriormente respecto de las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas, cuya primera concreción fue el golpe militar contra el presidente constitucional brasileño Joao Goulart en 1964. Los dirigentes de la URSS no manifestaron oposición internacional a esta estrategia, porque una revolución generalizada en América Latina podría poner en peligro su política de coexistencia pacífica-armada con EE.UU.

El ascenso popular adquirió características regionales, especialmente en el Cono Sur. Las huelgas generales de Uruguay entre 1967 y 1972, respaldadas por los "Tupamaros"; las movilizaciones argentinas de 1968 expresadas en el "Cordobazo", "Chaqueñazo" y "Mendozazo", apoyadas por el PRT y Montoneros; el triunfo de Salvador Allende y, sobre todo, la emergencia revolucionaria boliviana que llevó al poder al general nacional-antiimperialista Juan José Torres y a la Asamblea Popular de 1971, abrieron una fase de Regionalización pre-revolucionaria.

Entonces, como respuesta, EE.UU. aconsejó a las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur iniciar un proceso de Regionalización de la contrarrevolución. Los golpes de Estado comenzaron en Bolivia en 1971, continuaron en Uruguay en junio de 1973, luego en Chile en septiembre de este año y en Argentina en marzo 1976, consumándose así la regionalización de la contrarrevolución.

El golpe de Estado chileno fue parte de esta tendencia en el Cono Sur, aunque obviamente fue precipitado por la agudización de las luchas sociales y políticas durante el gobierno de la Unidad Popular. Expresó con nitidez un fenómeno clave: la participación de las Fuerzas Armadas, como Institución, en el golpe y en el poder, en la administración total de las funciones del Estado.¹

Para comprender la magnitud de este acceso al po-

der de las FF.AA. para superar la crisis de conducción política de los partidos de la clase dominante, es necesario recordar que los anteriores golpes de estado, eran encabezados por caudillos militares, como Juan Vicente Gómez y Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, Odría en Perú, etc., sin comprometer a las FF.AA. en la administración del Estado. A partir de las décadas de 1960 y 1970, las FF.AA. asumieron el poder como Institución.

Emergió así un nuevo factor subjetivo en la política latinoamericana: "el partido militar". Si bien es cierto que no tenía la misma estructura organizativa de los partidos políticos, la alta oficialidad comenzó a actuar de hecho como un partido, a deliberar en sus asambleas, a discutir los planes de gobierno, la política económica, la política internacional y todo aquello relacionado con el quehacer de la nación.

Las Fuerzas Armadas como Institución al poder

La Junta surgida en 1973 expresó inequívocamente que el poder residía en las Fuerzas Armadas como Institución, al estar integrada por los Comandantes en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet; de la Marina, José Toribio Medina; de la Aviación, Gustavo Leigh, y el Director de Carabineros, César Mendoza. Para designar a éste, fue necesario dar de baja a varios generales de superior jerarquía.

Con el fin de que quedara en claro que en las FF.AA. residía el poder total, fue prohibida toda actividad de los Partidos Políticos, quedando la mayoría de ellos –los de izquierda– fuera de la legalidad impuesta, además de clausurar el Parlamento por decreto, violando manifiestamente las disposiciones de la Constitución de 1925. Sin ningún recato, el Decreto Ley N° 128 del 12-11-1973 estableció que la Junta asumía todas las funciones de los poderes Legis-

lativo y Ejecutivo y, en consecuencia, el poder constituyente que a ellos corresponde". Se disolvió el Tribunal Constitucional y se decretó la caducidad de los Registros Electorales.

El diario "El Mercurio" del 13 de noviembre de 1973 reprodujo las siguientes palabras de Pinochet: "la adhesión a la Junta de Gobierno implica renunciar a la acción partidista". El Decreto 1.921 de principios de 1974 prohibió a los partidos, que todavía eran tolerados, formular declaraciones, celebrar reuniones, realizar propaganda e interferir en las actividades gremiales. A las objeciones de Patricio Aylwin en nombre de la DC, el Ministerio del Interior contestó: "en el país existe un gobierno militar, en un estado de sitio y de guerra interna".²

Si la "memoria histórica" se ha perdido acerca de que las FF.AA., como institución, gobernaron durante 17 años, el Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, ayuda a recuperarla; a raíz de su visita a Pinochet en Londres, parlamentarios de la UDI, Hernán Larraín y Juan Antonio Coloma, declararon: "El general Izurieta le ha dicho al mundo entero que lo que le hagan al senador Pinochet en su calidad de Jefe del Estado de Chile durante el gobierno militar se lo hacen al Ejército, ya que dicho gobierno no fue de una persona, sino la obra de una Institución, en todos sus alcances".³

Guerra interna como pretexto de la represión

El concepto de guerra interna utilizado por la Junta Militar no tuvo ninguna base real porque no hubo dos ejércitos que se enfrentaran durante el golpe de Estado, como lo fueron las guerras civiles de 1829, 1851, 1859 y 1891. En rigor, se utilizó para justificar una represión tan masiva que no tiene precedentes, inclusive si se suman los muertos de las masacres de Santa María, San Gregorio, Marusia,

La Coruña, la “semana roja” y de Puerto Natales, ejecutadas por militares por órdenes de la clase dominante.

Utilizando la terminología castrense, podemos decir que lo sucedido desde septiembre de 1973 fue una variante de “guerra de baja intensidad”, sistematizada por la Doctrina de Seguridad Nacional, engendrada por las FF.AA. y Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos.

El hecho de que en los primeros días del golpe se produjeran esporádicas respuestas armadas, no permite caracterizar estos enfrentamientos ni siquiera como el inicio de una guerra civil, concepto más preciso que el de guerra interna, pues es sabido que la resistencia al golpe fue muy débil.

Los partidos de la UP disponían de algún armamento, especialmente la izquierda socialista que hizo uso de ellos disparando desde los edificios del centro santiaguino, como los que rodeaban a La Moneda y en el Servicio Nacional de Salud; en la CORFO y en el Banco Chile, siendo sofocados después de dos días de tiroteo, carentes de táctica y estrategia para enfrentar el golpe.

Obreros de algunas fábricas de los Cordones Industriales, como Sumar, usaron fusiles y metralletas, siendo rápidamente desarmados y obligados a tenderse en el suelo. La táctica de huelga general con ocupación de fábricas lanzada por la CUT fue equivocada, pues favoreció contradictoriamente a los militares, que así pudieron apresar a los trabajadores concentrados en las empresas, error que había cometido también la izquierda uruguaya en el golpe de junio de 1973.

La otra organización que contaba con armas livianas y pocas ametralladoras fue el MIR, pero tampoco alcanzó a aplicar su plan. Ni siquiera se improvisó una respuesta en la reunión que tuvieron dirigentes socialistas y miristas el día del golpe en la Comuna de San Miguel, resolviendo el MIR guardar, para mejor ocasión, las armas que tenía.

Un grupo dirigido por el militante del MIR, “el Mickey”, seudónimo de Alejandro Villalobos, intentó una operación contra el Regimiento ferrocarrilero N°7 de Puente Alto, que terminó con su fusilamiento. El 15 de septiembre un grupo procuró sin éxito tomar la Comisaría de Carabineros de las Tranqueras en la Comuna de Las Condes.

En provincias hubo también escasa resistencia. En el complejo maderero de Panguipulli, el “comandante Pepe” o José Liendo, dirigió un grupo que hizo acciones armadas durante algunos días, hasta que fue apresado y fusilado. La resistencia de los primeros días post-golpe se hizo en forma aislada, por grupos sin coordinación. Uno de los casos de cierta respuesta popular fue el enfrentamiento con una unidad militar de pobladores de La Legua en Santiago el 12 de septiembre y de Lo Hermida; otro, en el Cerro Santa Lucía el día 13 de septiembre. Quizá falten más informaciones sobre acciones de pequeños grupos, pero la mención de las más conocidas constituye una base suficiente como para sostener que fue débil la respuesta de la izquierda, fenómeno que desmiente la versión de una guerra interna autoproclamada por la Junta Militar para justificar la represión.

Esta versión se desmiente también con la cantidad de armas requisadas por las FF.AA. en 1973, cifra entregada por la propia Junta y sus amanuenses: “pistolas calibres 38 y 45, pistolas ametralladoras, subametralladoras MP-40 calibre 9 mm., cargadores y cartuchos encontrados en la residencia de Eduardo Paredes en la Torre 18 de la Remodelación San Borja”.⁴ En Tomás Moro, casa del Presidente Allende, se hallaron: “147 fusiles automáticos, 9 lanzacohetes, 2 cañones, 121 granadas militares y 150 de fabricación casera y 5 ametralladoras”, según el informe oficial, que también agregaba una requisición de armas en la Población La Legua.⁵

Salta a la vista de un buen entendedor en estrategia

militar que con ese arsenal tan modesto, concentrado en connotados dirigentes de gobierno, que dificultaba aún más la tarea clandestina, era imposible provocar una guerra civil y menos enfrentar el golpe de Estado. Cabe suponer que el volumen del arsenal posiblemente fue abultado por el Informe oficial, lo que no altera la conclusión de que no bastaba ni siquiera para una media docena de enfrentamientos de envergadura con las FF.AA.

Uno de los escasos estudios sobre las dimensiones de la represión fue elaborado en 1991 por la Comisión Verdad y Reconciliación, conocida con el nombre de Comisión Rettig, designada por el Presidente del primer gobierno de la Concertación, Patricio Aylwin. Sin desconocer el papel que cumplió para esclarecer la verdad, creemos que la Comisión se quedó corta en la cifra de muertos, desaparecidos y encarcelados, quizá por el escaso número de personas que se presentó a declarar, debido al temor que aún subsistía. Por eso, la cifra de 2.350 muertos y desaparecidos nos parece errónea a nosotros y a otras personas consultadas.

Anmistía Internacional sostuvo a fines de 1974 que la cantidad de muertos bordeaba los 15.000, cifra que coincide con la estadística que hicimos los presos en los Campos de Concentración, a través de encuestas, preguntándole a los compañeros que provenían de la mayoría de las provincias. Por su parte, Andrés Domínguez, Coordinador General de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ha sostenido que hasta 1981 el país había conocido no menos de 15 mil asesinados, más de 2.200 detenidos desaparecidos, 164.000 exiliados, y 155.000 presos en más de 16 campos".⁶ No obstante, Pinochet, en entrevista concedida a la Televisión de Luxemburgo, días después del golpe, manifestó: "Acerca de los muertos, no llegan a un centenar. Heridos sí que hay bastantes, unos trescientos, pero sin mayores consecuencias".⁷ Otra estadística oficial dis-

minuía la cifra: "Hasta el jueves 14 de septiembre 1973, la Asistencia Pública de la Capital registraba 16 muertos".⁸

Por otra parte, deben considerarse las cifras posteriores a la década de 1970. Por ejemplo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos informó que entre el 11 de mayo de 1981 y el 31 de diciembre de 1987 se registraron 405 muertos, 6 desapariciones de detenidos, 201 secuestros, 1.180 relegaciones, 5.427 detenciones individuales, 36.666 detenciones en manifestaciones y 56.961 detenciones en operaciones sobre poblaciones.⁹ Nuevas investigaciones que están en curso, seguramente entregarán cifras más aproximadas de este genocidio sin precedentes en Chile y en otros países latinoamericanos, salvo quizá Argentina durante la dictadura militar iniciada en marzo de 1976.

Bonanza económica y neoliberalismo, ¿desde cuándo?

Se ha generalizado la opinión –ya convertida en casi mito– de que la dictadura militar sacó prontamente a Chile de la crisis económica desencadenada por el gobierno de la UP, opinión basada en la declaración de Pinochet: "Cuando tomamos el gobierno, el país estaba al borde del precipicio y... gracias a nuestra política ¡ha dado un salto adelante!". Más lejos aún –y más grave por ser historiador– fue Ricardo Krebs al sostener enfáticamente que el país experimentó en esos años un impulso modernizador efectivo que lo puso en la línea de los países desarrollados".¹⁰

Este error está relacionado con otro más grave aún: Pinochet pudo superar esta crisis gracias a la inmediata aplicación del modelo neoliberal, a tal punto que en 1998 se han celebrado Seminarios internacionales con el tema: "25 años de neoliberalismo en Chile".

Varios investigadores, entre ellos el destacado historiador Perry Anderson, han demostrado inequívocamen-

te que las primeras experiencias mundiales de aplicación del modelo neoliberal fueron realizadas recién a principios de los '80 por los gobiernos de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Helmut Köln en un intento por remontar la recesión de 1973-75 que puso de manifiesto el agotamiento del anterior patrón de acumulación capitalista, afectado por las crisis cíclicas durante las décadas de 1950 y 1960.

El neoliberalismo no fue implantado de la noche a la mañana sino que se fue gestando a través de un proceso económico caracterizado por el capitalismo monopólico –o fase imperialista II– de las multinacionales y las nuevas modalidades del capital especulativo, basadas en la escuela monetarista de Chicago. Las ideas habían sido planteadas por Milton Friedman, Walter Lipman, Karl Popper, críticos del Estado “benefactor” y, sobre todo, por Friedrich Hajeck con sus sugerencias de reducción de impuestos, estabilidad monetaria y no aceptación de las presiones sindicales por aumentos de salarios, de previsión y otras reivindicaciones que afectaban la tasa de ganancia.

Por consiguiente es obvio –para quien no quiera acomodar la historia a una ideología– que los militares no implantaron desde los inicios un modelo económico –como el Neoliberal– que todavía no era practicado ni siquiera por Europa Occidental y la más grande potencia mundial: los Estados Unidos. Si así hubiese ocurrido, los teóricos de la Economía Política se habrían encontrado con la paradoja de que el modelo neoliberal de economía-mundo, al decir de Wallerstein, tuvo como punto de arranque un país subdesarrollado, dependiente y aislado en los confines sureños del Océano Pacífico.

Lo que sí puede afirmarse es que la dictadura de Pinochet pavimentó el camino hacia un modelo que no se conocía aún, porque el golpe cortó de raíz las tendencias a la baja de la tasa de ganancia. Sin saber a que meta llegar,

y sólo por necesidades de su política represiva, aplastó las organizaciones sindicales, terminando así con las presiones por reivindicaciones salariales y previsionales; redujo los impuestos a las grandes empresas y abrió el camino sin retorno de las privatizaciones.

En rigor, la implantación plena del modelo neoliberal en Chile recién se produjo a mediados de la década de 1980, es decir 12 años después del golpe militar, cuando se generaliza en casi todas las naciones la mundialización o internacionalización del capital.

Respecto de la llamada bonanza económica del régimen militar, todas las estadísticas muestran que desde septiembre 1973 hasta 1976 Chile sufrió una recesión económica que remontó transitoriamente en 1977 hasta caer en la conocida crisis financiera de 1981-82, que ha sido considerada por los economistas, que están analizando la crisis de 1998-99, como la peor de las recesiones chilenas de las décadas de 1980 y 1990. En síntesis, la tan magnificada bonanza económica de 17 años del régimen militar se reduce a solo un lustro: de 1985 a 1990.

Esta interpretación global de la evolución de la economía bajo el régimen militar, nos permite afirmar que es errónea la utilización del concepto “refundación del capitalismo” a partir del ascenso al poder de la Junta Militar, por la vía armada. A mi juicio, esa definición tiene un contenido ideologizante y a-histórico. En primer lugar, porque la columna vertebral de la economía estuvo fundamentada en la exportación de una materia prima, el cobre; absurdo conceptual, a la luz de la Economía Política: “refundar el capitalismo” sobre la base de la tradicional economía primaria de exportación, ignorando que el salto cualitativo del capitalismo se hizo con la Revolución Industrial de los siglos XVII al XIX. Inclusive, si se quisiera emplear el discutido concepto de “refundación del capitalismo” habría que decir que en Chile y Latinoamérica, se

inició con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones inaugurado en 1930-40-50.

En segundo lugar, porque el cobre constituyó desde la década de 1930 más del 50% de los ingresos de divisas del país. En tercer lugar, porque el despegue económico acaecido desde mediados de los '80, al integrarse Chile al modelo neo-liberal, no se fundamentó en un proceso acelerado de industrialización sino en el aumento de la exportación de materias primas, con un mayor valor agregado, en las áreas agro-industrial, pesquera y maderera.

Menos podría hablarse de una "revolución capitalista", como se ha sostenido sin ninguna rigurosidad científica, pues está demostrado por las Ciencias Sociales que una Revolución se caracteriza por un cambio en el Modo de Producción, como sucedió con el reemplazo del modo de producción feudal por el capitalista a principios de la llamada Edad Moderna. Una Revolución se define por un cambio sustancial del poder, como acaeció con la Revolución Francesa, en que la monarquía feudal fue desplazada por la burguesía industrial.

Nadie podría negar que la implantación del modelo neo-liberal significó un reajuste del sistema capitalista, reajustes que han sido frecuentes, como el histórico paso de la economía librecambista del siglo XIX a la inauguración del modelo de concentración de capital, conocido con el nombre de capitalismo monopólico internacional o fase imperialista, desde la década de 1880 en adelante; y a ninguno de los teóricos de la época, como Hobson, Hilferding – y menos a Lenin, que se basó en las investigaciones de ambos – se les ocurrió caracterizar dicho cambio como una "revolución capitalista".

Para analizar con más detalles el proceso chileno, dividimos la evolución de la economía bajo la dictadura militar en cuatro períodos: 1) del 12-09-1973 a 1976; 2) de 1977 a 1981; 3) de 1982 a 1985 y 4) de 1986 a 1990.

1) Como señalamos anteriormente, la Junta Militar no tenía un modelo económico proyectado. Sólo sabía, por intermedio de sus consejeros aúlicos de la Derecha, que después de derrocar al gobierno de la UP era necesario cortar de raíz todos los factores que afectaban la tendencia a la baja de la tasa de ganancia de los empresarios, es decir, presión sindical por aumento de salarios y de previsión¹¹; además, reducir los gastos sociales del presupuesto fiscal, los impuestos que pagaban los dueños de los medios de producción y, en general, de lo que debía cancelar la clase dominante, de acuerdo a leyes aprobadas durante los gobiernos de Frei y Allende.

Para cumplir estos objetivos era necesario descabezar el movimiento obrero y, en lo posible, destruir sus organizaciones sindicales. Asimismo, cambiar las funciones anteriores del Estado, en particular aquellas que permitieron definir al Estado como benefactor¹²; devaluar el tipo de cambio para atenuar el déficit de la balanza de pagos; implantar el "monetarismo" –que no es un modelo que abarque al conjunto de la economía sino que se emplea para detener la inflación y lograr una mayor estabilidad monetaria– que los Chicago Boys utilizaron en Chile para frenar la hiperinflación¹³; liberalizar los precios; acelerar el proceso de exportación-importación, iniciado por Alessandri en 1960; y aumentar las tasas de interés. Estas dos últimas medidas provocaron la quiebra de pequeñas y medianas fábricas y roces con las empresas de la industria liviana que elaboraba productos destinados al mercado interno y que se sentía afectada por la importación indiscriminada de aquellos artículos extranjeros que le hacían competencia, a causa de una mayor apertura al comercio mundial.

Esa fue la razón por la cual surgieron en 1974-75 las primeras críticas de un sector empresarial que había respaldado el Golpe de Estado (la SOFOFA) que se hicieron

públicas por intermedio de uno de sus principales dirigentes, Orlando Sáenz. Asimismo, El Mercurio y otros diarios reprodujeron en 1975 algunas declaraciones de disconformismo de la Cámara Chilena de la Construcción, afectada por la drástica disminución de las obras públicas, particularmente construcción de viviendas. También comenzaron a manifestar su descontento otros representantes del "militarismo civil", como la Confederación del Comercio detallista, liderada por Cumsille, afectada por la baja de las ventas causada por la cesantía y disminución del poder adquisitivo de la población.

Lo más grave fue la baja del precio del cobre –que superaba largamente un dólar la libra a principios de 1974 y su descenso a 0,60 en diciembre del mismo año– como resultado de la recesión económica generalizada a nivel mundial en 1974, que se prolongó hasta 1975. Se hace necesario recordarles a los economistas partidarios del régimen militar que la Renta del Cobre constituyó, durante los 17 años de gestión castrense, la columna vertebral de la economía; en una paradoja más de la historia, la dictadura heredó y se benefició de la nacionalización del cobre promovida por el mismo gobierno "comunista" al que derrocó: Salvador Allende. A partir de entonces, todos los excedentes que se llevaban las Compañías norteamericanas quedaron en manos del Estado chileno, hecho que objetivamente favoreció a la administración Pinochet en un monto de 20.000 millones de dólares por concepto de las entradas del cobre durante el decenio 1974-1984.

En tal sentido, es llamativo el fenómeno de que el gobierno militar y sus asesores civiles –entre ellos Jaime Guzmán, Hernan Büchi, Rolf Lüders, Carlos Cáceres, Sergio Onofre Jarpa, partidarios fundamentalistas de las privatizaciones– jamás insinuaron la necesidad de privatizar a Codelco, propuesta que recién bajo los gobiernos de la Concertación se han permitido plantear. Sabían que

no sólo el 10% de las ventas del cobre ingresaba a las arcas de las FF.AA., sino que también el 90% restante de las entradas del cobre quedaba en manos del Estado, administrado por el gobierno militar.

De ahí, que toda variación del precio mundial del cobre hizo –y hace– un impacto decisivo en la economía chilena, tanto en su alza como en su descenso, hecho último que afectó la economía durante los primeros años de la dictadura. Según "El Mercurio" de mediados de 1974, el economista norteamericano, Arnold Harberger, que había vaticinado una era de prosperidad para la Junta Militar, lamentó en una conferencia pública realizada en Santiago "que su diagnóstico sobre la situación chilena fuera por completo diferente del que hizo en su venida anterior (...) el precio del cobre se estimaba en aquella oportunidad en un dólar la libra y debe considerarse hoy a unos 60 centavos de dólar. Esta disminución implica un menor ingreso de 800 millones de dólares. De ahí que la situación para 1975 no pueda mirarse con el optimismo con que pudo hacerse hace seis meses".¹⁴

Años después, Harberger criticó a la Junta Militar por no haber efectuado una mayor contracción de la política monetaria, observación cuestionada por A. Jadresic: "la fuerte caída de la cantidad real de dinero durante 1974 y 1975 alcanzó a un total de 40%"¹⁵. Situación que incidió en el retardo de la apertura financiera, cuya explicación "radica en su posible impacto negativo en el control de la emisión monetaria, verdadera obsesión de los responsables de la conducción de la política económica", según Xabier Arrizabaló.¹⁶

La Balanza Comercial, según la exposición del 22-10-74 del Ministro Cauas, había bajado de -284 en 1973 a -334 en 1974, advirtiendo que se esperaba un déficit superior al doble en 1975, como ocurría también con la Balanza Pagos.

La Junta Militar esperó compensar esta acentuada y prolongada recesión, que ya tomaba signos de crisis, con un aumento de las inversiones extranjeras. Mas éstas no llegaron, salvo en el área de la celulosa, porque ante la recesión económica internacional los capitalistas europeos, norteamericanos y japoneses calcularon cautelosamente sus inversiones, máxime cuando tomaron en cuenta que el mercado chileno se había restringido por la escasa demanda interna.

La situación se vio agravada por el compromiso de pagar indemnizaciones a las compañías cupríferas: 68 millones de dólares a la Cerro Corporation, US\$ 253 millones a la Anaconda y US\$ 68 millones a la Kennecott. Al mismo tiempo, la Junta Militar –afectada por las escasas reservas– debía pagar en 1975, a cuenta de la Deuda Externa, la cantidad de 700 millones de dólares. Intentó renegociar otra vez la Deuda Externa con el Club de París, pero Inglaterra, Suecia e Italia se negaron porque, según el Informe del Banco Mundial, “el deterioro de la economía chilena comienza a ser alarmante para los acreedores extranjeros”.

En síntesis, este primer período, de mediados de septiembre 1973 hasta fines de 1976, se caracterizó por un descenso pronunciado del precio del cobre, reducción de importaciones, caída del consumo a causa del desempleo, que bordeaba el medio millón de cesantes en un total de población activa de 3.300.000 trabajadores, acentuada por la reducción del gasto público, crecimiento exponencial de la tasa de inflación, todo lo cual daba un cuadro de recesión con hiper-inflación.

Con el fin de ilustrar esta situación económica, reproducimos los siguientes datos señalados, en base a las estadísticas de instituciones de la época militar, por Xabier Arrizabalo en su denso libro: **Milagro o quimera. La economía chilena durante la dictadura**, Ed. Los libros de la Catarata, Madrid, 1995, p. 284 a 308:

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

(en millones de pesos de 1977)

Años	P I B	Tasa de variación
1974	290.554	1,00%
1975	253.043	-12,90%
1976	261.945	3,50%

Fuente: Banco Central, CELADE, INE.

2) Entre 1977 y 1981 se produjo un relativo repunte de la economía, como resultado de varios reajustes, entre ellos la adopción de una mayor política de “shock”, iniciada en abril de 1975 con el “Plan de Recuperación Económica” destinado a superar la lenta y paulatina gradualidad de la anterior política de estabilización.¹⁷

La formulación de este nuevo Plan significó, sin explicitarlo, un reconocimiento del fracaso de la política aplicada hasta entonces para frenar el fenómeno de hiperinflación, pues luego de tres años de régimen militar la inflación alcanzaba al 211% anual, según la estadística oficial del Banco Central. De este modo, se estaba reconociendo que era incorrecta la estimación gubernamental de que la causa de la inflación era “el exceso de demanda –traducido en el exceso de emisión monetaria– derivado del déficit público y de los costos del trabajo”. Arrizabalo acota: “tomando datos del Banco Central para los años 1973 y 1975, el déficit fiscal como porcentaje del PGB se ha reducido de 24,7% a 2,6%.”¹⁸

La modificación de la política antiinflacionaria se produjo a mediados de 1977 y, fundamentalmente, en febrero 1978, pasando el tipo de cambio a ser lo prioritario. De ahí, las frecuentes revaluaciones del peso, en concordancia con los precios de las importaciones.

Durante estos años hubo una relativa expansión de

la economía; los economistas “Chicago Boys” dijeron que era el resultado de la política monetarista, minimizando que uno de los factores claves del repunte económico fue el aumento del precio del cobre en el mercado mundial y “la utilización paulatina de medios de producción que habían quedado ociosos después de la recesión de 1975”.¹⁹

En un trabajo de investigación (1985) señalamos que las exportaciones chilenas no tradicionales, insertadas en el nuevo proceso de reajuste de la división internacional del capital-trabajo, habían aumentado de 750 millones de dólares en 1974 a 1.619 millones en 1980, según Informe de 1980 de la Sociedad de Fomento Fabril.²⁰

Polemizábamos entonces, en el exilio, con quienes “alegremente” sostenían que Pinochet había destruido la industria nacional. Era cierto que con su política de apertura comercial había asfixiado la manufactura que trabajaba para el mercado interno, pero era un error decir que había destruido lo grueso del aparato productivo, pues la burguesía nunca se hace el haraquiri, aunque alguno de sus componentes pueda verse afectado por la irracionalidad del sistema. Los hechos mostraban que fracciones importantes de la clase dominante desplazaron entonces capitales a las empresas de exportación no tradicional, al gran comercio de exportación y al área especulativa.

Era el período de euforia de los grandes especuladores de las Casas Financieras, especialmente del grupo de “Los Pirañas”, de Cruzat, Larraín y Vial, motores de la llamada “área rara” de la economía. Demás está decir que este relativo repunte económico se hizo en base a un altísimo “costo social”: rebaja del 50% del poder adquisitivo de los trabajadores, una cesantía cercana al 20% y la quiebra de pequeños comerciantes y talleres artesanales.

Economistas y empresarios, como Eugenio Heiremans, entonaban cantos de triunfo: el éxito económico de la Junta Militar no tiene precedente en los decenios anteriores. Tam-

bién se salía del marco tradicional de medida de la clase dominante, don Carlos Cruz: “Esta política económica del gobierno es el **esfuerzo más trascendental del siglo**”,²¹ haciendo coro al director de la orquesta que, con batuta en mano, manifestaba eufórico acompañado por el Ministro del “sin-Trabajo”, José Piñera: “uno de cada siete chilenos tendrá un automóvil dentro de cinco años... crearemos un millón de ocupaciones... construiremos 900.000 viviendas... en diez años más, **superaremos el promedio de ingreso per cápita mundial... habremos transformado a Chile de un país destruido en un país desarrollado**”(!!!) (Declaraciones de Pinochet y José Piñera, en El Mercurio, 28 de agosto de 1980).

Al año siguiente, ambos estaban mendigando créditos internacionales para paliar la crisis financiera.

Las siguientes cifras son indicadores de aspectos de la evolución económica en esta fase:

PRODUCTO INTERNO BRUTO

(en millones de pesos de 1977)

Años	PIB	Tasa de Variación
1977	287.770	9,90%
1978	311.417	8,20%
1979	337.207	8,30%
1980	363.446	7,80%
1981	383.551	5,50%

Fuente: Banco Central, CELADE, INE.

c) En el tercer período: de 1982 a 1985, Chile sufrió una de las recesiones económicas más graves desde la gran crisis de 1929-30, al repercutir fuertemente el impacto de la recesión económica internacional de 1980-82, que puso al mundo capitalista al borde de la bancarrota económica,

según Mandel. A la base de esta recesión generalizada estuvo la desaceleración económica de la década de 1970, que liberó excedentes monetarios, anteriormente invertidos en el área productiva, que las multinacionales canalizaron a través de la banca mundial.

La liquidez internacional en aumento desmedido condujo al otorgamiento de préstamos, que quedaron fuera de la regulación de los bancos centrales. Se quebró la paridad de cambio de las monedas, generándose un aumento de las reservas mundiales que se volcaron a los nuevos circuitos financieros, adquiriendo un ritmo propio los flujos monetarios. El mercado del dólar –que dobló al marco alemán y al franco– escapó al control de los bancos estatales de cada nación, acelerándose la especulación financiera y la capacidad prestamista de la banca transnacionalizada a las naciones del “tercer mundo”.

En la mayoría de los países latinoamericanos, el endeudamiento aumentó por la imposibilidad de pagar las amortizaciones e intereses y por las importaciones de bienes de capital. La Deuda Externa chilena aumentó de 4.000 millones de dólares en 1973 a más de 15.000 millones en 1984. Con el fin de evitar la bancarrota, la Junta Militar decretó el 13 de enero de 1983 la liquidación de algunos bancos (BUF, BCH, Financiera CIGA) y la intervención de otros (Bancos Chile, Santiago, Concepción). Entró en crisis el Sistema de Fondos Mutuos, afectando a más de 130.000 pequeños inversionistas, y las “financieras” entraron en un acelerado proceso de quiebra.

Al intervenir las Casas Financieras, Pinochet reafirmó el papel del Estado, aunque en palabras se seguía proclamando la necesidad de quitarle cada vez más sus funciones keynesianas. Actualmente –decía la revista derechista “Qué Pasa”, dirigida por Gonzalo Vial– “nos encontramos con un todopoderoso Estado empresario, el cual directa o indirectamente controla las mayores empresas pro-

ductivas del país y parte importante del sistema financiero nacional. No es el mejor de los corolarios para un modelo económico liberal como el que se aplicó durante el último decenio”.²²

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Años	PIB	Tasa de variación
1982	329.523	-14,00%
1983	327.180	- 0,70%
1984	347.926	6,30%
1985	356.447	2,40%

Fuente: Banco Central, CELADE, INE.

4) En la cuarta fase: de 1986 a 1990, se produjo una apreciable apertura comercial, integrándose Chile plenamente al modelo neoliberal.

El Producto Interno Bruto creció a una tasa anual promedio de 6% en ese lapso. El precio del cobre repuntó y aumentaron las exportaciones no tradicionales, especialmente la madera, pesca y el rubro frutícola. En 1986 creció la producción agrícola alcanzándose una de las altas cosechas de trigo. Se mantuvo la estabilización monetaria, aunque el precio real de la moneda nacional se mantuvo artificialmente revalorizado. Entre 1987 y 1989 hubo un relativo crecimiento de las exportaciones industriales, incluidas las agro-industriales.

Chile pudo aumentar las exportaciones no tradicionales gracias a las llamadas ventajas comparativas, entre las cuales sobresalían los bajos sueldos y salarios que se pagaban a los trabajadores.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

(en millones de pesos de 1977)

Años	P I B	Tasa de variación
1986	376.627	5,0 %
1987	398.230	5,7 %
1988	427.530	7,4 %
1989	470.243	10,0 %
1990	480.323	2,1 %

AGUDIZACIÓN DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Durante los 17 años de gobierno militar, se agudizaron las desigualdades sociales, consolidándose los rasgos oligárquicos de la clase dominante, entendiéndose por oligarquía no sólo a los terratenientes tradicionales sino a los grupos que concentran el poder económico en pocas manos. Al mismo tiempo, la burguesía chilena perdió los últimos rasgos de "nacional", al asociarse totalmente con el capital financiero internacional. La concentración monopólica se expresó en la emergencia de media docena de grupos que eran encabezados por apellidos chilenos, pero que en el fondo eran representantes de asociaciones con el capital monopólico foráneo.

Uno de los factores que permitió una pronta acumulación de capital fue la creación de las AFP e ISAPRES que, con el dinero que cotizaban los empleados, obreros y profesionales, estuvieron en condiciones de efectuar grandes inversiones en áreas de mayor expectativa económica.

Mientras se desarrollaba esta nueva plutocracia, se ahondaba el abismo entre ricos y pobres, pues éstos llegaron a los más bajos niveles de ingreso del último medio

siglo, por varios fenómenos. Uno de ellos fue la abrupta disminución de los salarios reales; otro, la tasa acelerada de desempleo y subempleo, que fluctuó como promedio entre el 15 y 20% durante los 17 años de la dictadura, salvo sus tres últimos años. Paralelamente, comenzó a desarrollarse el sector informal, llegando a sobrepasar el 30% de la fuerza de trabajo.

La contrarreforma agraria generalizó una situación de pobreza, obligando a los campesinos a vender las parcelas que habían obtenido durante el reparto de tierras efectuado por los gobiernos de Frei y Allende, proceso que es analizado en profundidad, más adelante, por Octavio Avendaño. A su vez, las nuevas empresas agroindustriales emplearon una mano de obra barata y temporal, generando un vasto sector de trabajadores temporeros, fundamentalmente mujeres, que sólo laboraban en tiempos de siembra y cosecha, expuestos a la contaminación, sin contrato de trabajo, sin previsión y en condiciones casi inhumanas de hacinamiento y falta de higiene.

A tal extremo llegó la pobreza y el desempleo que la dictadura tuvo que implementar el PEM y el POJH, ofreciendo una especie de limosna, pues dicha actividad no podría, en rigor, ser calificada de trabajo. El número de personas en situación de pobreza y extrema pobreza alcanzó a cinco millones de habitantes, según las cifras elaboradas entonces por el economista de la DC: Alejandro Foxley; pobreza agudizada por la política de privatización de la Salud y la Previsión.

El apagón cultural y el nacimiento de una contracultura

La política de privatizaciones llegó también a la Enseñanza Media y Superior, al promoverse la creación de numerosos Colegios particulares y la apertura de Universidades privadas, asfixiando a la Universidad de Chile y a

otras universidades estatales con la disminución acelerada de recursos fiscales. Por primera vez en la historia de la Educación chilena, los estudios secundarios y universitarios dejaron de ser gratuitos, con lo cual se restringió el acceso a la enseñanza, sobre todo a los hijos de obreros y también de empleados con escuálidos ingresos.

La Docencia y la Investigación se vieron afectadas por los miles de profesores exonerados y obligados a salir al exilio, los que por encima de sus ideologías constituían lo mejor que tenía Chile tras décadas de perfeccionamiento cultural. Los que mantuvieron sus cargos se vieron obligados a autoreprimirse con ostensible deterioro de los niveles de enseñanza, fenómeno que se agravó con la contratación de mediocres profesores adictos al régimen.

La cerrada noche cultural traspasó todas las áreas de la creación, pero contradictoriamente generó una contracultura o cultura alternativa, que se expresó en la formación de nuevos cultores de la plástica, de la novelística y la poesía y, sobre todo, en los conjuntos musicales formados por la juventud que, con sus letras, reflejaba los anhelos de romper las ataduras culturales y su larga situación de "prisioneros".

Una de las principales formas de regimentación cultural fue la **Censura** y como resultado la **Autocensura**, fenómeno de autorepresión colectiva que se mantiene en algunos aspectos societarios hasta fines del presente siglo. Una de las primeras medidas de la dictadura fue tomar el control absoluto de los Medios de Comunicación social, para manipular la información, impedir la libertad de opinión y difundir la propaganda ideológica legitimadora, al mismo tiempo que el temor, promoviendo una especie de terrorismo psicológico generalizado. Se prohibieron las opiniones y el funcionamiento de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales, principalmente la CUT y sus Federaciones, hecho sancionado por la Constitución

de 1980, páginas 12 y 14: "Las organizaciones sindicales y sus dirigentes no podrán intervenir en actividades político-partidistas (...) el cargo de dirigente gremial será incompatible con la militancia en un partido político".

Hubo una persecución sistemática al periodismo libre. Se suprimieron los diarios, revistas y radios no incondicionales a la dictadura. Hasta se llegó en 1975 a suspender la serie cómica argentina llamada *Mafalda* por "tendenciosa y destructiva". El 28 de enero de 1976 fue clausurada Radio Balmaceda, la única radio libre que quedaba. En marzo de 1977 fue incendiada por grupos paramilitares la Carpa-circo del poeta Nicanor Parra, premio nacional de Literatura, donde se exhibía la obra de teatro "Hojas de Parra", calificada de subversiva por personeros oficialistas. El 30 de marzo de 1977 fue incendiada la radio "Voz de la Costa", propiedad de la Iglesia Católica. El 4 de abril de ese mismo año, se prohibió la circulación de las novelas de Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. El 20 de junio de 1979 fue silenciada la flamante revista "Hoy".

La Censura se acentuó contra las voces surgidas de las marchas de protesta, llegando a expulsar del país a connotados dirigentes de la DC, como Renán Fuentealba y Jaime Castillo. Fueron asesinados sacerdotes, como Jarlan y Alsina, y perseguidos otros por manifestar su descontento con el régimen. Se reprimió al diario *Fortín Mapocho* y a las revistas APSI, CAUCE y ANALISIS, cuyo director, Juan Pablo Cárdenas, fue encarcelado y sometido a proceso.

PROTESTA Y FORMAS DE RESISTENCIA

Después de la brutal represión de los primeros años, donde prácticamente desaparecieron los partidos de izquierda y algunos de centro, comenzó una lenta recomposición de los Movimientos Sociales.

El movimiento sindical

Las primeras manifestaciones huelguísticas durante la dictadura fueron: en 1974, la huelga de los trabajadores de la construcción del Metro, de los mineros de Algarrobo para frenar los despidos, de los auxiliares de Enfermería de los Hospitales San Borja y Barros Luco en defensa de su derecho a vacaciones, el paro en la industria electrónica de Arica, las huelgas de Banvarte, Poliester-Sumar y de Huachipato, Calzados Royle, ferroviarios de la Maestranza San Bernardo, exigiendo mejores salarios. En 1975, la movilización de miles de obreros de la Construcción que culminó en una importante concentración en Santiago.

Sin embargo, todavía no se lograba remontar el retroceso de 1973, que significó no sólo la derrota de los partidos de la UP sino también la derrota del conjunto de los explotados y oprimidos/as, hecho que históricamente no tiene precedentes en este siglo por finalizar, en cuanto a masividad, número de muertos, heridos, prisioneros e impacto político.

Aunque no era efectiva la existencia de miles de Comités de Resistencia, proclamada por los partidos de la oposición en el exilio, no puede negarse que a fines de los '70 comenzó a reorganizarse el Movimiento Social.

Otras formas de protesta fueron el trabajo lento, rayados murales, volantes y estampillas pegadas en las paredes y en los buses de la locomoción colectiva, las "ollas comunes", organizadas por familias de un barrio para ayudarse a sobrevivir. Otra manera de protestar fue no asistir al principio a los espectáculos públicos masivos, como el fútbol; y a mediados de los '80 concurrir al Estadio Nacional a corear a sus equipos mientras se gritaban consignas contra la dictadura. Inclusive, en el campo hubo un breve interregno de "bandidaje social", integrado por campesinos de los sectores más pauperizados; en septiembre de

1974, "el Aguila" -antiguo bandido rural, que bajo la UP se había politizado luchando junto a los campesinos en la ocupación de fundos de San Carlos (Chillán)- tuvo varios enfrentamientos con las fuerzas represivas, siendo perseguido hasta por helicópteros.

La Junta Militar intentó en mayo de 1974 un acuerdo con sectores sindicales encabezados por el dirigente Ríos, pero esta eventual política de estatización sindical, practicada por la dictadura de Ibáñez entre 1927 y 1931, sufrió un rotundo fracaso; estrategia que omite el historiador Ricardo Krebs, llegando a decir que las reformas laborales garantizaban "plena libertad de creación de sindicatos", convirtiendo "el sindicalismo de cúpulas en sindicalismo de bases",²³ afirmación apologetica que no resiste el menor análisis. Krebs borra más de un siglo de historia cuando afirma que bajo Pinochet "se abandonó la vieja mentalidad señorial de una vida privilegiada sustentada en el trabajo servil".²⁴

En noviembre de 1977, los mineros del cobre, especialmente de Chuquicamata, declararon un movimiento muy expresivo: la "huelga de las viandas"; año y medio después entraron en huelga los trabajadores de la CTI (ex-Fensa), de Fiap-Tomé, de Matesa y las obreras del sindicato Salomé. En 1980-81, unos 1.500 obreros de Panal protagonizaron una de las huelgas más prolongadas y relevantes. Ese mismo año, declararon la huelga los trabajadores de Loncoche, Tintorería San Jorge, Vinex, Papelera de Puente Alto, Good Year, Celulosa Arauco, Maestranza Maipú, Industrias Montero, Laboratorio Pfizer, Pesquera Guanaya y, sobre todo, el paro de 1.600 obreros del complejo Hidroeléctrico Colbún-Machicura en julio de 1982.

Estas acciones sindicales prepararon las condiciones para las Huelgas Generales de 1984, 1986 y 1987, que rebasaron el marco estrictamente sindical economicista, transformándose en movilizaciones que abarcaron al conjunto

de los Movimientos Sociales, expresadas con el nombre de "Paros Cívicos". Las estadísticas oficiales eran erróneas al contabilizar solamente a los trabajadores que habían acatado el Paro en las empresas, pues esos mismos trabajadores que no pudieron entrar en huelga por temor a ser despedidos, participaron activamente en sus poblaciones una vez terminado el horario de trabajo. En 1988 estallaron dos combativas huelgas por gremio: la de los profesores y la de los ferroviarios.

Un paso importante hacia la unidad sindical fue la creación de la Central Unitaria de Trabajadores el 21 de agosto de 1988. Aunque la dirección quedó en manos de la DC y el PS, ya renovado, y con una Declaración de Principios diferente a la de la CUT, presidida por Clotario Blest, la nueva Central contribuyó en cierta medida a la unidad de los trabajadores.

Otro hecho importante fue la votación de los sindicatos en las elecciones convocadas en 1978 por el Ministerio del Trabajo, donde fueron derrotados los candidatos oficialistas, al principio con dirigentes moderados y, posteriormente, con candidatos de clara orientación izquierdista.

El proceso de unidad sindical fue obstaculizado por la burocracia partidaria al promover Centrales Sindicales por partido político. No obstante, sindicatos de base –disconformes con este criterio sectario, que inadvertidamente favorecía el paralelismo sindical gobiernista– se organizaron en Intersindicales como las convocadas por el sindicato Madeco, liderado por el trotskista Héctor Velázquez; en estructuras de carácter regional o comunal, como las de Maipú y Vicuña Mackenna, retomando en otro contexto la tradición y memoria histórica de los Cordones Industriales.

Las principales manifestaciones de oposición al régimen se expresaron en las **Marchas de Protesta**.²⁵ Las

movilizaciones se incrementaron con la marcha de protesta de 1983, la huelga general de fines de 1984, los enfrentamientos callejeros y las barricadas de 1985, el Paro General del 7 de octubre de 1985, el combativo acto del 1° de mayo de 1988 y las acciones armadas del FPMR y, en menor grado, del MIR y del grupo Lautaro.

Las "poblaciones" o barrios urbano-periféricos pobres fueron la espina dorsal de las protestas, con apreciable participación de las mujeres y de la nueva generación de dirigentes jóvenes, que no aceptaban la política verticalista de los partidos, negándose a ser manipulados por las cúpulas. Esta nueva generación –criada bajo la dictadura tirando piedras y cócteles molotov– contribuyó a reestructurar los organismos de base, a veces camuflados como clubes deportivos y culturales, que servían de punto de reunión o contacto; las "ollas comunes"; además de cumplir las mínimas condiciones para sobrevivir, hicieron también las veces de centros de organización comunal.²⁶

Para los pobladores, las marchas de protestas eran muy importantes pero no se atenían solamente a fechas preestablecidas, pues ellos protestaban todos los días, a pesar de la atomización y falta de coordinación, situación que comenzó a superarse, en parte, desde 1984 con la creación de organismos destinados a interrelacionar varias zonas, como las Intercomunales.

El decreto de la Junta militar sobre descentralización y otorgamiento de mayores funciones a las Municipalidades, contradictoriamente sirvió para polarizar el descontento, pues los pobladores comenzaron a enfrentarse con quien personificaba el poder de la Junta, el Alcalde, adquiriendo mayor legitimidad y peso específico la organización territorial. Uno de los movimientos más relevantes fue el Paro de Pudahuel.

El movimiento de Mujeres

A pesar de su escasa organización, el Movimiento de Mujeres se expresó en el alto grado de protagonismo social en las organizaciones poblacionales, al mismo tiempo que aumentaba su número en las empresas, especialmente agrarias, en calidad de temporeras, y también en el PEM y POHJ, fenómeno que tuvo incidencia en la relación de poder intra-pareja, pues la mujer se fue convirtiendo en muchos hogares en el principal sostén de la familia, ante la elevada cesantía de sus maridos. En 1980, más del 40% de las familias tenían como jefe de hogar a la mujer. El 80% de los que laboraban en el POHJ eran mujeres.

En 1977, un sector de mujeres hizo una huelga de hambre de diez días frente a la sede de la CEPAL, exigiendo respuesta sobre los desaparecidos, además de otras huelgas de hambre en iglesias en 1977 y 1978. Este año se realizó en Santiago un Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas con 298 delegadas, que exigieron a la Junta Militar la reposición del fuero maternal, salas cunas, casinos en las empresas, jardines infantiles, jubilación a los 55 años, pago íntegro del salario durante el pre y post natal, recuperación de los niveles de atención médica y otros servicios de Salud conquistados hasta septiembre de 1973.

En 1980 se publicó **El Trabajo de la mujer** de las autoras Julieta Kirkwood, Irma Arriagada, Rosa Bravo e Isabel Cruzat. En esa década se desarrolló sectorialmente la conciencia de género combinada con una conciencia política antidictatorial. Surgieron en 1980 el CODEM y en 1981 el MOMUPO (Movimiento de Mujeres Populares, gestado en la comuna de Conchalí (Santiago) por Cristina, Virginia y otras compañeras. En 1982, Julieta Kirkwood editó **Ser política en Chile. Las feministas y los partidos**, con-

solidándose como una de las principales teóricas del feminismo chileno junto a Elena Caffarena.

En 1983 se reorganiza el MEMCH, que pronto llegó a coordinar 14 agrupaciones feministas. Se crea el CEDEMU en Arica, orientado por Carmen Fuentes y María Cayupi, y el MUDECHI con arraigo en algunas provincias. Se popularizan los poemas y cantos de "La Batucana", mientras nacen los grupos "Las Domitilas" y "Mujeres por la Vida". En 1984 se efectúa el Encuentro de mujeres de la región de Concepción al sur.

En diciembre de 1983 se congregan más de 5.000 mujeres en el Teatro Caupolicán al grito de "Democracia en el país y en la Casa, ahora". Entre 1983 y 1985 miles de mujeres, con o sin organización, participan en las Marchas de Protesta, donde se destacan Sandra Palestro y Fany Pollarolo. La "Casa de la Mujer, La Morada", orientada por Margarita Pisano, continúa realizando con ímpetu sus talleres sobre Autoconciencia, Mujer y Poder, Sexualidad, Feminismo y Política.

En agosto de 1985, un sector de mujeres declara zona de hambre a la comuna de Pudahuel. El MEMCH 83 distribuye una carta a Pinochet con el significativo título de "Renuncie". Proliferan las Ollas Comunes y grupos de mujeres se toman departamentos desocupados o en construcción. Se crea el FAM (Frente Amplio de Mujeres) y "Mujeres por la Democracia".

Se realiza en 1986 el Encuentro de la Mujer Rural. Eda Gaviola, Ximena Jiles, Lorena Lopresti y Claudia Rojas publican el libro **Queremos votar en las próximas elecciones**. Al año siguiente, mujeres lideran las movilizaciones "Comprando Juntos". Surje la Coordinación de Organizaciones Sociales de Mujeres con propuestas concretas para la transición pactada de Pinochet con la Concertación, procesos que serán analizados con mayor profundidad por Sandra Palestro en uno de los capítulos de este libro.

La respuesta de los Mapuches a la nueva Ley Indígena

Los Pueblos Originarios, reprimidos también en 1973 y más discriminados que en anteriores gobiernos, sufrieron un severo golpe en 1979 con la dictación de una Ley que aspiraba “a terminar de una vez por todas con el problema indígena”. Con el fin de aplastar el ancestral sentido comunitario, se estableció taxativamente que la entrega de títulos de dominio se haría en forma individual. Para dividir las tierras no se requería la voluntad mayoritaria de la comunidad afectada; bastaba que hubiera un interesado para que el Estado procediera al reparto. La Ley establecía, asimismo, que “a partir de la división de las hijuelas resultantes dejarán de considerarse tierras indígenas e indígenas sus dueños”. Por decreto no sólo se dividían las tierras sino que los indígenas dejaban de ser indígenas, medida que ningún gobierno latinoamericano se había atrevido a formular.

En el artículo 26 se establecía que las instituciones fiscales podrán hipotecar los terrenos indígenas. Se eliminó el Instituto de Desarrollo Indígena, promovido por el gobierno de Allende, que respetaba la identidad y tradiciones del pueblo mapuche. El Director del nuevo Instituto de Desarrollo Agropecuario, Ricardo Hepp, decretó la división inmediata de 600 comunidades.

Los mapuches, aymaras y otros pueblos originarios protestaron masivamente contra la nueva Ley y sus fundamentos racistas. En 1980, miles de mapuches manifestaron: “Desapareceremos como pueblo a menos que luchemos contra esta ley”, agrupándose en varias organizaciones: ADMAPU, NEHUELMAPU, NEWENTUAIN, en Centros Culturales y en el movimiento Mongei Leftraru o “Lautaro vive”. Enviaron una numerosa delegación a Santiago, siendo disuelta la reunión que estaban celebrando con sindicatos y otras organizaciones sociales.

Las capas medias y la caracterización de la Junta

La pequeña burguesía –dueña de algún medio de producción y distribución–, el sector mayoritario de profesionales y de cierta capa media asalariada, que en un principio respaldaron el golpe por temor a perder seguridad y tranquilidad, rápidamente dejaron de apoyar la administración militar. Las causas de este descontento fueron la disminución de las ventas del comercio detallista por la baja del poder adquisitivo; pérdida de empleos a raíz de la cesantía que bordeó entre el 15 y el 20%, despido de más de 100.000 empleados públicos, aumento de la inflación durante los primeros años, congelamiento de los sueldos, toque de queda que obstaculizó las manifestaciones de uso del tiempo libre, que afectó por años la vida cotidiana, especialmente las actividades culturales.

Por todas estas consideraciones, la administración de las Fuerzas Armadas no pudo formar un movimiento masivo de apoyo a su proyecto. Es sabido para quienes han leído los tratadistas de los gobiernos de Hitler y Mussolini que el fascismo se caracteriza no sólo por ser representante del capital monopólico sino, fundamentalmente, por tener el apoyo mayoritario de la pequeña burguesía y de las capas medias fanatizadas por un movimiento corporativista, orgánicamente constituido, fenómeno que no alcanzó a concretarse en el Chile de 1973 a 1990 ni en ninguna otra dictadura latinoamericana. Razón por la cual es equivocado hablar de fascismo o de Estado militar-fascista.

Bajo la conducción de Pinochet nunca se pudo consolidar un movimiento político fascista, con el apoyo incondicional de la pequeña burguesía, salvo algunos simpatizantes del grupo “Patria y Libertad” y menos el “gremialismo” de Jaime Guzmán, quien tras criticar a los partidos, fue generando un grupo que terminó fundando la UDI.

La dictadura militar fue el gobierno más totalitario de nuestra historia, superando con creces a la dictadura de Ibáñez (1927-31), manteniendo el Estado de Sitio hasta el 11 de marzo de 1978 y luego el Toque de Queda hasta 1988, con todas las secuelas que significa tener a la población de un país durante dieciséis años angustiada, temerosa y viviendo en un clima de asesinatos, heridos, encarcelamientos, destierros y crímenes como los cometidos contra un ex-compañero de armas, general Prats y señora en septiembre de 1974 en Argentina; en el mismo mes de 1976, contra Orlando Letelier en EE.UU., además del atentado a Bernardo Leighton y esposa en Italia y de asesinatos en Chile como los de los Hermanos Vergara y Tucapel Jiménez.

El reemplazo de la DINA, creada en junio de 1974 por decreto-ley secreto, por la CNI (Central Nacional de Informaciones) no cambió en nada la represión, salvo presentar una nueva faz a fin de amortiguar con esta sigla la campaña mundial de denuncia contra los atropellos del régimen militar a los Derechos Humanos, consagrados por las Naciones Unidas en su Declaración Universal. No obstante, después de haber obtenido una aprobación del 75% en la amañada "Consulta Nacional" de 1978, se decretó la Ley de Amnistía para todos los militares y civiles que fueran acusados de "delitos políticos".

En fin, ateniéndonos de la diferenciación entre Gobierno y Estado, elaborada por teóricos de la talla de Harold Laski, no se puede hablar de Estado Militar sino de un gobierno militar que administra el Estado burgués. Esta equívoca caracterización quedó en evidencia cuando en el Cono Sur cayeron las dictaduras militares y, sin embargo, no cambió el carácter del Estado. En el caso de Chile, cuando se produjo la transición con el reemplazo del gobierno de Pinochet por el de Aylwin, ¿cambió acaso el carácter del Estado?, ¿no continuó subsistiendo, en lo esencial, el

carácter burgués del Estado, como representante de la clase dominante, aunque el gobierno fuera elegido democráticamente en las elecciones de 1990?

Sintetizando, el Estado es una Institución que tiene permanencia –aunque pueden cambiar sus funciones, ya sea en el siglo XIX con la política librecambista o en el siglo XX con su intervención en la economía a partir de la década de 1930 y con el neoliberalismo de 1980 en adelante–, en cambio los Gobiernos son reemplazados sucesivamente, pudiendo ser de Derecha (Conservadores o Liberales), "Populistas", Demócrata Cristianos, Militares (dictaduras férreas o dicta-blandas), Demócratas del P. Radical como Alfonsín y otros, del estilo de la Concertación chilena).

Por consiguiente, fue un error de los partidos de izquierda definir a la Junta Militar como fascista. Las dictaduras son siempre totalitarias, pero no siempre el totalitarismo es fascista, aunque siempre el fascismo es totalitario. Para fines de propaganda política, puede una Izquierda, como lo hizo la chilena, agitar la consigna de ¡abajo el fascismo de Pinochet! o crear "Comités Antifascistas" con el fin de derrocar la Junta Militar, pero nunca debe confundirse Estado con Gobierno.

LAS PRIMERAS CRISIS AL INTERIOR DE LA JUNTA

Está todavía por investigarse si la primera crisis intra-Junta se produjo a raíz de los desacuerdos entre el Ministro del Interior, general Oscar Bonilla y el coronel Manuel Contreras, jefe de servicios secretos como la DINA. El poder que éste fue asumiendo, estimulado por el propio Pinochet, empezó a ser cuestionado por Bonilla, que se sentía sobrepasado en sus funciones de política interior. Varios testimonios coinciden en que Bonilla, que había sido

Edecán Militar del presidente Frei, era el nexo de éste en el primer año del gobierno militar. Al mismo tiempo, sus visitas a las poblaciones y a los sectores más empobrecidos no eran del todo bien vistos por algunos miembros de la Junta. Su extraña muerte, la caída desde un helicóptero en 1974, suscitó dudas que se acrecentaron con la también extraña muerte en un hospital del general Lutz, amigo de Bonilla, que aún tampoco ha sido esclarecida, según el periodista Hernán Millas.

La crisis pública más importante de la Junta fue la salida en julio de 1979 del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General Gustavo Leigh Guzmán. Sus ideas sobre política económica no eran compartidas por sus pares; había manifestado críticas a cierto accionar de la Junta y desacuerdo con la eventual convocatoria a una Consulta Nacional.

Un admirador de Pinochet, Rafael Valdivieso, sostiene que Leigh concedió el 18 de julio de 1979 una entrevista a Paolo Buglialli, enviado del diario "Corriere della Sera", en la que manifestó que en Chile no había "un itinerario para restablecer la normalidad política del país. En su opinión faltaba un estatuto que regulara la vida de los partidos políticos; debían reconstituirse los registros electorales que habían sido destruidos, y urgía dictar una Constitución para ser sometida a referéndum, y la dictación de una ley que permitiera realizar elecciones".²⁷

Al reproducirse esta entrevista por la prensa chilena, los periodistas le preguntaron si ratificaba su declaración. Leigh respondió que sí, "hay, sí, diferencias...Me refiero a mis colegas de la Junta, al Presidente de la República".²⁸ En respuesta a la nota que le envió el Consejo de Ministros, criticando sus inoportunas declaraciones, Leigh contestó "negando toda representatividad a un organismo inexistente". El corolario fue que la Junta –también afectada por su oposición a la "Consulta Nacional"– exigió su

renuncia el 24 de julio de 1978, nombrando en su reemplazo al General de Brigada Aérea Fernando Matthei A, para lo cual tuvo que saltarse varios peldaños del escalafón.

Respecto de los problemas fronterizos, en 1978 se logró atenuar la amenaza de un enfrentamiento con Perú, pero prosiguieron los conflictos limítrofes con Argentina, especialmente en el Canal de Beagle. La situación se agravó a tal punto que las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile se prepararon para una eventual guerra, que se agudizó y, al mismo tiempo, se disipó en 1982 con el desenlace de la guerra en las islas Malvinas. Está comprobado que Chile apoyó a Inglaterra en su nueva cruzada colonialista armada. Si hubo alguna duda quedó despejada en el juicio británico a Pinochet, donde Margaret Tachter afirmó rotundamente que el Primer Ministro laborista era un ingrato e incapaz de agradecer el respaldo de Pinochet a Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas. El conflicto con una Argentina sin militares, luego de la elección como presidente de Raúl Alfonsín, se solucionó en base a una mediación del Papa Juan Pablo II en 1986.

LA CONSTITUCIÓN DE 1980

La nueva Constitución –preanunciada por el discurso de Chacarillas el 9 de julio de 1977, y aprobada el 11 de septiembre de 1980– ha sido objeto de estudio de numerosos tratadistas del Derecho, pero no se ha apreciado su dimensión histórica. Constituyó, a mi juicio, una ruptura con la tradición republicana de los siglos XIX y XX, al desechar las bases fundamentales de las Constituciones de 1833 y 1925, incluidas las respectivas Reformas Constitucionales.

Fundamentamos esta apreciación histórica en el hecho de que sus redactores, jefaturizados por Enrique Ortúzar, se basaron en la tesis de que la institucionalidad

jurídica de un siglo y medio de vida republicana estaba obsoleta y sobrepasada por la nueva concepción del poder y la sociedad visualizada por las FF.AA. como Institución. No se trató meramente de superar las supuestas manifestaciones anticonstitucionales de Allende, sino de una nueva concepción constitucionalista. Por eso, nos permitimos plantear la siguiente reflexión histórica: la Constitución de 1980 significó una ruptura con el pasado constitucional de la nación, una quiebra de la continuidad constitucional de la República de Chile desde la proclamación de su Independencia hasta 1973. No por azar, los ideólogos de la era castrense insisten en la idea de “refundación” de la República a partir del gobierno militar.

De ahí, las reiteradas críticas al régimen de partidos políticos aprobado por las anteriores constituciones, al funcionamiento de las instituciones del Estado, incluido el parlamento y los tribunales de justicia, a la legislación laboral y a las normas del Código del Trabajo de fines de los años '20, a los vicios de la libertad de prensa, a la irresponsabilidad parlamentaria y al uso y abuso de las libertades democráticas. Ya lo había dicho Pinochet tres años antes: “nuestro deber es dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora y tecnificada”.²⁹

En dicha intervención Pinochet estableció tres fases para la normalización institucional: “la de recuperación, la de transición y la de consolidación; dichas etapas se diferencian por el diverso papel que en ellas corresponde a las Fuerzas Armadas y de Orden, por un lado, y a la civilidad por otro. En la etapa de recuperación el poder político ha debido ser integralmente asumido por las Fuerzas Armadas y de Orden, con colaboración de la civilidad; pero más adelante, sus aspectos más contingentes serán compartidos con la civilidad, la cual habrá de pasar así de la colaboración a la participación. Finalmente, entraremos en la etapa de normalidad o consolidación; el Poder será ejer-

cido directa y básicamente por la civilidad, reservándose constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad y la Seguridad Nacional en sus amplias y decisivas proyecciones modernas”.³⁰

ESTRATEGIA Y TÁCTICA DE LA OPOSICIÓN: DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA A LA CONCERTACIÓN

Después de haber denunciado que el llamado por Pinochet “período de transición” constituiría una prolongación del régimen militar para “cautelar las bases esenciales de la Institucionalidad y la Seguridad Nacional”, los partidos de oposición comenzaron a esbozar una estrategia que condujera a esa fase de transición. En 1983 fue creada la Alianza Democrática, que hizo las veces de puente para las negociaciones con el gobierno militar.

La DC, por intermedio de Gabriel Valdés, inició a principios de 1983 las negociaciones con sectores del “socialismo renovado”, del P.Radical y otras corrientes de centro-izquierda, dejando fuera al MDP, constituido por el PC, el MIR y PS (Almeyda) y otros partidos socialistas que alcanzaron a coexistir hasta finales de la dictadura. El proceso de acuerdo, estimulado por la “apertura” del ministro Sergio Onofre Jarpa, para iniciar las bases de un pacto con los militares duró escasos meses, sin que se alcanzara un acuerdo en ese momento.

Estas negociaciones fueron estimuladas por el Cardenal Juan Francisco Fresno, quien invitó a Fernando Léniz, ex-ministro de Pinochet, a José Zavala, dirigente de los empresarios cristianos y a Sergio Molina, antiguo ministro de Frei, para que elaboraran un proyecto de acuerdo para la fase de transición, basado en el “consenso”. Este documento fue firmado por la oposición, menos el PC y

socialistas. Un sector de la Derecha, el partido Renovación Nacional (RN), liderado por el joven político Andrés Allamand, estuvo de acuerdo con el documento, mientras que la UDI lo aceptó con reservas. El proyecto fue presentado a Pinochet a fines de 1985.

Resurgimiento de la resistencia armada: el FPMR

Al calor de la resolución de “rebelión popular”, adoptada por el PC el 4 de septiembre de 1980 y dada a conocer en el exilio por su secretario general, Luis Corvalán, se fue gestando un embrión de aparato político-militar. Reclutados militantes, especialmente de la Juventud Comunista, para ese objetivo estratégico, que se iba dilatando, fueron radicalizándose sectores ya entrenados –a un nivel más alto que cualquiera de las experiencias anteriores, incluido el MIR– hasta producirse formalmente la escisión en 1987. Muchos de ellos combatieron antes, como es sabido, en varios países, particularmente en el Frente Sur de la Revolución Sandinista hasta derrocar la dinastía de los Somoza, enquistada en el poder desde 1933 hasta el 19 de julio de 1979, día de la entrada triunfal de los sandinistas a Managua.

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, gestado embrionariamente en el seno del PC el 14 de diciembre de 1983, hizo posteriormente declaraciones a través de su portavoz, el comandante José Miguel: “El FPMR surge como resultado de un complejo proceso político que se viene generando al interior de la sociedad chilena y que plantea la necesidad de pasar a formas superiores de lucha para enfrentar a la dictadura. A las formas tradicionales de lucha, el pueblo debía sumar formas superiores de combate –concretamente para-militares y militares– en contra de la tiranía, cuestión que se manifiesta inicialmente en la incorporación de nuevas formas de movilización, como las jornadas de protesta”.

“El surgimiento del FPMR –sigue José Miguel– no es una cuestión automática. Es producto de un largo proceso de reflexión, de convergencia de opiniones de un gran número de compañeros que empiezan a entender que las organizaciones que existían en ese momento no interpretaban plenamente las formas concretas de hacer política (...) La primera etapa del FPMR se enmarca desde su fundación hasta septiembre de 1986, con la emboscada de aniquilamiento del tirano (...) Entre otras operaciones se destacan las tomas de radio, el rescate de Fernando Larenas, los secuestros del periodista Bartolomé, del cabo Obando y el coronel Heaberle, los apagones nacionales, las acciones de sabotaje a puentes y líneas férreas, los ataques a instalaciones como el Velódromo de Tobalaba y por cierto las acciones de nuestras unidades en el marco de la lucha contra la represión en las poblaciones”.³¹

En el mismo N° 4, p.2, el editorial anotaba que el atentado a Pinochet “va más allá del arrojo, la valentía y el heroísmo. Su importancia radica en que significa un serio remezón a la ya frágil estabilidad política del régimen, en el momento en que éste proclamaba a todos los vientos que tenía –a raíz de los acontecimientos del Carrizal Bajo– la situación totalmente controlada. Además, significó un duro golpe a las pretensiones claudicantes y derrotistas de las cúpulas políticas opositoras, que intentaban negociar con la dictadura el sufrimiento del pueblo, a cambio de insignificantes cuotas de poder compartido”.

La nueva fase del FPMR comienza en julio de 1987, fecha de la ruptura formal con el Partido Comunista. Dos meses después, la Dirección aprobó el documento ODEPLAN/87, que señalaba: “La derecha y la centro derecha se han entregado al cronograma de la dictadura, pues se escucha no sólo hablar de reconocer la Constitución del 80, sino incluso no aspirar a reformarla (...) En la izquierda tradicional ha existido un claro proceso de pérdida de ca-

pacidad de conducción del pueblo, e incluso de 'derechización' (...) Se ha logrado la unidad de parte importante de la izquierda chilena, pero sobre la base de concesiones y bases reformistas (...) En este cuadro no es menos compleja la situación del PC. Este se encuentra atravesado por profundos problemas internos que hacen más difícil su definición, crisis que revienta con la separación del FPMR".³²

En otro documento interno de fines de 1987, se planteó "una necesaria revisión de nuestra concepción militar, la Sublevación Popular. Hasta ahora en lo esencial, nuestra concepción acerca de la derrota del Régimen partía de la variante 'más fácil': el desmoronamiento político-moral de las FF.AA. se produciría a partir de levantamientos poblacionales, paralización prolongada del país, golpes a partes de sus fuerzas, subestimando así la resistencia que opondrían las FF.AA., por cierto el imperialismo y el capital nacional. Esta subestimación del enemigo, nos encerró en un esquema esencialmente 'insurreccional' y nos hizo adoptar actitudes voluntaristas, por ejemplo el año decisivo (...) Esto nos implica concebir una estrategia político-militar con más perspectivas, más objetividad, 'sin plazismo' (...) Lo básico sigue fortalecer nuestras Fuerzas Milicianas, dirigiendo un mayor esfuerzo hacia el trabajo con las masas y sus organizaciones, elevando el funcionamiento de los núcleos Rodriguistas con las Milicias Rodriguistas en función de la inserción en luchas, conflictos y movilizaciones de masas, de inserción en organizaciones territoriales, estudiantiles, femeninas y sindicales".³³

En el documento "Acerca del Rediseño Político", elaborado a principios de 1988, hubo un nuevo afinamiento de la táctica. Además se apuntaban autocríticas: "debilidad ideológica", "excesivo centralismo", "acostumbramiento a no aportar, sólo a ejecutar", "mal uso de la compartimentación" (...) El origen de algunas de estas de-

ficiencias provienen de las herencias del PC, en cuanto a ambigüedad o reblandecimiento político ideológico (...) pero eso no nos exime de la responsabilidad de no haber sido lo suficientemente vigilantes para erradicar la herencia" (...) Para superar esta situación es necesario fortalecer la Dirección Colectiva y la Democracia para una elaboración más rica y profunda (...) Es fundamental estimular la absoluta transparencia a la crítica y autocrítica sana y permanente, crear otro clima, sano, abierto, luchar contra el personalismo, adulación y contra el sí a todo (...) Con la ayuda de procedimientos democráticos, un mejor trabajo ideológico, un clima moral saludable, se vigoriza el ser humano".³⁴

El documento que mejor expresó las Bases Programáticas del FPMR fue "Elementos del Pensamiento Rodriguista", publicado en 1987: "El Rodriguismo no es una ideología; aplica creadoramente los principios marxistas leninistas a nuestra realidad nacional y rescata las más puras tradiciones de lucha de nuestro pueblo, desde los tiempos del heroico Arauco y el legendario Manuel Rodríguez (...) Somos internacionalistas, así como lo fue Recabarren, y comprendemos que nuestra lucha es una sola, con todos los demás pueblos (...) Nos nutrimos de todos los grandes precursores de la liberación de América Latina como Martí, Sandino, Farabundo Martí y el ejemplo del Vietnam heroico (...) El Rodriguismo toma el ejemplo de Salvador Allende, máximo exponente de un pueblo que elige mayoritariamente gobernarse en 1970 y que cayó combatiendo por defender el gobierno constitucional".³⁵

El Programa contenido en la Declaración del FPMR del 7 de septiembre de 1987 planteaba: "Asamblea Constituyente, representativa de todos los sectores de la sociedad derecho al pan, a la justicia y a la libertad, al estudio, la vivienda, el trabajo digno y la tierra para los mapuches y los campesinos y no pago de la Deuda Externa. Este Pro-

grama fue enriquecido con el documento aprobado en el IV Aniversario del FPMR: "Aspiramos a un gobierno de nuevo tipo que deberá dar gran importancia a las organizaciones sociales de los trabajadores, pobladores, mujeres, estudiantes, campesinos, mapuches, profesionales e intelectuales". Y agregaba un punto clave: "redactar una nueva Constitución", redefinición del trato al capital extranjero derogando el estatuto del inversionista extranjero, reforma agraria; reconocimiento del pueblo mapuche, reconocimiento efectivo de su cultura y tradiciones y devolución de sus tierras; reestructuración profunda del sistema educativo, que garantice educación gratuita, participación democrática de todos los estudiantes y restablecimiento de la autonomía universitaria, reforma urbana dando solución a los "sin casa" y allegados; reconstrucción del Servicio Nacional de Salud; "eliminación de las diversas formas de discriminación y explotación de la mujer".³⁶

Y anotaba: "La oposición burguesa, en abandono desvergonzado de planteamientos anteriores, ha adoptado su actual estrategia de inserción en el sistema ('cambios desde adentro') y de desmovilización. La coincidencia con el Régimen en cuanto a la prolongación del actual esquema de capitalismo dependiente, han hecho que, con más temor al pueblo que al propio Régimen asuman una estrategia que negocia con las FF.AA. un cambio de 'fachada', hacia un régimen democrático-burgués, aceptando a cambio el rol tutelar de los militares en la sociedad".

Como puede apreciarse, el FPMR tenía una relevante concepción política: reconocía su raigambre marxista, internacionalista y latinoamericanista, adaptada a las especificidades de la coyuntura chilena. Tenía un Programa anticapitalista y nacional-antiimperialista concretado en su proyecto estratégico de Liberación Nacional y Social, aunque nunca precisó la inescindible relación entre ambas categorías políticas. Sus dirigentes crearon un Pen-

samiento Político y la estructura político-militar más importante que todas las que tuvieron anteriores organizaciones similares de Chile.

Su influencia política –ganada en el combate contra la dictadura y en las bases de trabajadores y pobladores– se fue diluyendo después de la muerte en combate de su experimentado líder Raúl Pellegrin ("Rodrigo" o "José Miguel") en octubre de 1988 en Los Queñes, junto a su compañera Cecilia Magni, "Tamara".

El MIR

Otro protagonista de la resistencia armada, el MIR, fue perdiendo fuerzas debido a la represión selectiva, en particular el asesinato de sus máximos dirigentes, especialmente Miguel Enríquez y Bautista van Schouwen en 1974; al encarcelamiento de muchos militantes y a la salida forzosa al extranjero de otros miembros del C.C., luego del enfrentamiento de Malloco en que cayó Dagoberto Pérez.

No obstante la pérdida de valiosos dirigentes, el MIR pudo lograr una cierta reestructuración en el interior y el exterior, bajo la conducción de Andrés Pascal Allende y Nelson Gutiérrez. En 1979 se organizó la "Operación Retorno" y 2 años más tarde la apertura de un frente guerrillero en Neltume, cordillera de Nahuelbuta, una de las importantes zonas de la secular resistencia mapuche. Sin bases sociales en la región y sin preparación adecuada después de algunos enfrentamientos los guerrilleros fueron asesinados y los pocos que se salvaron trataron de cruzar la cordillera de Los Andes, hacia Argentina. En 1983, un comando del Ejército y de la CNI desmanteló la principal estructura para-militar, cayendo asesinado su máximo dirigente, Arturo Vilabella.

Pronto se agudizó la lucha fraccional interna, larvadamente gestada desde mediados de la década del '70, hasta

culminar en 1988 con la división en tres grupos, liderados respectivamente por Pascal, Gutiérrez y Aguiló.

El Mapu-Lautaro

Un sector escindido de una de las variantes del antiguo Mapu, se constituyó en 1982 como Movimiento Juvenil Lautaro, base de las acciones armadas de la fracción que pasó a conocerse con el nombre de Mapu-Lautaro. Durante las Marchas de Protesta levantó la consigna "Por un Chile Popular", realizando expropiaciones de locales comerciales y camiones, repartiendo la mercadería entre los pobladores.³⁷ En 1988 hizo su Primer Congreso, que aprobó el documento "Tesis de la Victoria Popular", definiendo como estrategia política la construcción de un Bloque Popular Revolucionario, como principal instrumento de acumulación de fuerzas. El BPR debía transformarse en el "pueblo en armas que dispone esa fuerza de millones como realidad combatiente".

Su definición global "encuentra sus raíces y referencias en la concepción de la **guerra de todo el pueblo**, asumida por los países socialistas y las revoluciones triunfantes. Asimismo, encontramos esta concepción presente, en sus formulaciones fundamentales, en la resistencia heroica del pueblo mapuche, tanto frente al imperio Inca como a la invasión española".³⁸

Durante 1989 y 1990 impulsó la "política de cosas concretas y útiles para el pueblo", con expropiaciones y Copamientos Territoriales Armados (CTA), donde participaba el grueso de su militancia.

La política del nuevo Partido Socialista

El proceso de transformación socialista, autodenominado "renovación" se inició a mediados de la década

de 1970. Según Manuel Antonio Garretón estuvo caracterizado por: a) "la autocrítica del proyecto y política socialistas vividos en Chile hasta 1973, y b) la reformulación y actualización de su bagaje intelectual y político".³⁹

La división del PS en el Congreso realizado en 1979 en el exilio fue un punto clave de inflexión en el proceso de renovación. De allí surgieron dos PS: uno, dirigido por Carlos Altamirano, con un acercamiento a la socialdemocracia europea y otro, encabezado por Clodomiro Almeyda, de reafirmación del marxismo y con una política de alianzas con el PC. En el interior todavía era preponderante la tendencia revolucionaria, agrupada después del golpe por Benjamín Cares, y a principios de los '80 por los militantes apoyados desde el exterior por la corriente liderada por Pedro Vuskovic y el Dr. Nicolás García.

Las ideas del socialismo renovado, según Garretón, surgieron de intensos debates que se condensaron en torno "a la revista Chile-América en Roma, y las iniciativas de convergencia socialista en Italia, España y Francia, el Instituto para el Nnuevo Chile en Rotterdam, ASER en París y la revista "Convergencia y otros grupos en México".⁴⁰ Uno de los principales documentos emanados a principios de los '80 fue "Convergencia Socialista. Fundamentos de una propuesta", donde se intenta explicar la crisis de la izquierda por el "agotamiento de sus bases programáticas" y de su "proyecto político".⁴¹

Los fundamentos políticos de la "renovación" (por la derecha) no sólo del PS sino también de sectores del MAPU y de la Izquierda Cristiana, reunidos en los debates de la llamada entonces Convergencia Socialista fueron reproducidos en su mayoría por la mejor revista del exilio: "Chile-América", dirigida entre otros por Julio Silva Solar, José A. Viera-Gallo y Fernando Murillo Viaña, editada en Roma desde septiembre de 1974, que publicó en el N° de oct-nov. 1980 el documento "Convergencia Socialista" y pos-

teriormente artículos como el de Jorge Arrate: "Unidad y Renovación de la izquierda".⁴²

Uno de los textos más claros para comprender la dimensión de esta autodenominada "refundación" del PS es el libro: **El Socialismo renovado** del ex-senador socialista Hernán Vodanovic, cuestionador del marxismo, del programa de fundación del PS y apologista de la democracia occidental.

La articulación del socialismo renovado se concretó en 1983 en el PS, dirigido por Carlos Briones, con la resolución de llegar a un entendimiento con la DC a través de la Alianza Democrática, aprovechando la "apertura Jarpa", ministro de Pinochet, cuyo proceso hemos ya señalado en páginas anteriores.

Los vaivenes de la Democracia Cristiana

En crisis aguda desde 1972 y, especialmente, por la diferencias de posiciones entre la mayoría del Consejo Nacional, que se pronunció a favor del golpe militar, y los que con Tomic y Leighton a la cabeza se opusieron, la DC tardó en cerrar sus heridas internas. Todavía estaban presentes los efectos de la carta de Frei a Rumor, presidente de Unión Mundial DC, y un artículo posterior en que decía: "Las Fuerzas Armadas –estamos convencidos– no actuaron por ambición, más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país".⁴³ A los dos años del golpe, Leighton manifestó que "algunos sectores tuvieron complacencia, pensando que la dictadura iba a ser breve, que pronto restablecería el régimen constitucional democrático".

Los militantes de la DC comenzaron a ser despedidos de sus empleos públicos por la Junta Militar. Después de la muerte "accidental" del general Bonilla, ex-edecán del presidente Frei, la DC sólo pudo mantener nexos con

la Junta a través de Carmona, quien a la postre fue expulsado por su incondicionalidad a Pinochet. La DC trató de insertarse en el proyecto de estatización sindical planteado por la Junta a mediados de 1974, a través de su dirigente sindical Ernesto Ríos, pero el plan fracasó por el escaso respaldo que encontró en los trabajadores. Leighton denunció a mediados de 1975 que "en la reunión de la OIT hubo cuatro testigos de la Junta Militar que ciertamente pertenecen a la DC y algunos de ellos en especial demostraron extraordinario entusiasmo para sostener ante la Comisión los puntos de vista de la dictadura".⁴⁴

Mientras tanto, Radomiro Tomic, opositor al golpe, planteó en agosto de 1974 la posibilidad de formar eventualmente una Junta cívico-militar. Un lustro después volvió sobre el tema: "Personalmente soy un convencido que del gobierno militar –el de Pinochet– Chile sólo podrá salir mediante un segundo gobierno predominantemente –aunque no exclusivamente– militar. Es decir, que provenga no de la confrontación brutal entre civiles y militares".⁴⁵

En 1975, todavía existía en la DC un sector que especulaba con la posibilidad de presionar a los militares "desde adentro", reflejado en la carta de Aylwin a Tomic del 6 de mayo de 1975, "hecha pública por voluntad de su destinatario". A fines de ese año, Frei definió los límites de la crítica a la Junta Militar, esbozando una política de alianzas con sectores de la oposición, con exclusión del PC y la izquierda socialista. Este viraje fue explicitado por Tomic: "Cabe recalcar que, desde la segunda mitad de 1975 en adelante, la DC ha roto todo contacto con la dictadura".⁴⁶ A confesión de parte, relevo de pruebas.

A partir de entonces, numerosos militantes de la DC, como Renán Fuentealba y Jaime Castillo Velasco, fueron expulsados de Chile. La nueva política de alianzas de la DC fue aclarada por Aylwin en carta de 18-8-75 a Fuentealba: "De acuerdo con los propios antecedentes que tu

nos envías resulta claramente que se ha intentado establecer bases posibles para constituir un reagrupamiento de todas las fuerzas de oposición (...) Esta proposición está en abierta contradicción con la posición adoptada por el partido, que ha rechazado en forma definitiva toda posibilidad de un frente con marxistas-leninistas (...) Debo recordarte que el partido ha definido sus objetivos: la reestructuración de la democracia en Chile y, al mismo tiempo, yo te señalo la vía: llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales democráticas y las Fuerzas Armadas por el restablecimiento de la democracia”.

Acerca de esta política restringida de alianza, intervino en 1977 en el debate Julio Silva Solar: “La DC que ahora da lecciones de democracia y señala con el dedo quienes quedarán dentro y quienes serán excluidos de la alianza ‘democrática y humanista’ y a otras les prescribe que deben crearse de nuevo para ser admitidas, hasta el momento no se examina a sí misma, autocriticamente, por su importante contribución a la quiebra de la democracia y la institucionalidad chilenas”.⁴⁷

Poco antes de morir, Frei se encargó de precisar el papel de las FF.AA. en el eventual recambio: “que se organice de inmediato un gobierno de transición Cívico-Militar, cuyos objetivos básicos serán establecer durante el plazo de dos o tres años como máximo las condiciones para recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático”.⁴⁸

Durante los primeros años de la década de 1980, las movilizaciones populares que culminaron en las marchas de protesta, provocaron un proceso de diferenciación de las bases del PDC con la cúpula de su partido. Más aún, un nuevo líder de los trabajadores emergía desde el fondo de la mina El Teniente: Rodolfo Seguel, de filiación democristiana.

El desenlace vino a continuación, aunque había sido preanunciado por Zaldívar: “La superación de la actual

crisis no se hará sobre la base de una consigna tan simple como engañosa del retorno de los militares a los cuarteles (...) Toda política realista sobre la materia debe partir por reconocer a los militares un importante papel en la gran política del Estado”.⁴⁹ Y eso que todavía no se hablaba del “poder fáctico”.

Fase final del gobierno militar: el Plebiscito de 1988

Más tarde, el ya Presidente “constitucional”, Augusto Pinochet convocó a un Plebiscito para decidir si él continuaría por 8 años más en el gobierno o no. El Plebiscito se efectuó el 5 de octubre de 1988, arrojando como resultado un triunfo para el NO con el 57% de la votación, hecho que significó la primera gran derrota de la dictadura militar. La Concertación había sido creada formalmente el 2 de febrero de 1988 con más de una docena de grandes y pequeños partidos, grupos y asociaciones civiles.

Entonces, Pinochet comenzó su táctica de mayor afinamiento de las bases políticas y económicas para el “período de transición”, elaboración en la cual RN y la UDI participaron más activamente que antes. De este modo, se redactaron acuerdos más precisos y delimitados para ser presentados a la Concertación, cuya “ingeniería política” estuvo a cargo de Carlos Cáceres, Ministro del Interior.

Esta élite conjunta de generales de las FF.AA., Derecha política y Concertación se puso de acuerdo para aprobar, cupularmente, algunas Reformas a la Constitución de 1980, entre ellas, rebaja del mandato presidencial de 8 a 4 años, reducción del número de Senadores Designados. Asimismo, Pinochet –en nombre de las Fuerzas Armadas como Institución– impuso nuevas condiciones que comenzaron a conocerse años después, en pleno gobierno de la Concertación, como el “consenso” para no cambiar ni un ápice el modelo económico neoliberal, nombrar Presiden-

te del Banco Central, mantener a los empleados públicos nombrados por el Gobierno militar, no despedir a ningún profesor de los tres niveles de la Enseñanza, especialmente Universitaria, y fundamentalmente acuerdo para no introducir reformas constitucionales que afectaren el Sistema Binominal de listas para los eventos electorales, particularmente relacionados con elecciones parlamentarias.

Sin embargo, los historiadores no tenemos hasta ahora ninguna prueba documental de este acuerdo. El único indicio lo dio Camilo Escalona quien, después de haber perdido la candidatura a Senador por Santiago en las elecciones parlamentarias de 1997, manifestó públicamente que él fue **"el único que no firmó ese documento"**, cuando pertenecía al Comité Central del PS (Almeyda). Contestando indirectamente a Escalona y para prevenir ulteriores declaraciones, el ex-presidente Aylwin manifestó enfáticamente en 1998 que nunca existió tal documento.

Es probable que dicho documento salga a la luz pública próximamente, a raíz de las acusaciones y contra-acusaciones suscitadas por el juicio a Pinochet en Londres. Entonces, podremos disponer de pruebas para entender a cabalidad las razones por las cuales todavía no termina el "período de transición", luego de 9 años de "democracia protegida" o cautiva.

El 14 de diciembre de 1989 se realizaron las elecciones presidenciales, obteniendo el triunfo el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, con el 55% de los votos; 29% obtuvo la Derecha con Hernan Büchi y 15% el autodenominado Centro-Centro con Francisco Javier Errázuriz. En marzo de 1990, Pinochet entregó la banda presidencial a Patricio Aylwin, abriéndose el "período de transición" pactado que aún no termina.

NOTAS

1. JORGE TAPIA V: **La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur. El terrorismo de Estado**, Ed. Nueva Imagen/ Nueva Sociedad, México, 1980.
2. El Mercurio, 16 de julio de 1974.
3. Declaración reproducida por el diario "El Mercurio", Santiago, 22 de abril de 1999.
4. Cita del escritor pro-juntista RAFAEL VALDIVIESO ARIZTIA: **Crónica de un rescate. Chile: 1973-1988**, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1988, p. 17.
5. *Ibíd.*, p. 17 y 18.
6. ANDRES DOMINGUEZ: **El Poder y los Derechos Humanos**, Ed. Terranova, Santiago, 1988, p. 252.
7. Reproducida por El Mercurio del 17 de septiembre de 1973, p. 13.
8. El Mercurio, 14-09-73, p. 5.
9. *Ibíd.*, p. 253.
10. RICARDO KREBS: "Chile: 1973-1990", en **Nueva Historia de Chile**, Instituto de la Pontificia Universidad Católica, Ed. Zig-Zag, Santiago, 1996, p. 561. Manual que aspiró a convertirse en texto recomendado por el Ministerio de Educación en reemplazo del conocido libro de Frías Valenzuela, con la intención de transmitir la versión "oficial" de nuestra historia en los diversos niveles de la Enseñanza. Sus últimos capítulos tienen la manifiesta intención de justificar el golpe militar y hacer una apología del régimen encabezado por Pinochet, tarea que obviamente escapa al oficio de historiador.
11. R. GARCIA G. (compilador): **Economía y Política durante el gobierno militar en Chile. 1973-1987**, Ed. FCE, México, 1989.
12. TOMAS MOULIAN y PILAR VERGARA: "Estado, ideología y políticas económicas en Chile. 1973-1978", en **Colección Estudios CIEPLAN**, n° 3, Santiago, junio 1980.
13. PATRICIO MELLER: "Los Chicago Boys y el modelo económico chileno. 1973-1983", apuntes CIEPLAN, N° 43, Santiago, enero 1984.

14. Declaración de Arnold Harberger, en *El Mercurio*, edición internacional del 16 al 22 de diciembre de 1974.

15. A. JADRESIC: "Inflación y políticas de estabilización en Chile. Las experiencias de los setenta y ochenta", Apuntes CIEPLAN, n° 79, Santiago, septiembre 1989. Y del mismo autor: "Transformación productiva, crecimiento y competitividad internacional sobre la experiencia chilena", en la revista "Pensamiento Iberoamericano", N° 17, Madrid, 1990.

16. XABIER ARRIZABALOM.: **Milagro o quimera. La economía chilena durante la dictadura**, Ed. Los Libros de La Catarata, Madrid, 1995, p. 147.

17. ALEJANDRO FOXLEY: "Experimentos neoliberales en América Latina", Colección de Estudios CIEPLAN, N°7, Santiago, marzo 1982.

18. Xabier ARRIZABALO: op. cit., p. 148 y 149.

19. FERNANDO DAHSE: "El poder de los grandes grupos económicos nacionales", Contribuciones FLACSO-Santiago, N°18, junio 1983, p.83

20. LUIS VITALE: "Estado y Economía de Chile bajo la Dictadura Militar", en la revista "Chile Vencerá", diciembre 1985, publicada en Estados Unidos por el Comité de Unificación de la Izquierda Revolucionaria chilena.

21. Revista "HOY", Debate Económico, Santiago, 28=8-1979.

22. Revista "Qué Pasa", 3 de julio de 1985.

23. RICARDO KREBS: op. cit., p. 557 y 558.

24. *Ibíd.*, p. 561.

25. Ver GONZALO DE LA MAZA y MARIO GARCES: **La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984**, Ed. ECO, Santiago, 1985.

26. Ver GUILLERMO CAMPERO Q.: **Entre la sobrevivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en Santiago**, Ed. ILET, Santiago, 1987.

27. RAFAEL VALDIVIESO A.: **Crónica de un rescate. Chile: 1973-1988**, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1988.

28. *Ibíd.*, p. 184.

29. *El Mercurio*, 11 de julio de 1977.

30. *Ibíd.*

31. Reportaje a José Miguel de la revista "El Rodriuguista", N° 27, septiembre 1987, páginas 19 a 21.

32. ODEPLAN/87, Documento interno del FPMR, septiembre de 1987, páginas 1 a 5. Tuve acceso a éste y otros documentos internos porque después del atentado a Pinochet, solicité ingresar al FPMR. Su dirigente máximo, Raúl Pellegrin, me contestó de inmediato diciendo que era el segundo trabajador de la cultura que pedía militar en su organización, y que no necesitaba ningún período de prueba para ser considerado militante con todos los derechos.

33. "Hacia el enfrentamiento ascendente, patriótico y popular de todo el pueblo y en todo el territorio nacional", documento interno del FPMR, fines de 1987, p. 3 y 6.

34. FPMR: "Acerca del Re-diseño Político", documento de los primeros meses de 1988, p. 1, 2, 3 y 4.

35. FPMR: "Elementos del Pensamiento Rodriuguista", documento publicado en 1987, p. 13 y 14.

36. Programa publicado por la revista "El Rodriuguista", N° 33, junio 1988.

37. "Historia del Mapu-Lautaro", revista "Página Abierta", N° 45, Santiago, 22 de julio de 1991, p. 18 y 19.

38. Partido Mapu: **Tesis de la Victoria Popular**, Santiago, 1987, p. 18.

39. MANUEL ANTONIO GARRETON: "La renovación del socialismo", en RICARDO NUÑEZ: **Socialismo, 10 años de Renovación**, Ed. Ornitorninco, Santiago, tomo I, p. 15.

40. *Ibíd.*, p. 19.

41. Ver RICARDO NUÑEZ: op. cit., de p. 53 a 99.

42. La revista "ChileAmérica" fue fundada en Roma por Bernardo Leighton, Julio Silva Solar, Esteban Tomic y José Antonio Viera-Gallo, quienes integraban a la vez su comité editorial. La revista se publicó desde 1974 a 1983.

43. EDUARDO FREI M.: "Opinión sobre el momento actual", en Rev. "Chile América", N° 56-57, agosto-sept. 1979, p. 100.

44. Revista "Chile-América": "El Pensamiento de Bernardo Leighton", N° 16-17-18, marzo-abril-mayo de 1976, p. 65 y 66.

45. Artículo de R. Tomic en "Chile-América, N° 52-53, marzo-abril de 1979, p. 66.

46. Artículo de R. Tomic en la Tribuna abierta de la rev. "Chile-América", N° 52-53, abril-mayo de 1979.

47. JULIO SILVA SOLAR: "Reflexiones críticas sobre las contradicciones internas de la vía chilena", en "Chile-América", N° 37-38, noviembre-diciembre de 1977, p. 126.

48. Discurso de Frei, reproducido por la revista "Chile-América", N° 64-65, junio-septiembre de 1980

49. ANDRES ZALDIVAR: "La construcción de un nuevo proyecto social es un proceso de transición gradual", Santiago, diciembre 1976, reproduc. en la rev. "Chile-América", N° 37-38, nov.-dic. de 1977, p. 126.

Capítulo V

ALGUNOS CRITERIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

LUIS VITALE

Uno de ellos es precisar el **contexto internacional** y, especialmente, latinoamericano de la historia chilena de los últimos 30 años, con el objeto de analizar las fases por las cuales atravesó el capitalismo mundial en ese período, particularmente la "tercera revolución industrial" y los avances científico-técnicos, las nuevas funciones del Estado, como asimismo el estallido de la crisis ecológica, la relación de fuerzas sociales y políticas en el plano internacional, impactada por la "guerra fría", la carrera armamentista entre EE.UU. y la URSS, las revoluciones anticoloniales de Asia (Corea, Vietnam, Irán), Africa (Argelia, Angola, Eritrea, Sudáfrica) y América Latina (Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Guyana, Jamaica, Granada y la nueva ola anticolonial de la mayoría de las islas del Caribe), la insurgencia de nacionalidades oprimidas (vascos, catalanes, kurdos, irlandeses), los antiguos y nuevos Movimientos Sociales, la rebelión de la juventud en el mayo francés del '68, la emergencia de los movimientos étnicos (pueblos originarios y negro), feminista, ecologista, los avances culturales y las principales manifestaciones del pensamiento en esta era contradictoria de reformismo, de reafirmación de lo valórico y de utopías e ideales trascendentes, que culminó en la contrarreforma y reajuste del capitalismo en su fase denominada "neoliberal".

Al estudiar estas incidencias e influencias internacionales en el proceso chileno, hemos procurado ser riguro-

sos al **interrelacionar las cadenas causales exógenas con las endógenas**. Aunque todo fenómeno societario se desarrolla "in situ", concurren factores externos —en el caso chileno la Alianza para el Progreso, las repercusiones de la revolución cubana y, a mediados de la década del '80, la implantación del modelo neoliberal, además del impacto de la caída del llamado "socialismo", con comillas, real sin comillas— en la determinación de los fenómenos internos, teniendo sumo cuidado en señalar mecánicamente que la causa prioritaria es la exógena o, a la inversa, como único factor las causas internas, apreciación parroquial corriente en muchos historiadores de nuestro país, con visión provinciana, que generalmente no consideran el contexto internacional del período histórico chileno que analizan.

También trabajamos con la metodología de **Historia Comparada**, que es fructífera para interpretar las tendencias generales de América Latina y sus especificidades en cada país, particularmente Chile, con el fin de analizar lo que sucedía en otras naciones respecto de la aplicación de las recetas norteamericano-europeas, del ascenso, estancamiento o retroceso de movimientos sociales, de las expresiones políticas populistas, los procesos de democratización, los fenómenos de acción-reacción o contrarreforma, expresados en Brasil en 1964 con el inicio de golpes militares de nuevo tipo.

Para el análisis específico del acontecer chileno de 1964-1994, empleamos diversas categorías teórico-metodológicas, como los períodos de mediana y larga duración, tratando de precisar que éstos no deben medirse por una determinada cantidad de años, sino por las tendencias generales de la sociedad en un lapso determinado. Los de mediana duración pueden durar aproximadamente entre 5 ó 10 años; los de larga duración son más fáciles de ser detectados, pudiendo prolongarse entre 20 y 50 años y, obviamente, mucho más, sobre todo en los ciclos econó-

micos de onda larga, como lo ha demostrado Kondratiev. En cambio, para lapsos históricos breves, aunque relevantes, preferimos trabajar con el concepto de **coyuntura** en vez del "tiempo de corta duración", que no permite precisar el momento de condensación de los procesos de estructura y coyuntura, donde lo concreto es la expresión de múltiples determinaciones de la unidad en la diversidad contradictoria del suceder histórico.

Aunque el aporte de Braudel fue relevante, no coincidimos con su apreciación sobre el tiempo de la "historia episódica", el tiempo de la "historia coyuntural" y el tiempo de la "historia estructural". A nuestro modo de comprender, existe una sola historia desde la génesis y evolución de un proceso que transcurre en una Formación Social, donde la coyuntura condensa procesos de estructura de larga data, como sucedió en la Revolución por la Independencia con el impacto de la invasión napoleónica a España y la creación de Juntas criollas.

Hemos tenido, entonces, que cuestionar el criterio de que lo sincrónico es el momento de confluencia de las "estructuras" y de que lo diacrónico sólo expresa el transcurrir de los hechos históricos en el tiempo. A nuestro juicio, no se puede explicar lo sincrónico si no se estudia la génesis del proceso. Para quienes hemos hecho un corte epistemológico con las escuelas historicista y estructuralista, **las manifestaciones de la sociedad se expresan tanto en lo sincrónico como en lo diacrónico**.

El historiador puede dar una explicación de la génesis de los procesos, que no se limita a una mera cronología o enumeración de hechos, sino que es el producto de la interrelación de los fenómenos, tratando de aplicar el método de abstracción. Es decir, partiendo del **concepto hegeliano-marxista de que lo más concreto es lo más abstracto**, en el sentido profundo de la abstracción filosófica, y de que **lo abstracto es lo más concreto**, el investigador

puede formular generalizaciones mediante la abstracción de los hechos de la realidad, señalando **las tendencias de los procesos** e inclusive la regularidad de algunos de ellos, sin la pretensión de establecer leyes históricas.

Aunque como historiadores siempre consideramos el tiempo cronológico, que es continuo y lineal, preferimos trabajar con la categoría de **tiempo como desarrollo**, que es discontinuo y multilineal, expresando la continuidad-discontinuidad, los fenómenos de ruptura y nueva continuidad en los procesos de mediana y larga duración, como hemos tratado de aplicar a los gobiernos de Frei, Allende y Pinochet en los que gravitó la **Intensidad**, al decir de Sergio Bagú, como otra dimensión del tiempo, reflejada en la velocidad de los cambios; porque en definitiva, para nosotros, **la Historia es la ciencia social que interpreta la esencia del tiempo**, no la mera descripción de momentos. Esta apreciación es más válida aún para el estudio del tiempo en la relación Sociedad humana-Naturaleza-Ambiente, que analizamos en la ponencia presentada en mayo de 1998 al Seminario de la Sociedad Geológica, efectuado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Hemos manejado la categoría de continuidad histórica teniendo siempre presente la discontinuidad y el **desarrollo desigual, articulado, combinado y específico diferenciado**, insistiendo más en la unicidad contradictoria de los procesos –como fue el caso de los gobiernos de Frei y Allende– que en una continuidad supuestamente lineal. El curso diferente de ambos gobiernos y, sobre todo, sus desenlaces, es lo que determina su especificidad.

La **Dependencia** –que a nuestro juicio no es una teoría sino una categoría de análisis– es clave para estudiar las relaciones de Chile con las grandes potencias y cómo enfrentaron esa dependencia estructural los gobiernos de los últimos 30 años, cuestión troncal para analizar la apli-

cación de los “modelos” económicos desarrollista, monetarista y neoliberal en nuestro país.

Para interpretar a cabalidad este período, hemos procurado analizar las concepciones sobre el **papel del Estado** que predominaron en los gobiernos de Frei, Allende, Dictadura militar y Concertación, sobre todo en la relación del Estado con la sociedad civil, la economía, cultura, educación y política agraria y minera.

Hemos procurado distinguir entre intervencionismo del Estado en la economía, dictando políticas económicas, con inversión directa de capital estatal, que a menudo se confunde con capitalismo de Estado. En Chile –como en el mundo (1930-1980), al calor de las teorías keynesianas– fue generalizada no sólo la intervención del Estado en la economía, que provenía desde fines del siglo XIX con Balmaceda, sino la inversión directa de capital estatal que complementaba las inversiones de la burguesía, en función de los intereses del capitalismo y de la propia clase dominante.

Este proceso, que venía dándose desde la década de 1930 en el Chile entre los dos Alessandri –mal que le pese a los economistas liberales y conservadores– se acentuó durante el gobierno de Frei y, sobre todo, bajo la presidencia de Allende, como se estaba dando en Venezuela, México, Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos, que no tenían precisamente gobiernos de izquierda, porque así eran las funciones que el capitalismo de esa época había asignado al Estado. A fines de la década de 1970, la dictadura militar comenzó a cambiar ciertas funciones del Estado según las normas que iban a decantar a mediados de los '80 en el modelo neoliberal, pero siempre mantuvo la estatización del cobre que, por otros tantos azares de la historia, heredaba del gobierno “marxista” de Salvador Allende como lo hemos probado en el capítulo anterior.

El tratamiento de la categoría Estado, más allá de la

esquemática relación estructura-superestructura, nos ha permitido **redimensionar el concepto de lo político**, como punto de condensación de la lucha de clases, no restringiéndolo a los partidos sino ampliándolo a todas las manifestaciones sociales y culturales que se politizan en sus luchas contra la clase dominante. La comprensión de la categoría Estado-nación, importada desde la Europa decimonónica, nos permitió entender que su aplicación mecánica por los gobiernos chilenos ya mencionados no hizo más que continuar la tradición discriminatoria, soslayando el carácter de nacionalidad originaria de los mapuches, aymaras y otros pueblos-naciones.

Similar criterio historiográfico nos ha facilitado la comprensión del **papel que juega la normatividad jurídica, valórica y moral** que, como dice Thompson, no son meras expresiones "superestructurales" sino que cruzan toda nuestra historia de vida cotidiana, costumbres y ética, traspasadas por la ideología de la clase dominante. No se trata de hacer un estudio separado de cada uno de estos aspectos de la sociedad, sino de aplicar el concepto de totalidad social.

La categoría de **totalidad** aparece como inabordable, pero es ineludible si se quiere comprender el conjunto de las manifestaciones de la Formación Social, que es un concepto que va más allá de lo económico-social. Al decir de Pierre Vilar, la historia no consiste en decirlo "todo sobre el todo", sino en decir aquello de que "el todo depende y aquello que depende del todo". De no procederse así en la labor investigativa, una concepción holística abstracta impediría captar los factores determinantes de la totalidad. Los hechos históricos tienen corrientemente un carácter apariencial hasta que no se los articula como expresiones de esa totalidad que es la Formación Social.

La aplicación del concepto de totalidad, criterio historiográfico central de nuestra investigación, nos ha

resultado compleja a la hora de procesar la información sobre estos últimos 30 años de la historia chilena, dada la necesidad de interrelacionar los factores económicos con los sociales, políticos y culturales, y de apreciar cómo la economía condiciona pero, a su vez, es influida de diversa manera por las políticas de los gobiernos de Frei, Allende, Pinochet y Aylwin.

El tratamiento de las **Clases y Movimientos Sociales** no fue tarea fácil porque el discurso corriente de los políticos y científicos sociales de aquella época sólo ponía énfasis en el papel del proletariado, como casi único sujeto social del cambio, en momentos en que era evidente —para quien no tuviera anteojeras— que la irrupción social corría por abajo: en las luchas de la mujer, los mapuches, el campesinado, los habitantes de las poblaciones urbanas periféricas pobres, los cuentapropistas y los marginados que aumentaban a medida que eran expulsados de las sofisticadas empresas. Y para no afectar su eskuerna ideologizante sobre la fuerza motriz del cambio social, preferían hablar en general de la "clase media", entendiendo por ella la pequeña burguesía, sin comprender que las capas medias asalariadas siempre han sido parte de la clase trabajadora.

Premunidos de la nueva concepción sobre **Movimientos Sociales**, sistematizada desde la década de 1970, nos adentramos en el estudio concreto del papel en Chile de los Pueblos Originarios contemporáneos, de los Poblados y res, del ecologismo subversivo y del feminismo y protagonismo social de la mitad invisible de la historia o, mejor dicho, de los historiadores que tradicionalmente han omitido.

La incorporación de los nuevos aportes **historiográficos** sobre el papel trascendente de la **vida cotidiana y la cultura** en la Formación Social, nos facilitó el estudio de ellas integrado a la totalidad histórica. Preferimos hablar

esquemática relación estructura-superestructura, nos ha permitido **redimensionar el concepto de lo político**, como punto de condensación de la lucha de clases, no restringiéndolo a los partidos sino ampliándolo a todas las manifestaciones sociales y culturales que se politizan en sus luchas contra la clase dominante. La comprensión de la categoría Estado-nación, importada desde la Europa decimonónica, nos permitió entender que su aplicación mecánica por los gobiernos chilenos ya mencionados no hizo más que continuar la tradición discriminatoria, soslayando el carácter de nacionalidad originaria de los mapuches, aymaras y otros pueblos-naciones.

Similar criterio historiográfico nos ha facilitado la comprensión del **papel que juega la normatividad jurídica, valórica y moral** que, como dice Thompson, no son meras expresiones "superestructurales" sino que cruzan toda nuestra historia de vida cotidiana, costumbres y ética, traspasadas por la ideología de la clase dominante. No se trata de hacer un estudio separado de cada uno de estos aspectos de la sociedad, sino de aplicar el concepto de totalidad social.

La categoría de **totalidad** aparece como inabordable, pero es ineludible si se quiere comprender el conjunto de las manifestaciones de la Formación Social, que es un concepto que va más allá de lo económico-social. Al decir de Pierre Vilar, la historia no consiste en decirlo "todo sobre el todo", sino en decir aquello de que "el todo depende y aquello que depende del todo". De no procederse así en la labor investigativa, una concepción holística abstracta impediría captar los factores determinantes de la totalidad. Los hechos históricos tienen corrientemente un carácter apariencial hasta que no se los articula como expresiones de esa totalidad que es la Formación Social.

La aplicación del concepto de totalidad, criterio historiográfico central de nuestra investigación, nos ha

resultado compleja a la hora de procesar la información sobre estos últimos 30 años de la historia chilena, dada la necesidad de interrelacionar los factores económicos con los sociales, políticos y culturales, y de apreciar cómo la economía condiciona pero, a su vez, es influida de diversa manera por las políticas de los gobiernos de Frei, Allende, Pinochet y Aylwin.

El tratamiento de las **Clases y Movimientos Sociales** no fue tarea fácil porque el discurso corriente de los políticos y cientistas sociales de aquella época sólo ponía énfasis en el papel del proletariado, como casi único sujeto social del cambio, en momentos en que era evidente —para quien no tuviera anteojeras— que la irrupción social corría por abajo: en las luchas de la mujer, los mapuches, el campesinado, los habitantes de las poblaciones urbano-periféricas pobres, los cuentapropistas y los marginados que aumentaban a medida que eran expulsados de las sofisticadas empresas. Y para no afectar su esquema ideologizante sobre la fuerza motriz del cambio social, preferían hablar en general de la "clase media", entendiendo por ella la pequeña burguesía, sin comprender que las capas medias asalariadas siempre han sido parte de la clase trabajadora.

Premunidos de la nueva concepción sobre Movimientos Sociales, sistematizada desde la década de 1970, nos adentramos en el estudio concreto del papel en Chile de los Pueblos Originarios contemporáneos, de los Pobladores, del ecologismo subversivo y del feminismo y protagonismo social de la mitad invisible de la historia o, mejor dicho, de los historiadores que tradicionalmente la han omitido.

La incorporación de los nuevos aportes historiográficos sobre el papel trascendente de **la vida cotidiana y la cultura en la Formación Social**, nos facilitó el estudio de ellas integrado a la totalidad histórica. Preferimos hablar

de vida cotidiana-cultura porque muchos aspectos del modo de vida constituyen cultura y, a su vez, variadas expresiones culturales forman parte de la vida cotidiana porque la cultura no sólo es lo artístico, la literatura o la enseñanza, sino también las manifestaciones relevantes del diario vivir. La música popular, especialmente sus letras, la comida amasada por décadas y los deportes son expresiones culturales de un pueblo, al igual que la forma de entretenerse en los bares y otras maneras de hacer uso del tiempo libre.

El imaginario social y la forma en que se expresan las "mentalidades" constituyen también expresiones culturales, fenómeno que se dio en el Chile de Frei y Allende con los "barbudos" de Fidel y el Che, con los Beatles, James Dean, los líderes del mayo francés del 68 y las expectativas despertadas por la Teología de la Liberación, teoría nacida en tierra latinoamericana. La vida cotidiana refleja los aspectos más íntimos de un pueblo. Aunque está condicionada por las normas impuestas por el Estado y la clase dominante, tiene una relativa autonomía y dinámica propia, que a veces se desborda en movimientos alternativos o contraculturales, como se dieron en los 17 años de la dictadura militar, a pesar de los intentos que hizo ésta por regimentarlos. La cotidianidad refleja la alienación humana, pero también formas de desalienación, de protesta y rebelión que estallaron durante los gobiernos de Frei y Allende.

La intervención de **los militares en la política** –tanto a través de golpes como de su "poder fáctico" durante los gobiernos de Frei y Allende– fue otra de las áreas de difícil interpretación por cuanto existían pocos estudios sobre el tema antes de 1973, salvo el de Alain Joxe y uno que otro ensayo. Después del golpe militar surgieron aportes, como los de Hernán Ramírez Necochea, Augusto Varas, Hugo Frühling, Carlos Portales, Maldonado-Quiroga y las con-

tribuciones del Centro de Estudios "Avance", además de los recientes libros de Sergio Vergara y Dauno Tótoro. Fundamentamos el análisis del papel de las Fuerzas Armadas en estos últimos 30 años, en el libro que Marcelo Alvarado y el que suscribe hemos entregado a prensa: "La intervención de los militares en la política chilena. 1823-1998".

Importante tarea fue detectar las **expresiones de sectarismo**, que se dieron tanto entre los partidos de izquierda como en los de Derecha y el Centro-burgués durante los procesos políticos de 1964 a 1973 y, brutalmente, en los largos años de la dictadura militar.

Para el estudio de ésta y otras temáticas, nos dimos cuenta de que teníamos una debilidad y, a la vez, una fuerza: asumir la doble función de historiadores y partícipes del proceso. Este nuevo quehacer de historiador: ser investigador-testigo de época, nos permitía hablar por la boca del tiempo y nos convertía en transmisores de aspectos de la historia oral, pero conscientes de la poca distancia que teníamos respecto del período que abordábamos, complejo problema para el historiador que al mismo tiempo ha sido partícipe de algunos momentos de la vida social y política que describe. Como no somos imparciales, aunque aspiramos a ser objetivos, tuvimos que tratar de sobremontar la terminología, especialmente los calificativos y las descalificaciones que brotaban de un contexto que habíamos vivido. Con pasión pero sin apasionamiento ciego emprendimos esta difícil tarea, que los lectores dirán hasta que punto la hemos logrado.

Desde el primer momento, sabíamos que había que estudiar este período escasamente analizado por la historiografía, hecho explicable para los años de la dictadura militar y de la Concertación, dada la cercanía del tiempo, pero no para los gobiernos de Frei y Allende, ocurridos hace más de 30 años, lo que demuestra una vez más que la ciencia histórica sigue su camino tradicional, aun-

que algo ha avanzado porque no hace muchos años las Historias de Chile llegaban sólo hasta 1890. De todos modos, aunque con muy poca bibliografía, nos metimos en las hemerotecas, actas institucionales, centros culturales, archivos de movimientos sociales, novelas, poesías, cinematecas, videotecas, revistas de economía, política, cultura, en la historia oral y en el procesamiento de las Memorias escritas o dictadas por personajes de época, aunque tenemos serias reservas sobre este tipo de fuente histórica, generalmente sesgada por la compulsión que tienen estos autores de justificar su pasado para proyectar su imagen a las futuras generaciones y, en particular, a los historiadores.

Acerca de la relatividad de la verdad histórica

La necesidad de escribir los últimos 30 años de la Historia de Chile, planteada recientemente con urgencia por el propio Senado, especialmente los periodos de Allende y Pinochet, ha puesto de nuevo sobre el tapete la tan debatida problemática sobre la verdad absoluta y relativa de la Historia, como disciplina.

Para Gonzalo Vial, autor de varios fascículos sobre el tema, de Ricardo Krebs, encargado de redactar el capítulo sobre el régimen militar de la llamada "Nueva Historia de Chile" de la Universidad Católica, de Enrique Campos Menéndez y otros adscritos a la historiografía tradicional conservadora, es una verdad absoluta que los militares "salvaron a Chile del caos".

Sin embargo, más frecuente y mayoritario es el sector de partidarios de la relatividad de la verdad histórica y del criterio de que la historia la hacen los historiadores, según diferentes puntos de vista.

Una vez más se confunde entre la Historia, como disciplina, y la historia real que han vivido las sociedades,

porque decir que la historia la hacen los historiadores es, además de una concepción elitista, una aberración, puesto que la historia la hacen los pueblos. Sin esa historia, no existiría la Historia, como disciplina científica. Obviamente, los historiadores tenemos distintas concepciones historiográficas para reconstruir el pasado, pero pontificar sobre la verdad relativa conduce a renunciar al análisis objetivo. Sin proponérselo, el relativismo es la "madre de todos los males", pues da paso a que el conjunto de la sociedad pueda opinar livianamente que hay tantas Historias como historiadores, buen caldo de cultivo para los ideólogos que quieren arrebatar a los pueblos el élan vital de las fuerzas de la historia. Con esta concepción, siempre sería relativo decir que Frei y Allende abrieron un profundo proceso de democratización y que la Junta Militar, presidida por Pinochet, fue la dictadura más brutal y prolongada de la Historia de Chile. Asimismo, con esta mirada se podría llegar hasta decir que es relativa la apreciación de que los sucesos de 1810 constituyeron en América Latina la primera gran Revolución Anticolonial de la historia universal, o que Balmaceda fue uno de nuestros más preclaros presidentes nacionalistas del siglo XIX, o de que es una verdad relativa que Arturo Alessandri produjo una ruptura con la tradición de los gobiernos oligárquico-terratenientes.

El relativismo ha recobrado nuevos bríos bajo la cultura consensuada, con apariencia no conflictiva, del "neoliberalismo", cuyos ideólogos pretenden ignorar o declarar obsoletas las interpretaciones de los precursores de la Historia Social, como Julio César Jobet, Hernán Ramírez Necochea, Marcelo Segall, Tulio Lagos y Jorge Barría, entre otros. Más aún, por boca del ex-ministro Brunner, se han atrevido a decretar el fin de la sociología y, por supuesto, el fin de la disciplina histórica, reemplazándolas por la "realidad virtual" y la imaginación

novelística. Afirmación que alienta a quienes desean relativizarlo todo –menos la globalización y el mercado– y especialmente los conocimientos acumulados por la ciencia histórica, sobre todo la no tradicional.

Hasta pueden relativizar el problema de la Identidad chilena y latinoamericana, en aras de la mentada “aldea global”, como asimismo un hecho indiscutible: la íntima relación de la Sociedad humana con la Naturaleza y el deterioro ambiental, con tal de salvar la responsabilidad de la clase dominante mundial, que ha puesto a la humanidad al borde de terminar con la vida en este planeta Tierra, que así como surgió hace millones de años también puede desaparecer si no se detiene la voracidad antropocéntrica de este capitalismo monopólico en su fase II, disfrazado de neoliberal.

Durante más de un siglo, la problemática de la verdad histórica polarizó a las corrientes absolutistas y relativistas de la historia. Mientras las primeras sostenían la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta, las segundas opinaban que todo conocimiento histórico era tan relativo que no era factible alcanzar ningún tipo de verdad. La Historia, como estatuto científico, quedó así reducida a un idealismo subjetivo, sólo existente en el pensamiento del historiador. Las críticas de Croce a los positivistas e historicistas de la escuela tradicional de Ranke fueron correctas, pero su concepción de que pueden existir tantas versiones de la historia como corrientes historiográficas condujo, sin que él se lo propusiera, a pavimentar el camino del relativismo gnoseológico.

A nuestro juicio, sólo existe un proceso de aproximaciones sucesivas en la reconstrucción del pasado, que se van enriqueciendo a medida que se avanza en teoría y metodología y que las nuevas fuentes y explicaciones son contrastadas con la vida real de las sociedades. Aproximaciones a la verdad no significa relativismo filosófico, para

el cual lo verdadero y lo falso son siempre subjetivos, pavimentando el camino hacia el agnosticismo.

Cada aproximación a la verdad tiene carácter de transitoriedad porque dialécticamente niega la afirmación precedente, aunque conteniéndola y superándola. Ese caminar no tiene fin, pues no hay ninguna verdad absoluta a la cual llegar, lo que estrecharía el espacio abierto a la permanente creatividad intelectual.

La **Ideología** tiene una íntima relación con la teoría del conocimiento y la verdad histórica. Es un fenómeno mental de inversión o deformación de la realidad al servicio, deliberado o no, del quehacer de una clase o fracciones de ella, de una posición filosófica o de partido, que conduce a racionalizaciones que deforman la realidad. Aunque es impuesta por la clase dominante para enmascarar sus intereses, no significa que sea una mera mistificación, puesto que por su grado de cohesión social y vivencial es asumida por la mayoría de la sociedad, por aquello que dijo un hombre barbudo que aún goza de buena salud: la ideología predominante de una sociedad es la ideología de la clase dominante. La llamada “falsa conciencia” –que no por ser falsa deja de ser real, a tal punto que permea la existencia de los propios oprimidos– es una de las manifestaciones más deformantes, por su incidencia en la praxis cognoscitiva.

En fin, ser objetivo, sin caer en el objetivismo, no significa ser imparcial, sino tratar de analizar científicamente los hechos del pasado con una teoría para investigar la realidad. Una teoría sin estudio de los hechos no tiene bases sólidas, pero una investigación sin teoría es una acumulación de datos, que pueden servir a cualquier postulación relativista. Es deber de todo historiador incorporar inclusive los datos que puedan aparentemente contradecir sus hipótesis iniciales, como lo hemos intentado hacer en este libro con los gobiernos de Frei, Allende y Pinochet.

LOS CAMPESINOS DEL VALLE CENTRAL EN EL CHILE DE LA POST REFORMA AGRARIA

OCTAVIO AVENDAÑO PAVEZ

El proceso agrario experimenta un vuelco radicalmente distinto a mediados de los setenta, a raíz de la adopción de una serie de medidas destinadas a adaptar la actividad agropecuaria a los requerimientos del nuevo proyecto neoliberal. Entre las medidas que se adoptan sobresalen: la parcelación de los asentamientos formados con la Reforma Agraria, correspondientes a un tercio de la superficie expropiada; la devolución a los antiguos propietarios de un porcentaje similar; la liberación del mercado de tierras; la privatización de las empresas agroindustriales creadas por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) a mediados de los sesenta, y la reducción de las tasas arancelarias y medidas proteccionistas utilizadas para proteger la producción agropecuaria. Estas medidas, junto a la política aperturista que se impulsa en este período, facilitan el predominio de un nuevo sector ligado directamente con la producción agroexportadora. Con lo cual se constituyen nuevos sectores dominantes en el agro, muchas veces miembros de conglomerados nacionales y extranjeros, centrados principalmente en la actividad hortofrutícola y forestal¹.

La política aperturista que se implementa desde 1975, destinada a estimular la exportación, genera un enorme deterioro en aquellos sectores empresariales y del campesinado que estaban orientados tradicionalmente a producir para el mercado interno, debido al ingreso masivo de

productos agrícolas importados. A ello se agregan los graves efectos que genera tanto a pequeños y medianos propietarios la crisis económica y financiera de principios de los ochenta². Debido al endeudamiento que esta crisis provoca, muchos de los pequeños propietarios se vieron obligados a vender sus propiedades.

La parcelación y asignación individual de propiedades que se llevan a cabo a fines de los setenta genera un aumento significativo del número de campesinos. Tal situación, pese a que muchos debieron posteriormente enajenar sus pequeñas propiedades, se demuestra por la cantidad de pequeños propietarios existentes a mediados de los ochenta que alcanzaban los 260.000, a los cuales se agregaban 90.000 familiares no remunerados. Según Ehenique y Rolando, en ese mismo momento el sector de pequeños propietarios lograba controlar "el 32% de los suelos de uso agrícola del país y un porcentaje aproximado de tierras de riego efectivo"³. No obstante, en un primer momento, la situación de una gran cantidad de campesinos se verá dificultada por el retiro del apoyo crediticio y técnico de parte del Estado. En muchos casos, la carencia de recursos los obliga a tener que vender sus propiedades. Sobre todo por el alza que se produce en el valor de ellas en las zonas con mayores ventajas agroecológicas, a causa del desarrollo y expansión de la actividad agroexportadora. En otros casos, en cambio, los bajos niveles de producción - que no logran asegurar la subsistencia material - llevan a que muchos campesinos tengan que combinar este tipo de producción con la asalarización (temporal) en predios más grandes o en empresas agroindustriales. Situación que algunos autores han definido como campesinización pauperizante⁴.

Esta diferenciación se expresa, además, en la presencia de ciertos segmentos del campesinado que alcanzan importantes niveles de producción; permitiendo que mu-

chos de ellos logren una satisfactoria inserción en el mercado, ya sea a través del comercio local o estableciendo relaciones de intercambio con las empresas agroindustriales.

Algunos autores han visto estos procesos de diferenciación como la antesala de la descomposición campesina. Sobre todo por la presencia de un porcentaje importante que, a principios de los ochenta, perdió su condición de pequeños propietarios debiendo asentarse en localidades intermedias entre el campo y las ciudades⁵. Estas localidades se han caracterizado por presentar condiciones de vida similares a las poblaciones marginales urbanas. A ellas se integra posteriormente población de origen urbana, que laboran como trabajadores temporeros en las distintas faenas de la actividad agroexportadora.

La aparición de esta última figura estará asociada a una nueva forma de integración laboral, que será utilizada como estrategia de sobrevivencia por algunas familias campesinas. Pero también será vista por algunos autores como una clara demostración de descomposición del campesinado. Tal como se aprecia en uno de los estudios pioneros acerca de la realidad de los trabajadores temporeros, el violento ascenso de esta modalidad de trabajo fue posible "a costa de las parcelas de asignatarios y otras explotaciones trabajadas por cuenta propia"⁶. Estudios posteriores, en cambio, tienden a mostrar una disminución de la venta de parte de los campesinos asignatarios, produciéndose más bien una cierta estabilidad de la condición de los pequeños propietarios campesinos. La razón principal estaría dada por la adopción de ciertas medidas proteccionistas, implementadas desde 1985, para el sector de la agricultura tradicional⁷. Sostienen además que esta estabilización se habría producido por la integración de una buena cantidad de campesinos como abastecedores de las empresas agroindustriales y agroexportadoras.

Pese a todo, en los últimos años nuevos estudios evidencian un deterioro importante en las condiciones de vida del campesinado. Según Jacques Chonchol, de los 2,2 millones de personas que viven en el campo, de acuerdo a los datos del Censo de 1992, 300 mil son trabajadores temporeros y 1,2 millones pertenecen a la pequeña agricultura campesina. Señala que, hasta esa fecha, "existían en el sector rural 826 mil pobres e indigentes. La causa de esta pobreza son la proliferación de minifundios aislados y sustentados en sistemas agroecológicos precarios, las malas condiciones de comercialización de los pequeños productores y su difícil acceso a un crédito adecuado"⁸.

La mayoría de los pequeños propietarios campesinos se suelen concentrar en aquellas actividades agrícolas, que si bien no son exclusivamente para la autosubsistencia de la familia campesina, se destinan preferentemente a abastecer el mercado interno. En especial, cultivos con un bajo nivel de competitividad, vulnerables al ingreso de productos agrícolas importados.

En el caso de aquellos campesinos que logran ubicarse en el sector más dinámico de la economía agraria, como lo es la actividad hortofrutícola, destinada mayoritariamente al mercado externo, se constata una creciente concentración de los suelos agrícolas. Los cuales son adquiridos por algunas empresas agroexportadoras, que tienden a invertir en huertos, como por grandes empresarios que han adquirido nuevas tierras a fin de producir a mayor escala. Gran parte de estas tierras proviene de campesinos y otros productores que se han visto en la necesidad de venderlas a causa de sus déficit financieros. De acuerdo a un reciente estudio de Cristóbal Kay, de aquellos campesinos que lograron involucrarse en la producción de fruta, "un número significativo de ellos vendió posteriormente una parte o todas sus tierras a agricultores capitalistas o agroindustrias de frutas en vista de que no podían devol-

ver la deuda acumulada resultante de su inversión inicial en árboles frutales⁹. Señala además que en 1986/87 los campesinos poseían aún el 21,5% de todas las tierras del país con árboles frutales; cifra que en 1993/94 se reduce a un 15,2%.

En un trabajo anterior, este mismo autor afirma que el proceso de globalización que vive la economía chilena, y por ende la economía agraria, tiende a acentuar mucho más el fenómeno de la concentración de la propiedad. La incorporación al Mercosur, que producirá un ingreso masivo de productos agrícolas, no sólo afectará aquellos cultivos más tradicionales sino que “conducirá a una mayor concentración de granjas, debido a las presiones del mercado competitivo que genera la reducción de los aranceles. Muchos pequeños agricultores no sobrevivirán y a medida que se fortalezca el proceso de liberación se dará ‘una reforma agraria inversa’¹⁰. Sostiene además que esta situación que se puede traducir en el desaparecimiento de ciertos sectores sociales, ligados históricamente al agro, y en una grave crisis económica en aquellas regiones con presencia de una agricultura menos competitiva, en especial desde la VII a la X Región de nuestro país.

PRINCIPALES DEBATES

Desde un principio surgen una serie de planteamientos que ven en el campesinado la expresión del tradicionalismo, por un lado, y de la persistencia de formas económicas precapitalistas, por otro. En ambos casos, se apuesta a su desaparición debido a la apertura del mercado, la expansión del desarrollo urbano y el crecimiento industrial. Como veremos, estos planteamientos se contraponen con aquellos que dan cuenta de la permanencia del campesinado, ya sea por la presencia de lógicas de producción distin-

tas a la del capitalismo (Chayanov) o porque logran integrarse en diversos ámbitos de la sociedad moderna (Wolf).

Algunos de estos planteamientos han tenido acogida por estudiosos de la sociedad rural desde mediados de los años setenta. Bajo el contexto de un nuevo ciclo de crecimiento del capitalismo en el agro, caracterizado por la consolidación de los complejos agroindustriales y la mayor presencia del capital transnacional. Especial acogida han tenido aquellas visiones que plantean la descomposición y proletarianización de los campesinos, representadas por una serie de tesis elaboradas por autores como Roger Bartra, Ernest Feder y Sergio de la Peña, entre otros¹¹. Bartra, centrado en la perspectiva de análisis de la articulación de modos de producción, sostiene que el capitalismo destruye inevitablemente toda economía anterior, y la relación estructural de la pequeña economía campesina con la gran empresa capitalista lleva inevitablemente a la desintegración, pauperización y proletarianización de la primera, en un proceso que se desarrolla lentamente. Esta tesis es compartida plenamente por Feder quien agrega que la disolución de las economías campesinas es reforzada por el retiro de los apoyos de parte del estado y por la incorporación de empresas transnacionales en la actividad agrícola. Estas empresas, a juicio de Feder, provocan la concentración territorial, incluso, de aquellas tierras pobres y marginales.

Condición del campesinado bajo el neoliberalismo

Contrariamente a quienes plantean la disminución y desaparecimiento del campesinado, surge la opinión de algunos autores que visualizan una tendencia totalmente opuesta, demostrando no sólo su permanencia sino incluso una clara tendencia a aumentar.

Tal fenómeno fue advertido por primera vez en nuestro país por Eugenio Maffei, en un trabajo publicado a fi-

nes de los setenta¹². Sin embargo, sus argumentos están basados en la presencia numerosa de asignatarios de la Reforma Agraria. Pese a ello, los campesinos no son un sector residual del capitalismo sino que se encuentran totalmente integrados a este sistema.

Esta apreciación es compartida posteriormente por Rigoberto Rivera, quien analizando el campesinado chileno de los ochenta llega a sostener: "el mercado capitalista, más que destructor del campesinado chileno aparece como un elemento esencial de su constitución, lo que plantea la necesidad de encarar el análisis de los pequeños productores no sólo desde la perspectiva de la extracción de excedentes y su transferencia a otros sectores de la sociedad, sino también desde el punto de vista de las condiciones del mercado que han dado lugar a la expansión del campesinado"¹³.

La principal contraparte del diagnóstico acerca de la desaparición del campesinado la encontramos en aquellos autores que defienden la idea de una lógica distinta de los procesos de racionalización presentes en la sociedad capitalista. Como es sabido, uno de los autores más representativos de esta corriente es el economista ruso Alexander Chayanov, el cual llegó a sostener que el campesinado, dado los factores culturales y sociales que le son propios, lograba subsistir pese a los niveles alcanzados por el capitalismo¹⁴.

La perspectiva campesinista de Chayanov fue asumida por diversos investigadores chilenos durante los años setenta. Alexander Schejtman, por ejemplo, señaló que el objetivo de la economía campesina se centraba principalmente, en la satisfacción del consumo familiar¹⁵. Por tal motivo, según este autor, los campesinos operan con una lógica con la cual el manejo de los recursos productivos, y el volumen de la producción, se centra en la minimización del riesgo y el aseguramiento de la subsistencia.

Compartiendo estos planteamientos un equipo de

investigadores del GIA (Grupo de Investigaciones Agrarias), llegó a sostener que la racionalidad económica campesina está inserta en la lógica de la reproducción de cada unidad. Esta lógica de reproducción, diferente según ellos a la capitalista, "se expresa, por ejemplo, en la diversificación de la estructura de cultivos, en el énfasis en los cultivos que pueden autoconsumirse, en la utilización de tecnología de bajo riesgo, en la sobre explotación que el campesino hace de su fuerza de trabajo y de la del grupo familiar y en la organización que se da el campesinado para disminuir la extracción de excedentes que le impone el capital. Esto es una lógica de resistencia que permite la mantención del campesinado"¹⁶.

Dentro de la visión campesinista sobresalen también las hipótesis desarrolladas por el antropólogo norteamericano Eric Wolf, para quien los campesinos pasan a ser un sector integrante de la sociedad capitalista contemporánea manifestando, incluso, una tendencia a aumentar considerablemente. En su caracterización acerca del campesinado, Wolf coincide con Chayanov al sostener que la base de la economía campesina reside en la estructura familiar, la que le permite coexistir junto al desarrollo del capitalismo. Sin embargo, a diferencia del economista ruso, para Wolf las unidades campesinas no se encuentran aisladas del resto de la sociedad. Por esta razón, los campesinos se ubicarían "entre la tribu primitiva y la sociedad industrial"¹⁷. Vale decir, y a diferencia de Marx, para Wolf los campesinos surgen sólo con el desarrollo del capitalismo y con la formación del Estado moderno.

Para Wolf una forma de interrelación con los centros urbanos es el fenómeno de las migraciones estacionales, especialmente de algunos miembros de familias campesinas, en busca de trabajo. Tal fenómeno se suele dar cuando terminan las labores del campo o, simplemente, cuando el trabajo escasea¹⁸. Wolf llega a identificar a los campe-

sinos como un sector miembro de una estructura social compleja y diferenciada, cuyas características corresponden a los de la sociedad moderna.

Rigoberto Rivera se propone valorar la importancia cualitativa y cuantitativa del campesinado chileno, en el contexto de la modernización capitalista de los años ochenta, definiendo al campesino como un "pequeño productor agropecuario en condiciones de subordinación social"¹⁹. Para este autor, existen una serie de formas de integración de los campesinos con el resto de la sociedad, entre ellas los distintos tipos de inserción laboral que la economía agraria, cada vez más industrializada y transnacionalizada, ofrecerá; junto al comercio entre las unidades campesinas y las ciudades.

Rivera le otorga una particular importancia al fenómeno de la diferenciación campesina, para lo cual no parte de elementos totalmente estructurales sino más bien de comportamientos individuales entre los miembros de la unidad campesina. Por medio de este tipo de comportamientos, llega a distinguir tres tipos de estrategias desarrolladas por los campesinos, las cuales favorecen el mantenimiento de aquellas pequeñas propiedades basadas principalmente en la explotación familiar, o como él señala en la "estrategia del hogar": estrategias agrícolas de subsistencia, estrategias de acumulación y estrategias de supervivencia, las que son estructuradas por la carencia de recursos y por otro tipo de dificultades. Esto último obliga a algunos hogares a tener que "optar por arrendar las tierras o darlas en medias y no hacer mayores esfuerzos en la agricultura"²⁰.

Racionalidad y economía campesina

Los aportes teóricos de los defensores de la teoría campesinista, representados principalmente por el economista de la CEPAL Alexander Schejtman y por el grupo de

investigadores del GIA, entran en contraposición con quienes apuestan por definir a los campesinos a partir de su integración, y determinación, en el sistema capitalista.

"El campesinado –afirma Bengoa– es el sector social formado por los productores agrícolas directos, que trabajan, en general, con medios de producción propios o arrendados, que producen para el mercado una parte de sus bienes y otra la consumen, que no suelen utilizar fuerza de trabajo asalariada en sus labores agrícolas, que preferentemente trabajan con la familia y que aunque venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario no se insertan plenamente en el mercado capitalista de trabajo". No obstante, sólo al referirse a elementos culturales este autor le otorga a los campesinos una identidad propia, distinta a la de otros grupos sociales: "los campesinos –continúa Bengoa– son grupos sociales que suelen desarrollar formas culturales particulares en la que la relación del hombre con la tierra y la naturaleza, ocupa un lugar central"²¹.

Con tales afirmaciones, Bengoa se distancia de quienes defienden la idea de una lógica y racionalidad intrínseca a las organizaciones económicas de los campesinos, reduciendo sólo al ámbito cultural aquellos elementos que serían propios de los campesinos.

Un enfoque que interesa resaltar en este apartado corresponde al de "economía campesina", elaborado por Luz Cereceda y Liliana Barría, a fin de distinguir el campesinado y su racionalidad económica. Para estas autoras la "economía campesina" está conformada por "unidades de pequeña producción mercantil, en que la familia poseedora de los medios de producción, constituye la principal fuerza de trabajo productivo y la producción obtenida es la fuente de recurso e ingreso más importante para la subsistencia familiar"²². El carácter mercantil de este tipo de economías, que las autoras extraen de la noción de modo de producción mercantil simple del antropólogo mexica-

no Roger Bartra, permite situarla en una posición distinta al de la economía capitalista (léase bajo condición de asalariados) y de la economía natural o de subsistencia.

En el estudio que realizan de la cooperativa campesina El Corazón (ubicada en la Provincia de Curicó), existirá en las autoras un esfuerzo por superar aquellos postulados teóricos que caen en la dualidad entre racionalidad alternativa a la lógica utilitarista del capitalismo y la racionalidad empresarial o técnica, en el sentido weberiano, llegando a constatar la presencia de distintas lógicas en donde se combinan valores tradicionales y utilitarios. En palabras de ellas mismas: "Del análisis del comportamiento que guía al campesino en términos de 'que producir' podemos concluir que éste se orienta en términos de obtener la máxima ganancia, aunque considera una serie de factores que apuntan a conjugar rentabilidad o ganancia con seguridad y subsistencia anual".²³

Mucho más enfático aún sobre la presencia de elementos de la racionalidad empresarial, o más bien el predominio de una racionalidad técnica propia del capitalismo, resultan una serie de escritos de Eugenio Maffei de fines de los setenta. Tomando como referencia el materialismo histórico, Maffei ha señalado que la agricultura subsistente minifundista no se encuentra marginada del capitalismo, por el contrario "es parte integral del capitalismo y está, por lo tanto, determinada por las leyes del capitalismo"²⁴.

Para Maffei esta situación conlleva el hecho que no se genere una real distinción entre economía campesina y empresa campesina, la minifundista, "es compatible y funcional con el desarrollo del capitalismo en el campo"²⁵.

Diferenciación campesina

Según Alvaro Rojas, se logra sobrepasar aquellas discusiones entre campesinistas y descampesinistas presen-

te, hasta ese momento, en la mayoría de los estudios acerca de los campesinos en los diversos países latinoamericanos²⁷. Siguiendo a Sergio Gómez, Rojas sostiene que la diferenciación es parte de un dinamismo propio del campesinado que se remonta incluso a la presencia de la hacienda. No obstante, se reconoce que este proceso de diferenciación tiende a acentuarse al aumentar el número de pequeños propietarios luego de la parcelación de unidades reformadas llevadas a cabo a fines de los setenta.

Entre los aspectos que inciden directamente en la diferenciación campesina destacan el tamaño de los predios, la calidad de las tierras, la composición y tamaño familiar, la utilización o no de mano de obra y el destino de la producción. De estos factores, la mayoría de los autores concuerda que el más importante pasa a ser la forma de incorporación a los mercados: para el establecimiento de relaciones de intercambio como para ofrecer o demandar mano de obra. Tales factores llevaron ya a fines de los cincuenta a Rafael Baraona, en su estudio acerca del Valle de Putaendo, a elaborar una importante tipología de productores que tenía la particularidad de responder solamente a las características de esa estructura.

Estudios posteriores tienden a mantener los criterios de esa tipología, aunque se basan en nuevos factores. Así, por ejemplo, Rivera considera como factor de diferenciación el tipo de estrategia que adoptan los campesinos (acumulación, subsistencia y supervivencia). Con lo cual, distingue tres estratos de campesinos: productores familiares especializados (los llamados 'farmers'), los campesinos medios y campesinos asalariados.

Para Bengoa, en cambio, reviste especial importancia la organización de la producción junto a las posibilidades de insertarse y mantenerse en el mercado. De esta forma, llega a distinguir entre: campesinos ricos, campesinos productores, campesinos pobres y campesinos proletarizados.

La situación de los campesinos ricos –surgidos durante la Reforma Agraria, por medio de la asignación de “predios plantados con frutales ya en producción o a punto de entrar en ella”– sería similar al de los sectores medios urbanos. En cambio, los campesinos productores poseen una economía que se ubica en el “límite tendencial de la reproducción simple”²⁸. Los campesinos pobres serían aquellos cuyos niveles de producción no alcanzan a satisfacer el autoconsumo, debiendo emplearse como asalariados en las empresas agroindustriales. Por último, los proletarizados serían la más clara expresión de descomposición campesina. En esta categoría se ubican principalmente aquellos campesinos que perdieron sus tierras, a principios de los ochenta, debiendo asentarse en villorrios y poblados rurales cercanos.

Campesinos y empresas agroindustriales

A fines de los ochenta, debido a la importancia adquirida por el desarrollo de la actividad agroindustrial, es posible apreciar una nueva condición en el campesinado por las formas de integración que se desarrollan, a partir de los procesos de intercambio, con las empresas agroindustriales. Tal integración se presenta en algunos casos por medio de la incorporación como trabajadores asalariados temporales, por parte de aquellos campesinos o miembros de sus respectivas unidades familiares que sufren un proceso creciente de pauperización.

Además de estas dos formas de relación con las empresas agroindustriales, se constata también la presencia de campesinos (hortaliceros) que destinan gran parte de su producción en el abastecimiento del comercio local, de algunas ciudades del Valle Central.

La integración de parte de algunos campesinos, o en sus efectos de parte de los demás miembros de la familia,

como asalariados de las empresas agroindustriales y de las grandes propiedades agrícolas, se ha traducido en la presencia de una combinatoria que ha definido a un importante sector del campesinado, como asalariados temporales. Como hemos visto, el proceso de pauperización y descomposición que afectó a un porcentaje considerable de campesinos –especialmente beneficiados de la Reforma Agraria–, llevó a algunos autores a dar cuenta de un proceso de proletarización cada vez más creciente en los campesinos. Sin embargo, la existencia de esa combinatoria entre la pequeña producción y el trabajo asalariado ha llevado a ver tal dualidad no como un proceso transitorio –conducente a la proletarización de los campesinos– sino más bien bajo la presencia de un nuevo tipo de subordinación que se basa en la especificidad adoptada por el capitalismo agrario.

Por esta razón, autores como Luisa Paré han llegado a sostener que “no hay que pensar que el desarrollo capitalista significa siempre la separación del trabajador de sus medios de producción y la proletarización del campesino”²⁹. Afirmación que además es corroborada a partir del carácter que asume el empleo temporal y estacional en diversas áreas de la actividad agrícola, en especial ligada a la producción agroexportadora. Como es sabido, el desarrollo de la actividad frutícola y forestal, junto con las medidas de flexibilización laboral aplicadas a nivel general desde principios de los años ochenta, generaron un desplazamiento del empleo permanente por formas de trabajo temporales y estacionales en la agricultura. Pese a ello, de acuerdo a lo afirmado por Alejandro Canales, se trataría de una proletarización más bien parcial e incompleta de la fuerza de trabajo: “el campesino –sostiene Canales– se ve obligado a vender parte de su fuerza de trabajo, pero esta operación es parte de su propia reproducción como ‘no-proletario’, esto es como campesino. Así, tales estrate-

gias de reproducción dan cuenta de una aparente paradoja: el campesino para reproducirse como proletario, debe también negarse a sí mismo y trabajar como campesino, como no proletario³⁰.

Por otro lado, el desarrollo de la actividad agroindustrial trae consigo el establecimiento de relaciones de intercambio que se desarrolla con aquellos campesinos que destinan su producción a abastecer este tipo de empresas.

En efecto, pese al apoyo crediticio y a la asesoría técnica ofrecida por la agroindustria, se imponen una serie de normativas por parte de estas últimas que van en desmedro de los campesinos. Tales normativas incluyen la fijación unilateral de los precios y la imposición de castigos, en caso de atrasos en la entrega de las cosechas o por problemas de cualificación de esta misma.

Este hecho, desde luego, ha generado diversas interpretaciones entre los estudiosos del campesinado. Así, por ejemplo, para Jorge Echenique esta forma de intercambio permite a los pequeños propietarios asegurar su condición de campesinos³¹. Retrospectivamente, es posible apreciar algunas investigaciones que constatan un desplazamiento de los pequeños propietarios, debido a una mayor preferencia de las empresas agroindustriales de vincularse con empresarios agrícolas con mayores volúmenes de producción. Al respecto, resultan ilustrativas las conclusiones de un estudio de principio de los ochenta en el que se demuestra que, en el caso de los productores de maíz, "los campesinos, obligados por el vencimiento de los créditos, deben vender su producción durante los meses de mayor abundancia cuando el quintal se cotiza en alrededor de \$600, mientras que los agricultores más rentables pueden vender más tarde cuando los precios del quintal han subido a \$800". Lo mismo se daba, según este estudio, con la producción lechera: "los precios pagados por el litro de leche al productor grande oscilaban entre los \$6 y los \$7,

en cambio para el mediano y el pequeño productor el precio oscilaba entre los \$ 3 y \$ 4"³².

Tales conclusiones, sustentadas más bien en la visión descampesinista, se relativizan en estudios posteriores en los que se demuestra que el motivo que tienen las agroindustrias para preferir a pequeños o grandes productores suele asumir un carácter mucho más complejo. "Cuando el cuidado incide de manera decisiva en la calidad y en la productividad como es el caso de las hortalizas procesadas (congeladas o deshidratadas), algunos cultivos industriales como el tabaco y la remolacha azucarera, las empresas agroindustriales prefieren trabajar con pequeños productores (...) Cuando lo que interesa son factores tales como las economías de escala, calidad homogénea del producto, o la simplificación de las operaciones industriales y de la organización empresarial, se tiende a privilegiar las relaciones con los medianos y grandes agricultores"³³.

De ambos estudios, por cierto, se desprende una imposición de parte de las empresas agroindustriales que afecta directamente a los productores abastecedores. La permanencia de los campesinos en estas cadenas depende tanto de los niveles de producción requeridos por las empresas agroindustriales, así como por las posibilidades de integración que alcancen en aquellos sectores más dinámicos de la agricultura. En el caso de la fruticultura, claro está, la tendencia es a una mayor concentración de la producción en manos de los productores con mayores niveles de inversión³⁴. En otros rubros, como el vitivinícola, en cambio, las condiciones de contrato impuestas por las agroindustrias han hecho que los grandes productores prefieran reconvertir sus cultivos a otros más rentables (como la uva de mesa). El lugar de los empresarios ha sido ocupado por pequeños productores, a quienes estas empresas logran imponer sin mayores problemas las condiciones contractuales debido al escaso nivel de organización que suelen presentar.

NOTAS

1. El desarrollo experimentado por estas actividades ha traído como consecuencia el desplazamiento de una gran cantidad de pequeños propietarios así como una nueva concentración territorial en manos de empresarios que están en condiciones de producir e invertir a gran escala.

2. Emiliano Ortega: *Transformaciones agrarias y campesinado*, CIEPLAN, Santiago, 1987, p. 15.

3. Jorge Echenique y Nelson Rolando: *La pequeña agricultura*, AGRARIA, Santiago, 1989, p. 51.

4. José Bengoa, Jaime Crispi, María Elena Cruz y Cecilia Leiva: *Capitalismo y campesinado en el agro chileno*, GIA (Serie Resultado de Investigación N°1), Santiago, 1979.

5. Al respecto resultan ilustrativas las observaciones de José Bengoa en un trabajo de principio de los ochenta: "Un fenómeno nuevo en la agricultura del valle central es la aparición de villorrios míseros, compuestos por campesinos expulsados de los predios o que han debido vender sus tierras" (J. Bengoa: *El campesinado chileno después de la reforma agraria*, Ediciones SUR, Santiago, 1983, p. 83).

6. Sergio Gómez y Jorge Echenique: *Trabajadores temporeros de la agricultura moderna de Chile Central*, FLACSO, Documento de Trabajo N° 324, Santiago, Diciembre de 1988, p. 28.

7. Jorge Echenique y Nelson Rolando: *La pequeña agricultura*, op. cit., p. 46.

8. Jacques Chonchol: ¿Crisis agrícola?, en *La Época*, Sábado 26 de Agosto de 1995, p. 10.

9. Cristóbal Kay: La cuestión agraria y el campesinado en Chile hoy, en *Revista Debate Agrario*, N° 27, Lima-Perú, Marzo de 1998, p. 94.

10. Cristóbal Kay: Globalización, agricultura tradicional y reconversión en Chile, en *Revista Comercio Exterior*, Vol. 46, N°48, México, Agosto de 1996, p. 630. Según un estudio de SUR, a raíz de la incorporación a este tipo de tratados de libre comercio "lo más probable es que el campesinado del secano costero, el que habita en el sur de Chile y en especial el campesinado mapuche, se refugiará en la autosubsistencia, combinándola con su adscripción asalariada al mercado forestal y a las salidas 'hacia fue-

ra', como la migración" (SUR: Campesinado y Mercosur, *Temas Sociales*, N°12, Agosto 1996, p. 4).

11. Sobre este tema Alejandro Canales: El agro mexicano: viejas y nuevas polémicas, en Jorge Zepeda Patterson (Editor): *Las sociedades rurales hoy*, El Colegio de Michoacán, México, 1988; Absalón Machado y Jorge Torres: El debate sobre el campesinado en América Latina, en *El sistema agroalimentario. Una visión integral de la cuestión agraria en América Latina*, Editorial Siglo XXI, Bogotá-Colombia, 1991, pp. 263-293.

12. Eugenio Maffei: Algunas consideraciones sobre el campesinado minifundista, la agricultura de subsistencia y el concepto de economía campesina, en GEA, Boletín de Estudios Agrarios, N°1, Julio- Septiembre de 1978, p. 4.

13. Rigoberto Rivera: *Los campesinos chilenos*, GIA, Santiago, 1988, p. 46.

14. Alexander Chayanov: *La organización de la unidad económica campesina*, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.

15. Alexander Shejtman: Economía campesina: lógica interna, articulación y persistencia, en *Revista de la CEPAL*, N° 11, Agosto de 1980.

16. José Bengoa, Jaime Crispi, María Elena Cruz y Cecilia Leiva: *Capitalismo y campesinado en el agro chileno*, op. cit., p. 44.

17. Eric Wolf: *Los campesinos*, Editorial Labor, Barcelona, 1975.

18. *Ibid.*, p. 97.

19. Rigoberto Rivera: *Los campesinos chilenos*, op. cit., p. 19.

20. *Ibid.*, p. 22.

21. José Bengoa: *El campesinado chileno después de la reforma agraria*, op. cit., p. 63.

22. Luz Cereceda y Lilibarría: *Comportamiento económico y racionalidad del campesino*, ICECOOP, Santiago, 1984, p. 25.

23. *Ibid.*, p. 223.

24. Eugenio Maffei: Diferenciación social en el campo y sector reformado, en GEA, Boletín de Estudios Agrarios, N°2, Santiago, Octubre-Diciembre de 1978, p. 74.

25. *Ibid.* En un artículo anterior Maffei se refiere de manera más clara a la situación de integración de los campesinos en la sociedad capitalista, y al predominio en ellos de la racionalidad instrumental: "Hoy existen campesinos subsistentes o en vías de

serlo, no por una racionalidad no capitalista y orientada al consumo familiar (modelo de economía campesina), sino que por el contrario, el campesino subsistente ha demostrado y está demostrando tener una racionalidad adecuada a las condiciones impuestas por el sistema" (Véase E. Maffei: Algunas consideraciones sobre el campesinado minifundista, la agricultura de subsistencia y el concepto de economía campesina, op. cit. pp. 12 y 13).

26. Rigoberto Rivera, op. cit., p. 23.

27. Alvaro Rojas y Juan Carlos Reyes: *Diferenciación de los productores familiares campesinos en el Chile Central*, O.C.A.C., Talca, 1987, p. 36.

28. José Bengoa: *El campesinado chileno...*, op. cit., p. 70.

29. Citada por Absalón Machado y Jorge Torres: *El sistema agroalimentario...*, op. cit. p. 267.

30. Alejandro Canales: *El agro mexicano: viejas y nuevas polémicas*, op. cit., p. 80.

31. Jorge Echenique: *Las modalidades y proyecciones de la articulación entre la agroindustria y la pequeña agricultura en Chile, s/e*, Santiago, 1993; Jorge Echenique y Nelson Rolando: *La pequeña agricultura*, op.cit., p. 21.

32. Rodrigo Alva y Enrique Mlynarz: *El contrato agroindustrial en el modelo económico de libre mercado, el caso de la leche*, GEA, Boletín N°9, Santiago, 1982, p. 9.

33. CEPAL: *Transformación productiva y relaciones agroindustriales. El caso de Chile*, Santiago, 1992, pp. 80 y 81.

34. Dadas las restricciones en el mercado que han surgido durante la última década, la producción frutícola tiende a centrarse cada vez más en aquellos empresarios que cuentan con suficientes recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura. Tal como lo señala un estudio acerca de la realidad de los productores frutícolas: "Sólo podrán permanecer en el mercado aquellos productores que tengan superficies de plantaciones adecuadas, que aumenten la productividad, que ejerzan severos controles de calidad y que se encuentren integrados a la cadena agroexportadora" (Cecilia Montero, Lovell Jarvis y Sergio Gómez: *El sector frutícola en la encrucijada: opciones para una expansión sostenida*, CIEPLAN, Apuntes N° 12, Santiago, 1992, p. 8. Véase también a C. Kay: *La cuestión agraria y el campesinado*, op. cit.).

Capítulo VII

LAS MUJERES EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS*

SANDRA PALESTRO

1964-1973: INTEGRACIÓN CONDICIONADA

Entre 1964 y 1973, la sociedad chilena vivió un progresivo desarrollo de sus formas de participación democrática y en la generación de sus instituciones, gracias al empuje de diversos actores sociales y políticos que propugnaban un sistema basado en la justicia social.

Se trataba entonces de una sociedad abierta, en movimiento, que buscaba transformaciones profundas. Las mujeres también se incorporaban a este proceso, y aunque sin explicitar su problemática específica de género, manifestaban un malestar creciente: su incorporación a la vida pública les significaba, por lo general, una sobrecarga de trabajo, que devenía en sensación de culpa al "abandonar" el hogar. Era pedirles demasiado sumar una militancia política o gremial a su ser madre-esposa-dueña de casa-trabajadora. Las mujeres aún pensaban que debían "demostrar sus capacidades" y buscar el reconocimiento social y la igualdad con el hombre en una sociedad que, aunque abierta y crecientemente democrática, distaba mucho de ser solidaria con ellas.

*Este Capítulo fue escrito sobre la base de dos textos: "La participación política de la mujer chilena entre los años 1964-1973", cuyas autoras son Edda Gaviola, Lorella Lopresti y Claudia Rojas, inédito. Y "Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990", de las autoras Edda Gaviola, Eliana Largo y Sandra Palestro, publicado en 1994.

Sin embargo, el proceso democratizador que vivía Chile, exigía una nueva participación y compromiso de parte de los distintos actores sociales. No era posible arribar a cambios profundos sin la incorporación efectiva de mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores a los proyectos de sociedad que se plantearon para nuestro país. Así, aquella mujer ideal de antaño, circunscrita al hogar, dedicada al cuidado de los hijos, iba abriendo paso a otro tipo que, sin abandonar del todo dichas características, debió integrarse al proceso social cada vez con mayor dedicación.

Esto no se reflejó en la inserción de la mujer en el ámbito laboral remunerado. Las cifras señalan que la fuerza productiva femenina representaba en 1950 un 20.06% de la población económicamente activa, en 1960 un 19.56% y en 1970 un 18.07% de la fuerza productiva total.

Esta disminución se puede explicar por el hecho de que el trabajo remunerado femenino se percibe exclusivamente como un complemento o una ayuda, para aumentar el ingreso familiar, el cual lo provee fundamentalmente el hombre. De tal forma, la mujer se integra masivamente al mundo laboral en los períodos de crisis económicas, por la vía de realizar trabajos informales y mal pagados. En el transcurso de estos años se tendió a una redistribución económica, que favoreció a los sectores más desposeídos de la sociedad; fue así como la mujer, quien no veía en su trabajo una posibilidad de mayor independencia o un desarrollo personal, se encontró sin la necesidad urgente de realizar un trabajo fuera del hogar, restándose a la fuerza productiva asalariada del país.

Del porcentaje de mujeres que se integró a un trabajo asalariado, la mitad se ocupó en la prestación de servicios, la mayoría en servicios personales; un 22% en industrias; un 18% en tiendas comerciales, y un 5% correspondió a trabajadoras independientes.

Desde el punto de vista de la "elección" laboral o pro-

fesional, como se puede observar ésta siguió girando en torno a aquellas ocupaciones que extienden su rol tradicional, descartando la intromisión en ámbitos productivos reservados exclusivamente a los varones.

En el ámbito educacional, se venía desarrollando una sostenida y creciente incorporación de las mujeres a la Enseñanza Media. Es así como en 1955 el 10.6% de los hombres y el 11.2% de mujeres, en la edad correspondiente, cursaban este nivel; en 1965 el 16.9% de los hombres y el 18.1% de las mujeres, y en 1970, aumenta a un 30.4% de hombres y a un 35% de mujeres la matrícula en Enseñanza Media.

La diferencia se presentaba en la Enseñanza Universitaria, ya que en 1950 un 2.0% de mujeres entre 20 y 24 años ingresaron a la enseñanza superior, en tanto lo hizo un 3.4% de los hombres; en 1960, el 2,9% de las mujeres y el 5.1% de los hombres, y en 1970, el 7.1% de mujeres ingresaba a la universidad, mientras lo hacía el 11.4% de los hombres.

Es decir, casi un 80% de las mujeres en edad de trabajar a cambio de un salario, eran dueñas de casa, y las que tenían posibilidades efectivas de acceder a cargos de importancia, se encontraban reducidas dentro de ese casi 3% que poseía un nivel educacional alto, salvo contadas excepciones.

La sociedad no estaba preparada para acoger a las mujeres en el mundo público. Las mujeres profesionales y las que ocuparon cargos públicos importantes en los distintos niveles del sistema, en general, tuvieron que recurrir a la contratación de otras mujeres para la mantención de sus hogares, produciéndose así una nueva forma de "liberación" que conllevó necesariamente nuevas formas de "opresión".

En relación a la lucha social, la formación cultural de la mujer le impidió, como regla general, asumir funciones de liderazgo. Oprimida desde siempre, asumiéndose ella

misma con deficiencias y sin haber sido jamás preparada para ejercer poder, difícilmente pudo llegar a destacar al interior de las organizaciones gremiales y sociales más poderosas. Sin haber sido reconocida ni valorada en su incansable trabajo del hogar, no tuvo facilidades para poder ponderar por sí sola su aporte, ni la conciencia de que podría llegar a tener mejores condiciones de vida si se organizaba y luchaba en forma colectiva.

Pero la oleada modernizadora de esta década abrió a la mujer nuevas perspectivas para su autoconocimiento. Comenzó a hablar y a discutir sobre sexualidad, y por primera vez comprendió que podía "exigir una vida sexual plena como un derecho natural". Indiscutible es el aporte que en este sentido hizo la propagación de los métodos anticonceptivos y de la planificación familiar, lo que ayudó a disponer de una mayor libertad sexual.

Los efectos de este cambio se pueden observar en que la tasa de natalidad (Nº de niños nacidos vivos por cada mil mujeres en edad reproductiva: 15 a 49 años aproximadamente), disminuyó de 5.0 en 1960, a 3.3 en 1970.

La juventud hablaba en estos años de confianza, tolerancia, libertad y mutua satisfacción sexual, en vez de respeto, abnegación y seriedad que eran los pilares de las relaciones de pareja anteriores.

Es indiscutible que alguna influencia tuvieron en nuestro medio los movimientos de liberación de la mujer, particularmente los de EE.UU., y aún cuando las mujeres chilenas apresuradamente afirmaron no ser feministas, reflejaron en sus declaraciones y aspiraciones una necesidad imperiosa de autoafirmarse y de compartir en igualdad de condiciones las distintas actividades con el hombre. La apreciación sobre la liberación de la mujer fue una simple caricatura, dirigida a la opinión pública y a las mujeres especialmente.

La mayoría, tanto de hombres como de mujeres, opi-

naban que la liberación de la mujer, o su igualdad en todos los planos de la vida social, se lograría solamente en integración con el hombre, por la vía de la persuasión y no de la ruptura. En otras palabras, si bien las mujeres asumieron que la sociedad las había relegado a una situación discriminada, la solución pasaba por la modificación de su status legal, principalmente, y en ningún caso por la redistribución de funciones en el mundo público ni en el privado.

En conclusión, la necesidad social creciente, en relación a su incorporación a las distintas áreas del mundo público, le plantearon a la mujer un desafío mayor, cual fue el afirmar una nueva posición como persona en el mundo; encontrar su identidad más allá de la imagen tradicional que la sociedad, a pesar de todo, continuó fomentando, pero que se volvió cada vez más contradictoria. Su aún tímida incursión en lo público no hizo sino acentuar sus culpabilidades y su insatisfacción por no atender debidamente a los hijos y descuidar las necesidades del hogar.

Madre, esposa y trabajadora se encontraron en conflicto permanente en la "mujer de los sesenta", conflicto que no tenía solución en una sociedad que le había asignado el mantenimiento afectivo y físico de la familia patriarcal. Socialmente se crearon canales e instrumentos para hacer efectiva su participación, pero siguió encasillada en su rol de madre y esposa. Se le fueron asignando nuevas funciones y se le abrieron nuevas posibilidades para desarrollarse como persona, siempre y cuando fuera capaz de cumplir satisfactoriamente su papel principal, que era velar por sus hijos, y en los momentos cruciales, por todos los hijos de la nación.

Las mujeres en las distintas campañas presidenciales

El rol que se le asignó a la mujer durante todo este período estuvo directamente relacionado con el hecho de

ser madre y esposa, y si bien ya nadie discutía su capacidad para ingresar a la vida laboral o pública en general, todo el planteamiento apuntó a mejorar su situación de vida dentro del hogar.

La actividad organizativa alcanzó su máxima expresión durante las coyunturas eleccionarias y el mayor despliegue de las fuerzas políticas se encontró en dichos períodos. No obstante ésta, aún dentro de los propios partidos políticos, los departamentos femeninos cobraron una vida y un sentido propios, los que en algunas oportunidades llegaron a estar en contradicción con el planteamiento oficial.

Indiscutiblemente la masa femenina electoral representaba un desafío, que era necesario enfrentar al momento de buscar la conquista del poder político. Esto llevó a que las distintas fuerzas tuvieran un denominador común en sus acciones eleccionarias, tanto izquierda como centro y derecha, realizaron tés femeninos en torno a los candidatos, actos masivos en teatros y propaganda dirigida exclusivamente a aspectos femeninos.

Desde el punto de vista de la propaganda dirigida a la mujer, en todas aparecía la valoración hacia ella en su papel de dueña de casa y madre protectora. La realización de la mujer tenía sentido en relación a otros (hijos, esposo). Ni siquiera se pensaba que ella pudiera tener anhelos y objetivos propios como persona, más aún, se consideraba normal que ella se olvidara de sí misma.

Otros elementos comunes en el discurso, e integrados como puntos fundamentales en los posibles programas de gobierno, fueron la previsión para la dueña de casa y la creación de un Ministerio que recogiera sus aspiraciones.

Si bien existen semejanzas importantes entre las distintas corrientes políticas en lo relativo al mensaje dirigido a las mujeres, un discurso más cercano al cambio se

manifestó en la elección presidencial de 1970, desde las fuerzas que apoyaban a Salvador Allende y a Radomiro Tomic, respectivamente. Este discurso planteaba que la mujer debía incorporarse plenamente a la vida productiva, que tendría reconocimiento social y económico el trabajo doméstico, y que ella era un agente importante de las transformaciones sociales que requería el país.

En dicha campaña presidencial, ante el avance de las fuerzas de izquierda y el aumento del potencial electoral de la candidatura de Salvador Allende, tanto el centro como la derecha, coincidieron en desatar lo que se ha conocido como la "Campaña del terror", dirigida a exaltar en la mujer la defensa del hogar, los hijos y la patria, del "inminente peligro comunista". Esta campaña fue determinante en el momento en que la mujer debía emitir su voto. El temor a ver alterado su mundo privado y la posibilidad de perder a los seres que le daban sentido a su vida, la llevaron a actuar en forma cauta. Salvador Allende obtuvo un 41.6% de votos de hombres y un 30.5% de votos de mujeres, en tanto los otros dos candidatos obtuvieron mayor votación de mujeres. A pesar de ello, en general, manifestó una disposición al cambio, de allí que entre Salvador Allende y Radomiro Tomic obtuvieran un 60.4% de los votos femeninos.

Campañas parlamentarias

Durante las elecciones parlamentarias del período (1965, 1969 y 1973), la mujer desempeñó un doble papel: como electora y como candidata. En mayor o menor proporción todos los partidos presentaron mujeres en sus listas, por la innegable fuerza electoral que representaban y por el propio trabajo desempeñado por estas al interior de los partidos.

Del total de inscritos en los registros electorales, casi

el 50% eran mujeres. La elección de 1965 fue un hito en la incorporación de la mujer a la vida pública. Antes de esta fecha, el parlamento contaba con cinco mujeres, después de dicha elección este número aumentó a doce en la Cámara baja y resultó elegida una en la Cámara alta, Julieta Campusano, quien fue la segunda mujer que ocupó este cargo en el Parlamento desde que las chilenas consiguieran derecho a voto.

En 1969, en la provincia de Santiago se presentaron un total de 146 candidatos hombres y sólo 20 mujeres, siendo el P.D.C. el partido que presentó la mayor cantidad, lo que en general coincidió con el mayor número de elegidas.

En la elección parlamentaria de 1973, en la cual se debía elegir 150 diputados y la mitad del Senado, es decir 25 miembros, el número de candidatos varones para este último cargo correspondió a 48, siendo sólo dos las postulantes al mismo. Es decir, los partidos políticos y los gobiernos siguieron preocupándose de las mujeres, pero más como electoras que como socias para compartir el poder.

Las políticas gubernamentales hacia la mujer

Eduardo Frei M., inmediatamente después de haber sido elegido Presidente de la República trazó líneas generales de lo que sería su política hacia la mujer. El gobierno reafirmó a ésta en su rol tradicional y en su función primordial al interior de la familia, entregándole algunas herramientas para aumentar los ingresos del hogar, pero no incentivando algún protagonismo suyo en la vida pública.

Una iniciativa del gobierno demócratacristiano fue la creación de la Oficina Nacional de la Mujer, con el fin de canalizar por su medio la problemática de la familia y, en

especial, de la mujer. Su rol careció de importancia, debido a que se priorizó el trabajo destinado a los Centros de Madres, creándose una instancia aparte: la Central Coordinadora de Centros de Madres (CEMA).

En el marco de la promoción Popular, cuyo objetivo apuntó a la "creación de organismos que permitan la integración de los diversos sectores nacionales en el proceso de desarrollo del país, en todos los niveles...", se institucionalizaron los Centros de Madres (Cemas). En ambos períodos gubernamentales, (Eduardo Frei, 1964-1970 y Salvador Allende, 1970-1973) les correspondió a las respectivas esposas de los Presidentes, en su calidad de Primera Dama, presidir estas organizaciones.

El trabajo de los Cemas se orientó hacia la capacitación de la mujer en labores como costura, tejido y cocina, actividades enmarcadas en el perfeccionamiento de su condición de madre y esposa, que reforzaba su inserción en el hogar, dejando de lado o no incentivando su incorporación al mundo laboral público.

Durante el gobierno de Salvador Allende, las "Primeras cuarenta medidas del Gobierno Popular" abordaban algunos aspectos de la vida de la mujer, su condición mayoritaria de dueña de casa, la protección de la familia, sus necesidades de salud y la alimentación de los niños y niñas, pero no consideraban a la mujer como independiente de la familia, aun cuando se proclamara su derecho al trabajo y a la participación.

La red de Centros de Madres que ya existía bajo la dirección de CEMA, pasó a ser la Coordinadora de Centros de Madres (COCEMA), elemento fundamental para la implementación de políticas hacia la mujer.

Ante la esperanza de trabajo y el impulso dado a la participación, se fueron creando miles de Cemas a lo largo de todo el país, llegando a la cifra de un millón de mujeres organizadas en ellos. Los Cemas se involucraron en la cam-

pañña nacional de vacunación contra la poliomielitis, en la campaña del medio litro de leche para cada niño y niña, en las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios y en los Comités de Navidad. También a través de ellos, las mujeres se capacitaron mediante proyectos conjuntos con los Ministerios de Educación, de Salud, de Economía, y con la Universidad Técnica del Estado (UTE) e INACAP. Un ejemplo de esto fue el convenio entre COCEMA y la UTE para formar 4.000 mujeres, entre 17 y 35 años, como Auxiliares de Párvulos, para superar la falta de personal en los Jardines Infantiles que se requería construir.

La creciente participación de las mujeres populares motivó a los representantes de la Unidad Popular (UP) a preocuparse por su educación política, en el entendido de que aún participando en acciones de gobierno, sería para la mayoría de las mujeres difícil asumir procesos tan complejos como la nacionalización del Cobre, de la Banca y el enfrentamiento de los monopolios, toda vez que estas medidas no se relacionaban directamente con sus propios intereses. Por otra parte, se quería impedir la politización partidaria de los Centros de Madres, en la perspectiva de ampliar las organizaciones sociales. Había que ganar a la mujer para el proyecto popular.

Sin embargo, a fines de 1971 se realizó una masiva movilización de mujeres de derecha: "la marcha de las carcerolas", impactando de distinto modo a todos los actores políticos. Desde el gobierno, se recalcó que el medio para canalizar los programas hacia la mujer serían los Cemas, pero dado el análisis que se hizo luego de esta ofensiva se planteó nuevos objetivos estratégicos y tácticos.

Las consideraciones estratégicas apuntaron a que para asegurar la liberación de la clase trabajadora como un todo, era fundamental incorporar a la mujer. En las consideraciones tácticas, el Gobierno Popular mostró, por lo menos en lo que llegó a planificar y a realizar, gran preocupación

por crear condiciones objetivas para la liberación de la mujer. Entre ellas se destacaron la creación de condiciones de infraestructura y servicios (jardines infantiles, lavanderías populares, etc. y un cierto grado de capacitación política). Se asumió así la necesidad del protagonismo femenino, surgido desde la base de la clase trabajadora, a la que se sumarían los sectores medios, toda vez que los programas se ampliaran también para ellas.

En el programa de la UP todos los aspectos relativos a la mujer se inscribieron en el marco del proyecto del Ministerio de la Familia. Muchos de los planes que habría de desarrollar dicho Ministerio se canalizaron a través del Consejo Nacional de Promoción Popular, llamado después Consejo de Desarrollo Social, pues el Ministerio de la Familia no alcanzó a concretarse a raíz del Golpe Militar.

Con este Ministerio, se buscaba además una transformación de la familia, a fin de hacer de esta una protagonista consciente en la "consolidación de la nueva sociedad". Por primera vez se planteaba la necesidad de reformular la familia patriarcal, transformándola en una más abierta y democrática, señalando la necesidad de redefinir los roles asignados culturalmente a hombres y mujeres.

Un instrumento necesario para avanzar en este camino fue la creación de la Secretaría Nacional de la Mujer. El decreto emanado del Presidente Allende, en septiembre de 1972, señaló como objetivo de la Secretaría "Que sin perjuicio de lo anterior, y a fin de dar una participación directa a la propia mujer en el estudio de los problemas específicos que la afectan y en la proposición de soluciones; así como para promover la coordinación de todos los organismos que de algún modo les corresponde intervenir en los referidos problemas, se hace necesario crear la Secretaría Nacional de la Mujer, como asesora del Presidente de la República".

La Secretaría coordinó la Dirección de Asistencia Social, la Oficina de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Menores y los organismos del agro que veían asuntos relativos a la mujer campesina. Se centralizaron en esta Secretaría todos los estudios sobre reformas jurídicas que permitieran a la mujer alcanzar la igualdad ante las leyes. Otra materia de preocupación en el aspecto jurídico fue recoger antecedentes en relación al aborto y al divorcio, con el fin de sacarlos de la discusión elitista y llevarlos a las bases.

El centro de operaciones se constituyó en la Oficina Nacional de la Mujer, que funcionó en el edificio Gabriela Mistral, encabezada por Marta Melo, dirigente del PS.

Es destacable el hecho de que durante el Gobierno Popular fue designada, por segunda vez en la historia, una mujer como Ministra. Recayó esta decisión en una destacada luchadora por los derechos de los trabajadores desde la CUT: Mireya Baltra, quien desempeñó el cargo de Ministra del Trabajo.

1973-1989.

EL DOLOROSO PROTAGONISMO DE LAS MUJERES

El clima creado en la etapa anterior habría de cambiar de tono y ritmo. Había ido demasiado lejos el proceso democratizador, amenazando la estabilidad y permanencia de seculares feudos morales y materiales. Era preciso restituir "el orden".

Y "el orden" lo restituyeron de golpe. O al menos eso creyeron los militares que traicionaban el mandato constitucional. En realidad, ese 11 de Septiembre de 1973 se iniciaba un largo y caótico período que cambiaría las vidas de todos en el país, a otros se las segaría. De ahí en adelante las mujeres comenzaron el duro, doloroso y fructífero proceso de aprender a volar con alas más propias.

Había mujeres por todas partes. Tal vez, situadas en distintas circunstancias, lo primero que hicieron fue compartir el estupor, preguntar una y otra vez lo que ya sabían o intuían. Pero luego, en medio de la sensación de estar solas, anuladas, indefensas, comenzó a irrumpir una fuerza capaz de superar los miedos. Esa fuerza emanaba en parte de la memoria individual y colectiva que la misma represión hacía desplegarse en todas sus dimensiones, aunque no estuvieran tan conscientes de ello. Una memoria hecha de exclusiones y rebeldías, de negaciones y autonegaciones, pero también de participación y esfuerzos por cambiar un destino supuestamente natural. Sabían, por ejemplo, de la capacidad y fuerza que podían generar cuando actuaban agrupadas. Más aún, muchas tenían una experiencia reciente en Centros de Madres, en campañas de salud, en instancias de distribución de alimentos y control de precios, o en más de una concentración callejera.

Por otra parte, la tácita y patriarcal "promesa" de un castigo menor para las mujeres por su condición de madres o de "sexo débil", pronto mostraría ser una falacia. Las mujeres supieron en carne propia que ni la maternidad, tan sagrada para ellos, contaba a la hora de exterminar al "enemigo interno". Por el contrario, el hecho de ser mujer implicaba un "tratamiento especial" basado en la condición de género, el cual apuntaba a la desintegración de la identidad femenina, como lo evidencian los estudios sobre la tortura diferenciada por sexo.

En medio de este clima resultaba absurda, aunque comprensible, la preocupación de tantos maridos por lo que pudiera sucederles a ellos a consecuencia de la acción de sus parejas. La destrucción del espacio público tradicional, con su tramado de organizaciones e instituciones, y la amenaza cierta y constante a la vida y la subsistencia, hizo concentrar dramáticamente demandas de todo tipo en el mundo "privado": vida cotidiana, hogar, pareja, fa-

milia. Todo estaba trastocado. ¿Cuántos hogares sufrieron la detención, el exilio, la muerte de alguno o varios de sus integrantes? ¿En cuántos se vivió en la práctica el cambio repentino y forzado de los roles tradicionales cuando miles y miles de jefes de hogar quedaron cesantes?

Algo hay que hacer, se dijeron muchas y no era precisamente mantenerse quietas dentro de la supuesta seguridad del hogar. Fue salir, fue buscar con las amigas, compañeras o desconocidas, fue acercarse a los múltiples lugares de detención, fue detectar los problemas más urgentes. En definitiva, ese algo se fue transformando en acción concreta, informal primero, concertada después. Así se fue abriendo un mundo de expresiones organizativas por sobre el dolor y el duelo.

Esas primeras iniciativas se irían transformando luego en un quehacer más organizado. La creación de programas de apoyo por parte de instituciones religiosas, posibilitaría en gran medida este proceso. Tanto los programas asistenciales en distintos sectores poblacionales, como el apoyo a víctimas directas de la represión y a sus familiares, facilitaron el encuentro y contacto entre mujeres.

Las primeras organizaciones que surgieron en Santiago y Valparaíso fueron: la Agrupación de Mujeres Democráticas, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Unión de Mujeres de Chile. El surgimiento de estas organizaciones de mujeres, cuyo sello fue la denuncia por el atropello a la vida, a la libertad y a la integridad física, llevó consigo la manifestación pública en teatros, plazas y calles, ya fuera en marchas, huelgas de hambre o mitines. La defensa de los Derechos Humanos fue el primer llamado y seguiría siéndolo durante los 17 años de dictadura militar, incluso hasta hoy.

Entre 1977 y 1982, empiezan a configurarse más nítidamente otras vertientes del movimiento de mujeres. Desde los partidos políticos, los sindicatos, las instancias reli-

giosas, los grupos de "pobladoras" o de profesionales, entre otros, se constituían grupos y organizaciones, las que, movidas por el común intento de luchar contra la dictadura, se irían expresando, unas primero, otras después, desde lo que les es más propio, su condición de mujer.

En mayo de 1983, sonaron los primeros cacerolazos en todo Santiago y en las principales ciudades del país. Comenzaba el tiempo de las Protestas. Mujeres y jóvenes fueron los grandes solistas de esa orquesta. Pronto comenzaría a hablarse de los nuevos movimientos sociales en circuitos políticos y académicos, mientras en la práctica las mujeres iban creando nuevas y más amplias movilizaciones, y gestaban al mismo tiempo una diversidad de articulaciones, que dejaban al descubierto que su vocación unitaria durante esos años fue siempre más allá de "lo posible". Y lo posible eran los referentes políticos nacionales de la época.

La coordinación y acción conjunta de una serie de organizaciones de mujeres les reportaba una capacidad de convocatoria insospechada y una creatividad que posibilitaba que ninguna movilización fuera igual a la anterior. Además, nuevas organizaciones de mujeres se iban sumando a la realización de ellas, lo que fue particularmente notorio en la conmemoración de cada 8 de marzo.

La irrupción del Movimiento Feminista ese mismo año '83, daría otra dimensión a este movimiento. Poco a poco, y no exento de conflictos, fue resignificando el sentido de la democracia; a partir de entonces, ninguna organización o mujer del movimiento volvería a ser la misma. Cada una, en mayor o menor medida, fue remecida por esa fuerza que hablaba de profundas y arraigadas rebeldías y que las conectaba con sus propias historias fragmentadas. ¿Especificidad de género?, ¿autonomía?, ¿relaciones con partidos políticos?, ¿problemas secundarios?, ¿nuevos liderazgos?, ¿poder?, ¿identidad? Preguntas como

estas empezaron a surgir, pero el activismo desatado no les permitía profundizar en la reflexión colectiva, y aunque discutían, debatían, peleaban y desconfiaban, al final igual se reunían, convocaban y estaban juntas en la calle. Aprendían a conocerse.

Entre 1983 y 1987 el movimiento de mujeres alcanzó un gran poder de convocatoria, coordinación y organización a nivel nacional. Su presencia pública fue innegable. Con ella contribuyeron a sensibilizar en lo que a la lucha antidictatorial se refiere, pero también generaron la percepción de que algo más ocurría en el mundo de las mujeres.

Sabían que al construir esa presencia y protagonismo se habían transformado en actrices sociales desde un movimiento con un fuerte sentido de pertenencia; habían generado los encuentros y debates necesarios para avanzar en la construcción de una identidad social, como lo han dicho tantas, desde ser "la mujer de..." hasta transformarse en un "nosotras", y de reconocerse sujetas de la historia desde un "yo mujer".

Sin embargo, este "nosotras", que estaba haciéndose, resultó ser todavía una identidad precaria al momento de enfrentar las diferencias y los conflictos que derivaban de la lógica partidista que se fue imponiendo, lo que se hizo más evidente a medida que el itinerario constitucional de la dictadura comenzaba a cumplirse.

La convocatoria a plebiscito para octubre de 1988 introdujo un nuevo elemento al ya confuso escenario político. Los partidos opositores reunidos en la Alianza Democrática y el Bloque Socialista, llamaron a inscribirse en los Registros Electorales y a participar en dicho plebiscito, en el cual se votaría SI por la continuidad del régimen militar o NO en rechazo de éste. Si ganaba la última opción, Pinochet gobernaría un año más y se convocaría a elecciones para 1989, como efectivamente sucedió. Por su parte, la orgánica socialista que estaba en el Movimiento Demo-

crático Popular se unió a ese llamado, provocando fuertes fricciones dentro de ese conglomerado y su posterior ruptura. En este contexto, los grandes ausentes en la decisión fueron justamente los innumerables grupos y organizaciones sociales que habían hecho posible y sostenido la movilización durante años, con las mujeres y los jóvenes como principales protagonistas.

En el marco del debate al interior de la oposición, sobre si acoger o no el llamado a plebiscito, Mujeres por la Vida, referente que agrupaba a mujeres de los distintos partidos políticos e independientes, lanzó en Santiago la campaña "No me olvides". Este fue un gran aporte al NO, pues le dio contenido a quienes habían sufrido más duramente esos años. El 29 de agosto de 1988 se reunieron más de mil mujeres de las diversas organizaciones sociales y partidos políticos en las principales arterias peatonales del centro de Santiago. Esta acción fue otra muestra de la creatividad desplegada en el movimiento de mujeres, la que lograba contener a todas las organizaciones, independientemente de su adscripción o no al plebiscito, con lo cual ese conflicto se hacía secundario.

Finalmente, la mayoría terminó trabajando en la campaña del NO, y el 5 de octubre, con su voto, el pueblo chileno rechazó definitivamente a la dictadura militar y a Pinochet como su conductor. Al día siguiente, pese al llamado de los dirigentes de los partidos políticos de oposición a permanecer en los hogares, miles y miles de personas desbordaron las calles festejando el triunfo en todo el país. Comenzaba una nueva etapa en que se cuestionaría el rol del movimiento de mujeres.

A fines de 1988, existía la conciencia en las mujeres de que era necesario estructurar sus "demandas a la democracia", de manera que reflejaran el trabajo, el conocimiento y el saber acumulado durante tantos años, demandas que ya se habían venido expresando por sectores o

vertientes del movimiento. Sin embargo, esto no se expresó en una estrategia común de todo el movimiento: un sector conformó la Coordinación de organizaciones Sociales de Mujeres, en Santiago, en la perspectiva, aún débilmente definida, de que actuando más allá de los partidos y el Estado, radicaría su fuerza en la organización autónoma, y así mantendría el espacio ganado durante la dictadura. Otro sector, formado principalmente por mujeres militantes de partidos políticos, y también por otras a título personal, invitó a constituir la Concertación Nacional de Mujeres por la Democracia, con el propósito inicial de abrir espacios a las mujeres en la Concertación de Partidos por la Democracia y, por ende, al interior del futuro gobierno.

Ambas estrategias se podrían haber enriquecido mutuamente de no haber prevalecido la lógica partidista, que hizo que las propias mujeres ligadas a la Concertación estuvieran dispuestas a excluir de este nuevo referente, a aquellas mujeres que habiendo participado activamente en el movimiento, estaban vinculadas al Partido Comunista o al MIR.

Sin embargo, el Día Internacional de la Mujer de 1989, el último en dictadura, hizo posible que las mujeres se unieran de nuevo, pese a estas graves divergencias que dividieron al movimiento. Era la culminación de un proceso, y un símbolo para los nuevos desafíos.

La transición democrática

Una vez reinstalada la clase política en la transición democrática, los actores únicos y legítimos, según su concepción, eran los partidos políticos. Así, los movimientos sociales en tanto expresión organizada de la sociedad civil, se tornaron molestos e innecesarios. Los hasta ayer alentados por la prensa opositora, aplaudidos en las calles, con tribuna antidictatorial, ahora no eran noticia, no se senta-

ban en la mesa de las decisiones y, peor aún, se les pedía postergar sus necesidades para un futuro planificado por esa misma clase política que los ignoraba. Lo público así definido se volvió más estrecho y excluyente que antes, empobreciendo el “hacer política” e instalando una barrera casi impenetrable para la sociedad civil organizada.

Para comprender mejor las posiciones que a partir de allí se fueron generando, se verán, a modo de ejemplo, cómo lo vivieron mujeres cercanas a las distintas instancias de articulación, lo que permitirá mostrar también cómo la ecuación exclusión/participación en relación a los nuevos y no tan nuevos espacios instituidos de poder, irán marcando los distintos ritmos del quehacer del movimiento.

1. Organizaciones de mujeres de una zona del Área Metropolitana, coordinadas en un amplio colectivo, resolvieron hacer su aporte en uno de los masivos actos con que se inauguraba la transición, aporte que consistiría en dar a conocer cómo habían vivido la experiencia de llegar a este punto en la historia. Para ello, crearon colectivamente un sketch, en tres actos, sin palabras:

Primer acto:

Escenario oscuro, vacío, ambiente lóbrego. Al fondo, a la izquierda, dos o tres puertas de mediaguas o piezas de madera. Al otro extremo, a la derecha, la puerta de una iglesia. Mujeres de negro deambulan por el escenario, van de un lado a otro, buscan, tratan de esconderse, algunas lloran. Una entra rápidamente a una de las pequeñas casas. Se escuchan gritos. Es el marido que la agrede. Otra se refugia en la iglesia. De trasfondo, sonido de balas.

Segundo acto:

Escenario colorido, música vibrante. Mujeres con lienzos, pancartas, tirando volantes, algunas corriendo, otras discursando, representan una movilización. En lienzos y pancartas hay consignas, demandas y nombres de sus or-

ganizaciones: ollas comunes, por los derechos humanos, sindicalistas, feministas, pobladoras en general.

Tercer acto:

Escenario vacío. Al fondo, varias hileras de mujeres en silencio observan de frente al público. Algunas de ellas traen una mesa y la ubican al centro del escenario. Otras acercan sillas que ordenan a su alrededor. Otras traen una bandera nacional y cubren con ella la mesa, a modo de mantel. Otras traen copas que dejan sobre la mesa. Todas van ubicándose de nuevo al fondo, junto a las demás mujeres. Entran señores vestidos de terno y toman ubicación alrededor de la mesa. Con gesto de brindis, copa en alto y música de canción nacional, termina el sketch.

2. Por su parte, la Coordinación de Organizaciones de Mujeres de Santiago, conformada principalmente por mujeres de organizaciones de base, tanto independientes como militantes de partidos, y también por integrantes del Movimiento Feminista, inició la campaña "Soy mujer... Tengo Derechos", con el propósito de mostrar y compartir una mirada crítica a su realidad, campaña que según ellas representó "uno de los hitos relevantes de un proceso de desarrollo y crecimiento de muchas organizaciones sociales de mujeres y de su movimiento en los últimos años". El énfasis estuvo puesto en las percepciones de las mujeres de sectores populares desde su aspiración básica de ser valoradas como personas. Dicha campaña fue realizada durante 1989 a través de 48 jornadas que se realizaron en diferentes sectores de Santiago, ciudades y pueblos cercanos, participando cerca de 1.700 mujeres, de las cuales 332 eran campesinas organizadas a lo largo del país.

Con el tiempo, la Coordinación de Organizaciones Sociales de Mujeres se irá diluyendo.

3. Por otro lado, distinto desafío vivían las mujeres que se integraron a la Concertación de Mujeres por la De-

mocracia: elaborar para el nuevo gobierno el programa de la mujer, lo que lograron después de un arduo trabajo. Casi un centenar de mujeres profesionales, militantes de partidos de la Concertación, algunas independientes, varias de ellas feministas, recogieron antecedentes de su propia experiencia laboral y del conocimiento acumulado por el movimiento durante el período dictatorial, para preparar la propuesta final, recomendaciones incluidas, y hacer entrega de este material a la Comisión Programa de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Lo expuesto refleja cómo se fueron expresando las tendencias propias de un movimiento de mujeres heterogéneo y diverso, cuando se ponen en juego las opciones partidarias por sobre los intereses del movimiento.

Paralelamente, se pudo observar también que lo sentido por mujeres de otros sectores o vertientes del movimiento, el hecho de haber sido y no sentirse ya parte activa y fundamental en este proceso de reconstrucción democrática, estaba teñido por un diagnóstico no muy ajustado a la realidad social y cultural del país, lo que generó expectativas que poco o nada tenían que ver con dicha realidad. O para decirlo en otras palabras, habría una suerte de confusión o no correspondencia entre legítimas aspiraciones (lo que se desea), y expectativas (lo que se espera), puesto que el término formal de la dictadura, indispensable para poder vivir y no sólo sobrevivir, no significaba el término de la estructura patriarcal. A lo más reponer "modernizadas" las mismas maneras de viejo cuño.

Términos de uso corriente hoy como "la discriminación de la mujer", "la problemática de la mujer", y más recientemente "la perspectiva de género", hablan no sólo de una sensibilidad al respecto sino también de una necesidad o deseo de estar a tono con los tiempos, y no necesariamente del cuestionamiento profundo que tales términos conllevan. De hecho, la anhelada "modernidad" en

nuestro país tiene más que ver con la cuestión de la globalización de la economía, que con cambios significativos en las orientaciones valóricas de una sociedad eminentemente conservadora como esta.

De vuelta en el poder, la clase política seccionó e incorporó al discurso oficial sólo determinados aspectos de las aspiraciones de los movimientos, en tanto no pusieran en tela de juicio el funcionamiento del orden establecido. Un orden sobre la base de consensos con quienes mantuvieron intacto el poder para controlar la economía, las vías de expresión ideológica y la fuerza militar.

Esto tuvo implicaciones en la vida del movimiento y en la vida cotidiana: se limitó su capacidad propositiva a un mero hecho reivindicativo, estableciendo que el problema es particular y no global.

Así, el movimiento de mujeres, que no pudo diseñar colectivamente mecanismos para acordar estrategias comunes, quedó acorralado: o seguía profundizando y manifestando su potencial transformador, en contra de la necesaria mansedumbre para la transición, o entregaba algunos "temas sueltos" a la recuperada democracia, para que fueran tomados en cuenta en la medida de "lo posible".

EN SÍNTESIS, A MODO DE REFLEXIÓN

El lapso que corre entre 1964 y 1973 marcó un hito en el desarrollo democrático de Chile. En él, la mujer se vio enfrentada a una dualidad de roles difícil de superar. Por una parte, su función de madre y esposa, y por otra, sus papeles como trabajadora y como dirigente política o líder sindical.

Esta dualidad de roles, contradictorios por cuanto la integración de la mujer a los distintos ámbitos de la vida pública no va acompañada de una redistribución de fun-

ciones en el mundo privado, no podía ser resuelta por las mujeres de la década del 60, pues a ellas se les asignó, por sobre todas las cosas, la mantención de la unidad básica de la sociedad: la familia patriarcal.

En este período se da una apertura a las expectativas de desarrollo para la mujer. Desea incorporarse al mundo laboral, mejorar sus niveles educacionales, participar de los procesos de cambio que se ponen en marcha en el país, y también asumir un rol político. No obstante, si no hay cambio en la distribución de funciones tampoco el país está preparado para asumir la incorporación plena de la mujer, de allí que se extendiera con fuerza la idea de exigir la ley de Jardines Infantiles o que hubiera un proyecto para la elaboración de alimentos preparados. En definitiva, la posibilidad de ampliar la infraestructura, de manera que permitiera a la mujer trabajadora disminuir el peso de la doble o hasta triple jornada de trabajo, si además se compromete políticamente con una organización.

Si bien resulta complejo realizar una comparación entre un gobierno que planificó políticas y logró llevar muchas de ellas a la práctica, como fue el caso del gobierno DC, con un gobierno que se quedó en la fase de planeamiento, como fue el Gobierno Popular, es posible constatar una línea de continuidad, que resulta evidente en el terreno del planteamiento concreto hacia la mujer.

La necesidad de incorporar a las mujeres al desarrollo histórico, darle cabida dentro del Estado, fue indudablemente una de las características más notables del período. Con matices y diferentes niveles de profundización, se asume que la presencia organizada de la mujer es ya un imperativo que no admite demora. Para ello, el Estado debe asumir la función primordial de dotarla de los instrumentos efectivos que permitan su inserción en el mundo público. En este sentido, se impulsan los Cemas como los organismos base para desarrollar políticas.

Durante el gobierno de Frei, englobándolas en la Promoción Popular, se colocó a la mujer dentro de la gran masa de marginados que no encontraban su lugar en la sociedad, y al igual que los pobladores, el gobierno busca insertarlas por medio de mecanismos de asistencia, que no asumían el problema de fondo, cual era un sistema que impedía que todos tuvieran acceso a un trabajo digno y a gozar de las mismas oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. La mujer en este contexto, debe mejorar su rendimiento dentro del hogar, aprovechando al máximo los escasos recursos. El Estado, por su parte, intenta suplir sus necesidades básicas por la vía de procurar una mantención mínima para la mujer, por medio de los Centros de Madres, haciéndolos dependientes.

El Gobierno Popular, posteriormente, se planteó el protagonismo de la mujer trabajadora para la concreción de su proyecto. En este sentido, el Estado también asumió la tarea de capacitar, pero buscando la participación consciente de la mujer, es decir, comprometida con el cambio social. Indiscutiblemente, esto suponía un trabajo de largo aliento que no abordó con el realismo suficiente, al no dimensionar la influencia que ejercerían los grupos opositores en las mujeres, en el campo de sus intereses inmediatos. No se encontraron las respuestas concretas y eficientes para enfrentar la campaña del terror, el desabastecimiento, las colas, en definitiva, todos aquellos elementos que fueron la base de la política desestabilizadora desatada por la derecha y el centro político.

La labor destinada esencialmente a las mujeres de la clase popular, desestimó la influencia que podrían ejercer las mujeres de los sectores medios de la sociedad, y el rol que jugarían en un contexto de inestabilidad.

Desde la perspectiva social, los Centros de Madres fueron de una u otra forma, el germen de un movimiento de gran masividad y de carácter popular, que no se logró

consolidar. Es indiscutible que los Centros de Madres contenían un potencial importante, pero que sólo era un primer peldaño. Faltó madurar un pensamiento en torno a las condicionantes objetivas y subjetivas que han rodeado la participación de las mujeres, y que han obstaculizado su incorporación plena a la vida pública. Sin este pensamiento y su práctica consecuente, cualquier intento de integración consciente de las mujeres, no pasará de ser un acto voluntarista y extremadamente difícil.

Durante la dictadura militar, esta misma experiencia organizativa previa sería el germen de las nuevas agrupaciones, sin embargo, posteriormente surgieron nuevas formas organizacionales, distintas a los modelos tradicionales. Un mayor grado de informalidad y cuestionamiento de las jerarquías facilitó la creciente participación de las mujeres. Por ejemplo, el funcionamiento en colectivos y talleres donde cada una iría comprobando que su aporte era indispensable. Así, la pertenencia a un grupo se dio más por un "querer ser" que por un "deber ser", más propio éste de la militancia partidaria, siendo la solidaridad, la colaboración y el respeto por la diversidad.

Estas formas se tradujeron en maneras similares al momento de coordinarse para acciones conjuntas. El funcionamiento era menos rígido, las organizaciones no se unían desde las jerarquías y se fueron experimentando relaciones horizontales y democráticas.

La diversidad fue una virtud del movimiento que permitió aprehender en toda su complejidad la realidad social. Pero fue un defecto cuando se transformó en diferencias políticas profundas, que no se explicitaron, y que llevó a algunas a arrogarse la voz de todas.

Finalmente, la autonomía se fue construyendo en el hacer cotidiano a partir de una creciente conciencia individual y colectiva. Las mujeres siempre estuvieron bajo la dependencia de otros: padre, marido, Iglesia, Estado, par-

tidos. Por tanto, transformarse en personas con capacidad para hacer el propio destino, recorrer el proceso de reapropiación de sí misma, es definitorio a la hora de acceder a un estado de independencia y de ejercer la libertad. Proceso que con mayor o menor intensidad vivió cada una de las integrantes del movimiento.

En estos procesos, las mujeres, en general, fueron tomando conciencia de su fuerza y capacidades, pero con distintos horizontes. Un segmento comenzó a mirar críticamente a un sistema que niega las diferencias y que las niega como productoras de pensamiento y propuestas de cambios políticos profundos.

Otro segmento, mayoritario en adhesiones a su discurso, apostó a ganar espacios en la vida pública. Es decir, igualarse con los hombres en el poder, para compartirlo.

Pero la apuesta de estas mujeres resultó como la metáfora platónica del pharmakon. Pharmakon en griego clásico significa, al mismo tiempo, remedio y veneno. Algunas mujeres ganaron espacios entre esa minoría de iguales, una minoría de propietarios, blancos, adultos, hombres, que excluye y domina a todos los que le son diferentes, es decir, a los pobres, a otras etnias, a los jóvenes y, cómo verlo, a la inmensa mayoría de las mujeres.

BIBLIOGRAFÍA

- Centro de Estudios de la Mujer, *Mundo de mujer. Continuidad y cambio*. Ediciones CEM, Santiago, Chile, 1988.
- Gaviola, Edda; Lopresti, Lorella y Rojas, Claudia, *La participación política de la mujer chilena entre los años 1964-1973*, inédito.
- Gaviola, Edda; Largo, Eliana y Palestro, Sandra, *Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990*. Santiago, Chile, 1994.

Valdés, Teresa y Weinstein, Marisa, *Mujeres que sueñan. Las organizaciones de pobladoras en Chile: 1973-1989*. Ediciones FLACSO, Santiago, Chile, 1993.

RASGOS HISTÓRICOS DEL MOVIMIENTO DE POBLADORES

VERÓNICA SALAS

La vida de los trabajadores chilenos ha estado marcada por un constante desplazamiento en busca de las nuevas vetas de trabajo. Se trate del salitre, las fábricas, la fruta o los bosques, sumado a las peculiaridades de nuestra "loca geografía", ellos sufren desarraigos, soledades, dificultades extremas en la vida de sus familias, inestabilidad para los hijos... Como ejemplo, podemos ver lo que sucedió con la población de Iquique entre los años 1885 y 1995.¹

Censos	1875	1885	1895	1907	1920
Iquique	9.222	15.391	33.031	40.171	37.421
Copiapó	11.432	9.816	9.301	10.287	9.834
Santiago	129.807	189.332	256.403	332.724	507.296

Censos	1930	1940	1952	1960
Iquique	40.458	38.090	39.576	50.655
Copiapó	10.747	15.693	19.535	39.942
Santiago	712.533	952.075	1.350.409	1.907.378

Con el crecimiento de las ciudades se va gestando una gran demanda de viviendas por parte del sector asalariado. Así por ejemplo, en Iquique, en la época del salitre,

de 1885 a 1895, su población aumentó en más de un 100%, del cual el 60% eran mineros, que debían arrendar a precios especulativos.²

Las familias comienzan a organizarse y ya en el año 1914 se forma la Liga de Arrendatarios. Posteriormente en 1919, se crea la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional que se consolida en el año 1922, a raíz de la lucha contra las alzas de los arriendos. En ese momento también se crea el Comité pro Abaratamiento e Higienización de las Habitaciones, dinamizado por la Unión Femenina y desde allí se impulsa una "campana contra los principales propietarios de los conventillos. Esta incluye un pliego correspondiente a 104 conventillos del Arzobispado de Santiago"³ que, al parecer, también usufructuaba de la Renta Urbana.

A fines de Mayo de 1922, más de 300 conventillos estaban en huelga de no pago de arriendos, pero este ejemplo que fue reproducido en Valparaíso, Valdivia y Osorno, desgraciadamente no tuvo éxito. Sin embargo "el 13 de Febrero de 1925 los arrendatarios inician nuevamente una huelga de no pago en protesta por el alza de sus cánones, a lo largo de todo el país"⁴.

La unidad lograda entre la Liga de Arrendatarios y la Sociedad de Arrendatarios de la Defensa Mutua fortalece a sus integrantes y éstos al fragor de la lucha, realizan mítines simultáneos de 80.000 y 30.000 personas, en Santiago y Valparaíso respectivamente.

"La huelga dura seis meses y finalmente obliga al gobierno a dictar el Decreto ley No 261 que rebajó en un 50% los alquileres de las insalubres viviendas y a crear los Tribunales de Vivienda. Este mismo año, durante el gobierno de Alessandri se dicta la primera ley de Arrendamientos".⁵

Posteriormente el movimiento comienza a decaer y pierde su autonomía social, en el momento en que la Liga

de Arrendatarios subordina su actividad a la política partidista.

Acercamiento entre pobladores y partidos políticos

A medida en que la migración hacia Santiago aumenta, se van agudizando las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que viven los sectores populares.

Los partidos políticos populares no pueden permanecer insensibles a esta situación y ya por el año 1946, comienzan a incentivar la invasión de terrenos. Las familias desplazadas de los conventillos, al no contar con un salario que les permita arrendar un lugar más digno donde vivir, comienzan a ocupar terrenos, siendo el primero de ellos el Zanjón de la Aguada.

Estas primeras iniciativas de toma, muestran tan evidentemente la situación desesperada de sus protagonistas que despiertan una cierta compasión de las autoridades locales, las que lenta y burocráticamente acceden a la entrega de servicios. En cuanto a las viviendas, son los pobladores los que resuelven el problema. Sin embargo la totalidad del proceso es incentivada, acompañada y apoyada por la acción política de partidos políticos populares.

NÚMERO DE PERSONAS EN VIVIENDAS DETERIORADAS PROVISIONALES EN EL GRAN SANTIAGO⁶.

	Conventillos	Callampas y campamentos	Poblaciones	Viviendas	
1952	Conventillos y asimilados	Ocupantes ilegales de sitios	Viviendas insalubres (adquirentes de sitios)	Viviendas población semisalubres	Total
	350.000	75.000	150.000	250.000	1.200.000
1966	Conventillos y asimilados	Callampas y mejoras	Poblaciones suburbanas y planificadas		Población total
	76.849	201.217	366.254		2.498.100
1970	Conventillos	Ranchos, chozas, rucas, mejoras	Viviendas semipermanentes	Viviendas semisalubres	Población total
	64.660	346.380	332.040	643.632	2.587.700

Como el tiempo sigue pasando y los gobiernos no dan una respuesta efectiva a las necesidades de vivienda, "la toma de terrenos" se consolida progresivamente como la forma de solución más expedita implementada por el emergente movimiento de pobladores.

La situación habitacional de las familias se hace cada vez más dramática, "en el año 1960 el déficit alcanzó a 406.000 viviendas"⁷. Es decir, se calcula que en ese momento, en el país había dos millones de personas "sin casa".

El gobierno de Frei

El gobierno de Eduardo Frei elegido en 1964, elabora un proyecto populista de viviendas y en el marco de una

democracia formal, se propone llevar adelante un vasto plan de promoción social de los sectores populares.

En ese contexto se crea el Plan de Ahorro Popular (PAP) como sistema de canalización de los ahorros familiares. Este opera a través de mecanismos individuales que son el único modo de obtener un sitio o vivienda. Cada familia debe comprar cuotas y con ellas puede optar a un sitio semi-urbanizado, a una vivienda en extensión o una vivienda en altura (deptos). En la práctica esto significa que las familias más numerosas son las que pueden ahorrar menos dinero para comprar cuotas y aunque son las que necesitan más espacio, deben contentarse con las viviendas más baratas.

En definitiva se imponen 2 formas de solución, dependiendo del número de cuotas pagadas: la vivienda en extensión y la adjudicación de un sitio. La primera está sólo al alcance de los sectores medios y la última, conocida como "operación sitio", se constituye en la columna vertebral de los sectores populares. A los pobladores se les entrega sólo un sitio con el dibujo "tizado" donde tienen que construir su casa, por eso pasa a llamarse "operación tiza".

"El Estado financia la construcción de viviendas populares, sin embargo son los empresarios privados de la construcción los que tienen la opción, en último término, de presentarse a las propuestas públicas y asumir la responsabilidad de la construcción de las viviendas"⁸.

Los empresarios dan prioridad a las viviendas más caras que les reportan mayores ganancias y priorizan presentándose a ese tipo de propuestas, mientras la mayoría de los pobladores queda en estado de espera hasta que les llegue su turno... Esto explica por qué al finalizar el gobierno DC hay un superhábit de viviendas sin vender para los sectores medios y altos y sin embargo son numerosas las familias que después de haber pagado sus cuotas, aún no tienen su vivienda.

"Se realizaron 75.557 'operaciones sitio' las que comparadas con las 52.540 viviendas definitivas realizadas por el sector público, representaron el 59% de las soluciones habitacionales ofrecidas por el gobierno de Frei⁹."

De este modo se construyen poblaciones en vastos sectores de la periferia de Santiago. Una muestra de ello es el sector sur-poniente donde "surgen las poblaciones "José María Caro", San Gregorio", "Lo Valledor norte y sur", "Lo Ferrer" "Robert Kennedy", "4 de Setiembre", "Santa Olga"... situadas una junto a la otra. En su conjunto, este sector llega a contar con 200.000 pobladores"¹⁰ que por sus características y por su ubicación en la ciudad, forman parte del nuevo mundo al que muchos dieron el nombre de "marginal", concepto que pasa a constituir una teoría que está a la base de una larga polémica.

Estos grandes conglomerados representan un desafío para Frei y su gobierno. El agrupamiento de miles de familias con innumerables necesidades no resueltas (viviendas a medio construir, dificultad de acceso a la salud, a la educación, bajos salarios, etc.) acarrea un peligro de desestabilización que es necesario prevenir. En ese contexto el gobierno tiene contemplado el programa de Promoción Popular funcional a sus necesidades.

"Es así como mediante la ley No 16.880, aprobada por la totalidad del parlamento (1968), durante el gobierno de Frei se crean 3.487 Juntas de Vecinos. Estos organismos de base territorial agrupan a los habitantes de un barrio, población o aldea rural o urbana, con la finalidad de promover el mejoramiento urbanístico y el equipamiento comunitario de la localidad. Posteriormente ellas se constituyen en bastiones del reformismo democrata-cristiano en el seno del pueblo"¹¹, al aceptar enfrentar estos problemas como una cuestión técnico-asistencial, es decir buscando solucionar sus problemas a un nivel

puramente material. La conducción entregada a los pobladores apunta a que estas organizaciones sean instancias que tienen incidencia sólo dentro del perímetro en que están ubicadas, sin tener ningún vínculo con las organizaciones obreras.

Las Juntas de Vecinos concebidas en una perspectiva que delimita los problemas cotidianos a una dimensión "técnica", refuerzan el rol tradicional que ha tenido el hombre en nuestra sociedad. Después es necesario preocuparse de las mujeres porque cuantitativamente tienen una importancia considerable, entonces se crean los Centros de Madres que ejercen un control sobre ellas y a la vez consolidan y prolongan su rol de madres, esposas y amas de casa, por medio de una profundización del conocimiento de actividades "propias de la mujer" como son la cocina, los tejidos, las costuras y otros similares. Funcionan bajo la supervisión de damas principalmente demócrata cristianas que entregan formación a pobladoras.

Junto a las dos anteriores y en la misma línea, se crea un tercer tipo de organización, los Clubes Deportivos destinados especialmente a los jóvenes. Todas de acuerdo a lo que indica el proyecto de ley, buscan fomentar la solidaridad y el desarrollo humano de los pobladores. Pero en la práctica se produce una atomización de los pobladores, en tanto estas organizaciones dividen los espacios y delimitan roles que separan a hombres, mujeres y jóvenes.

El período de la democracia cristiana marca una nueva etapa en la constitución del movimiento de pobladores, pues se constituyen grandes conglomerados que por su composición heterogénea y su articulación con el conjunto de las luchas sociales, dan lugar a una acción que poco a poco se va dinamizando y politizando.

COMPOSICIÓN SOCIAL DE 11 POBLACIONES DE SANTIAGO 1968 Y 1969

Población	1969											1968						Promedios
	1	2	3	4		6	7	8		10	11	Hermida de La		1-5	6-11			
				Villa 4 Septiembre	Robert Kennedy y			Sta. Olga Rodríguez	Manuel Rodríguez			Lo Ferrer	Sta. Mónica			La Faena	Victoria Norte	
Grupos	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Lumpen	18	8,5	8	8,5	45	37	25	25	25	33	17	17	18	26,5				
Proletariado en crisis	58	48	48	35	18	33	38	45,5	35,5	49,5	22,5	41	36,5					
Proletariado	14	21	31	39,5	25	13	20	20,5	23	23	34	26	21,5					
Pequeña burguesía y empleados	9	23	13	12	12	17	17	9	8,5	11	27	15	15,5					
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Los pobladores y la construcción de una alternativa propia

Los pobladores al dejar de habitar en su antigua "callampa" o en el "conventillo", vivir en un sitio propio y tener una casa (por insalubre que sea) adquieren un esbozo de dignidad que crece al establecer nuevas formas de relación con los vecinos, autoridades, instituciones y al abrir caminos propios para ir mejorando condiciones de vida.

Esta nueva dinámica, estimulada por la composición mayoritariamente obrera, hace que los trabajadores establezcan la relación que existe entre las contradicciones de la realidad urbana y las que ellos experimentan en la producción. "El deterioro del nivel de vida causado en esos mismos obreros por la crisis de los sectores tradicionales, aumentó su presión sobre la demanda de servicios colectivos en torno a la cual habían sido organizados"¹².

La creación de organizaciones de base asistenciales con personalidad jurídica pública ("3.487 Juntas de Vecinos, 9.000 Centros de Madres en 1970"¹³) muestra la capacidad potencial de constituir órganos de gobierno local y establecer un paralelo con el poder municipal. Atraen a los partidos de izquierda quienes las apoyan y desvinculan legalmente del proyecto demócrata cristiano. Esta experiencia pone de manifiesto la forma en que "la coyuntura económica y la coyuntura política quebraron el proyecto populista y transformaron una vasta maniobra de integración, en una dinámica de movimiento social"¹⁴.

La urgencia de contar con un espacio para vivir y las dificultades para lograrlo a través de los canales institucionales, lleva adelante el proceso de las "tomas".

TOMAS DE TERRENOS URBANOS¹⁵.

	1967	1968	1969	1970	1971 (6 meses)
Santiago	13	4	35	103	
Conjunto del país	?	8	23	220	175

El movimiento de pobladores que nace a partir de una búsqueda de mejoramiento de sus condiciones de vida, específicamente en lo que se refiere a vivienda y equipamiento, se define por esta contradicción, al decir de algunos analistas "estructuralmente secundaria", adquiere una dinámica propia que lo lleva a constituirse en el actor central de las nuevas coyunturas políticas que se van viviendo en el país. En su interior se agrupa "una vasta red de organizaciones de base territorial que reúnen a 800.000 chilenos en el año 1972, es decir más que todos los sindicalizados urbanos y rurales de la esfera productiva"¹⁶.

"La cuestión urbana pasa a convertirse en uno de los ejes de la lucha social en Santiago, en el período previo a la elección presidencial de 1970, incluso a un nivel superior del que ocupó en general, la lucha obrera en las fábricas. La explicación de esta aparente paradoja, proviene de la convergencia táctica de las diferentes corrientes políticas para hacer de esta contradicción un tema central, aún por razones esencialmente distintas. Ante las próximas elecciones de 1970, la democracia cristiana necesitaba plantear un objetivo que fuera al mismo tiempo popular, movilizador y policlasista. La unidad popular también estaba interesada en el desarrollo de una reivindicación que no pusiera directamente en cuestión el orden capitalista. Para el Mir se trata de una cuestión táctica, una vía de penetración en los sectores obreros y la posibilidad de un enfrentamiento violento con el sistema"¹⁷.

En los años 70 "se establece que el movimiento de pobladores surge de la fusión de tres elementos:

- una fuerte reivindicación en torno a la vivienda y el consumo colectivo en general;
- la pertenencia a una fracción del proletariado inserta, en general, en sectores en crisis o de escasa generación de ingreso;
- la intervención de coyunturas y líneas políticas, fundamentalmente repartidas en tres tendencias que, nombraremos como vinculadas a la unidad popular, la izquierda revolucionaria y la democracia cristiana"¹⁸.

La experiencia de "tomas" realizada por miles de pobladores que logran una solución habitacional, unida a la constitución de nuevos espacios territoriales de trabajo colectivo (exigidos para el equipamiento de sus campamentos y poblaciones) y a la interacción con los dirigentes políticos, van cambiando progresivamente el carácter del movimiento de pobladores.

La transformación del movimiento de pobladores en un agente político directo y la transformación de las "callampas" en "campamentos" es una verdadera transformación social y política.

"A principios del año 1971, en el gran Santiago, según un censo provisorio, se encuentran viviendo en 312 campamentos alrededor de 55.000 familias, o sea el 10% de su población"¹⁹ En Mayo de 1972 se dan a conocer cifras superiores: según el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 83.000 familias (456.000 personas) residían en esa época en los campamentos, lo cual representa un 16.3% de la población del Gran Santiago"²⁰.

El desafío de construir sus nuevos espacios

La experiencia realizada por los pobladores al interior de los campamentos los enfrenta a una serie de tareas

nuevas, pues la habilitación del sitio es sólo el primer paso en la vida que ellos están comenzando. Y ni el gobierno de Frei, ni el de Allende están en condiciones de entregarles automáticamente el equipamiento básico (luz, agua, pavimentación, alcantarillado, etc.) que ellos necesitan.

La evolución de los campamentos va a tomar distintos caminos dependiendo de la orientación que recibían de los partidos políticos que asumen su conducción. Y es aquí donde se manifiestan los efectos de las distintas tácticas implementadas por las diferentes corrientes políticas. Es decir que la forma de organización varía y da origen a una participación de los pobladores, de acuerdo con la orientación que reciban de los partidos políticos. Y esta se proyectará de manera distinta hacia el futuro del campamento.

"El "estilo" de campamentos miristas marcó un salto cualitativo en el movimiento de pobladores y fue esto, más que su importancia cuantitativa o su anterioridad cronológica, la que los diferenció de las otras tomas que de todos modos, fueron influenciadas por la imagen creada, e incluso adoptaron el nombre de campamentos"²¹.

En los campamentos vemos surgir dos tendencias muy concretas de acuerdo a la forma en que los pobladores se organizan para construir su nueva vida:

- una de ellas está representada por el **campamento Nueva La Habana**, creado el 4 de Noviembre de 1970.

Este estuvo formado por 1.700 familias que provenían de los campamentos Ranquil, Elmo Catalán y Magali Honorato.

Su organización se estructura en torno a la participación de todos los pobladores en la solución de sus problemas. Para ello se diseña una estructura urbana que define a la **manzana** como célula base de la acción.

Cada una de las 64 manzanas del campamento elige a un delegado y éstos forman un directorio común. Para

entrar a vivir en el campamento hay que comprometerse a participar en las diversas actividades.

“La organización por manzanas pone énfasis en la incorporación de la gran masa de la población al proceso social de toma de decisiones y de control sobre numerosas materias: vigilancia, disciplina, justicia, salud, vivienda, equipamiento, educación, cultura, trabajo, etc.”²² “La organización y procesos de participación internos al campamento son verdaderas “escuelas de gobierno” donde cada esfera de la vida adquiere un contenido político”²³.

“Nosotros teníamos que salir a presionar para que el Serviu nos diera las cosas, porque no porque el gobierno era del pueblo, nos iban a llegar, o sea que teníamos que salir a pelear para que nos dieran esos ladrillos. Porque queríamos todo super bueno, entonces tuvimos que salir a reclamar. Igual con la basura, que pasaba cuando se les ocurría. Entonces pescábamos toda la basura y se la íbamos a dejar a la casa del Alcalde, se la vaciábamos de la reja para adentro. ¿A ver si a él le gustaba vivir así? Y desde ahí empezó a tomar un poco de conciencia y a mandar a retirarla dos veces por semana. Los alimentos había que ir a pedirlos por allá por la Panamericana y así con todo. Se hacían Asambleas todas las tardes y ahí se discutía todo”²⁴.

También se diseña una instancia de *comunicación* que son las Asambleas diarias, donde se entrega la información, se discuten los problemas y se toman decisiones a nivel general.

Al mismo tiempo el campamento está organizado por “*frentes*” que asumen el trabajo en materias específicas, como son el *frente de salud, de vigilancia, trabajo, abastecimiento, etc.* y cada manzana nombra un delegado.

Desde éstos frentes, los pobladores buscan satisfacer sus necesidades, por ejemplo el *frente de salud* se integra a los programas de salud del gobierno (campañas de alimentación, vacunación, control de niño sano, etc.) pero al inte-

rior del campamento, los realiza con las brigadas propias el trabajo. Lo mismo sucede con el *frente del trabajo* desde el cual los pobladores presionan al gobierno por ejemplo, para trabajar en la construcción de sus casas y así, solucionar su problema de vivienda y a la vez el de cesantía.

“Mi marido estuvo como dos años de delegado y cuando se acercaba el invierno le decía a los vecinos: empecemos desde ahora a arreglar los techos, a hacer las zanjias en los pasajes, para que cuando llueva no se nos meta el agua dentro de los sitios. Y la gente trabajaba, cooperaba muy bien. Los sábados y domingos hacíamos trabajos voluntarios, hacíamos aseo dentro de las manzanas. Las mujeres barríamos, juntábamos la basura y los hombres se encargaban de recogerla con palas, echarla a la carretilla e ir a botarla. Que hay que arreglar el alumbrado público, decía mi marido, cambiar estos cables que están malos. Tratemos de enderezarlos porque si hay un corte, se van a recalentar y nos vamos a incendiar. Y la gente lo hacía”²⁵.

El frente de salud esta dirigido por un médico que planifica el trabajo general en salud y como base de operaciones tiene el policlínico. Junto a él, hay un equipo formado por las delegadas elegidas en cada manzana que se conocen con el nombre de “*milicianas de salud*”. Estas reciben formación en normas de higiene, nutrición, primeros auxilios, etc. y su tarea consiste, entre otras cosas, en revisar cada mañana, todas las casas de su manzana, a fin de ir creando el hábito del aseo y entregando conocimientos sobre el tema a las dueñas de casa que lo necesiten. En caso de que la situación en una casa no mejore, la pobladora es llamada al policlínico para darle formación.

Paralelamente se hace un control estricto del estado nutricional de los niños y se pone a disposición de las familias dos tipos de “*canastas básicas*” de alimentos (familiares y lactantes) que son vendidas a un precio bastante bajo. Esto es organizado por el frente de Abastecimiento.

Dentro del área de salud también funciona un programa de recuperación para los niños desnutridos. En este se toma a la madre y se le da una formación en normas de aseo y nutrición y al niño se le hace un programa especial de alimentación.

La dimensión cultural tiene un lugar muy importante entre los pobladores. Durante todo el día hay una instalación de altoparlantes que transmiten música y noticias. Además hay presentaciones constantes de teatro, conjuntos musicales y otros. Y para los niños se instalan unos buses antiguos que operan como escuela.

"Los fines de semana se organizaban partidos de fútbol y cada manzana tenía su equipo. Decían que había que recrearse, entonces yo hacía comida y nos íbamos, cuenta Herminia, también íbamos a la Quebrada de Macul a hacer paseos"²⁶.

"Las puertas de las casas se cuidaban, como si lo que hubiera adentro no sólo fuera la casa mía, sino que todas las casas eran mías. Todos defendíamos la población como si fuera todo de uno"²⁷.

- la segunda tendencia en cuanto a la organización de los pobladores, la representamos a través de la experiencia realizada en la población Lo Hermida, que también nace de una toma realizada el 8 de Agosto de 1970.

Se organiza a partir de un conjunto de comités formados (algunos hasta dos años antes) bajo la conducción de dirigentes de los partidos demócrata cristiano, comunista y socialista. Incluso Osvaldo Romo estuvo a cargo de un comité. Más tarde, él colabora con la Dina y actualmente está detenido por su participación en diversos actos de violación a los derechos humanos.

Lo que hace posible esta toma de terrenos en un fundo de Peñalolén, fuera de la necesidad de las familias, es la fecha estratégica de su realización, un mes antes de las elecciones presidenciales. Este hecho se manifiesta inclu-

so en la exhibición simbólica de una bandera de los diversos candidatos sobre las carpas de los pobladores. Sin embargo, al decir de ellos, las banderas se cambian de acuerdo con las necesidades de cada momento.

En el caso de Lo Hermida, la organización e instalación se centra más directamente en los dirigentes, y los pobladores viven el proceso de manera menos participativa. No hay una estructura ni un diseño colectivo, tampoco hay un sistema de información tan expedito ni específico como pueden ser las Asambleas u otra forma similar. Los comités se entienden con sus respectivos dirigentes y a cargo de ellos también está la búsqueda de las soluciones de infraestructura (luz, agua, alcantarillado...)

"El agua se empezó a poner junta en toda la población, entonces creemos que todos los dirigentes de los diferentes comités, se reunieron para conseguirlo. Llegaron camiones de agua potable con las casetas y los medidores y pusieron bastante rápido todo"²⁸.

"En el año 70 yo pagué como \$600 por la instalación de la luz y era poca plata, yo la pagué toda junta. Fue muy rápido, como en un mes ya no sufrimos del agua y de la luz. Estábamos felices y orgullosos. Por Allende obtuvimos todo eso. La Faena la hizo Frei y no tenían ni alcantarillado todavía"²⁹.

Aunque en Lo Hermida no hay una dirección tan coordinada, sin embargo el contexto político social y el modelo de otros campamentos vecinos, les sirve como modelo para incentivar la movilización de los pobladores.

"La única locomoción que teníamos era la Ñuñoa Vivaceta, después empezaron a venir las Plaza Egaña Lourdes. Una noche hubo un grupo que partió a la villa Frei y se tomaron la garita de las micros Av. Matta. Los choferes encargados hicieron una reunión con el inspector y estuvieron de acuerdo; entonces decidieron venirse y ahí nos trajeron a todos. Después también llegaron otras líneas"³⁰.

“Las JAP³¹ eran organizadas por alguien que no conocíamos muy bien, él tenía una lista y nos iba diciendo cuando tocaba guardia para cuidar la mercadería. Y cada uno sabía la fecha en que tenía que venir, una vez por mes. Aquí mismo era que se tenía la canasta. El alimento también lo vendían porque había un almacén de Dirinco. Lo vendían todas las semanas, era super barato y había de todo. Toda la gente tenía sus bufeses llenos de cosas.”³²

La experiencia de toma de terrenos y su posterior equipamiento marcó un hito en la vida de los pobladores, fue una experiencia de autoeducación muy significativa para el conjunto de ellos. A partir de ese momento los pobladores fueron construyendo una nueva cultura, sustentada en valores propios que fueron surgiendo de la práctica cotidiana implementada por la comunidad.

“Nos damos cuenta de que si no nos hubiéramos movido por el problema habitacional, ni nos hubiéramos movilizado, ni hubiéramos inscrito a la gente, ni hubiéramos gritado por todas partes. A éstas alturas a lo mejor no tendríamos ninguna cuestión, porque... ¿quién nos iba a dar a nosotros?”

Fue la propia lucha, la propia organización, la que nos permitió tener la posibilidad de vivir en un sitio que no será tan elegante, pero es algo que nos costó a nosotros y si lo sabemos defender, nos podremos morir en él. Ese recuerdo tiene que servirnos para abrir perspectivas de lucha, perspectivas de cómo buscar un camino para que la vida no sea tan difícil, para que la vida no sea tan dura”³³.

Los pobladores que viven este tipo de experiencias, más tarde tuvieron que sufrir con especial fuerza la embestida de la dictadura, sin embargo son ellos mismos los que primero comienzan a levantar las organizaciones que durante el período les permitirán defenderse y enfrentar los problemas que este acarrea.

Los pobladores y la dictadura

Una vez pasado el primer impacto represivo del golpe militar y en el contexto de miedo imperante, comienzan a hacerse sentir los efectos económicos del nuevo modelo que se implementa. La cesantía sube progresivamente y el hambre hace su entrada en las familias.

Las conquistas alcanzadas por los trabajadores a lo largo de su vida, caen una a una, irremisiblemente. Los niños en el colegio dejan de recibir sus libros, sus cuadernos e incluso al presentarse a dar sus exámenes, se dan cuenta de que también tienen que pagar el papel del Ministerio donde escribirán sus conocimientos.

Las mujeres, obligadas a reprimir su angustia y su dolor, salen a la calle en busca de soluciones... Primero buscan el alimento para sus hijos, caminando y caminando hasta establecer contacto con los emergentes Comedores Populares. Luego se mueven para participar en los Talleres de Subsistencia que comienzan a aparecer, en unos hacen pan para vender, en otros lavan “ropa ajena” o dan los primeros pasos en la creación de arpilleras...

Por su parte los antiguos dirigentes, calladamente unos, otros desde la clandestinidad, pero atentos a lo que sucede en su entorno, van tejiendo redes de apoyo para revertir los diversos problemas de la población. Las iglesias e instituciones se unen a esta red donde cada uno va poniendo lo que tiene, unos el techo, otros su experiencia, otros sus conocimientos, sus necesidades, su deseo de aprender, su voluntad de resistir, aunque sea consiguiendo los alimentos y el sustento cotidiano para defender la vida.

Desde el comienzo en el año 1973, surge una respuesta organizada de los pobladores enfrentando cada uno de los problemas que aparecen, frente a la represión, los grupos de derechos humanos; frente al hambre, los Comedores

infantiles y luego las Ollas Comunes; frente a la cesantía, los Talleres de Subsistencia y luego las Bolsas de Cesantes; frente al control de la información, los boletines, panfletos, volantes y toda clase de impresos; frente a los problemas de salud los botiquines populares; frente a los problemas de abastecimiento, los Comprando Juntos, frente a la dominación cultural, los Grupos Culturales y Talleres de diversas expresiones artísticas...

Estas organizaciones en su mayoría, son instancias que refuerzan la relación entre los pobladores y contribuyen a la consolidación de una identidad cultural, por cuanto su dinámica interna los lleva a establecer normas, a clarificar sus valores, a crear formas de trabajo solidarias, a definir sus necesidades e intereses y desde esta nueva cotidianidad que construyen, proyectan su futuro.

Al nacer, estas organizaciones se constituyen en herramientas que buscan solucionar una necesidad puntual, pero en la medida en que el grupo alcanza su primer objetivo y sus integrantes consolidan sus relaciones, estos espacios se convierten en verdaderas escuelas de autoformación comunitaria que reemplazan a la escuela que no tuvieron en su niñez. De la dinámica que se origina en ellas surgen como resultado los gérmenes de una cultura propia que se va consolidando en la nueva práctica. Es en este camino donde se dan cuenta que la solución puntual de su problema inicial no es suficiente y comienzan a plantearse otros objetivos, como por ejemplo derrocar la dictadura...

En un primer momento y como medida de seguridad, las organizaciones operan en un radio bastante delimitado pero una vez que se afiatan, establecen nexos a nivel comunal. Y dada su estrecha relación con la Vicaría de la Solidaridad adhieren, en la mayor parte de los casos, a las coordinaciones zonales creadas por esta. Es allí donde se inicia el intercambio de los pobladores con otros grupos

como los sindicatos de cesantes, los familiares de las víctimas de la represión y muchos otros. Para los pobladores, esta es una etapa muy rica porque a través del trabajo conjunto acceden al conocimiento de realidades que para ellos son desconocidas en su magnitud y complejidad.

La coordinación del trabajo de los pobladores a nivel comunal refuerza a los grupos y le da una nueva proyección a su accionar. De ese modo ellos toman parte activa en la lucha por la defensa de los derechos humanos, en las protestas contra la cesantía, en la conmemoración de fechas como el Primero de Mayo. Los años van pasando y al iniciar los 80 comienza la organización de marchas del hambre, pequeñas tomas de terrenos, protestas estudiantiles, en las que los pobladores juegan un rol protagónico. Para ello se forman Coordinadoras Sectoriales y Metropolitanas que facilitan la progresión del movimiento.

Estas redes continúan fortaleciéndose en la acción conjunta y poco a poco abren el espacio para una lucha más decidida. Es así como el llamado a un Paro Nacional convocado por la Confederación de Trabajadores del Cobre para el 11 de Mayo de 1983 es acogido con tal decisión por el Movimiento de Pobladores que da inicio al gran período de Protestas Nacionales.

Esta nueva etapa pone por primera vez en jaque a la dictadura y en Agosto de 1983 esta ordena la salida a la calle de 15.000 efectivos militares. Pero a pesar de la sofisticación con que responde el gobierno, en cada protesta los pobladores consiguen establecer "espacios liberados" donde por un lapso de tiempo se impide el paso de las fuerzas represivas. Es así como comienzan a abrirse nuevos caminos para la oposición.

En Setiembre de 1983, se realiza la toma de terrenos más grande de nuestra historia. Sus protagonistas son más de 10.000 familias organizadas en "Comités sin casa", de toda la región metropolitana. Estos planifican la acción

autónomamente y sólo después que se instalan en el terreno, acuerdan un trabajo explícito con los partidos.

Para fortalecer su lucha, el movimiento popular crea Comandos Comunales que le permitan coordinar sus acciones a nivel territorial y con los otros sectores. Las organizaciones sociales en su práctica cotidiana, construyen una forma de acción política diferente a la que sus integrantes habían conocido en los partidos políticos tradicionales. En ellas, los pobladores reivindican una forma de acción democrática, donde las decisiones se tomen en conjunto, donde la información sea compartida y donde las tareas se distribuyan equitativamente.

Los pobladores y la llegada de la democracia

Cuando los espacios se van abriendo surgen dificultades, pues los partidos políticos deciden recuperar sus "antiguos puestos". Por ejemplo ante las primeras elecciones para dirigir las Juntas de Vecinos, los partidos políticos imponen sus prácticas tradicionales y pasando por encima de las organizaciones que hicieron posible el "tener elecciones", se proponen copar partidariamente todos los cargos. A partir de este tipo de intervenciones se produce una desmoralización entre los pobladores y poco a poco se van alejando de estos espacios construidos con tanto coraje y esfuerzo.

El broche final lo pone la "democracia" que llega bajo el anuncio de que "la alegría ya viene" y manifiesta simultáneamente un temor tal a la participación popular que cierra hasta algunos de los espacios que las organizaciones habían conquistado. El método de creación de expectativas que a la postre son un engaño, como por ejemplo la participación en los gobiernos comunales, se expresa en diversas formas e incentiva el abandono de distintas instancias de participación social. Sin duda que a esto hay

que agregar los efectos de la crisis de los partidos políticos, especialmente los populares y sobretodo las consecuencias producidas por un modelo neoliberal globalizado, impuesto a la fuerza por el régimen.

Alternativas

Si bien la realidad descrita es representativa de un sector importante de los pobladores de hoy día, hay también otras manifestaciones que constituyen una expresión de la existencia de un movimiento poblacional dinámico y propositivo.

Me refiero especialmente al "Campamento Esperanza Andina" porque tengo un conocimiento directo del proceso vivido por sus protagonistas, porque a mi entender éste sintetiza lo mejor de las experiencias históricas en lo que se refiere a las tomas de terrenos en Chile y porque además, ofrece perspectivas importantes para el futuro del movimiento poblacional.

La toma realizada por los pobladores del Campamento Esperanza Andina se realiza el día 19 de Junio de 1992 y en ella participan 927 familias. Sus protagonistas son los integrantes de la "Unión Intercomunal de Comités de Allegados de la Zona Oriente de Santiago". Su objetivo es adquirir un sitio donde construir su casa y un espacio comunitario donde puedan tener una vida digna.

La perspectiva en que los pobladores emprenden esta toma está expresada en las palabras de su presidente; "esta toma de terrenos representa la voluntad de construir un movimiento social fuerte, que tenga nuevos valores, que ofrezca una alternativa. Para nosotros como dirigentes, esta toma tiene una gran importancia porque en ella logramos concretar muchos sueños y esperanzas. Al mismo tiempo éste ha sido un espacio donde hemos puesto en práctica una experiencia de vida que recoge fielmente los aciertos

y errores del pasado. Con ella queremos construir alternativas políticas y organizativas diferentes, que nos permitan empezar a caminar de nuevo”³⁴.

Los pobladores, después de un tiempo de preparación en sus distintos comités de origen llegan al sitio elegido, se instalan guardando esta misma organización y constituyen una unidad con el resto de los grupos.

La estructura de funcionamiento tiene como base un directorio formado por el equipo de dirección que coordinó la preparación y realización de la toma y en el se integran los representantes de los diversos comités.

Como instancia de información, debate y toma de decisiones se crea la Asamblea que funciona diariamente con la participación de todos los pobladores.

Consecuentes con su decisión de comprar los terrenos, deben mantener una capacidad de ahorro que les permita reunir el dinero necesario. Para esto organizan sus actividades previendo que ninguno de los pobladores arriesgue su puesto de trabajo, por lo tanto las Asambleas y trabajos de instalación se hacen desde un principio en las tardes o durante los fines de semana.

Como en otros Campamentos aquí se organizan diversos Comités que asumen las tareas que exige un buen funcionamiento salud, educación, vigilancia... Pero muy pronto algunas actividades superan el nivel del comité y por ejemplo las mamás que no trabajan, se organizan para cuidar a los niños de las que lo hacen (en su mayoría jefas de hogar) y poco a poco, con la ayuda de algunos universitarios forman un Jardín Infantil que en la actualidad recibe a 90 niños. Hace ya un año las pobladoras parvularias, después de estudiar vespertinamente durante 3 años, recibieron el título que las acredita como tales.

A nuestro entender, el éxito de la acción emprendida por los pobladores se sustenta en:

- la coherencia, transparencia y compromiso de sus dirigentes durante toda la experiencia,
- su capacidad para diseñar estrategias y tácticas respecto de cada una de las acciones realizadas,
- la disciplina de estudio con que se abocan a conocer cada uno de los problemas enfrentados y las proyecciones de las acciones programadas,
- la extraordinaria sabiduría con que han combinado los instrumentos legales e ilegales para hacer avanzar el proceso. Por ejemplo presentación de solicitudes y ante la falta de respuestas: “toma” o marcha o huelga...
- la capacidad de mantener su autonomía, recurriendo al mismo tiempo a pedir las asesorías necesarias para llevar su proyecto adelante,
- la estructura de participación implementada en la toma de decisiones, en la planificación de actividades y en el conjunto del trabajo de los pobladores, a lo largo de todo el proceso,
- la capacidad de recibir apoyo de diversos actores políticos, sociales e institucionales, lo que les ha permitido acumular fuerza para avanzar hacia sus metas,
- la conducción del proceso guardando en todo momento el equilibrio justo para que las medidas tomadas o las acciones emprendidas, mantengan la cohesión interna de los pobladores y al mismo tiempo produzcan el impacto necesario hacia el exterior,
- la concepción pedagógica con que se han programado las tareas realizadas,
- el clima solidario y la preocupación estética que reina dentro del campamento,
- el cuidado y ternura con que son tratados los niños, especialmente por los dirigentes,
- la voluntad de construir una cultura propia que hay tras cada una de las medidas implementadas.

Finalmente consideramos que el objetivo logrado por los pobladores del Campamento "La Esperanza" al conquistar un espacio donde construir su vida, no solo se materializa en las casas conseguidas sino también en la cultura que ellos han venido y seguirán cultivando

Conclusiones:

Los hechos aquí relatados reflejan sólo una pequeña parte de la historia vivida por los pobladores chilenos, sin embargo me parece importante destacar algunos puntos que se desprenden de ellos:

- 1.- Que el problema central en torno al que se levanta el movimiento es la vivienda. Es decir que el espacio propio, la casa al principio y su entorno posteriormente, son dos condiciones esenciales del hombre para vivir una vida digna y desarrollarse como persona. Pensamos que esta expresión que se da en lo urbano tiene una estrecha relación con el sentido que tiene la madre tierra para el pueblo mapuche en su concepción campesina.
- 2.- Que los sectores populares, en la medida que recomponen el tejido social que rompieron al salir de la comunidad de origen, crean las condiciones para rearticlar los rasgos de una identidad cultural propia que permanecen vivos, aún cuando estén temporalmente dispersos.
- 3.- Que los partidos políticos y otros actores sociales pueden cumplir un rol importante como facilitadores en la reconstrucción del tejido social, sólo en la medida en que se comprometan (en la práctica) a respetar la autonomía y diversidad propia de los sectores populares. Aún cuando todos se encaminen hacia una misma meta.

- 4.- Que la dinamización de los pobladores, como actores sociales, expresada en la capacidad de participación y en la construcción de sus espacios propios, muestra que la fuerza que adquieren como grupo social supera la que pudieran producir las contradicciones externas por si mismas.
- 5.- Que las proyecciones que puede tener el movimiento de pobladores son muy significativas, en tanto su composición interna supone una integración de género y de generaciones. Es decir que en la construcción de sus espacios, el hombre y la mujer pueden llegar, también, a construir concepciones comunes. Y al vivir una experiencia común tan vital como lo es esta, el niño y el padre construyen un conocimiento que se proyectará a lo largo de sus historias.
- 6.- Que el cambio impulsado por los pobladores en su lucha tiene un potencial relevante, en tanto tiene su lugar de origen en la vida cotidiana y como tal, apunta a la transformación de ella en todas sus dimensiones. A diferencia de otros cambios que al constituir solo un cambio parcial, muchas veces son revertidos por el tiempo.

Al terminar este trabajo, quiero decir que éste representa sólo los primeros pasos de una búsqueda mucho más detenida, que esperamos llevar adelante en un futuro próximo.

NOTAS

1. Luis Alvarado, Rosemond Cheetham, Gastón Rojas "Movilización Social en torno al problema de la vivienda" en: EURE (Rev. Latinoamericana de estudios urbano sociales) Vol. III, Abril 1973 No7, p.44.

2. *ibid.*
3. Vicente Espinoza: "Para una historia de los pobres de la ciudad", Ed. SUR, Santiago 1988, p.65.
4. Vicente.... art. cit. p.65.
5. Luis Vitale, "Interpretación marxista de la historia de Chile"
6. Manuel Castells. "Movimiento de pobladores y lucha de clases" en: EURE(Rev. Latinoamericana de estudios urbano sociales) Vol.III, Abril 1973 No7, p. 12
7. ODEPLAN, Desarrollo de Chile, 1960 - 1970, Santiago, 1971.
8. Luis Alvarado... art. cit. p.54.
9. Ernesto Pastrana, Mónica Threlfall, "Pan, techo y poder" el movimiento de pobladores en Chile 1970-73. De. Nueva Visión S.A., Buenos Aires 1974. p. 20.
10. Manuel Castells... art.cit. p.14
11. Ernesto Pastrana... art. cit. p. 20.
12. Manuel Castells... art.cit. p. 22
13. A. Rodríguez "Por una ciudad democrática", SUR, Est. Sociales. Santiago 1983.
14. Manuel Castells... art.cit. p.23.
15. *Ibidem*, p.26
16. Manuel Castells... art.cit. p.9.
17. Luis Alvarado... art. cit. p.59.
18. Manuel Castells... art.cit. p.27.
19. Datos del MINVU elaborados por Duque, Joaquin y Pastrana, Ernesto, "La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile: 1964 -72" en: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, No 4, Stgo. de Chile Diciembre 1973. p. 265.
20. Ignacio Santa María, "El desarrollo urbano mediante asentamientos espontáneos: el caso de los campamentos chilenos" en:EURE(Rev. Latinoamericana de estudios urbano sociales) Vol.III, Abril 1973 No7, p.106
21. Manuel Castells... art.cit. p. 25
22. Luis Alvarado... art. cit. p. 60
23. *Ibidem* p.61

24. Taller de Acción Cultural, entrevista a un grupo de pobladores del campamento, Julio, 1984.
25. *Ibidem* p. 75
26. Taller de Acción Cultural, "La organización fue como nacer de nuevo". TAC, Santiago, Setiembre 1986 p. 54.
27. *Ibidem*.
28. Taller de Acción Cultural, "Lo Hermida, homenaje a sus 15 años: 8 de Agosto de 1970, 8 de Agosto de 1985".
29. *Ibidem*.
30. *Ibidem*.
31. Juntas de Abastecimientos y Precios, creadas por el gobierno popular para facilitar la distribución de alimentos.
32. Taller de Acción Cultural, "Lo Hermida, homenaje a sus 15 años: 8 de Agosto de 1970, 8 de Agosto de 1985".
33. *Ibidem*.
34. José Luis Flores, presidente del Campamento en "Campamento La Esperanza: por el derecho a soñar", Peñalolen 1992. Ed. Taller de Acción Cultural 1993.

ESTADO, PARTIDOS Y MOVIMIENTO OBRERO

LUIS CRUZ SALAS

En el debate sobre los últimos treinta años de historia de Chile, lo que nos parece fundamental es la pertinencia actual de la cuestión planteada en los años 60 por el movimiento social de los trabajadores, relativa a la capacidad democrática para dirigir los modos sociales de producción de lo social. Lo que se afirma entonces es la capacidad que tiene cada mujer, cada hombre, joven o viejo, para decidir, en igualdad de condiciones, sobre todas las materias que tienen que ver con la vida en común. El punto de partida de la narración histórica no puede así ser otro sino que el combate de los distintos sujetos sociales populares para establecer un orden social libre, igualitario y solidario. El motor del desarrollo histórico son las luchas por el reconocimiento que llevan a cabo los distintos sujetos sociales, las que se expresan como movimiento social. Justamente porque la sociedad chilena se presenta como sociedad fundada en el trabajo es que el movimiento social que aparece como central en la tarea de reconstrucción de la memoria es el de los trabajadores.

El movimiento obrero

Se entenderá aquí por movimiento obrero el conjunto de acciones que realizan los trabajadores por vivir más digna y libremente. Esas acciones incluyen tanto las luchas explícitas (la huelga, la manifestación callejera) e implícitas (el trabajo lento, por ejemplo) como las distintas formas asociativas (uniones en resistencia, sindicatos, asociaciones). Esta noción incluye lo que otros autores denominan "movimiento sindical", como conjunto de organizaciones centradas en la reivindicación económica. En cuanto a sus componentes, el movimiento comprende a todos los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, fuerza que de alguna manera está subsumida en el capital y que por ello producen riqueza para este último. En Chile este movimiento se estructura inicialmente en el carbón y en el salitre, por una parte y entre los semi-artesanos de las grandes ciudades. A partir de ahí el movimiento se extiende a otros sectores de trabajadores.

A lo largo del siglo se constituyen diferentes movimientos sociales que tendrán como modelo el movimiento de los trabajadores, por lo menos hasta fines de los 70. Es en razón de su nivel de representación, su capacidad reivindicativa, y, sobre todo, de su carácter autónomo que este movimiento se presenta como paradigma de movimiento social. La base de estos movimientos se encuentra en un asociativismo popular muy marcado por un sentido democrático. Esto contradice la tesis tradicionalista que ve en las clases trabajadoras una masa informe, manejada por caudillos irresponsables.

Durante decenios, la figura dominante en el movimiento social de los trabajadores es el obrero "profesio-

nal" que, poseedor de un saber-hacer, es el factor esencial para la realización del proceso de trabajo. Consciente de su situación estratégica en este proceso, reivindica los derechos del trabajo a organizar las relaciones sociales como sociedad del trabajo, en que los derechos y deberes están determinados por éste: "el que no trabaja no come". Gozando de una gran autonomía laboral, esto es, de una capacidad para autodeterminarse en el proceso productivo, puede organizarse de manera también autónoma en el plano social. Mientras la burguesía se objetiva como capital, el trabajo, como pura potencia subjetiva, sólo puede objetivarse en asociación de seres humanos libres.

Es ese obrero el que se asocia en partidos y sindicatos con los que gana el derecho a participar en el espacio público, confiriéndole a este un contenido social. En este sentido, el movimiento obrero constituye una fuerza democratizadora de la sociedad. En los inicios del período en cuestión, la actividad del movimiento está centrada en torno a la lucha por mejoras económicas. En una encuesta llevada a cabo en 1962 sólo el 2% de los dirigentes sindicales pertenecientes al Frente de Acción Popular (FRAP, integrado por socialistas, comunistas, padenistas) declaran que "despertar la conciencia política" de los trabajadores es su principal objetivo. Para la gran mayoría de esos dirigentes, por el contrario, el objetivo principal es el mejoramiento económico¹.

Esta acción sindical centrada en el mejoramiento económico se desarrolla, sobre todo después de 1957, ante las dificultades de obtener mejoramientos a nivel de cada empresa, en torno a las discusiones de los proyectos de ley del gobierno para reajustar los sueldos y salarios de acuerdo al alza del costo de la vida. Esto exige una representación nacional la que está dada por la Central Unica de Trabajadores, la que actúa como verdadero "partido de los trabajadores" en los años precedentes.

La década comienza, desde el punto de vista sindical con las movilizaciones convocadas por la CUT a fines de 1960 en torno a la discusión del proyecto gubernamental de reajuste de sueldos y salarios para paliar el alza del costo de la vida. Este es rechazado por el movimiento obrero por considerarlo insuficiente, posición que es desoída por el gobierno. En protesta, la CUT convoca a una manifestación en Santiago el 3 de noviembre de 1960. Cuando los trabajadores desfilaron hacia el centro de la ciudad se produce un encuentro violento entre manifestantes y policías que deja como resultados dos muertos y cerca de 46 heridos. Para protestar en contra de la represión, la CUT llama a un paro general para el 7 de noviembre, el que moviliza a los asalariados de las actividades económicas más importantes del país.

En esta misma dinámica se inscribe el nuevo paro convocado por la CUT el 1° de abril de 1964, motivado por el rechazo por parte de los gremios de trabajadores del Estado de un proyecto de reajustes que considera un aumento de remuneraciones del 35%, cifra estimada insuficiente para paliar el alza del costo de la vida, que es del orden del 45,4% en 1963 y que en marzo de 1964 respecto de marzo de 1963, alcanza al 50,6%. Los trabajadores del Estado proponen un aumento del 70% para las rentas más bajas hasta un 25% para las rentas más altas. En el paro, que dura tres días, participan mayoritariamente los trabajadores de la administración central del Estado, de las municipalidades, de las universidades y de parte del sector privado. En su tercer día, se producen enfrentamientos entre los huelguistas y la fuerza pública. El gobierno culpa de los incidentes a los detenidos a los que se sindicó como delincuentes comunes y pide para ellos la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los inculcados, sin embargo, son todos modestos trabajadores pertenecientes a las organizaciones en huelga. "El Mercurio"

pese a reconocer lo justo de las reivindicaciones de los trabajadores, los condena "por alzarse en contra de las reglas que pautan el funcionamiento de los Poderes Públicos" ².

Frente a la dimensión social y política de los paros nacionales, los conflictos locales aparecen como poco importantes. Se estima que el número de huelgas habría pasado de 257 en 1960 a 401 en 1962, con 88 000 huelguistas en el primer año y 83 000 en el segundo año considerado³. Esta situación comenzará a revertirse ligeramente a partir de 1965, para alcanzar su máximo en 1967.

Uno de los elementos que parece fundamental para explicar este cambio es la articulación de la experiencia asociativa y de acción colectiva con los cambios en la composición orgánica de la clase trabajadora en el decenio en estudio. El desarrollo de la actividad del movimiento obrero está condicionado por las dimensiones cuantitativas de la fuerza de trabajo, por las dimensiones espacio-temporales de las luchas y por los resultados de estas.

La dimensión cuantitativa de la fuerza de trabajo

El aumento o disminución de la fuerza de trabajo juega un rol fundamental en este sentido. En efecto, el capital, al concentrar grandes masas de trabajadores en un solo lugar y bajo la dirección de un mismo capitalista, crea un entorno favorable al desarrollo entre los trabajadores de un tejido de relaciones bajo la forma de sistemas de disposiciones durables, de matrices de percepción, de pensamiento y de acción comunes, constituyéndose así como sujeto colectivo.

El rol de la industria en el desarrollo del capitalismo pasa a ser relevante para entender la nueva mentalidad de cambio que se plantea en los años 60. Cabe señalar en primer lugar las transformaciones en el sector manufacturero. En 1930 el 15,7% de la fuerza de trabajo labora en la

industria manufacturera, en 1950, el 19% y en 1960, 24%. La participación del sector industrial en el PNB aumenta de 13,8% en 1930 a 21,5 en 1960. Entre 1960 y 1967, la mano de obra ocupada aumenta en 16%. Los sectores más favorecidos son el textil, los equipos de transporte y los productos metálicos y es en estos sectores que la actividad reivindicativa obrera será más importante.

Este proceso se ve acompañado por una tasa de cesantía que desciende de 8% en 1961 a 3,1 en 1972. Bajo el gobierno DC, los años de menor cesantía son 1967 y 1968 con 4,7 y 4,9 respectivamente. No se puede hablar por tanto de un verdadero "ejército industrial de reserva". Una menor proporción de desempleados implica la disminución de la competencia tanto externa (la que se hacen los trabajadores sin empleo por obtener uno) como la interna (la que se da en el interior de la empresa para conservar el empleo). La disminución de la competencia implica al mismo tiempo un reforzamiento de los lazos de solidaridad de clase y por tanto de la afirmación de la propia identidad como grupo social.

Todo ello posibilita el surgimiento y desarrollo del ciclo de luchas obreras que se abre en 1967 y termina en 1973.

Cabe señalar que el conjunto de transformaciones que se experimentan en Chile no son exclusivas de la sociedad nacional. Similares transformaciones se viven en otras latitudes en los mismos momentos. Es todo el sistema capitalista mundial, tanto en sus formas "liberales" o "mixtas" del Oeste como en sus formas "estatocráticas" del Este las que se ven conmocionadas. Así, se observa un aumento del número de huelgas en prácticamente todos los países del mundo así como una radicalización creciente, que se expresa en los países del Este, por ejemplo en las tentativas por constituir sindicatos independientes del poder burocrático, en las huelgas espontáneas y salvajes en va-

rios países de Europa Occidental. El ciclo de luchas del movimiento obrero francés sigue un ritmo más o menos similar al chileno. Las luchas de los trabajadores chilenos son contemporáneas con las luchas del mismo signo que se desarrollan en otras latitudes. El nuevo "espíritu del mundo" encuentra su base en las transformaciones que experimentan las clases trabajadoras en prácticamente todos los países capitalistas.

Un elemento dinamizador de este ciclo está constituido por el surgimiento de un nuevo sector de trabajadores en las industrias de punta ligadas al proceso de industrialización inducido por el capital extranjero. Se trata, por lo general, de una fábrica con altos niveles de racionalización en que coexisten formas tayloristas y fordistas de organización del trabajo, que demandan menos mano de obra pero de mayor especialización. Esta mano de obra está constituida, por lo general, por trabajadores jóvenes con un grado de escolarización mayor que sus predecesores y con una experiencia urbana de larga data. Son estos trabajadores los que desarrollan las luchas más radicales a partir de 1967 y que en 1972 se encontrarán a la cabeza de los "cordones industriales".

Lo que caracteriza este nuevo ciclo de luchas es su masificación, radicalización, generalización y politización.

La masificación

El aumento del número de conflictos del trabajo y de huelguistas permite hablar de masificación de las luchas de los trabajadores por lo menos a partir de 1967.

CONFLICTOS DEL TRABAJO

Año	Nº de conflictos	Trabajadores en conflicto	Días de trabajo perdidos
1963	642	115.331	585.914
1964	s.d.	s.d.	s.d.
1965	772	212.397	1.952.494
1966	718	88.498	793.448
1967	2.177	386.801	2.252.478
1968	1.124	292.794	3.651.569
1969	1.277	362.010	1.178.706
1970	1.819	656.170	2.804.517
1971	2.696	298.677	1.387.505
1972	3.325	393.954	1.678.124
1973	2.050	711.028	2.503.356

Fuente: *Annuaire International du Travail*, Ginebra: Bureau International du Travail, 1978.

La masificación de las luchas implica la coincidencia en el tiempo y en el espacio de sectores en lucha. Esta dimensión espacio-temporal es diferente a la existente hasta 1966 en que los conflictos son, en general, locales, parciales y de corta duración. La huelga de los trabajadores de El Salvador en 1966 aunque fuertemente reprimida es seguida por la huelga general lanzada por la Central Unica de Trabajadores, el 23 de noviembre de 1967. Convocada contra la política de ahorro forzoso propulsada por el gobierno demócrata cristiano, esta huelga se produce en un contexto de conflictos que tienden a generalizarse en todo el país, afectando tanto las grandes ciudades como las pequeñas.

Desde entonces y hasta 1973, el conflicto social tiende a generalizarse a todas las ramas de la economía y abarca prácticamente todos las categorías de trabajadores. La

masificación de las luchas conlleva a su generalización. Los conflictos se producen en todas las ramas de la economía y en ellas estarán implicados tanto los trabajadores de vanguardia como los de menor combatividad. Los conflictos se extienden a todas las categorías de trabajadores de la empresa, desde el sindicato industrial (principalmente obrero) hasta el profesional (constituido principalmente por empleados).

Cabe hacer notar aquí la gran interrelación existente entre las huelgas de cada empresa – impulsadas por el sindicato correspondiente o por la federación por rama – y la huelga general propulsada por la Central Unica de Trabajadores. Mientras que las primeras preparan y posibilitan la segunda, esta última confiere un carácter universal, general y nacional a las primeras que a su vez ganan en combatividad. Estas luchas impiden la realización de la política de austeridad y de ahorro forzoso propuesta por el gobierno demócrata cristiano. Al mismo tiempo, permitirán obtener nuevas ventajas a nivel local.

La masificación y generalización de las luchas determina la modificación de las formas y contenidos de estas. En primer lugar, los espacios geográficos e institucionales tradicionales de estas luchas son sobrepasados: los conflictos salen de la empresa. Las huelgas son acompañadas de manifestaciones callejeras y de mitines los que en su mayoría son reprimidos por la policía. Se organizan “ollas populares” en la calle, las que cuentan con el apoyo de la población local, de los trabajadores de otras empresas, de los estudiantes y de los pequeños comerciantes. Es sobre la base de la nueva solidaridad entre grupos populares generada en los conflictos sociales que se plantea la posibilidad de la articulación territorial de las luchas. En 1968, se constituye el Comité Coordinador de Macul (COCOMA) integrado por sindicatos del sector, por pobladores y por organizaciones estudiantiles, el que puede ser considera-

do como el antecedente directo de los “cordones industriales”.

En segundo lugar, las normas legales que regulan las relaciones de trabajo son también sobrepasadas. La mayor parte de los conflictos del trabajo se originan en el no respeto patronal a las normas legales o a los convenios libremente consentidos por la parte patronal⁴. Las causales más importantes de huelga son, después de “aumento de remuneraciones”, el “no pago de remuneraciones” y los “despidos”.

Por otra parte, la legislación del trabajo se muestra como insuficiente y deficiente. El Código del Trabajo establece procedimientos tales que impiden que los trabajadores puedan ejercer su derecho a huelga en el marco de la ley. Es así como, entre 1966 y 1969 casi 80% de los conflictos son “ilegales”, es decir, no se ajustan a las normas establecidas en el Código del Trabajo. La reacción de los patronos ante las huelgas es retirar los stocks acumulados, lo que les permite resistir más tiempo, prolongando los conflictos. Cabe recordar a este respecto que la legislación prohíbe a los sindicatos tener cajas de resistencia, por lo que un conflicto prolongado les es perjudicial. De ahí entonces que los trabajadores ocupen las fábricas para evitar que los patronos retiren los stocks acumulados. De tres ocupaciones en 1968 se pasa a 113 en 1970.

Todo lo anterior conduce a la politización de las luchas, entendiendo por tal dos procesos correlativos. En primer lugar, la masificación de los conflictos del trabajo afecta al conjunto de la clase capitalista, al afectar las demandas salariales sus ganancias, la razón de su existir como clase social. Lo que se plantea es el problema de la redistribución del ingreso nacional, problema esencialmente político, que exige la intervención de los poderes públicos. Los conflictos del trabajo que hasta ese momento pueden ser considerados sólo como conflictos entre particulares

pasan a ser considerados como problema general que afecta el funcionamiento del sistema político, debido justamente a este carácter masivo y general de las luchas.

En segundo lugar, la radicalización de las luchas hace evidente la necesidad de proceder a readecuar la legalidad a los nuevos criterios de justicia. Esto no puede ser asumido sino que por el Estado. Los proyectos de reforma de la empresa y de nuevo código del trabajo del gobierno de Frei apuntan en ese sentido. Todo esto va allá de la simple intervención del Estado en materias laborales o la fijación de porcentajes de reajuste de sueldos y salarios: tiene que ver con la fijación de una política laboral, es decir, con una política de dirección y de control de las clases trabajadoras. Esta mayor intervención del Estado en este campo va a exigir una mayor preocupación de los diferentes partidos por estas materias. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales se ven obligadas a considerar las diferentes opciones políticas que se presentan. Como la solución de los conflictos sólo puede provenir de la mediación de las autoridades gubernamentales, los sindicatos deben ejercer presión sobre el gobierno y el partido en el poder.

Las consideraciones precedentes conducen a examinar el Estado y los partidos políticos.

II

El Estado y los partidos políticos.

El modo de acumulación basado en las exportaciones, sobre todo de salitre, dominante en Chile hasta fines de los años 10, entra en crisis como consecuencia de la disminución de las exportaciones al término de la Primera Guerra Mundial. El Estado oligárquico, bajo su forma republicana parlamentaria, que gestionaba la relación entre

el enclave salitrero y el resto de la economía, entra a su vez en crisis. A partir de los años 20, el Estado capitalista chileno asegura la cohesión y la unidad de la sociedad desarrollando las funciones económicas de aquel, por sobre sus funciones propiamente políticas. En efecto, es a partir de esos años que la economía nacional se presenta no como simple suma de capitales privados sino que como capital social que debe ser regulado por la instancia central de la sociedad. En esta medida, el Estado intervencionista surge como tal, en primer lugar, como medio de regular los conflictos en el seno de las clases dominantes por su participación en ese capital social. Sin embargo, el factor que parece más fundamental en la mutación del Estado liberal en intervencionista es la necesidad de responder a la emergencia de la insurgencia obrera y popular a fines de la segunda década de este siglo. La actividad de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional que organiza marchas del hambre en que los trabajadores urbanos salen a las calles a exigir mejores condiciones de vida, es considerada por las clases dominantes como prolegómenos a la revolución socialista. El reforzamiento del Estado y la atribución de competencias para intervenir en el dominio económico, considerado como propio de la esfera privada, es el resultado del miedo de la derecha chilena al conflicto social.

En los años 20 se abre una nueva fase en que se pretende conjurar el fantasma de la insurrección popular promoviendo una legislación integradora que exige al mismo tiempo un auto control del capital sobre sí mismo. Se establece el carácter social de la propiedad y una legislación social calcada del modelo mussoliniano, que permitirán la legalización de la clase obrera. El conflicto social pasa a ser regulado por la potencia soberana del Estado. El proceso político que se inicia entonces tiene un carácter claramente preventivo. Se puede hablar de un ciclo político de

larga duración que se extiende desde 1920 hasta 1973, caracterizado por la centralidad del Estado en el proceso económico.

En efecto, el Estado interviene directamente en el proceso de reproducción del capital social constante – inversiones directas en medios de producción, política de sostén al sector privado, protección aduanera para la industria nacional, creación de una industria semipesada, desarrollo de la infraestructura de medios de transporte, etc. – y capital social variable – creación y desarrollo de los servicios públicos: salud, educación, legislación social, etc. en un período de industrialización substitutiva de importaciones. Esta importancia de la acción económica del Estado se expresa en el rol central que tendrá el Ministerio de Economía entre los ministerios del área económica. Esta intervención acentúa la autonomía relativa del Estado respecto a las fuerzas sociales en lucha.

El sistema político se ha caracterizado por una gran estabilidad política. Chile ha tenido pocas constituciones en relación a otros países latinoamericanos y las reformas constitucionales por vía legal han jugado un papel real⁵. Ha posibilitado esta estabilidad, la temprana “republicanización” del país, la pronta marginalización del poder militar en la toma de decisiones políticas. En tales condiciones, los conflictos entre las clases dominantes son resueltos formalizando los procedimientos de resolución, en función de las relaciones de fuerza. Los conflictos con las clases trabajadoras, por el contrario, son resueltos inicialmente utilizando la represión. A partir de 1924, el conflicto es “regulado”, sometiendo a las organizaciones de los trabajadores a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo. La represión será utilizada sólo cuando se considera que hay transgresión a la legalidad. El régimen político se instituye a partir del compromiso de las diferentes partes contendientes y no en el consenso. El primero

consiste en un acuerdo entre las partes en función de las relaciones de fuerzas existentes; el segundo, por el contrario, expresa los intereses sociales en la universalización de una discusión, en una comunicación racional. El Estado intervencionista va a adoptar la forma de “Estado de compromiso” por lo menos a partir del Frente Popular entre sectores ligados al proceso de industrialización en detrimento de los sectores ligados al agro, en particular de los campesinos pobres.

En el imaginario de la derecha, este “Estado de compromiso” es confundido con una especie de democracia consensual que habría existido en el país hasta antes de 1973. Al romperse los consensos se habría precipitado la crisis de la democracia. Los gobiernos que comienzan en 1964, desde el demócrata cristiano, el de Unidad popular y el gobierno autoritario son gobiernos “que ignoran las alianzas e intentan lograr una transformación substancial de la economía y de la sociedad. Se trata de enfoques básicamente ideológicos que dificultan la construcción de consensos estables en torno de ellos”⁶. En general, el sujeto histórico activo en este tipo de enfoques son las elites. Estas como protagonistas centrales de la política constituyen la garantía más importante de la racionalidad de los procesos. La democracia es presentada como el régimen político en que el pueblo es controlado por minorías dirigentes, minorías que cuentan con la confianza de ese pueblo.

Ello tiene que ver con la confusión tradicional entre forma republicana del Estado y régimen democrático. Esta última, como gobierno de los ciudadanos por sí mismos, reposa sobre la participación popular directa en el ejercicio del poder lo que implica la rotación rápida de funciones y la articulación de este principio con el de igualdad: cada ciudadano participa en la discusiones públicas en virtud del principio del derecho de cada uno a tomar la palabra. La república, por su parte, implica la delegación

del poder en sus representantes y la división de poderes. El poder así delegado queda en manos de los representantes. El Estado chileno desde su constitución como estado nacional adopta la forma republicana, con delegación de poderes. La ejecución y el control de las políticas decididas por los delegados-representantes queda en manos de la burocracia administrativa.

La fuerza del Estado republicano radica en el desarrollo de una importante burocracia cuyos miembros son reclutados en las clases medias y bajas. Esta burocracia se autodefine como grupo medio, promotor del desarrollo nacional y guardián del interés general. Se estima que a mediados de los 60 son aproximadamente 256 000 empleados y obreros que reciben sus ingresos del Estado⁷.

La ideología del Estado es la del interés general. Este se presenta, por una parte, como interés común, como conjunto de intereses de las personas que componen la nación, inmanente a los intereses particulares y, por otra, como interés público, como interés de la comunidad política como tal, representada por sus órganos dirigentes. En tal sentido trasciende los intereses particulares. Este interés general se presenta como interés de la nación. El Estado realiza este interés arbitrando los intereses particulares. Es a partir del interés público como principio de orden y unidad que se organizan las representaciones dominantes de tal manera que los intereses particulares no tienen valor como tales sino que son percibidos en relación y por oposición al interés público. Es en nombre de este interés general que el gobierno de Alessandri restringe los salarios y que el gobierno de Frei se plantea una política de mejoramiento de las remuneraciones reales. Es el interés de la Nación el que exige la nacionalización de la gran minería del cobre en julio de 1971.

Todo funciona como si los gobernantes, los gobernados y los funcionarios del Estado compartieran la misma

representación del interés general. Mientras los primeros fijan el contenido político del interés general por su palabra legitimada por provenir de la elección popular, los segundos perciben el interés general como finalidad del Estado y los terceros se representan el interés general como el fundamento que justifica su función. En los discursos presidenciales, el Estado es presentado como el buen administrador de los intereses de la colectividad asegurando a los ciudadanos no sólo contra los riesgos del desorden público (cuestión predominante en Alessandri) sino que también contra los riesgos económicos y sociales (puntos resaltados por Frei Montalva). El interés general se presenta como principio de unidad de la nación y como principio de acción del Estado. Como principio normativo, el interés general permite justificar la imposición de una obligación o la fijación de una prohibición.

El poder del Estado aparece así como legítimo en la medida en que se ejerce en el interés de todos. Los gobernados consienten ese poder en la medida en que ese Estado actúa en el interés de todos. Como objetivo, es en vistas al interés general que los gobernantes deben actuar.

El Estado aparece así como organización formal del poder y por tanto como "Estado impersonal", situado por encima de las clases y de sus conflictos. El sistema político aparece dotado de una gran flexibilidad para absorber los conflictos sociales y para, al mismo tiempo, utilizar su fuerza represiva sin graves problemas de legitimidad. Sin embargo, esta representación de las cosas, parece diluirse en el período en cuestión, en la medida en que para las clases trabajadoras el Estado no parece estar actuando en pos del interés general, como interés de las grandes mayorías. Ha perdido por tanto en legitimidad, de ahí la necesidad de cambiar las relaciones de poder. Esta conciencia de la necesidad de cambios no es, sin embargo, privativa de las clases trabajadoras. En los distintos sectores sociales se

comparte la misma preocupación. Desde la derecha nacionalista con su "revolución nacional" pasando por la democracia cristiana con su "revolución en libertad" hasta la "revolución popular antiimperialista, antioligárquica y antimonopólica" del PC se habla de revolución.

La ciudadanía

La ciudadanía, como capacidad del individuo para determinar la política del Estado a través de elecciones populares, es reconocida desde los comienzos del Estado nacional. Hasta 1874, el sufragio es censitario. Al suprimirse entonces la condición de propiedad, el sufragio deviene universal. Sin embargo, la condición ciudadana es asequible sólo a los connacionales, de sexo masculino, mayores de veinticinco años (21 si son casados) y que supieran leer y escribir. Las mujeres, la mitad de la población del país, son excluidas de hecho. El poder androcrático se ejerce desde los primeros momentos de vida de Chile como nación independiente. Los analfabetos, que constituyen una gran mayoría de la población, son también excluidos de la toma de decisiones. En un país con una población mayoritariamente joven, el gobierno se encuentra permanentemente en manos de los hombres viejos.

Durante un siglo y medio de vida independiente, la mayoría de la población aparece privada de sus derechos ciudadanos. Las decisiones que incumben a la gran mayoría son tomadas por la pequeña minoría que representa a los hombres adultos que saben leer y escribir.

Las mayores posibilidades de acceso al sistema escolar permitirán ampliar la ciudadanía en un proceso lento y continuo que se extiende a lo largo del siglo XX. La ley 5.357 del 15.1.1934 otorga a la mujer el derecho a votar en las elecciones municipales. Este derecho será ampliado a las elecciones presidenciales y parlamentarias por la ley

9.292 del 8.1.1949. La participación política femenina experimentará desde entonces un aumento gradual, tanto en la inscripción electoral como en el voto.

La limitante de edad es modificada en 1925 bajando a 21 años y en 1970 a 18 años, lo que permitirá ampliar el cuerpo electoral. Desde 1971 pueden votar los analfabetos y los ciegos. Con la reforma electoral aprobada en 1957 se establece la obligación de la inscripción electoral. La carencia del certificado de inscripción electoral implicaba el tener que afrontar una serie de obstáculos administrativos, entre otros la imposibilidad de acceder a un empleo público. Todo ello determina modificaciones importantes en la composición y tamaño del electorado.

PARTICIPACION ELECTORAL

Año	Elección	Población Total	Inscritos	Insc. / Pobl. %	Votos emitidos
1932	Presidencial	4.485.000	464.879	10	343.892
1949	Parlamentaria	5.962.000	591.994	10	470.376
1952	Presidencial	6.310.837	1.105.029	18	957.102
1961	Parlamentaria	7.799.898	1.858.980	24	1.385.676
1964	Presidencial	8.386.634	2.915.121	35	2.530.697
1970	Presidencial	8.884.768	3.539.747	40	2.954.799
1973	Parlamentaria	10.019.525	4.421.000	44	3.687.105

Fuente: Servicio Electoral.

Es de destacar el leve aumento del número de votantes entre 1932 y 1949, el salto que se experimenta en las presidenciales de 1952, el ligero aumento hasta 1961 y un nuevo salto entre 1961 y 1964. Este aumento del número de electores es acompañado por una mayor participación electoral. En la década de los cincuenta vota el 70 % de los inscritos, en 1961 lo hace el 75% y en 1963, el 80%. Se pue-

de suponer entonces que la mayor participación electoral está dada por el nuevo electorado, compuesto fundamentalmente por mujeres y por electores de los sectores pobres. Es este electorado el que va a votar primero por un proyecto de cambios estructurales con Frei y después con Allende. Esta radicalización del electorado tiene que ver con la toma de conciencia de la existencia de profundas desigualdades y exclusiones económicas y sociales. Este pasaje de una participación restringida a una masiva es sinónimo de un proceso de "ciudadanización" de la política, proceso que no afecta directamente las esferas económica y social en que reinan las exclusiones y discriminaciones. En otros términos, se produce una contradicción entre la participación política de los trabajadores y la satisfacción de sus necesidades como seres sociales.

El presidencialismo

La unidad del Estado se expresa en un presidencialismo fuerte. El presidencialismo como forma de gobierno está lejos del "caudillaje" que le atribuyen los historiadores de derecha.⁸ El Presidente de la República es obedecido en la medida en que aparece como la personalización del interés público y como árbitro supremo de los intereses particulares. Su status está determinado por normas de carácter racional. Se diferencia así del caudillo al que se le obedece por razones de confianza personal en la revelación, heroicidad o ejemplaridad de sus actos.⁹

Este presidencialismo fuerte por lo general se impone al Parlamento, el que aparece como el terreno de negociación y de mediación de los intereses sociales particulares, pero quien decide en última instancia es el poder ejecutivo.

El régimen de partidos

El régimen de partidos se caracteriza por el multipartidismo con la presencia de una derecha ligada a los grandes intereses económicos, un centro representante de las clases medias, una izquierda en que coexisten dos partidos marxistas, alrededor de los cuales circulan algunos partidos menores y que asume la representación de las clases trabajadoras. Mientras tanto, el centro como la izquierda tienen conexiones políticas e ideológicas con sus homólogos en el campo internacional, la derecha se mantiene durante años en un largo y oscuro aislamiento que le impedirá desarrollar una sensibilidad a lo internacional.

Desde 1930 hacia adelante, seis fuerzas políticas más o menos permanentes componen el sistema de partidos: en la derecha, los partidos Conservador y Liberal, que desaparecen en 1967, para reaparecer como Partido Nacional; en el centro, Partido Radical, hegemónico hasta 1963, y desplazado por el Partido Demócrata Cristiano desde entonces; en la izquierda, los partidos Comunista y Socialista. Son estos seis partidos los que podrían calificarse como partidos "orgánicos", consubstanciales a un tipo de estructura social y política determinada.

Los partidos de derecha

Los partidos de derecha son organizaciones de notables, los que desde 1930 establecen alianzas tras un caudillo o una figura relevante, al que se le atribuyen cualidades al menos extracotidianas. Es por ello que el funcionamiento interno real de estos partidos parece escapar a toda regla discursivamente analizable. Estos partidos, esencialmente parlamentarios, evolucionan desde formas tradicionales de "organización" del electorado ("acarreo" de los trabajadores de sus fundos) a formas clientelistas, sobre

todo en las ciudades. Enemigos del sufragio universal y, por tanto, de la democracia, son por el contrario, republicanos y amigos de los gobiernos fuertes, tendiendo sus alas modernizadoras hacia el tecnocratismo.

En términos electorales, la derecha se mantiene después de los años 50 en alrededor de 30% de los votos, situación que se torna catastrófica en 1965, cuando los tres partidos de derecha, Acción Nacional, Conservador y Liberal alcanzan un menguado 13,12%. Ante el empuje reformista y su propio declinio, los partidos de derecha se ven obligados a renovarse, lo que implica la disolución de las antiguas estructuras y la conformación de una nueva —el Partido Nacional— en la que ocuparán un lugar importante los sectores más nacionalistas y neocorporativistas provenientes de Acción Nacional. La renovación política, organizacional e ideológica de la derecha le permitirá recuperar parte de su votación a fines de la década.

Los partidos de centro

El centro aparece conformado en los años en cuestión por dos partidos principales, el radical y el demócrata cristiano. El primero es un partido de origen parlamentario, en que la articulación vertical es relativamente débil, así como su disciplina interna. Sus organismos de base son las asambleas comunales, que funcionan como comité electoral local. Su base social se encuentra entre los trabajadores del sector público y de preferencia entre los profesores. En la medida en que el PR participa en el gobierno de derecha de Alessandri, ve esta base social erosionada por las políticas que sigue este gobierno. La huelga de los trabajadores de la educación en 1960 provoca una situación insostenible para el PR. A lo largo del período, su electorado disminuye de más en más, mientras experimenta divisiones hacia la izquierda (radicales de izquierda en 1964) y

hacia la derecha (Democracia radical). Afiliado a la Internacional Socialista, terminará por apoyar la candidatura de Salvador Allende.

El Partido Demócrata cristiano, por su parte, aparece como un partido de “jóvenes”, con una fuerte base en las Universidades. Su base social se amplía a partir de fines de los 50 con la incorporación de pobladores y más tarde de campesinos, sobre todo cuando el PDC llegue al gobierno.

Siguiendo el modelo de sus homólogos europeos, el PDC se estructura en una organización relativamente descentralizada tanto en lo político como en lo administrativo. Cada Departamento goza así de gran autonomía. El proceso de radicalización le afecta de manera diferente, sea que se trate de la Juventud, del Departamento de Profesionales y Técnicos, Sindical, Campesino o de Pobladores. Cabe señalar en este orden de ideas, la tensión existente entre el partido y los sectores tecnocráticos no afiliados al Partido y que en las diversas campañas electorales se constituyen como Comando de la Campaña. Mientras el primero ha existido una tendencia hacia una mayor radicalización, el segundo, al proponerse atraer a los “independientes”, se plantea en una perspectiva más moderada y cargada de tecnocratismo. Los conflictos entre “freístas” (provenientes del Comando) e independientes vinculados con Eduardo Frei Montalva con el aparato partidario serán una constante una vez que la democracia cristiana llegue al gobierno.

Receptiva a los aires de cambio, la DC hace suyas las ideas de la Alianza para el Progreso relativas a la necesidad del cambio económico y social en América latina. Plantea así un programa de profundas reformas tendientes a modernizar la sociedad burguesa, cambios que deberían evitar el surgimiento de movimientos revolucionarios que pudieran poner en cuestión las relaciones de poder exis-

tentes. Es apoyado en este sentido tanto por la democracia cristiana de Europa Occidental como por los americanos quienes les brindarán una suculenta ayuda en las elecciones presidenciales de 1964. La internacionalización de la política en términos concretos y no como simple y abstracto "internacionalismo" es inaugurada por la DC.

En las elecciones parlamentarias del 65, la DC obtiene una holgada mayoría absoluta de diputados (82), casi cuadruplicando la cifra obtenida en 1961 (23). En las elecciones parlamentarias de 1969, el PDC verá su votación disminuida. Por otra parte sufrirá una división primero cuando destacados intelectuales y dirigentes sindicales abandonan el partido y constituyen el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y, después a inicios del gobierno de la Unidad Popular, otro número no menos significativo se aleja para constituir la Izquierda Cristiana, partidos ambos que harán parte de la Unidad Popular.

A lo largo del período, el PDC se logra constituir como partido hegemónico, esto es como partido que no sólo dirige sino que además está consciente de su rol dirigente en el sistema político. Coadyuvan en este sentido el hecho de contar con la Presidencia de la República y la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría de las Federaciones de Estudiantes Universitarios, vastos segmentos del movimiento sindical y del campesinado, sobreponiéndose así a derechas e izquierdas. A ello cabe agregar la sensación de éxito en el plano económico en los primeros años de la administración Frei cuando se obtiene el mayor precio del cobre en el siglo (1966), ayudado por el flujo de dólares de la Alianza por el Progreso.

Los partidos de izquierda

En el período, comparten las preferencias mayoritarias de los trabajadores los partidos comunista y socialis-

ta, los que desempeñan una función tribunicia en el seno del sistema político. Se presentan como representantes de la clase obrera y del "pueblo" en el Parlamento ante los representantes de las otras clases sociales. Como representantes y delegados son al mismo tiempo mediadores. Al expresar los intereses de las clases populares por vías institucionales, estos partidos impiden el surgimiento de formas no institucionales. Contribuyen de esta manera a la integración (conflictual) de las clases trabajadoras a la sociedad, al contrario de lo que sostiene el discurso derechista para el cual los partidos populares tendrían un efecto desintegrador de la unidad nacional.

Estos partidos se estructuran en base al modelo societario, es decir, como asociación voluntaria inspirada en una compensación de intereses por motivos racionales (de fines o valores) o también en una unión de intereses con igual motivación. La relación entre estos partidos y movimientos sociales está "orientada racionalmente con arreglo a valores y racionalmente con arreglo a fines". El que obedece sólo lo hace en cuanto es miembro de la asociación y sólo obedece al "derecho". Los mandatarios populares son elegidos por procedimientos democráticos, de carácter universal.

En términos organizacionales, estos partidos se estructuran en función de la lucha social y no exclusivamente de la competencia electoral, la que constituye sólo una parte de su quehacer. Sus estructuras de base, "células" en el caso del PC y núcleos en el PS, son organizaciones destinadas a realizar acciones de "agitación" de las reivindicaciones populares y de propaganda de los principios socialistas. Sus dirigentes en general obedecen a un mandato vinculante aunque no necesariamente imperativo (en el caso del PS).

Un rasgo distintivo del sistema político chileno es la hegemonía incontestable del Partido comunista en el mo-

vimiento obrero y, por extensión, en la mayoría de los movimientos sociales de este período. Esta hegemonía se hará sentir incluso durante los primeros años de la dictadura para ser desplazada finalmente por la de la Democracia Cristiana hasta los primeros años del Gobierno de la Concertación. Esta hegemonía es tan fuerte que ni siquiera el surgimiento en su seno de una tendencia maoísta en 1963, que después se transformará en Partido Comunista Revolucionario, afectará las posiciones del PC.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria difiere de los anteriores en que surge en un período de auge del movimiento de masas. Sus orígenes son extraparlamentarios y su acción se orienta fundamentalmente a la lucha agitativa y propagandística destinada a preparar las condiciones para una revolución en que serían los trabajadores los que jugarían el rol principal. Organización altamente centralizada, su trabajo propagandístico y agitativo lo realiza a través de los Frentes revolucionarios: de Trabajadores, de Estudiantes y de Campesinos. Su peso sindical es casi nulo. A lo más llega a tener en 1972 un dirigente nacional en la CUT.

Partidos y sindicatos

El análisis histórico muestra que la figura que mejor representa la relación entre partidos y sindicatos es la de la simbiosis, como asociación estrecha entre entidades diferentes pero mutuamente benéfica para cada una de ellas. El sindicalismo, caracterizado por su fragmentación en pequeños sindicatos por industria, se ve constreñido, sobre todo a partir de las derrotas de las luchas obreras de la mitad de los años 50, a buscar el apoyo de los partidos de izquierda. Estos son, en el contexto político existente hasta 1973, el medio privilegiado para el sindicato de obtener ayuda para plantear sus demandas y estas se constituyen

en el medio para el partido para demostrar la justeza de su crítica al orden social. Esto contrasta con los análisis que consideran al sindicato como simple "correa de transmisión" del Partido o en términos puramente clientelistas.

De todas maneras, lo que se verifica en el período es que, en la relación compleja entre luchas sociales y aparatos, son siempre las primeras las que determinan las segundas. Son los movimientos sociales los que obligan a los partidos a tomar posición y a redefinir sus prácticas políticas. La situación de masificación, de radicalización, de generalización y de politización de las luchas sociales señalada más arriba determina la radicalización de los partidos "obreros" y lo "populares", llevándolos a retomar las reivindicaciones de los diferentes movimientos sociales como propias. Es bajo esta luz que pueden ser consideradas las relaciones entre movimiento obrero y Unidad Popular.

III

Unidad Popular y Movimiento obrero

La Unidad Popular llega al gobierno sobre los hombros de los diferentes movimientos sociales y, particularmente del movimiento obrero. Este primer momento de identificación será seguido por uno de diferenciación progresiva y, más tarde, por la autonomización del movimiento en relación a la Unidad Popular.

La identificación movimiento obrero-Unidad Popular

El Programa de la Unidad Popular recoge todas las reivindicaciones propuestas por el movimiento obrero. Este, por su parte, hace suyas prácticamente todas las pro-

puestas propiamente políticas de la Unidad Popular, guardando siempre su independencia.

En diciembre de 1970 se firma el convenio entre la CUT y el gobierno de la UP para el reajuste de 1971. El Congreso de la Federación de Trabajadores bancarios por su parte apoya la nacionalización de la banca. La IX Conferencia de la CUT respalda la nacionalización de los monopolios, la reforma agraria y la nacionalización del Cobre. En el primer congreso mapuche que se realiza en marzo de 1971, se solicita la restitución de las tierras usurpadas y una nueva ley indígena. En mayo de ese año, la CUT por su parte llama a formar Comités de Vigilancia de la Producción.

Para aplicar su programa, la Unidad Popular, a diferencia del populismo, debe apelar a la fuerza organizada de los trabajadores. Para conservar este apoyo, el gobierno debe detener la dinámica represiva del Estado contra los trabajadores y los otros sectores populares y, por otra parte, legitimar las reivindicaciones populares en nombre del interés general de la Nación. El interés de los trabajadores, que hasta ese momento es considerado sólo como interés de una parte de la sociedad, pasa a transformarse en interés nacional. Ello significa al mismo tiempo, deslegitimizar las pretensiones de los intereses de los sectores dominantes como antinacionales.

En cumplimiento de su programa, el gobierno pone en marcha una política de redistribución de los ingresos basada en el aumento de los salarios y la fijación de precios. El índice real de remuneraciones tiene así en 1971 una variación anual de 25,3 % respecto a 1970. El aumento del poder de compra de los trabajadores reactiva la industria lo que obliga a la plena utilización de la capacidad productiva y a la absorción de la cesantía. En 1971, la tasa de desocupación es de 3,8%, en 1972, de 3,1% y en 1973, de 4,8%. A partir de 1975 y a lo largo de todo el gobierno dictatorial esta tasa sobrepasará el 10%.

Al mismo tiempo, los trabajadores organizados son invitados a participar en las estructuras de gestión del Estado. En enero de 1971, una comisión bipartita CUT-Gobierno estructura la participación de los trabajadores en las empresas estatales. Los dirigentes sindicales pasan a estar presentes en la dirección de los organismos de seguridad social y en los organismos de planificación de la economía. En las empresas del Área de Propiedad social se instituyen formas de cogestión Estado-trabajadores.

La legitimación de las demandas de los trabajadores por las altas esferas del Estado constituye un acicate para desarrollar sus luchas, las que por lo general culminan con la ocupación de la empresa. En agosto de 1971 hay 658 predios ocupados, 339 industrias, 175 predios urbanos, 34 planteles educacionales y 43 poblaciones ocupadas¹⁰. Esta actividad ya en el mes de junio es fuertemente criticada por la UP, la que califica las ocupaciones como ilegales e indiscriminadas, contrarias por tanto al "proceso".

El asesinato del ex-ministro demócrata-cristiano Edmundo Pérez perpetrado por miembros de la Vanguardia Organizada del Pueblo, un grupúsculo de la izquierda extraparlamentaria, aumenta el distanciamiento entre la UP y la DC. Esta anuncia en septiembre el endurecimiento de su política. Es entonces que aparece la figura del general A. Pinochet quien es designado jefe de la zona de emergencia y establece el toque de queda. La CUT llama a un acto en contra del terrorismo y la sedición el que es ampliamente seguido por los trabajadores de la capital.

La etapa de la diferenciación

Frente a los éxitos políticos del gobierno de la Unidad popular, la burguesía responde por la especulación financiera, el mercado negro, el sabotaje a la producción y el aumento de precios. Esto, ligado al agotamiento de la

política económica a corto término del gobierno, determina la radicalización de las reivindicaciones de los trabajadores. Tanto el número de huelgas como el de huelguistas aumenta. Como los salarios de las empresas nacionalizadas son más altos que los del sector privado, los trabajadores de este último exigen la nacionalización de las empresas de este sector. La lucha por conquistas económicas deviene lucha por el control de la empresa. El sagrado derecho de propiedad de los patrones es cuestionado. La fuerza de movilización de los trabajadores es tal que el gobierno debe sobrepasar el número de expropiaciones previstas en el programa.

La radicalización de la base obrera y la descentralización progresiva de la actividad política determina la aparición de una izquierda obrera, constituida por trabajadores que, sin romper sus lazos organizacionales e ideológicos con sus partidos, desarrollan una actividad política independiente. Para ellos, la respuesta política a la baja de salarios se encuentra en la propia actividad del movimiento obrero. Es en ese contexto que nace el primer Cordón Industrial en junio de 1972. El Cordón es una asociación de sindicatos, agrupados sobre una base territorial. Cabe señalar que ningún partido había planteado desarrollar esta forma organizacional. La forma propiciada por el MIR es el Comando comunal, integrado por sindicatos, pobladores, juntas de vecinos y otras organizaciones sociales de la comuna, mientras que los Cordones deberían subordinarse a la CUT¹¹.

El Cordón Industrial es el resultado de un conjunto de procesos moleculares de unificación interna del movimiento obrero. En primer lugar, unificación de los trabajadores de una misma unidad productiva por encima de su calidad de obrero o de empleado. En segundo lugar, unificación de los trabajadores de una misma rama de la producción. Estos dos procesos constituyen una forma de su-

peración "exterior" de la división social del trabajo. En tercer lugar, unificación de los trabajadores por encima del capital que los explota: unión de los trabajadores de grandes, medianas y aún de pequeñas empresas, lo que cobra mayor significado aún si se considera que estos últimos no pueden sindicalizarse. En cuarto lugar, unificación de los contenidos "económicos" y de los contenidos "políticos" de las luchas. El Cordón industrial expresa así no sólo los aspectos "económico-corporativos" de la actividad obrera sino que también los aspectos propiamente políticos.

En octubre de 1972, la burguesía lanza la primera ofensiva generalizada para detener la movilización de los trabajadores. La falta de política del gobierno frente a este desafío replantea la lucha como enfrentamiento directo entre capital y trabajo. A la huelga del capital que les impide su sobrevivencia como trabajadores, estos responden haciendo marchar las empresas cerradas y exigiendo su paso al área de propiedad social. Esta iniciativa de normalización de las actividades productivas nace de la base obrera misma. Los partidos "obreros" y la CUT sólo reaccionan más tarde. Durante todo el paro patronal, las fábricas funcionan sin patrones y sin gerentes y los establecimientos hospitalarios sin médicos.

La experiencia de los cordones se extiende por las principales ciudades. Si la actividad política hasta ese momento había sido propia de los grupos organizados, la radicalización de la situación hace que cada hombre y cada mujer pase a discutir en el espacio público. La actividad política se descentraliza a un grado no conocido hasta entonces. Una verdadera democracia popular comienza a conformarse. La democracia de "todo el pueblo" amenaza las formas representativas y delegativas de hacer política. La dinámica de socialización de las luchas se difunde a lo largo de todo el territorio y vuelve multiplicado al interior

de las empresas. La "participación popular" comienza a transformarse en "poder popular".

La salida de la "crisis de octubre" la encuentra el gobierno de la UP restableciendo los organismos de mediación. Se llama a los generales a formar parte del gobierno, lo que es equilibrado con la presencia de dos representantes de la CUT, un comunista y un socialista. Las ocupaciones de fábricas son prohibidas y las empresas en manos de los trabajadores deben ser devueltas a sus propietarios. La nueva política de precios disminuye los salarios reales de los trabajadores. Todo ello debería permitir el calmar los ánimos patronales e iniciar nuevas negociaciones entre el gobierno y la oposición de derecha.

Esto constituye el motivo del primer enfrentamiento entre los trabajadores de izquierda y el gobierno de la Unidad popular. La proximidad de las nuevas elecciones parlamentarias desplaza sin embargo, el eje de la lucha del control de la fábricas al dominio electoral. Los trabajadores votan mayoritariamente por la Unidad Popular. Las clases medias, por su parte, votan por los partidos de centro y de derecha. La situación es tal que ni la derecha obtiene la mayoría suficiente para lograr la dimisión del Presidente Allende ni tampoco la Unidad Popular como para imponer su programa. Toda posibilidad de salida institucional a la crisis del sistema se cierra.

En los días siguientes, es la lucha abierta la que se impone por encima del compromiso. Las acciones terroristas de la derecha aumentan en número y en intensidad, perpetradas por miembros del Comando Rolando Matus y de Patria y Libertad. Lo que Mattelart llama "la línea de masas de la burguesía"¹² se desarrolla fuertemente llamándose a un nuevo paro de los distintos sectores empresariales.

Una ola de huelgas se desencadena en abril de 1973. Los partidos de la UP adoptan una posición hostil frente a

estos conflictos que se les escapan, conflictos denunciados como "economicistas" y "espontaneistas". Exigirán asimismo la sumisión de los cordones industriales a la CUT. La misma actitud adoptan frente a una nueva huelga en las minas de cobre. Incluso las acciones del Presidente Allende tendientes a buscar una solución al conflicto es condenada por los partidos de la UP¹³. Después de algunas semanas, el movimiento es recuperado por los partidos de oposición que van a utilizar el conflicto para sus propios objetivos. Esto implica la división del movimiento obrero: los trabajadores del cobre que han sido desde los años 50 el sector de punta del movimiento obrero quedan escindidos del sector industrial.

Las condiciones se tornan desfavorables para la actividad obrera. Ante el nuevo intento de golpe de estado del 29 de junio, los trabajadores ocupan las fábricas. El "cordón industrial" parece ser la única organización capaz de asegurar la dirección de las luchas sociales y la defensa de la democracia.

Frente a ello, ni el gobierno ni los partidos parecen tener política. Son desbordados por las luchas abiertas de clases. Mientras que la derecha utiliza "todas las formas de lucha" entre las cuales el terrorismo es una de las principales, la Unidad Popular continúa intentando reducir el conflicto a sus dimensiones puramente político-institucionales, insistiendo en la negociación. En circunstancias que la lucha es abiertamente "social", la UP continúa haciendo política pura. Se priva así de la principal fuerza social que le había permitido acceder al gobierno.

En lo que respecta al bloque dominante, cabe señalar la profundización de las diferencias entre una burguesía internacionalizada y una burguesía ligada al mercado interno. Esta división desemboca en una crisis de dirección que será provisoriamente resuelta por la creación de una alianza entre los partidos de derecha y de centro, el CODE

en julio de 1972. Esta crisis continuará hasta después del golpe de Estado sin que el conflicto sea resuelto. El único lazo que permite la unificación entre los dos sectores es el enemigo común personificado en la Unidad Popular y en el odio de ambos sectores hacia las clases trabajadoras y el "bajo pueblo". El motor de la alianza es "externo", lo que muestra su incapacidad para encontrar una solución en su propia actividad como clase social. La única salida que tienen las clases dominantes es la que les pueda ser proporcionada por una fuerza externa. Esta la encuentran, por una parte, en la intervención norteamericana y, por otra, en las Fuerzas Armadas, como administradoras del monopolio de la fuerza del orden burgués.

La autonomización de las Fuerzas Armadas

Respecto a estas últimas, cabe señalar el alto grado de autonomía que progresivamente alcanzarán en el sistema político. Un primer hito está constituido por la creación del Consejo Superior de Seguridad Nacional que permitirá a los militares participar como cuerpo institucional en la toma de decisiones relativas a los problemas de seguridad externa e interna, rol que se ejerce realmente durante el gobierno de Frei. Sin embargo, lo que más contribuye a separar las FF.AA. de la Nación es la formación de un gran número de oficiales en las escuelas del Pentágono.

Por su parte, el programa de la UP al considerar la integración de los militares a las tareas de desarrollo nacional supone el reconocerlas como fuerza política específica. En el Estatuto de Garantías Constitucionales que la DC impone a la UP se refrenda la autonomía de las FF.AA. al atribuirseles constitucionalmente " la misión de velar por la seguridad nacional"¹⁴, lo que queda establecido en la Reforma constitucional aprobada por el Congreso el 22

de octubre de 1970. Las fuerzas armadas pasan a ser la "garantía de nuestra convivencia democrática". Su autonomía queda legitimada por la ley en contraposición a lo establecido en la Constitución de 1925 en lo relativo a la obediencia al poder político.

Más tarde, en octubre de 1972, el Presidente Allende invita a los generales a hacer parte de su gabinete como una salida a la crisis, lo que implica el reconocerlos como sujeto político. Por otra parte, la ley 17 798 del 21.10.1972 de control de armas permitirá a los militares a hacer allanamientos sin orden judicial. Esta ley no será aplicada ni a los terroristas de derecha ni a los diferentes sectores de derecha en subversión abierta, como los camioneros, pese a lo que establece su artículo 8° en lo que se refiere la organización, financiamiento y/o ayuda a la creación o funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidos militarmente organizados. A partir de junio, comienzan los allanamientos a las industrias tomadas y a las sedes de sindicatos y partidos de izquierda. Es el punto de "no retorno" del proceso de militarización institucional de la política.

El golpe militar

El punto más alto del proceso de autonomización de las FF.AA. se alcanza cuando estas comienzan un proceso de depuración interna para reforzar su unidad. Para ello se necesita un "enemigo interno". Como tal, se señala a los militares constitucionalistas. Mientras a unos se les fuerza a renunciar a sus cargos, a otros, en particular a los marinos constitucionalistas, se les acusa de deliberación por haber contactado a dirigentes del sector "revolucionario" de la UP. Por ello, son encarcelados y torturados. La oleada represiva sigue en contra de los mapuches y de los campesinos que ocupan predios. El control que las Fuer-

zas Armadas alcanzan es significativo: una decena de provincias se encuentran en sus manos. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 constituye la culminación del proceso de autonomización de las Fuerzas Armadas descrito.

Con la muerte heroica del Presidente Allende y la destrucción del Palacio presidencial por las Fuerzas Armadas, caen los símbolos de la República. Los militares y carabineros constitucionalistas que aún quedan en el interior de los cuarteles son eliminados.

El golpe militar permitirá a la burguesía resolver el problema de la dirección política del país y disponer de la fuerza militar necesaria para aplastar el movimiento social de los trabajadores. Los militares restablecen la tranquilidad y el orden burgueses: miles de muertos, de torturados, de desaparecidos y de exilados es el resultado. Se impone la paz de los cementerios.

La disciplina en el trabajo es restablecida, el orden de los patrones, el látigo del capital en el seno de la empresa se impone de nuevo gracias a la fuerza militar del Estado. Esto no será sin embargo suficiente. Será necesario eliminar todas las condiciones que habían permitido hasta entonces la producción y la reproducción de las luchas de los trabajadores, condiciones que les habían permitido constituirse como sujeto social. Para ello, grupos de economistas y de empresarios han estado trabajando desde antes del golpe de Estado para terminar imponiendo una nueva política económica basada en supuestos monetaristas.

El Estado militar

El nuevo régimen que surge del golpe de Estado implica una nueva forma de organizar la hegemonía de los grupos dominantes. En primer lugar, las Fuerzas Armadas se constituyen en organización política de las clases

dominantes, "partido militar". La soberanía residirá en las Fuerzas Armadas y no en el pueblo. A partir de la noción de "enemigo interno" se excluye a todos aquellos que puedan competir con los militares. Los centros de poder real del Estado son controlados por las Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, la estructura del poder se concentra en la cima del Estado y la división de poderes prácticamente desaparece. Es cierto que el poder judicial sigue manteniendo formalmente su autonomía, pero en términos prácticos, se subordina a los militares durante todo el período. Como es el Ejército quien ocupa el lugar principal entre las distintas ramas de las FF.AA., subordinará a estas, imponiendo una fuerte concentración del poder en manos del comandante en jefe quien logrará hacerse nombrar presidente de la República.

En tercer lugar, se implanta un ordenamiento jurídico que, más que normativo es "prerrogativo": los titulares del poder estatal se autoatribuyen disposiciones y prerrogativas globales. La dictadura militar, al contrario de los regímenes fascistas, en que hay una organización política de los sectores medios, partido que actúa como órgano de dirección y de movilización de masas, desarrolla al máximo los aparatos represivos, utilizando el miedo como medio de reorganización de la sociedad. Mientras en los regímenes fascistas, la policía política depende del partido, en la dictadura militar esta es organizada por los militares mismos y depende de estos.

Otro rasgo a señalar es la fusión completa de los aparatos ideológicos y administrativos del Estado con un empleo bastante intensivo de todos los medios de comunicación social.

En función de la desregulación económica, el lugar central dentro de los ministerios del área económica lo ocupará el Ministerio de Finanzas. La regulación será eminentemente monetaria.

La legitimidad del régimen si bien aparece fundada inicialmente en el interés de la nación, es la teoría de la Seguridad Nacional la que deviene la ideología operacional que permite la reordenación del aparato de Estado. Sin embargo, como ideología oficial del régimen, lo que se exhibe es una concepción remozada de la doctrina del bien común, la que se expresará tanto en la Constitución que se dictará en 1980 como en diversos documentos oficiales. La acción represiva se justificará por la doctrina de la Seguridad Nacional y la política económica por la teoría neoliberal. La articulación entre estas tres ideologías cambia de acuerdo a las relaciones de fuerza en el seno del aparato militar.

Los partidos políticos

En lo que se refiere al bloque dominante, el problema principal para los militares es evitar los conflictos entre sus diferentes fracciones. Por decreto ley del 11.10.1973 se suspende la actividad de los partidos de derecha y de centro que podrían sin embargo continuar administrando sus bienes. En concordancia con esto, el Partido Nacional y Patria y Libertad deciden su autodisolución a fin de ayudar al gobierno a restablecer la unidad nacional. En general, el personal político de la derecha se integra a la administración del Estado en todos los niveles y sobre todo en el caso de los grupos paramilitares, en la DINA. En 1976, el régimen intenta crear un movimiento civil de apoyo al régimen, sobre postulados nacionalistas, el Movimiento de Unidad Nacional que sobrevive por poco tiempo.

El PDC, después de haber visto frustradas sus esperanzas de recibir el gobierno de manos de los militares, toma progresivamente el camino de la "independencia crítica" y comienza a actuar en una semiclandestinidad. Los raros dirigentes, como Bernardo Leighton, que habían osa-

do desde el primer momento condenar el golpe de Estado, se ven obligados a tomar el camino del exilio. La política de shock aplicada por los militares en 1975 marca el punto de ruptura entre ese partido y el régimen aun cuando algunos dirigentes continuarán al servicio de la dictadura, los que constituirán más tarde el llamado Movimiento social-cristiano. A esta ruptura, el régimen responde despidiendo a los trabajadores demócrata cristianos de los servicios públicos y municipales. Como el tono de la DC aumenta, el gobierno militar disuelve los partidos políticos puesto que su actividad "estimula la confrontación ideológico-partidista lo que es contrario a la integración armónica de todos los sectores de la Nación".¹⁵

Los partidos de izquierda

Como para los militares golpistas no hay autonomía obrera sino que a lo más simple manipulación de los trabajadores por los "agitadores marxistas" es necesario eliminar estos últimos para restablecer el orden. El cuadro legal para proceder a esta eliminación es el Decreto-Ley n° 77 que declara que el marxismo atenta en contra de las tradiciones nacionales y que, por tanto, es inconciliable con "la unidad nacional y el carácter profesional y jerárquico de las FF.AA.". Se prohíbe y declara ilícitos los partidos Comunista, Socialista, Radical, Unión socialista popular, Izquierda cristiana, MAPU y Acción Popular Independiente así como toda otra organización marxista. Sus bienes les son confiscados. Toda infracción sería castigada con prisión y relegación así como prohibición para ocupar puestos en la administración pública, la enseñanza o las empresas con participación mayoritaria del Estado.

La represión diezma los partidos populares en todos sus niveles. Los militantes y dirigentes que quedan vivos deben aislarse de sus bases, tomar el camino de la clan-

destinidad o del exilio. Las estructuras internas, cuando las circunstancias lo permiten deben adaptarse a las nuevas condiciones: compartimentación estricta, suspensión de la democracia interna, centralización de las decisiones en las más altas cimas del aparato partidario, cooptación por el círculo dirigente de los cuadros reemplazantes, designación de los dirigentes del nivel inferior por los del nivel superior, etc. La actividad de los partidos y grupos políticos estará centrada en la sobrevivencia misma como organización. El fin del partido pasa a ser el partido mismo. En estas condiciones, el corte de los partidos de su base social es inevitable.

Por otra parte, al cerrar los militares todos los espacios institucionales de representación, de negociación y de mediación políticas cierran el espacio público e impiden la formación de una opinión pública independiente. La sociedad burguesa se niega a sí misma en uno de sus rasgos fundamentales. Los militares favorecerán, por el contrario, un neo-corporativismo institucional y desarrollarán formas de neo-clientelismo vertical. Los Secretariados de la Mujer, de la Juventud y de los Gremios permitirán a los militares establecer relaciones directas con las diferentes organizaciones sociales. La actividad asociativa popular es primero suspendida y después severamente controlada y reglamentada. En estas condiciones, la actividad tradicional de los partidos populares se encuentra sin un campo propicio de acción.

Al mismo tiempo que se suspenden las actividades sindicales, cientos de dirigentes sindicales son encarcelados, torturados y/o ejecutados. El 17 de septiembre, la dictadura decreta la disolución de la CUT y la incautación de sus bienes. La congelación de sueldos y salarios se impone mientras se suspenden las negociaciones colectivas. El 1° de mayo de 1974, los militares anuncian la apertura de Oficinas del Trabajo, dependientes del Ministro del Inte-

rior. En cada provincia habría comités provinciales de coordinación de asuntos del trabajo en el que participarían militares y dirigentes sindicales. Se plantea asimismo un Estatuto de la empresa y la constitución de una Escuela sindical nacional. Estas medidas, emanadas de los sectores corporativistas de Carabineros y de la Fuerza aérea no alcanzan a desarrollarse suficientemente debido a la debilidad de las fuerzas que lo impulsaban. Cabe sin embargo, señalar que estos proyectos van a permitir a algunas de las organizaciones sindicales que aún se mantienen en pie, iniciar una discusión sobre temas sindicales que es mirada con suspicacia por las autoridades, para ser prohibida más tarde.

Sin embargo, lo que parece políticamente más importante es el conjunto de medidas que el capital adopta para solucionar su propia crisis de acumulación y para impedir la reconstitución del movimiento social de los trabajadores.

A la masificación de las luchas de los trabajadores, el capital responderá con la participación selectiva en el empleo, en otros términos con la exclusión por la cesantía. Esta se transformará en uno de los componentes estructurales de la nueva fase de acumulación del capital. Se crea así un verdadero ejército industrial de reserva, que le permitirá al capital quebrar la rigidez que la clase obrera había impuesto en el período precedente. La competencia entre trabajadores es estimulada tanto en el interior de las empresas –cada uno procura trabajar más y más rápido que su colega para no perder su empleo– como al exterior –entre los que no tienen un empleo y los que lo tienen.

Sin embargo, esto no significa que la fuerza de trabajo quede librada a su suerte. La cesantía y su reverso, el aumento de la competencia entre trabajadores provocan al final “indisciplina” laboral se crea primero el Programa del Empleo Mínimo en 1975 y más tarde el Programa para

Jefes de Hogar. Estos programas, además de lograr el efecto disciplinario buscado, permitirán al gobierno ahorrar en el período 1975-1981 el equivalente a 1.348,8 millones de dólares. Como "los trabajos realizados en el PEM están constituidos principalmente por tareas destinadas a la ayuda o al desarrollo social, se puede sostener que los beneficiarios del PEM, los más pobres entre los pobres han aportado una contribución extraordinariamente elevada al desarrollo social de Chile. Esta característica de redistribuir los ingresos en el interior de las clases populares sin tocar los ingresos de los sectores más pudientes, parece constituir una característica del régimen militar"¹⁶

Nuevas formas salvajes de flexibilidad del trabajo terminan por imponerse. El trabajo precario aparece como la forma dominante. Las grandes concentraciones de trabajadores en las grandes empresas declinan, siendo remplazadas por unidades más pequeñas y más manejables en que el control del capital sobre el trabajo vivo es mayor. Se inicia asimismo un proceso de deslocalización industrial. Las políticas llamadas de "shock" permitirán barrer los sectores más atrasados del capital.

A la radicalización de las luchas, el capital responde con la privatización de todas las actividades. Primero, por la desnacionalización de los sectores nacionalizados durante la Unidad popular, en seguida por el paso al sector privado de sectores tradicionalmente en manos del Estado. Sectores tales como la salud y la seguridad social son privatizados transformándose en un apetitoso negocio para los grupos económicos. El sistema de seguridad social basado en la solidaridad colectiva es reemplazado por un sistema de capitalización individual, con lo que toda posibilidad de debate público sobre estos problemas es cerrada.

A la politización de las luchas, el capital responde con la liberalización de los mercados. A las demandas de los

trabajadores por mejores salarios (lo que aumentaría los costos de las empresas), el capital responde con la importación de mercancías del mismo género. Gracias a este procedimiento, los conflictos son ahogados en el embrión. A lo más será posible negociar algunas mejoras a veces colectivamente y las más de las veces individualmente. El marco nacional de las luchas es sobrepasado. La internacionalización de la economía es el medio que permite desarticular el conflicto social.

Estas medidas son acompañadas por la reestructuración taylorista ("salvaje") de los procesos de trabajo. Esto significa profundizar la separación entre trabajo de dirección y de ejecución y una acentuación del control del capital sobre el trabajo, acompañado todo por la externalización de muchas actividades. El capital experimenta su propia "renovación" volviendo a las formas de sus primeros tiempos: trabajo a domicilio, salario por piezas, etc. El proceso de descentralización del trabajo se acentúa, mientras que los movimientos de centralización del capital se acentúan.

La reestructuración económica es la respuesta política del capital al ascenso de las luchas de los trabajadores. Decir respuesta política es decir respuesta del Estado y por el Estado, como forma política del capital social. El capitalismo no puede funcionar sin Estado.

Reestructurándose, el capital desorganizará el movimiento obrero y rearticulará la fuerza de trabajo en función de sus propias necesidades de valorización, quebrando las antiguas solidaridades de clase. La clase obrera, al perder su centralidad, deja de ser el modelo de referencia para los otros movimientos sociales. Más aún, la noción misma de clase obrera pierde toda referencia empírica. La definición de la clase obrera de la II Internacional, considerada como clase de los trabajadores asalariados que producen bienes materiales, es sobrepasada por la práctica social misma. A lo más se podría hablar de neo-proletaria-

do difuso, post-industrial, constituido no solamente por los trabajadores precarios, sino que también por todos aquellos que son permanentemente eliminados y descalificados por los procesos de modernización en marcha. Se puede incluir también esos trabajadores sobrecalificados en relación al empleo que ejercen y que se encuentran constreñidos a la no utilización de sus capacidades esperando la cesantía. Para este nuevo proletariado, el trabajo es siempre contingente. El neo-proletario aprende siempre nuevos oficios en que no trabajará jamás o será empleado en empleos sin ninguna utilidad social. Como no hay identidad en el trabajo, el sentimiento de pertenencia a un colectivo constituido en torno al trabajo tampoco existe.

Estas transformaciones han determinado al mismo tiempo modificaciones profundas de la antigua clase patronal. Los viejos patrones, verdaderos capitanes de fábrica, ligados a un tipo particular de capital (industrial, agrario, bancario), interesados por un cierto tipo de producción y que tenían una relación directa y paternalista con "sus" trabajadores han sido remplazados por una nueva generación de "jefes de empresa". Esta nueva clase no está interesada en lo que se produce sino que directamente en la "rentabilidad" de la empresa. Si la empresa no produce suficientes beneficios, se la cierra. El "patrón" ha pasado a ser "empresario", simple agente del capital transformado a su vez en capital genérico e indiferenciado.

Trabajo genérico por una parte, capital genérico por otra: las nuevas condiciones creadas en respuesta a los empujes democráticos de los años 60-70 han cambiado los actores del conflicto, sus razones y motivaciones. Sin embargo, ello no invalida el hecho de que en los años 60 son miles de hombres y de mujeres los que se levantan luchando por mayor justicia social, en un movimiento democratizador racionalmente fundado.

NOTAS

1. Angell, Alan "Partidos políticos y movimiento obrero en Chile".- México: Era, 1974.- p. 134
2. El Mercurio, 4 | 4 | 1964
3. Angell, op. cit. P. 87. Estos datos han sido constituidos a partir de diferentes fuentes.
4. Cuestión señalada entre otros por Barrera, Manuel "Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile" en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n° 9, septiembre de 1971 y Angell, op. cit. p. 86 y ss.
5. Morodi, Raúl "Política y partidos en Chile. Las elecciones de 1965".- Madrid: Taurus, 1968
6. Foxley, A. "Algunas consideraciones para una democracia estable. El caso de Chile" en *Mensaje*, n°316.- p. 24
7. Cademártori, José "La economía chilena".- Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1968.- p. 121
8. Góngora, Mario "Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX". Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1990.- p. 291
9. Weber, Max, "Economía y sociedad".- México: Fondo de Cultura Económica, 1992.- p. 173
10. CETRA | CEAL "Cronología ampliada del movimiento de trabajadores chilenos" en *Cuadernos de Educación Sindical*, N°1, abril de 1990.p. 30
11. Sobre esta discusión, ver las reproducciones de artículos de la época en Silva, Miguel "Los cordones industriales y el socialismo desde abajo". Santiago de Chile: Imprenta Lizor, 1997
12. Mattelart, Armand "El gremialismo y la línea de masas de la burguesía chilena" en *Chile bajo la junta*. Bilbao: Zero, 1976.- p. 104 y ss.
13. Un análisis pormenorizado de esta huelga se encuentra en Bitar, Sergio y Pizarro, Crisóstomo "La caída de Allende y la huelga de El Teniente".- Santiago de Chile: Las Ediciones del Ornitorrinco, 1986
14. El Mercurio, 24 | 9 | 1970
15. Decreto Ley n°1097 del 12 de marzo de 1977
16. Ruiz-Tagle, Jaime "Los trabajadores del Empleo mínimo".- Santiago de Chile: Programa de Economía del Trabajo.- p. 42

LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS GOBIERNOS DE FREI MONTALVA, ALLENDE Y PINOCHET

GONZALO PIWONKA

DERECHOS HUMANOS BAJO EL GOBIERNO DE EDUARDO
FREI MONTALVA: 1964-1970

Como se expuso en el Capítulo correspondiente al “Balance Historiográfico sobre los últimos 30 años de la Historia de Chile”, el período presidencial de Frei Montalva se puede dividir en dos etapas: una que va desde 1964 a 1967, en que se realizan importantes reformas, algunas de carácter radical, y –en general no hay infracciones a los Derechos Humanos fundamentales–; y otra de 1967 a 1970, en que se frena el proceso de reformas “llegándose a un gobierno de administración”, desde el punto de vista político, y se incurre en violaciones –aunque lejos de ser sistemáticas– de tales Derechos. Centraremos nuestro análisis, obviamente, en esta segunda mitad de su presidencia, sobre la base de lo expuesto por los Obispos Católicos chilenos.

1.- La Conferencia Episcopal Chilena y su constatación de la marginalidad de los sectores populares en la titularidad de derechos civiles, sociales, económicos y educacionales: 1967-1970.

La década de los sesenta se caracterizó en nuestra nación por un incremento del enfrentamiento social; situación que en su etapa final adquiere una progresión

geométrica. De allí que como toda violencia social implique el quebrantamiento de los Derechos *adquiridos* fuesen siendo éstos vulnerados, asimismo, *in crescendo*. Los hechos tuvieron un desarrollo más dinámico que cualquiera formulación teórica que los subsumiese en una explicación programática o doctrinaria relativamente coherente. En Europa, a raíz del *calentamiento* de la guerra fría, comienza a abrirse el campo a una regulación de los Derechos Humanos, propiciada por las potencias occidentales, pero que es de resorte de organismos privados o pseudo privados y no de los Estados. La brutal guerra de Viet Nam no daba autoridad moral alguna al Oeste por entonces.

El período final del presidente Eduardo Frei Montalva, en cuanto dice relación con los Derechos Sociales, fue analizado por varios documentos emanados de un testigo que, desde la posición política del Presidente, es de suyo abonado: la Conferencia Episcopal Chilena. Tomaremos sus documentos como fuente incontestable y que por concepto alguno puede considerarse como *parcial o interesada* en tergiversar los hechos ocurridos en la segunda mitad de su gobierno.

Así, uno de esos documentos producido a comienzos de 1967, consigna que “se percibe a la sociedad chilena en un proceso de profundos cambios sociales y por ello mismo en conflicto”. En otro de sus informes los obispos chilenos dicen: “Chile vive una crisis de crecimiento, un proceso de profundo cambio social que es necesariamente conflictivo”. Según el episcopado católico, en 1967, “no sólo están cambiando las estructuras e instituciones socioeconómicas, sino también la mentalidad y sensibilidad del pueblo quien está alcanzando una mayor participación electoral y tomando conciencia de las posibilidades del desarrollo, y aspiraciones a un nivel más alto de vida”¹

Junto a esta mirada relativamente optimista, los mismos pastores constatan una serie de situaciones en nada

positivas. Señalan que "en nuestro país se está viviendo una situación de injusticia que ha venido a llamarse por todos de *violencia institucionalizada*". Esta violencia "habitualmente se está ejerciendo con el pobre; se ejerce cuando *el pobre no encuentra trabajo, cuando debe hacer largas colas en las oficinas públicas, cuando los hijos se enferman por mala alimentación, cuando no es oído por la justicia*"². Por ello piensan que no se puede hablar de comunidad nacional más que en sentido provisorio: "mientras un tercio de habitantes de la patria no reciban o no estén en condiciones de recibir los beneficios elementales de salud, seguridad y cultura". Asimismo, se constatan las severas condiciones de marginalidad en que viven muchos sectores populares de nuestras ciudades y no pocas regiones rurales.

La Conferencia, en otro testimonio, señala que "debemos confesar que durante muchos años, venimos arrastrando el grave problema de *las minorías étnicas de nuestro país* en las cuales se presentan fenómenos radicales de marginalidad". En concreto, respecto a la situación del campesinado, señalan que estos viven en una situación de angustia y opresión y que no ven cristiana, la diferencia entre patrón e inquilino"³.

Uno de los aspectos más resaltados en las declaraciones episcopales católicas dice relación con el problema de la participación política. Aún existe "una desigual participación de los diversos sectores sociales en la comunidad nacional", y la ven como una manifestación de vicios y limitaciones de la participación popular. En este mismo documento respecto de *la participación* se afirma que nuestra democracia es débil y a veces sólo formal.

Ven como causa de esta situación el que *la justicia, el bienestar y la educación* son todavía patrimonio de grupos minoritarios y privilegiados. Son estos *grupos minoristas*, como los denomina la Conferencia, los que ejercen su dominación a través de la administración de justicia, el capi-

talismo y la alienación, elementos que constituyen las causas de que una parte numerosa de nuestro pueblo no pueda hacer oír su voz ni organizarse, de que *carezca de habitación, de alimentos suficientes, y de posibilidades de trabajo*"⁴.

Respecto a estas aseveraciones la jerarquía eclesial formula diversas preguntas: ¿Pueden formularse críticas al orden vigente sin que lo pongan en crisis radical? ¿Las promesas son *desmedidas* respecto a qué medida, a qué orden, a qué sistema? ¿Es capaz el sistema democrático vigente de dar respuesta a todos los derechos del pueblo?"⁵.

2.- Praxis y teoría de los Derechos Humanos a la luz de los documentos del episcopado católico chileno: 1967-1970.

En este período de la Historia de Chile no existe una práctica de importancia relevante respecto a los Derechos Humanos, ni por parte de la Iglesia Católica ni de otros organismos religiosos o laicos. De ahí que en la documentación episcopal revisada no se toque en forma directa, ni se trate la problemática de un modo sistemático –como lo será en la década siguiente– y, menos aún, se elabore una teoría al respecto.

Vimos algunas de las orientaciones de la jerarquía para lo que puede ser "una práctica" de los Derechos Humanos. Ahora tocaría ver en qué consistiría esa praxis, cuál es el contenido de ella y cuáles son los aspectos centrales que conforman los mensajes que los pastores hacen presente a la opinión pública en los últimos años de Frei.

En otras palabras, queremos averiguar cuales son los *Derechos Humanos* que los obispos defienden en su discurso durante los años 1967 a 1970. Ellos son, fundamentalmente, 1.- El Derecho a la Participación, en dos escenarios primordiales: el económico y el político. 2.- El Derecho al desarrollo económico y social de los pobres, en especial el campesinado mediante una profunda Reforma Agraria.

Respecto de este Derecho de Participación Política es notable una premonición de la jerarquía católica cuando se ve amenazado, en octubre de 1969, por el llamado "Tacnazo" encabezado por el general Roberto Viaux. Públicamente defiende a jerarquía católica el Derecho a Participar en Política, y es enfática en reconocer el derecho irrenunciable que tiene el pueblo para ser protagonista de su propia historia. Señala que la inquietud por participar "corresponde a una evolución positiva para la convivencia social y para el desarrollo integral del hombre"; y que la única garantía de libertad y respeto al hombre la da, precisamente, este derecho a participar en la toma de decisiones públicas. Por ello, "sería inadmisibles" que las fuerzas armadas impusieran al país un nuevo régimen político de espaldas a la voluntad del pueblo⁶. El episcopado chileno estima –ya en 1969– que "las instituciones militares están llamadas a integrarse en el esfuerzo común de la nación, *sin definir ellas el bien común, ni convertirse en organismo político de decisión*, lo que limitaría la posibilidad de expresión y de participación del pueblo; la imposición de una política por el terror por la dictadura o por las armas, trae consigo *la represión brutal de los que se oponen*, y la supresión de todas las libertades consideradas peligrosas por los que detentan el poder. El país entraría en la vía de *los juicios políticos, de las relegaciones, de las injusticias flagrantes, de la supresión de toda prensa libre, de toda posibilidad de defenderse, de las sospechas, de las calumnias, y por último del paredón*"⁷.

Estas intuitivas palabras no hacen sino defender una serie de derechos del pueblo y de cada uno de aquellos que lo construyen: el derecho a la justicia, al justo y debido proceso, a la libertad de información y de residencia, a la defensa de su honorabilidad, y –por último– a los derechos primeros y fundamentales: el derecho a la vida y la integridad física y psicológica de toda persona humana.

En resumen, de todo lo dicho en este acápite es dable extraer algunas conclusiones. **En primer lugar**, que en el lapso comprendido entre 1967 y 1970, los obispos católicos chilenos están conscientes de la situación de marginación y opresión en que viven muchos chilenos. **En segundo término**, que en este período ya la jerarquía de la Iglesia tiene una palabra de denuncia de esa situación injusta que entienden se produce por la conculcación de una serie de derechos esenciales de la persona humana. **Finalmente**, que en este mismo ciclo la defensa de los Derechos Humanos *no es*, básicamente, la defensa de los derechos *individuales*, sino la de *todos* los chilenos.

Estos tres puntos, que se pueden colegir de lo expuesto más arriba, para nada quitan otros dos hechos también constatados en esta prospección: 1.- Que, en la praxis de la Iglesia en el lapso final del gobierno de Eduardo Frei Montalva, la defensa de los Derechos Humanos *no ocupa una opción y preocupación muy central*; y 2.- Que se desprende del punto precedente que *aún no existe una elaboración y sistematización más acabada de lo que puede ser una "Teoría, relativamente perfeccionada de la Iglesia Católica Chilena" respecto a los Derechos Fundamentales de la Persona Humana*.

Pero ello no obsta a que los inspiradores, soportes y legítimos intérpretes de la Doctrina Social de la Iglesia Católica –a la cual adscriben, se supone que sin reservas de ninguna especie, Frei Montalva y el Partido Demócrata Cristiano– estiman que existe una *potencial* –aunque se concretase in actum en forma genérica y ocasional– violación de derechos humanos fundamentales, entre 1967 y 1970. Y que tales infracciones ocurren ya en el ámbito de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y educacionales de los sectores pobres de la población; y que éstos en alguna medida se violaron y fueron oportunamente denunciados ante la opinión pública.

3.- Creciente enfrentamiento y atropellos de los Derechos Humanos bajo el Gobierno de Eduardo Frei Montalva.

La década de los sesenta en Chile se singularizó por un incremento del enfrentamiento social, que paulatinamente degeneró en la violencia confrontacional. Cada uno aportó lo suyo, sea a título colectivo como personal, lo que determinó que, en los finales de la década, llegásemos a lo que hemos denominado una *progresión geométrica*. Veamos algunos factores y hechos que causaron infracciones a los Derechos Humanos cometidos ocasionalmente por algunos agentes del Estado.

A.- La huelga de los mineros de *El Salvador* en marzo de 1966 y la represión.

En *El Salvador*, a raíz de una huelga de los mineros del yacimiento de cobre del mismo nombre, que había reemplazado al agotado "Potrerillos", se produce una represión de las fuerzas del orden contra los trabajadores, resultando *ocho muertos entre estos últimos*.

Dos conocidos historiadores, uno inglés y el otro estadounidense de una impronta conservadora, refieren así este *traspie* de Frei Montalva: "En marzo de 1966, cuando *las tropas mataron a ocho trabajadores* durante una huelga en una mina de cobre, las diatribas de la izquierda ganaron credibilidad, incluso en el interior del Partido Demócrata Cristiano. La segunda asamblea nacional del PDC (agosto de 1966) reveló una división interna en tres facciones potencialmente seria: los *oficialistas*, cuya lealtad a Frei era incondicional; los *rebeldes*, que querían políticas mucho más radicales y mayor control del Partido sobre el gobierno; y los llamados *terceristas*, con críticas limitadas. Los *oficialistas* no tuvieron dificultad para mantener el control"⁸. La *violación de los Derechos Humanos* fue, de esta forma, uno de los detonantes del posterior quiebre de la DC.

La interpretación historiográfica nacional de este luctuoso hecho de lesa humanidad está mirada según la posición del observador. Así para la historiografía mесоcrática se explica por que "la oposición ejercida por la Izquierda frente a los proyectos legislativos del Gobierno, se manifestó también a través de las demandas sociales. En marzo de 1966 *los grupos socialistas* iniciaron un paro ilegal en la mina de cobre *El Salvador*, en apoyo de mejoras salariales. La reanudación de faenas, decretada por el Gobierno, fue acatada por *una parte de los trabajadores que se reintegraron bajo custodia militar y policial. Las fuerzas militares fueron objeto de ataques que repelieron dejando un saldo de siete muertos y varias decenas de heridos*"⁹. Los catedráticos conservadores anglosajones no parecen coincidir, desafortunadamente, con sus colegas mесоcráticos de la Universidad Católica ni siquiera en el número real de fallecidos...

En otro polo, el ultrismo de izquierda refiere la causa de la muerte de los ocho obreros como una acción que "el Gobierno de Frei [realizó] para dominar a los mineros y salvaguardar los intereses económicos de los amos norteamericanos, ordenando su primera matanza en el campamento del mineral de *El Salvador*; allí la tropa asaltó el Club Obrero donde se encontraban reunidos numerosos trabajadores indefensos, luego hizo fuego sobre hombres y mujeres"¹⁰.

Lo fáctico es que *ocho chilenos murieron por balas disparadas por otros chilenos, agentes del Estado*, y –de acuerdo a todas las convenciones internacionales– tal acción constituye una violación gravísima de los Derechos Fundamentales de la Persona Humana; puesto que la medida castrense de *repeler* a balazos fue desproporcionada a cualquier presunto ataque, del que no hay constancia alguna, y menos que fuese con armas de fuego.

B.- 1967-1968: La virulencia de la fuerza inicia su tra-

yectoria ascendente. La agitación social en la “revolución en libertad”.

En marzo de 1967 se promulga la Ley sobre sindicalización campesina, que no dejó satisfechos a la mayoría de los campesinos organizados y sulfuró a la derecha, especialmente a los terratenientes. Los historiadores citados dan cuenta a que “por otra parte un sector de la oposición de Izquierda se vio radicalizado tras la instalación en Chile, en 1967, de una sucursal de OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad). En el curso de 1966 se había realizado en La Habana un Congreso tricontinental en cuyo seno había nacido esta organización y cuyo objetivo era promover la lucha armada e intentar derrocar a los gobiernos latinoamericanos opuestos a la ideología marxista-leninista. A la sesión inaugural de la seccional chilena de OLAS asistió Salvador Allende, a la sazón presidente del Senado chileno”¹¹.

En honor a la verdad histórica es que jamás existió “una seccional chilena de OLAS”, ni tuvo actuación práctica alguna, por lo que imputarle que fue en nuestro país coadyuvante de la “radicalización de la izquierda” es confundir el toro con el torero, pues la arena de la lid ya estaba allanada mucho antes. La principal actuación de Salvador Allende –jamás partidario de la vía insurreccional, posición reconocida hasta por sus más recalcitrantes opositores– en su carácter de Vicepresidente de la OLAS fue precisamente *salvar de una muerte segura* a los guerrilleros sobrevivientes de las huestes del Che en Bolivia, recibéndolos en la frontera y acompañándolos en el avión hasta la Isla de Pascua para su conexión a Tahití.

Colliers y Sater vuelven a ser más objetivos en esta materia de la agitación social de 1967 en adelante, pues connotan que “no obstante la izquierda no produjo una ola avasalladora en términos electorales. Con todo esto, quedaba en evidencia la polarización –entre las *posturas de la derecha y la izquierda que estaban cada vez más afianzadas*. A

finis de la década de 1960, se produjo una creciente movilización generalizada, las huelgas aumentaron sostenidamente, porque ahora había muchos más sindicatos para organizarlas, la toma de los fundos aceleró su ritmo en el campo en 1969 70, al igual que la ocupación de los terrenos urbanos a manos de los sin-hogar”¹².

La violencia y las subsecuentes infracciones a los Derechos Humanos básicos fueron bilaterales, de ambos sectores cada vez más irreconciliables; y no fue –como se pretende cohonestar por estudiosos del pretérito nacional– *unilateral*, exclusiva de los socialistas de Chillán, ni de las instrucciones tremebundas de “promover la lucha armada e intentar derrocar a los gobiernos latinoamericanos [se supone que en Chile al gobierno DC.] opuestos a la ideología marxista-leninista”. Curiosa reafirmación y apoyo se hace en plena dictadura –en 1985– con esta aseveración a los argumentos esgrimidos por los sustentadores del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que tan trágicas consecuencias trajo para las decenas de miles de víctimas de los Derechos Humanos, inclusive demócratas cristianos, varios de ellos muertos, como el transportista Fernández en La Serena asesinado ese año.

C.- Los hechos de Pampa Irigoín, en las afueras de Puerto Montt, en 1969.

1969, año de elecciones parlamentarias en marzo, se inicia con el llamado del Comando Nacional de Trabajadores, a un paro nacional de protesta para los días 8 y 9 de enero. Días más tarde se bloqueaba en distintos puntos la Carretera Panamericana Sur por grupos de terratenientes –método siempre recurrente de antes y ahora de la derecha política– quienes, en esta ocasión pretendían presionar al Gobierno para que alzara el precio del trigo. Como consecuencia de las acciones judiciales interpuestas por el Ministerio del Interior, resultaron detenidos más de cincuenta propietarios agrícolas.

Los resultados de las elecciones parlamentarias marcaron la tendencia futura de los tres tercios en que se dividió nítidamente la ciudadanía. Mas no hubo tiempo de meditar sobre los escrutinios, pues el gobierno de Eduardo Frei Montalva fue marcado con un nuevo trágico suceso de esos “que empañan la historia de la humanidad”. El 9 de marzo de 1969 se produce el desalojo de más de noventa grupos familiares y de allegados que cinco días antes habían ocupado pacíficamente los terrenos baldíos de Pampa Irigoín, en el sector alto de la bahía de Puerto Montt, y cuyo propietario los tenía abandonados. Esta ocupación fue llevada a cabo por los “sin-casas” de la provincia de Llanquihue –varios de ellos demócratas cristianos militantes o simpatizantes– y con el único objeto de instalar sus viviendas en dichos espacios vacíos por su dueño. La acción de desalojo, por el Grupo Móvil de Carabineros, que fue llevada a cabo por expresas instrucciones del Ministerio del Interior, dieron *muerte a balazos a ocho ocupantes y dejaron cerca de sesenta personas heridas*, de todo sexo y edad.

Blanco de la indignación nacional por la matanza fue el ministro Edmundo Pérez Zujovic, vilmente asesinado en venganza en los primeros meses del gobierno de Salvador Allende. Pero el furor llegó incluso a la juventud del Partido Demócrata Cristiano y otros sectores disidentes que estaban en contraposición con la línea del partido, que “culpamos al Gobierno de la masacre”. Así Pampa Irigoín fue la tumba no sólo para las ocho víctimas de la represión policial, sino también para la frágil unidad de los DC. En mayo de ese año surge el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU, de una escisión del PDC, Sus principales dirigentes Gumucio, Jerez, Ambrosio y Chonchol, se definen como católicos de izquierda, que más tarde formarían parte de la Unidad Popular. Al igual que lo acontecido con los victimarios de los obreros de El Salvador,

los homicidas de sus compatriotas “sin-casa” de Pampa Irigoín quedaron impunes. *Los Derechos Humanos fueron obviados.*

Remató el agitado año 1969 con una acción de fuerza efectuada por los cuerpos armados de la República después de treinta años –desde el fracasado “Ariostazo” en la misma unidad del Tacna durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda– al producirse, el 21 de octubre, el acuartelamiento del Regimiento Tacna a cargo del general Roberto Viaux. Este movimiento recibió el nombre de “Tacnazo”. Bajo el pretexto de mejoras salariales para la oficialidad del Ejército se escondía un auténtico golpe de Estado como deja constancia en sus Memorias el General Carlos Prats González. “El acuartelamiento del Tacna tenía una finalidad política clara, gestada en varios pasillos durante los meses inmediatamente precedentes. Oscuros personajes civiles y uniformados se prepararon para mover las piezas del tablero de ajedrez, usando a Viaux de peón de partida. El jaque mate que condujera al derrocamiento de Frei se habría logrado por la dinámica de los acontecimientos, si antes de 24 horas se hubieran materializado movidas maestras de otras piezas claves...frustraron un conato golpista cuyo líder inicialmente visible habría sido Viaux, hasta que la seguridad del triunfo *hiciera emerger a sus instigadores*”¹³.

Nos remitimos a lo expresado por la Conferencia Episcopal sobre este golpe abortado, y que reproducimos más arriba, la que puntualiza, premonitoriamente, las implicancias de la instauración de un régimen militar en Chile respecto de los Derechos Fundamentales de toda Persona Humana. La actitud firme y valiente de los pastores contrastó con la del gobierno de la época, y –especialmente– con la clase política parlamentaria, que al igual que en la década del veinte, se apresuró en satisfacer las peticiones pecuniarias de los uniformados al menor *ruido de sables*.

D. El año difícil: 1970. El asesinato del Comandante en Jefe del Ejército.

La presencia campesina en la política chilena comienza a sentirse con la sorpresiva votación campesina que obtuvo Salvador Allende en la elección presidencial de 1958. De allí en adelante el proceso de la reforma agraria era sólo cuestión de tiempo. Pero en 1970 este proceso no se encontraba ni siquiera cerca de haber sido completado, aunque –por cierto– se había avanzado en su consecución. Las tomas de los campos por campesinos sin tierras, se hicieron cada vez más frecuentes: 400 entre 1969 y 1970. Los terratenientes se resistieron utilizando toda clase de vías: desde las influencias a la armada. El derramamiento de sangre no siempre se evitaba. El 30 de abril de 1970, Hernán Mery, encargado regional de la “Corporación de la Reforma Agraria” fue herido de muerte durante un enfrentamiento en un fundo de Longaví, defendido por su guerrero dueño, progenie y yanaconas. La reforma agraria encontró su mártir en Mery; la acción armada de la derecha tuvo, asimismo, su *precalentamiento militar* que después, en 1973, ocasionará cientos de muertos en la venganza patronal. Pero ya en 1970 la movilización agraria era difícil de contener.

El Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider declaraba en mayo de 1970 que la ciudadanía y las Fuerzas Armadas llegarían a las elecciones presidenciales “manteniendo nuestra tradición de pleno respeto a las decisiones del Gobierno Constitucional de la República; vamos a garantizar la normalidad del proceso electoral y a dar seguridad de que asuma el Poder Ejecutivo quien resulte electo”. Para el caso de que ningún candidato obtuviese la mayoría indicada por la Carta Fundamental, afirmaba que “nuestra doctrina y misión es de respaldo a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella, el Congreso es dueño y soberano en el caso men-

cionado, y es misión nuestra hacer que sea respetada su decisión”. Y agregó a continuación: “Si se producen hechos anormales, nuestra obligación es evitar que ellos impidan que se cumpla lo que indica la Constitución. El Ejército va a garantizar el veredicto constitucional”.

Los principios enunciados por el Comandante en Jefe del Ejército en 1970 serían posteriormente conocidos como la *Doctrina Schneider* e identificados como una adhesión incondicional de las Fuerzas Armadas a la Constitución y las Leyes de la República. El 22 octubre de 1970, mes y medio después de la elección presidencial, se produce el alevoso atentado contra el general Schneider, quedando gravemente herido y falleciendo 72 horas después. Su sucesor, el general Prats, lo describió como un “héroe de la paz y un mártir de la democracia”¹⁴.

Más allá de lo nefasto de este hecho, el *asesinato político*, máxime tratándose del jefe superior del Ejército, era un procedimiento atípico dentro de las normas de convivencia chilena del siglo XX, y su ejecución abrió una interrogante sobre toda la futura evolución política en nuestra patria. Dubitación que años más tarde se vio confirmada por la misma suerte que corrieron, al igual que el establecedor de la Doctrina Constitucionalista del Ejército de Chile, los miles de civiles y el sucesor de Schneider, el general Carlos Prats González.

El crimen fue realizado con el claro objetivo de impedir la asunción de Salvador Allende a la Presidencia, precipitando un golpe militar. Las investigaciones realizadas permitieron establecer que tanto los ejecutantes como los ideólogos pertenecían a un grupo de extrema derecha¹⁵.

Epílogo.- Gobierno de Frei y Derechos Humanos

Eduardo Frei Montalva constituyó el ejemplo típico del gran reformista en la Historia de Chile. Sus obras en

el avance social, la participación popular y las reformas en la estructura agraria y otras obras que se puntualizaron en la parte histórica de esta obra, constituyen hitos en nuestra Historia Contemporánea. No en vano la derecha lo calificó del “Kerensky chileno¹⁶”. Fue, además, el hombre de la “Alianza para el Progreso” y contó –por ende– con el apoyo y ayuda norteamericana. Sin embargo fue, en varias ocasiones, vacilante frente a situaciones límites, especialmente en los años postreros de su mandato. Gobernó apoyado por profesionales y tecnócratas, así como por un vasto partido reclutado entre elementos de la clase media y del proletariado sin una conciencia política muy perfilada. Terminó su período dejando incumplidas promesas de recuperar las riquezas básicas de la nación, de efectuar cambios estructurales más profundos y de dar trabajo a miles de cesantes. Le tocó regir los destinos de la nación chilena en una década de suyo conflictiva en el orbe, que en Chile –que como parece ser nuestro sino el ser “los conejillos de Indias de Occidente” en sus ensayos políticos– llegaron a producir contradicciones insalvables que nos precipitaron a una ruptura –que aún perdura con matices de esquizofrenia– en la sociedad y en los seres individuales. Rompimos con nuestro pasado con disolución del vínculo, o con un *divorcio a la chilena*. Siempre será posible y plausible volver a nuestras raíces históricas, por más que hoy se pretenda ignorarlo consciente o inconscientemente.

Si hemos puesto el acento en las pinceladas negras a fines del gobierno Frei Montalva, no ha sido con el ánimo de denostarlo, sino de traer a la memoria histórica de nuestros compatriotas cuánto de frágil es nuestra convivencia y destino como pueblo y nación. Cuánto de posible es que *en un régimen democrático y republicano puedan pisotearse los Derechos Fundamentales de toda Persona Humana*. Cuánto de sutil es el distinguo entre libertad y ga-

rantía de los Derechos y su infracción. En fin, cuánto de doloroso es vivir en democracia.

Obviamente que bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva *no se dieron en absoluto todos los presupuestos que supone la infracción de los Derechos Humanos*. No existió la concurrencia habitual de los agentes del Estado como infractores, no revistieron las características de extrema gravedad cuantitativa y cualitativa, sistematicidad, institucionalidad de los órganos represores, masividad, falta de información a los familiares sobre la suerte de la víctima, y ser inéditas en nuestra Historia Patria, como lo fueron bajo el régimen militar. Pero que las hubo, las hubo, y es nuestra obligación como cronistas del pretérito puntualizarlas e intentar interpretarlas en su contexto histórico.

LOS DERECHOS DE LA PERSONA HUMANA EN EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE: 1970-1973

Tras el atentado terrorista político que costó la vida al general René Schneider se produjeron otros graves hechos de violencia de la misma índole, durante el gobierno de la Unidad Popular, entre los que destacan dos crímenes netamente con connotación política. El primero, cometido por el grupo de extrema izquierda denominado Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), en la persona del ex Vicepresidente de la República Edmundo Pérez Zujovic, en julio de 1971. El segundo fue el que costó la vida al edecán naval del Presidente Allende, el comandante Arturo Araya Peters, crimen del que fueron responsable militantes y mercenarios de la extrema derecha, uno de los cuales fue posteriormente reclutado por el gobierno militar para funciones de represión política¹⁷.

Pero, más allá de los asesinatos referidos cometidos por personas ajenas al aparato estatal, para analizar la si-

tuación de los Derechos Humanos en el período que va desde noviembre de 1970 a septiembre de 1973, es necesario revisar los aspectos que se suelen tener en cuenta para formarse un juicio sobre la materia, y que los funcionarios y publicistas del gobierno militar aseveraron que el gobierno de Salvador Allende utilizó para perseguir a sus enemigos políticos. Las acusaciones de la derecha política y su contraargumentación las sintetizamos en los puntos que siguen.

1.- Vigencia de estados de excepción constitucional, que restringen las Garantías Constitucionales y ciertos Derechos Fundamentales.

Durante el régimen de la Unidad Popular el gobierno no declaró el "Estado de Sitio", ni solicitó del Congreso las facultades extraordinarias a que se refería el artículo 44 N°13 de la Constitución de 1925.

En cambio, sí se decretó el "Estado de Emergencia" en varias ocasiones para provincias o conjunto de provincias, mas nunca se hizo extensivo a todo el territorio nacional. Tales declaraciones, en todo caso, carecieron de legalidad, dado que no se daban las causales contempladas en el art. 31 de la Ley de Seguridad del Estado, que exigían la existencia de guerra, ataque exterior o invasión, o calamidad pública. En todo caso, debe recordarse que durante el gobierno del Presidente Frei Montalva se declaró, asimismo, el "Estado de Emergencia" por eventos no previstos en la ley en un par de ocasiones.

Las atribuciones que el Estado de Emergencia otorgaba al Presidente de la República eran mínimas: decretarlo y designar al Comandante en Jefe Militar de la Zona en que regiría tal restricción Constitucional. Todas las facultades correspondían sólo a este último funcionario, y, por lo tanto, eran los Jefes Militares de Zona en Estado de Emergencia los que podían ordenar diversas medidas que

afectaban a la libertad de expresión y opinión, tales como clausuras de radios, censuras de la prensa, requisición de publicaciones, etc. Todas estas medidas de los Jefes Militares de Zona eran susceptibles de ser impugnadas ante los Tribunales Ordinarios de Justicia y las resoluciones que en esta materia estos últimos dictaron, fueron siempre acatadas por la autoridades respectivas.

En consecuencia, en virtud de este Estado de Excepción Constitucional no hubo detenciones administrativas, expulsiones del país, prohibiciones de ingreso para chilenos, ni relegaciones de ciudadanos a regiones del país, ni arrestos domiciliarios.

2.- Uso de la legislación penal común para sancionar acciones de contenido político

La legislación penal que se empleó para acusar y sancionar actuaciones políticas fue la tradicional contemplada en el Código Penal, en la Ley de Seguridad Interior del Estado y, para delitos militares, las tipificadas en el Código de Justicia Militar; normativas todas que en general no sufrieron modificaciones de importancia en el periodo en comento, respecto del precedente. Los tribunales, del orden civil o castrense, actuaron con independencia y los cargos que se hicieron al Gobierno, no sin fundamento, de incumplimiento de las resoluciones judiciales, no decían relación con el campo de *lo penal sino con el civil y mercantil*, como lanzamiento de arrendatarios, ocupantes de inmuebles de hecho, etc.

3.- Otros atentados a los "derechos humanos" entre 1970 y 1973 según El Libro Blanco

Aun cuando no se trate de las consideradas "violaciones graves", es útil consignar algunas transgresiones a

los derechos fundamentales que ocurrieron entre los años 70 y 73:

a) *Al Derecho de Propiedad*: Si bien muchos de los actos administrativos que se denunciaron como “atentados al derecho de propiedad” fueron realizados conforme a la Constitución y a las Leyes dictadas *antes* del gobierno de la Unidad Popular; en el periodo hubo graves actos de usurpación, cometidos por particulares –muchas veces con instigación de funcionarios públicos– que efectivamente afectaron derechos de los propietarios.

El Informe Rettig dice en relación con los Derechos Humanos *infringidos por particulares contra particulares* para no ser considerados como infracción de tales por la Comunidad Internacional: “Los fundamentos que en que se ha basado tradicionalmente esta posición son los siguientes: Son los Estados quienes han proclamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y suscritos y ratificados los otros pactos que rigen estas materias. Por cierto, no se desconoce que *los particulares también pueden atentar contra la vida, o contra otros importantes valores, pero tales atentados se pueden calificar apropiadamente de crímenes, de actos de terrorismos, o bien de otra manera, según sea el caso. Llamarlos “violaciones de los derechos humanos” desvía la atención sobre la gravedad especial que tiene el hecho de que el Estado que detenta la fuerza pública y está encargado de proteger los derechos de los ciudadanos, emplee tal fuerza para violarlos. Si los particulares cometen crímenes, aunque sean por motivos o pretextos políticos, el Estado cuenta con el Poder Judicial, la policía, la prensa, la opinión pública; esto es, con un conjunto importante de instituciones y medios que pueden movilizarse para denunciar, investigar y castigar estos crímenes. Pero cuando el propio Estado utiliza ese poder para atentar contra los derechos de los ciudadanos, éstos se encuentran en la mayor indefensión*”¹⁸.

Y más adelante el Informe concluye: “Quienes sostienen que es preferible hablar de violaciones de derechos humanos *sólo respecto a los actos del Estado y sus agentes*, hacen ver también que distintos gobiernos, en los más variados países, con frecuencia *califican las acciones violentas de sus opositores* de “violaciones a los derechos humanos” como *para justificar sus propios abusos*, que presentan necesarios para enfrentar tales acciones”. El ejemplo de la acción de la OTAN a Yugoslavia por estos días es palmario de *justificación* a esta infracción ya a nivel internacional.

Es por tal motivo que *en el Informe Rettig no se incluyó como “violaciones a los Derechos Humanos los cometidos por particulares, en su condición de tales, contra otros particulares”*. Ni tampoco las “confiscaciones de los bienes de los Partidos Políticos y organizaciones sindicales efectuadas bajo y por el gobierno militar”; muchos de esos inmuebles, radioemisoras, imprentas, y demás bienes muebles incautados, aún no se devuelven a sus dueños originales sin que digan una palabra al respecto los furiosos guardianes del sacrosanto Derecho de Propiedad.

En conclusión, nada justifica incluir en este acápite de “Violación Graves a los Derechos Humanos”, los relativos al Derecho de Propiedad que fueron infringidos por privados en contra de privados bajo el gobierno de Salvador Allende, si tampoco formó parte del Repertorio del “Informe Rettig”.

b) *Al Derecho a la Justicia*. En numerosas ocasiones la autoridad administrativa y política requerida por los tribunales para hacer cumplir sentencias *civiles o mercantiles* dictadas conforme a la ley, no acataron debidamente lo dispuesto, ocasionando perjuicios serios a particulares, en especial a su derecho de propiedad. Algunas de estas infracciones durante el gobierno de Salvador Allende fueron sancionadas por la Contraloría General de la República; o, en el caso de los que tenían responsabilidad política

ca –como Ministros, Intendentes, etc.– fueron sometidos al Juicio Político del Parlamento como lo prescribía la Constitución de 1925.

Lo expuesto para el Derecho de Propiedad es aplicable a esta denegación de “Auxilio a los Organos Jurisdiccionales”, y, en caso alguno, constituyen “denegación o acceso a la Justicia”, como se la ha presentado por la derecha política, pues los Tribunales de Justicia no sufrieron menoscabo en sus facultades propias bajo el Gobierno de Allende. Más aún, el único Ministro de la Corte Suprema nombrado por él fue el magistrado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Enrique Correa Labra, de reconocida orientación conservadora y muy católico, pero Allende me expresó personalmente que lo hacía “por que viene primero en la quina propuesta por la Suprema y yo no quiero conflictos con el Poder Judicial” (sic)¹⁹. Como es sabido el Presidente de la República tiene la facultad constitucional de nombrar a cualquiera de los integrantes de dicha quina, y así han usado esta facultad numerosos jefes de Estado a lo largo de la República.

c) A la Libertad de Expresión. Durante el período de la Unidad Popular se produjeron y denunciaron agravios a la libertad de expresión cometidos por los Jefes de Zona en Estado de Emergencia o por funcionarios públicos que haciendo uso de atribuciones otorgadas en la Ley General de Servicios Eléctricos, clausuraron radioemisoras o cometieron abusos en la concesión o renovación de frecuencias.

No obstante la violencia e injurias públicas que se cometían a diario por ciertos medios de difusión en contra del gobierno y sus miembros, se actuó por medio de los Jefes Militares de Zona en Estado de Emergencia, cuando correspondía. En lo relativo a la concesión o renovación de frecuencias de transmisión inalámbricas estas se cancelaron en virtud de las facultades privativas que la Ley de Servicios Eléctricos entrega al organismo administrativo

correspondiente, y siempre se apeló a los Tribunales Ordinarios quienes –por lo general– revocaban el Decreto pertinente.

Un caso muy significativo y que dice relación con la actuación del norteamericano Michel Townley en Chile, fue la muerte de un cuidador de la estación repetidora en Concepción del Canal de TV de la Universidad Católica de Chile, quien pereció con sus brazos y piernas amarradas por la espalda y con alambres, idéntico método empleado posteriormente por la DINA para liquidar opositores. Nunca se aclaró este crimen.

d) Al Derecho de Reunión. Sin que este derecho haya sido jamás suspendido, hubo medidas discriminatorias que negaban el uso de determinados lugares a adversarios, pero sí lo concedían a partidarios del régimen; método administrativo –por lo demás– usados por todos los gobiernos anteriores.

En general, al analizar la situación de los Derechos Humanos durante el período previo al régimen militar, y la responsabilidad institucional del gobierno de la época y del aparato del Estado, es necesario hacer ciertas distinciones.

En primer lugar, *no es sostenible la afirmación de que las muertes ocurridas por razones políticas hayan sido producto de una acción “sistemática” del gobierno.* Más bien parecieran haber sido el producto del clima de violencia que se fue desarrollando en el país, y cuando los hechos pertenecieron a grupos partidarios del gobierno, las acciones judiciales se dedujeron normalmente ante los tribunales competentes y de acuerdo a la legislación preexistente; y en general con resultados. En cuanto a los agravios a los derechos de propiedad, de reunión y a la justicia –en los términos que se han descrito–, es posible hallar una cierta voluntad política de afectarlos.

Finalmente, *no se puede afirmar que se trató de violacio-*

nes a los "Derechos Esenciales de toda Persona Humana", ni cuantitativa ni menos cualitativamente, violaciones en las que haya habido compromiso de todo el aparato del Estado. Desde luego, el Poder Judicial mantuvo toda su independencia, así como el Poder Legislativo, en el que incluso existía una mayoría opositora. La Contraloría General de la República también ejerció con total autonomía sus funciones; hubo siempre prensa opositora y los partidos políticos adversarios del régimen funcionaron con total libertad sin ser puestos fuera de la Ley ni los grupos terroristas de corte fascistas.

4.- El Plan Zeta: Una mala copia de los métodos publicitarios utilizados por los militares brasileños en el golpe de Castello Branco en 1964.

Conjuntamente con el "restablecimiento del orden jurídico quebrantado" la existencia del Plan Z fue la más importante de las justificaciones esgrimidas en los inicios del régimen militar. El mentado "Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, 11 de septiembre de 1973", de Gonzalo Vial Correa, le dedica una parte en la que se acompañan los documentos "constituyentes y probatorios del Plan Z".

El modelo brasileño incluía el "Plan Cohen" fraguado por los partidarios del gobierno del Presidente Joao Goulart con la colaboración de la CIA estadounidense, con varios ítems siniestros, entre los que figuraban varios en su hermano "Z" chilensis. Asimismo el golpe militar en Bolivia, en 1971, contó con su propia versión altiplánica del "Plan Loto Rojo". Sólo faltó acusar a los miembros de la Embajada de la República Popular China de intentar envenenar el agua potable de Río Janeiro, labor que en Santiago no sé a quien adjudicaba la fantasía del "Zorro" autor de la fábula.

Fue tan calcado de los cariocas el golpe en el área

publicitaria –amén de los torturadores brasileños que actuaron en los primeros años de la DINA– que las damas golpistas corrieron a los Bancos Centrales de ambos países a donar sus joyas y oro "para la causa"²⁰.

Este "Plan Z", entre muchas de sus variantes, supuestamente contemplaba la eliminación física de gran parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y dirigentes de la oposición a la Unidad Popular, en un autogolpe que se efectuaría el 19 de septiembre de 1973, con ocasión de la Parada Militar.

Efectivamente sectores de algunos de los partidos de la Unidad Popular, y otros fuera de ella, propugnaban el empleo de la vía armada como medio de alcanzar el poder. Estos grupos, en consonancia con sus postulados, en el contexto de polarización política que vivía el país y con la percepción de un posible alzamiento militar, fueron realizando acciones tales como prácticas paramilitares o preparación de planes frente a una eventual situación de enfrentamiento armado, a la vez que utilizaban un lenguaje militarizado, Pero más allá de la retórica y de un conjunto de acciones poco idóneas, el mismo 11 de septiembre y en los días siguientes demostraron que la realidad era muy distinta, pues fueron barridos rápidamente o se asilaron.

Sin embargo, a partir de esta apariencia de realidad, el gobierno militar construyó una generalización ficticia a la cual denominó "Plan Z", que sirvió para justificar la intervención castrense, los múltiples abusos y ejecuciones de militantes y simpatizantes del régimen depuesto, bajo la acusación de haber sido sus instigadores o futuros ejecutores.

Para dar veracidad a la existencia de dicho plan, la autoridad militar –en los días siguientes al 11 de septiembre– mostró a la opinión pública grandes arsenales que habrían estado en manos del gobierno depuesto. Además, en su libro "El día decisivo", el General Pinochet incluye un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, en

que se señala que las armas de distintas especies incautadas en octubre de 1973 sobrepasaban las 100.000 piezas. Asimismo expresa que "las fuerzas políticas paramilitares del gobierno de la ex Unidad Popular podrían ascender a unos 100.000 hombres instruidos, los que fueron entrenados durante los años 1969 al 73²¹".

Si la afirmación referida hubiese correspondido a la realidad, ese contingente de "paramilitares" habría sido más del triple del Ejército chileno y algo menos del doble de todas las instituciones armadas de esa época. A dicha cantidad impresionante de efectivos, habría que sumarle los armamentos, que si se estima su peso en kilos alcanzaban un volumen casi imposible de transportar y distribuir a lo largo del país, sin que lo notasen las Fuerzas Armadas y aún la opinión pública.

No obstante, este presunto gran esfuerzo de organización y apertrechamiento que habría emprendido el gobierno destituido –como lo dijo el Almirante Ismael Huerta, en su primer discurso pronunciado en las Naciones Unidas a fines de 1973– no habría servido para nada. Resulta por decir lo menos poco convincente, la existencia de todo ese aparataje paramilitar, para que –de acuerdo al informe de inteligencia del Ejército– la única acción militar que se pretendía realizar por la Unidad Popular consistiese en el *Plan Z*, que se llevaría a cabo por medio de la detonación de arreglos florales, previamente rellenos con explosivos.

El transcurso del tiempo ha desmentido el "Plan Z" llegando a perder vigencia la propia versión oficial. Uno de los encargados de ponerlo en duda, años más tarde, fue el propio General Gustavo Leigh en una entrevista: "El Plan Z habría existido, según lo que sé. Porque del plan Zeta dio cuenta a la Junta de Gobierno el actual ministro de Defensa Almirante Patricio Carvajal. Incluso nos llevó copias sueltas, que habría recogido la DINA en algún lugar.

No sé dónde. Eran hojas con grandes números en el centro de la página. No tengo pruebas de su legitimidad, pero todos lo vimos. Se hablaba de que el 19 de septiembre de 1973 se iba a producir una degollina de generales y almirantes. Y lo creí a pie juntillas. ¿Qué quién debe responsabilizarse por esto? Bueno, Carvajal tendrá que decir de dónde llegó a sus manos"²².

Su utilización como argumento de cargo en los procesos ante los tribunales militares de tiempo de guerra fue escasa y entre estas situaciones la mayoría se refería a casos de planificación de acciones armadas, autogolpe u otras de este estilo pero con un alcance local y sectorial y no nacional como era el caso del *Plan Zeta*.

Ejemplo de lo señalado es lo que ocurrió con el proceso ante Consejo de Guerra de la Fach, Rol 1-73, presentado inicialmente ante la opinión pública como el "juicio del Plan Zeta", pero en el cual ninguna de las investigaciones estuvo dirigida a establecer responsabilidades en tal sentido y prácticamente no se nombra a este "Plan Zeta" en el expediente. *Nadie fue acusado ni condenado por su preparación o ejecución.*

Podría afirmarse, a modo de conclusión, que el *Plan Zeta* se construyó por las autoridades militares a partir de ciertos elementos presentes en una realidad polarizada y confrontacional que existía a la fecha, pero que se desnaturalizaron a partir de la globalización, la exageración y la utilización político militar, hasta convertirse simplemente en una pretendida justificación del golpe y de las violaciones a los Derechos Humanos. Cuando se intentó contrastar este discurso con la realidad, incluso a partir de los Consejos de Guerra, se pudo constatar la falta de realidad del mismo. Sólo los oficiales jóvenes, faltos de experiencia, con credibilidad en sus mandos superiores, y dentro de irrestricta verticalidad de mando comulgaron con la "rueda de carreta del Plan Zeta"; total para ellos se montó este trágico

sainete. Los más antiguos y de mayor graduación sabían que el Plan provenía de la CIA, de Brasil y que tenían enormes contradicciones en sus distintas formulaciones.

El último embajador de EE.UU. ante el gobierno de Allende, Nathaniel Davis, con acceso a todos los archivos e información confidencial da *seis versiones distintas de los militares chilenos del Plan Zeta*, después de su exhaustiva investigación. Y concluye: "La Junta nunca aportó evidencias que demostrasen la existencia del "Plan Z" ...una posible explicación para del plan fue la dada, después del golpe en Chile, un eminente historiador brasileño... dijo... 'las acusaciones...de los militares chilenos de que los comunistas habían estado *preparando una masacre tan escandalosamente idéntica a la nuestra, que uno puede pensar que tienen el mismo autor*'²³.

5.- La guerra interna no declarada

Una tercera *justificación* de los gravísimos atentados a derechos humanos llevados a cabo a partir de 1973, es que ellos se produjeron "en el curso de una guerra".

No deja de ser sorprendente que en una sociedad no exista una convicción única acerca de la existencia de algo tan concreto real como una guerra. Mientras algunos sostienen que la tal guerra existió, aunque con explicaciones muchas veces contradictorias y confusas, usando expresiones tales como "guerra", "guerra civil larvada", "al borde de la guerra", "estado de guerra", "guerra sin las características de los conflictos descritos en los Convenios de Ginebra", etc.; otros sostienen que la tal guerra simplemente no existió y que si hubiese existido, ella debió regirse por las normas internacionales que rigen la materia.

No corresponde a este trabajo hacer un análisis doctrinario sobre el concepto de guerra, que en sentido estricto corresponde la contienda armada entre naciones o bien

al conflicto interno producido al interior de un Estado cuando, por el reconocimiento de la beligerancia, alcanza el carácter de "guerra civil", y por lo tanto pasa a tener carácter internacional.

Pareciera que los que propugnaron en el Chile de 1973 la teoría de la "guerra" se están refiriendo a lo que, en términos técnicos es un "conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes", según la definición dada por el Artículo N°3 común de los Cuatro Convenios de Ginebra sobre los Derechos en tiempos de guerra. No obstante, no se precisa quiénes serían las partes en el conflicto y bajo qué leyes se habría regido la hipotética confrontación que habría existido en Chile a partir de 1973.

Las principales tesis que se han sustentado para explicar el concepto de "guerra" existente de 1973 en adelante son las siguientes: En Chile hubo "guerra" real: Es la tesis oficial del Ejército, manifestada en la declaración del cuerpo de generales del 13 de junio de 1990, en los inicios del gobierno democrático: "La paz suele olvidar las trágicas dimensiones de la guerra que, muchas veces, por desgracia, la precede"; se "ignora que el 11 de septiembre de 1973 fue una operación militar, es decir, una acción de guerra"; "las Fuerzas Armadas salieron a combatir"; "esta decisión implicaba poner en juego todos los recursos necesarios para doblegar la voluntad de lucha de quienes nos habían arrastrado a la destrucción y al caos"; "la victoria de la libertad no se habría obtenido sin el empleo de acciones severas y disuasivas"; "la forma concreta como se vivió la guerra y sobre todo las causas que la motivaron empiezan a desaparecer"; los soldados "hacen la guerra y cuando regresan victoriosos afrontan el olvido", y otras varias citas más del mismo diapasón. En numerosos discursos del General Pinochet y otros mandos se reafirma la teoría de la guerra. Y las sentencias de los Consejos de Guerra, aprobadas por

los Comandantes en Jefe respectivos, asumen también esta versión.

La teoría de la existencia de una guerra se ha usado para justificar las actuaciones que violaron gravemente a los derechos humanos. La referida declaración del Ejército, de 1990, se emitió justamente para “expresar a la opinión pública su pensamiento frente a las circunstancias que hoy atraen la atención nacional”, que no eran otros que *los descubrimientos de cadáveres de personas detenidas y luego desaparecidas o ejecutadas*²⁴.

Corolario: El Gobierno de Salvador Allende y los Derechos Fundamentales de la Persona Humana.

Se puede sintetizar que bajo este gobierno nunca se vivió bajo Estado de Sitio, pero se decretó el *Estado de Emergencia*, en varias oportunidades, en cuya virtud se restringieron algunas Garantías Constitucionales que afectaban a la libertad de expresión y opinión; estas facultades correspondían a los Jefes Militares de Zona los que ordenaron diversas restricciones. Bajo este Estado de Excepción Constitucional no hubo detenciones administrativas, ni relegaciones de ciudadanos a regiones del país, ni arrestos domiciliarios, expulsiones del país, ni prohibiciones de ingreso para chilenos al territorio patrio.

En cuanto a las muertes atribuidas –según el *Libro Blanco* del Gobierno Militar– como responsabilidad del Poder Ejecutivo, éstas sólo en contado número (nueve casos) aparecen de responsabilidad de funcionarios secundarios del gobierno o de integrantes de su combinación política. Respecto de “*actos administrativos atentatorios del derecho de propiedad*” fueron realizados conforme a la Constitución y a las Leyes dictadas *antes* del gobierno de la UP. Muchos actos de usurpación –especialmente rurales– fueron cometidos por particulares, aunque algunos con insti-

gación de funcionarios públicos, que efectivamente afectaron derechos de terceros. Pero, conforme a las normas de la Comunidad Internacional sobre Derechos Humanos, los *infringidos por particulares contra particulares* no pueden ser considerados como transgresión de tales.

En cuanto a la negativa de Intendentes y Gobernadores para prestar la fuerza pública como “auxilio a los órganos del Poder Judicial” –como expusimos más arriba– en caso alguno tales actos constituyen “denegación o acceso a la Justicia”; puesto que este Poder del Estado no se abstuvo en momento alguno de incoar causas, penales o civiles, bajo el gobierno del presidente Salvador Allende. Lo mismo puede afirmarse en lo relativo a restricciones o limitaciones a la libertad de expresión y la de reunión; pues estas medidas fueron adoptadas por los Jefes de Zona en Estado de Emergencia o por funcionarios públicos que hicieron uso de todas las atribuciones otorgadas en la leyes vigentes en la República.

Finalmente, y no obstante los hechos de violencia que caracterizaron la última parte del gobierno de Allende, *no es sustentable la afirmación* de que las muertes y otros conflictos de Derechos Fundamentales, que se desencadenaron por razones políticas, hayan sido producto de “*una acción sistemática del gobierno*” a lo largo de todo él, como acaeció en el período siguiente que pasamos a analizar.

LAS GRAVES Y REITERADAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES: 1973-1990.

Los fundamentos ideológicos que justifican las violaciones a los Derechos Fundamentales de la Persona Humana en este período, ya los vimos en sus bases esenciales al tratar del período 1970-1973.

Al mismo tiempo debemos consignar que las fuentes

y literatura relativa a la violación de los Derechos Humanos en Chile bajo el gobierno militar son frondosísimas, tanto en el país como en el exterior. De ella insertaremos al final de este trabajo una bibliografía con los documentos y trabajos más significativos y que están al alcance para ser consultados por cualquier investigador o persona común y corriente interesada en profundizar en el tema, así como las luchas libradas por los organismos –religiosos y civiles– creados por el pueblo de Chile para la defensa de los mismos.

En razón del reducido espacio que se ha destinado a este análisis, *sólo trataremos de violaciones a Derechos Fundamentalísimos de toda persona humana: la muerte física y la muerte patria, utilizados como nunca antes en toda la Historia de Chile, desde la Colonia hasta entonces.*

1.- La Pérdida de la Nacionalidad Chilena

Nos interesa puntualizar, aunque sea muy brevemente, un aspecto que no ha sido comúnmente tratado al estudiarse las violaciones de los Derechos Humanos en Chile bajo el régimen militar: nos referimos a la *Perdida de la Nacionalidad Chilena* que sufrieron muchos compatriotas en el exilio en ese período.

Ya desde los primeros momentos de la “Patria Nueva”, más precisamente el 3 de junio de 1818, se dicta un Decreto firmado por don Bernardo O’Higgins y don José Antonio de Irrizarri relativo a la “**Nacionalidad Chilena**”, que en su parte pertinente dispone: “sería vergonzoso permitir el uso de fórmulas inventadas por el sistema colonial. Una de ellas es denominar españoles a los que por su calidad no están mezclados con otras razas, que antiguamente se llamaban malas. Supuesto que ya no dependemos de España, no debemos llamarnos españoles, sino

chilenos. En consecuencia, mando que en toda clase de informaciones judiciales...en proclamas de casamientos, en las partidas de bautismo, confirmaciones, matrimonios i entierros, en lugar de la cláusula: Español natural de tal parte, que hasta hoy se ha usado, se sustituya la de: **Chileno natural de tal parte**;...entendiéndose que respecto de los indios, no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos **Chilenos**”²⁵.

Pues bien, los que se dicen continuadores del ejemplo del “Padre de la Patria” emplearon los métodos de la Reconquista Española y no los de la tradición republicana cuyas bases sentó don Bernardo O’Higgins. Hicieron uso y abuso en privar un derecho tan esencial a todo individuo como es el vínculo jurídico –pero no ético, emocional y sociológico– que lo liga a su territorio, comunidad de origen, y nación jurídicamente estructurada. Aquí no sólo se pasó a llevar la tradición chilena y la Constitución Política de 1925, si no que se hizo caso omiso de la legislación internacional, vigente en todo momento por haber sido ratificada por nuestro país, y, en consecuencia constituían Leyes de la República. Nos referimos a la **Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948**, que en su Artículo 15 imperativamente dispone: “1.- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2.- *A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad*”. Por su parte “La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica”, de 1969, también suscrita y ratificada por Chile en su Artículo 20, al tratar del Derecho a la Nacionalidad, ordena: “1.- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2.- *Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.* 3.- *A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla*”.

Al catálogo de las transgresiones a los Derechos Esen-

ciales de toda Persona Humana cometidos bajo el régimen militar habría que añadir este ignominioso récord que afectó a muchos de nuestros connacionales. El Libertador don Bernardo O'Higgins se educó por años en Londres; puede ser que alguien allí recapacite sobre esta materia que no lo enaltece ante los ojos británicos ni de la Humanidad entera.

2.- Catalogación de las más graves violaciones –muertes y desaparecimientos– entre 1973 y 1990

Prosiguiendo con la metodología para presentar aquí las violaciones en Chile de los Derechos Humanos entre 1973 y 1990, debemos puntualizar que sólo nos referiremos a las infracciones más relevantes, intentando dar una periodificación que facilite la lectura, así como anexando cuadros estadísticos y gráficos que muestren gráficamente el total de las violaciones en sus distintas tipologías. Se incluyen en esta descripción –en beneficio de la claridad y del espacio disponibles para este trabajo– *solamente* dos tipos de “Violaciones Graves que Implique la Muerte de la Víctima”:

A.- Detenciones con Desaparición. Estas gravísimas violaciones a una serie de Derechos Humanos Fundamentales presentan una sucesiva y concatenada lógica interna de carácter secuencial en el tiempo: selección de la víctima, secuestro, ocultación y tortura física, para finalizar con la desaparición permanente de la víctima.

B.- Sistemas utilizados para dar muerte a los enemigos políticos. Los “Ejecutados Políticos”

Para su estudio se pueden sistematizar, según la tipología de casos, de la manera siguiente: 1.- Ejecuciones producto de un juicio previo, sumario y breve, sin garantías de un debido proceso. 2.- Ejecuciones llevadas a cabo por altos oficiales militares amparadas en la presunta “revisión de fallos” a firme de Consejos de Guerra, que no

habían condenado a muerte al inculpado. 3.- Ejecuciones funcionarias amparadas en normativas justificadoras de las mismas. 4.- Ejecuciones explicadas como “enfrentamientos”. 5.- Ejecuciones en “enfrentamientos” en los cuales habría sido posible reducir o tomar prisionera a las víctimas. 6.- Falsos suicidios, generalmente en recintos castrenses o policiales. 7.- Ejecuciones revestidas de otras circunstancias. 8.- Asesinatos políticos; y 9.- Muertes producidas en actos callejeros.

3.- Periodificación de las Violaciones al Derecho Humano Fundamental a la Vida

La represión política no fue de la misma naturaleza ni aplicada con la misma intensidad durante toda la extensión del gobierno militar. Los factores que explican estas variaciones fueron múltiples. Entre ellos puede consignarse el grado de legitimidad y apoyo político que captaba el régimen militar y que, de algún modo, traspasaba a sus agentes; la presión internacional causada por la denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos; algunos límites legales, como los establecidos en la propia Constitución de 1980, aún con la deficiencia que conllevan los mecanismos de control; la actuación de la Iglesia Católica y de otras iglesias como elemento de contención, a través de su labor de defensa y denuncia ante las violaciones a los derechos humanos; el mayor o menor grado de organización de la disidencia política y de recomposición social; o los instrumentos represivos que se utilizaron preferentemente.

Así por ejemplo, la represión no pudo ser la misma en las etapas de poder omnipotente del gobierno que en aquellas en las cuales existía, además de una presión internacional sostenida y una acción clara de la Iglesia Católica, una oposición política relativamente fuerte y organizada. Este cambio de circunstancias necesariamente hizo

variar el empleo de los instrumentos conculcatorios de derechos descritos y sus modalidades y es sobre esta variación que se ha construido el principal criterio para determinar las etapas o fases que se proponen.

La adecuada comprensión de esta realidad cambiante durante el periodo permite desestimar dos visiones opuestas y simplificadas: Primero, la que sostiene que el régimen militar recurrió al crimen en forma habitual, permanente y similar durante todo el período; y Segundo, la que presenta al régimen autoritario en constante evolución progresiva en el respeto de los derechos humanos alegando que si hubo excesos o abusos, ellos sólo ocurrieron en los primeros días.

Desde luego no es fácil fijar límites precisos entre unas y otras etapas, pero se ha optado por definir las a partir del método represivo predominante, nunca único y exclusivo, entre muchos otros criterios posibles.

La periodificación propuesta para los casos **A.- Detenciones con Desaparición** y **B.- Los Ejecutados Políticos**, es la que sigue:

- 1.- Una primera etapa que va del 11 de septiembre de 1973 hasta la creación oficial de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, en 1974.
- 2.- Una segunda etapa que cubre el "Reinado de la DINA", desde su aparición legal hasta su disolución en 1977.
- 3.- Una tercera etapa que abraza desde el término del Estado de Sitio en 1977 hasta la aprobación de la Constitución de 1980.
- 4.- La cuarta etapa que abarcaría desde la vigencia de la Constitución de 1980 hasta la primera protesta nacional: abril de 1983.
- 5.- Una quinta etapa cubriría desde las protestas nacionales de 1983 hasta el atentado contra Pinochet en 1986.

- 6.- Sexta etapa que iría desde el atentado contra el general Pinochet al triunfo del No en el Plebiscito: 1986-1988. Luego hasta 1990, con la entrega del poder al Presidente Patricio Aylwin.

Primer Período: 1973-1974. Del 11 de septiembre a la creación oficial de la DINA

Este período se caracteriza por la utilización simultánea e intensa de todas las modalidades de los instrumentos represivos jurídico formal y extra jurídicos que se han descrito.

El mismo 11 de septiembre se declara, mediante el Decreto Ley [DL.] N° 3, el Estado de Sitio, encargándose el DL N° 5 de interpretarlo como "estado o tiempo de guerra" para todos los efectos. Esto permitió, entre otras cosas, el funcionamiento de los consejos de guerra con procedimientos que violaron los principios del debido proceso y que más bien correspondieron a un método para imponer castigos por parte del vencedor al enemigo vencido, por hechos que en la mayoría no constituían delito. Asimismo, el mismo 11 de septiembre se declaró el Estado de Emergencia mediante el DL. N° 4 que permitió la designación de Jefes de Zona Militar en todo el país y que se utilizó, entre otras cosas, para clausurar toda la prensa no autorizada y someter a control a la permitida. En cuanto a las facultades administrativas otorgadas por los "estados de excepción" mencionados, fueron ejercidas con extremo rigor, existiendo gran cantidad de arrestados en diversos campos de detención, relegados, expulsados del país, clausuras de medios de comunicación, despidos de funcionarios, etc. Los principales lugares de detención en este período fueron los indicados en la nota a pié de página²⁶.

También se utilizó el sistema penal existente a la fecha, al que se le introdujo importantes modificaciones des-

tinadas a hacerlo más rígido, a aumentar las penas y a entregar potestades adicionales a la justicia castrense, Pero no sólo se hizo uso de la jurisdicción militar, sino que también muchas personas fueron llevadas ante los tribunales del crimen, por requerimientos o denuncias de las autoridades militares, acusada de corrupción, de delitos cometidos en sus calidades de funcionarios públicos, etc. Con esto, el régimen militar quiso dar una justificación adicional a su intervención y los tribunales cohonestaron este proceder. Casos conocidos son los de los ex Ministros Clodomiro Almeyda, Aníbal Palma, Pedro Felipe Ramírez, entre otros.

También en esta fase se desarrolla con gran intensidad la represión extra legal o netamente criminal, siendo la época de mayor cantidad de ejecutados y detenidos desaparecidos como lo reflejan las matanzas colectivas de Lonquén, Mulchén, Laja, Futrono, Pisagua, La Serena, Calama, Copiapó, Antofagasta, Cuesta Barriga y Paine, entre otros. Los represores son generalmente uniformados pertenecientes a Carabineros y a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, las que *muchas veces actuaron auxiliados por civiles* que prestaban colaboración en la delación, o facilitaban vehículos motorizados y en las persecuciones.

Por su parte, los reprimidos no tienen un patrón muy uniforme, pues van desde dirigentes de la Unidad Popular o del Gobierno de Salvador Allende hasta simples militantes o simpatizantes de los partidos que apoyaban el Gobierno, miembros de organizaciones comunitarias, beneficiarios de la Reforma Agraria y otros campesinos, obreros urbanos y de la minería. Incluso, entre los muertos y desaparecidos en esta etapa hay varios menores de dieciséis años.

Segundo período: 1974-1977. El Reinado de la DINA

Corresponde al período de actividad de la Dirección de Inteligencia Nacional, dirigida por el coronel Manuel

Contreras, y del Comando Conjunto, ambos organismos con poder absoluto de disposición sobre la libertad y la vida de sus víctimas, las que eran previamente seleccionadas, vigiladas y aprehendidas en el momento que se estimaba más conveniente. El principal instrumento represivo utilizado en esta fase fue, entonces, el extrajurídico o criminal. Los secuestros y arrestos ilegales, la tortura, los vejámenes sexuales y psicológicos, los asesinatos y las desapariciones alcanzan su máxima expresión de crueldad y refinamiento, El temor se extiende en parte importante de la población y son pocos los dispuestos a testificar sobre la detención de personas u otros hechos relacionados con actuaciones represivas.

Las víctimas son principalmente dirigentes políticos de los partidos de izquierda, los cuales son reprimidos en secuencia previamente determinada de un partido tras otro, como se ve claramente en las detenciones con desaparición. Incluso hubo víctimas que sin ser dirigentes o militantes políticos, sufrieron represión por el solo hecho de tener alguna vinculación con éstos, aunque no fuera de carácter político.

En relación con los otros instrumentos represivos, *son muy pocos los procesos judiciales que se inician y desarrollan en esta etapa*, y, por el contrario, el gobierno militar entiende que la gran cantidad de presos políticos existentes al comienzo del período constituye un costo más que un beneficio. Así, las penas de la enorme mayoría de los condenados que se encontraban en prisión van paulatinamente siendo conmutadas por las de extrañamiento, mediante la aplicación del Decreto Supremo N° 504, de 1975, del Ministerio de Justicia. Por su parte, los estados de excepción – en particular el permanente Estado de Sitio – son utilizados, fundamentalmente, como apoyo a la represión criminal al mantener un contexto que favorece la impunidad. Por vía de ejemplo podemos indicar que muchos de los

secuestros eran realizados durante las horas de toque de queda.

Los recintos *públicos* de reclusión para arrestos administrativos quedan reducidos en febrero de 1976, sólo a tres con carácter oficial: Tres Alamos, Cuatro Alamos [que era un pabellón especial dentro del anterior] y Puchuncaví. Sin embargo, no todos los detenidos llegan a ellos, sino que muchos son conducidos a los *centros clandestinos* que se utilizaron para la represión criminal. Así, sin perjuicio de que el instrumento represivo más característico del período fue el criminal, también hubo gran cantidad de arrestos sin juicio y expulsiones del país haciéndose uso de la normativa dictada o modificada por la Junta de Gobierno y del aparato represivo que se fue montando y perfeccionando.

En la finalización de esta etapa tuvo al parecer cierto grado de importancia y gravitación la elección del Presidente James Cárter en los Estados Unidos; como también lo tuvo el paulatino esclarecimiento allí del caso Letelier. Diez días después de dicha elección se clausuraron, con gran publicidad periodística, los campos de detención *oficiales* y se liberó a casi todos los detenidos en ellos, quedando reclusos sólo los dirigentes políticos más relevantes como Luis Corvalán, Tito Palestro y otros.

El 13 de agosto de 1977, se disolvió *oficialmente* la DINA, la que había disminuido algo su actividad en el último tiempo. Se creó en su reemplazo la Central Nacional de Informaciones, CNI, que debía ser dirigida por un general de Ejército en servicio activo; pero el personal de la DINA pasó casi en masa a la CNI: sólo modificación en las "chapas". Por su parte, el Comando Conjunto también había aminorado sus acciones al punto que no se le registran actividades durante 1977. Esto se traduce en una brusca caída de los casos de detenidos desaparecidos ocurridos durante 1977, en comparación al año anterior. Tam-

bién es una fecha significativa del fin de esta etapa el término del Estado de Sitio vigente desde 1973.

Tercer Período: 1977-1980. Desde el término del Estado de Sitio hasta la aprobación de la Constitución de 1980

Poco después de la celebración de la "Consulta" sui géneris, de enero de 1978, las investigaciones llevadas adelante en Estados Unidos permiten individualizar a dos agentes de la DINA como involucrados en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, y el gobierno se ve obligado a expulsar a uno de ellos, de nacionalidad norteamericana [Townley]. Y poco después, se decretó la terminación del Estado de Sitio vigente desde el mismo 11 de septiembre de 1973, más el reforzamiento previo del Estado de Emergencia significó que éste pasó a prestar la misma utilidad que el anterior. La DINA ya había perdido parte de su poder en agosto de 1977, cuando, encontrándose en Chile el Secretario Adjunto para asuntos Latinoamericanos de los EE.UU., Terence Todman, fue transformada en la Central Nacional de Informaciones, como señalamos más arriba.

Por lo tanto, en este período 1977-1980 el "Estado de Emergencia" pasa a ser el principal instrumento "jurídico" de represión, el que, en virtud de las atribuciones otorgadas por los Decretos Leyes N° 1.281, 1.877 y 3.168 permitía mantener a las personas detenidas *hasta por 20 días sin expresión de causa, relegarlas por tres meses o expulsarlas del país*. Además, se podían establecer, como en los hechos aconteció, serias restricciones a la prensa y otros medios de comunicación de masas.

La terminación del Estado de Sitio pudo ser presentada como "un avance en el respeto de los derechos de las personas", pues bajo este régimen de excepción el gobierno no estaba facultado para mantener a las personas dete-

nidas sin juicio y sin plazo; aunque lo cierto es que por los costos políticos que acarrea esa atribución ya se estaba ejerciendo en menor medida.

En esta época subsisten y se incrementan las enormes listas de personas con prohibición de ingreso a Chile y las expectativas de retorno de los exiliados se encuentran siempre con la negativa del Ministro del Interior. La fatídica letra "L" estampada en los pasaportes y permisos significaba que dicha persona estaba incluida en el "Listado", y –por ende– tenía prohibido su ingreso al territorio patrio.

La prensa sigue sujeta a rígidos controles y no pueden aparecer nuevas publicaciones sin la aprobación del Jefe de Zona en Estado de Emergencia.

La disidencia no es reprimida por la vía de la denuncia judicial, salvo excepciones, ante el riesgo de que los tribunales no sean lo suficientemente drásticos, y en cambio se privilegian las señaladas prohibiciones de ingreso al país y las relegaciones administrativas.

El altísimo costo político que significó para el gobierno militar las violaciones de los derechos humanos más esenciales hasta 1977, inhibió el uso masivo de la vía extralegal. Así, son menos los crímenes de esta impronta en este periodo, dentro de los cuales podemos señalar, como más conocidos, los de Federico Alvarez Santibáñez, Daniel Acuña Sepúlveda y hacia el final de la etapa, Eduardo Jara, Rubén Orta Jopia, Juan Olivares Pérez y Alejandro Sepúlveda Malbrán.

En esta etapa los principales afectados son ahora los dirigentes políticos, hayan sido o no dirigentes de la Unidad Popular. Los políticos son denostados y vejados por el solo hecho de serlo y el exilio fue una poderosa arma para reprimirlos, mientras que la relegación lo fue para los dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles y poblacionales que permanecieron en Chile.

Por otra parte, hacia el fin de este periodo comienzan

a aparecer formas de violencia política opositora; verbi-gracia el asalto a Supermercado Agas, en 1979; diversos otros asaltos, atentado a la "llama de la libertad" en que muere un carabinero, asesinato del Teniente Coronel Roger Vergara, y otros actos por el estilo.

En 1980, cuando el discurso oficial de que el régimen "tiene metas y no plazos" comienza a agotarse, se convoca a un Plebiscito para aprobar una Constitución que consagra un régimen político fuertemente autoritario, con largos plazos de subsistencia del régimen, sin una real participación popular, con un sistema de libertades precarias y con "regímenes de excepción vigorosas", según rezaba el discurso oficial. Además –como se comprobó en la práctica más tarde– la "Verdadera" Constitución del 80 no estaba en su articulado permanente, sino que en las "Veintinueve Disposiciones Transitorias", que fueron las que rigieron y rugieron prácticamente hasta 1990.

Cuarto Período: 1980-1983. De la vigencia de la Constitución Política y su Articulado Transitorio a la primera protesta nacional: 11 de mayo de 1983

El mismo día de vigencia de la nueva Constitución de 1980, se producen los primeros arrestos en ejercicio de las atribuciones que otorgaba al Ejecutivo el "Estado de Peligro de Perturbación de la Paz Interior" que consagraba el Artículo 24 transitorio, decretado en esa fecha en conjunto con el "Estado de Emergencia". Igualmente, el mismo día, 11 de marzo de 1981, se renovaron todas las prohibiciones de ingreso al país y algunos días después fue expulsado de Chile un ex Ministro del Gobierno de Allende. En consecuencia, los Estados de Excepción siguen rigiendo con todo su rigor y continúan siendo el principal instrumento represivo a través de las facultades administrativas que presupone.

En cuanto a los otros instrumentos, la novedad estriba en *la reaparición de la represión extrajudicial*, siendo muchas personas asesinadas por razones políticas. Entre los casos más conocidos se cuenta la muerte de Tucapel Jiménez, la de Hugo Riveros Gómez y la de Oscar Polanco Valenzuela.

La tortura sigue aplicándose en forma brutal y frecuente. Pero también en estos años comienza a desarrollarse la nueva vía judicial para sancionar a los disidentes. Curiosamente, y en similitud con la primera época, vuelven a funcionar los Consejos de Guerra –en virtud de los Decretos Leyes 3.627 y 3.655–, paradójicamente en pleno período que jurídica y oficialmente es “de Paz”. Puede citarse como ejemplos, los procesos contra los inculpados por el atentado al agente de la DINA, René Tapia Aguilera. Sin embargo, básicamente es la época en la que las pretensiones punitivas del gobierno son ejercidas a través de los requerimientos por aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, del Decreto Ley 77, del Decreto Ley 2.347 y otros, ante Ministros de las Cortes de Apelaciones respectivas.

Los principales agentes de la represión pasan a ser, entonces, el Ministro y Subsecretario del Interior, la Central Nacional de Informaciones y los tribunales, principalmente algunos ministros de las Cortes. Los afectados vuelven a ser dirigentes políticos y sociales, partícipes de grupos armados –para los que se concentra la represión extra legal principalmente–, y, en general, la oposición política.

Quinto Período: 1983-1986. De las Protestas Nacionales al atentado contra el General Pinochet

A partir de 1981 se comenzaron a presentar crecientes manifestaciones de descontento. Durante el transcurso de 1982 éstas continuaron desarrollándose y culminaron con la realización de la primera Protesta Nacional de 11 de

mayo de 1983. Como ocurriría ese día y en las siguientes manifestaciones masivas convocadas, el régimen hizo uso de una violencia masiva e indiscriminada y a gran escala nacional.

Igual situación ocurrió a raíz de la segunda protesta, el 14 de junio de 1983; tercera protesta: 12 de julio; y, especialmente, con la cuarta, “la dura”, que se prolongó por dos días desde el 11 de agosto²⁷.

Se siguen utilizando en esta fase todos los instrumentos represivos y sus modalidades. La vía jurídica, con los estados de excepción incluidos como tales, se traduce en expulsiones del país, prohibiciones de ingreso, relegaciones, campos de concentración en Pisagua y Chonchi –durante los nuevos períodos de vigencia del Estado de Sitio–, allanamientos masivos, censura de prensa, etc. Del mismo modo emplea un sistema penal reforzado, con la llamada “Ley Antiprotestas” del artículo 6° letra i) de la Ley de Seguridad del Estado, en cuya virtud se consagra el aumento de la competencia de los tribunales militares por la vía legal y jurisdiccional.

La vía criminal, por su parte, continúa siendo usada impunemente. *Es la época de crímenes atroces como los del caso del triple degollamiento* a la vez que de la promulgación de una serie de leyes que establecieron inauditos privilegios procesales para los responsables. Entre ellas son paradigmáticas la Ley N° 18.341, también llamada Ley “Fontaine”, que dispuso que aún los oficiales *en retiro* podían cumplir el arresto en sus cuarteles o en su casa; la Ley “Mendoza” N° 18.472, que estableció que los altos miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, *incluso en retiro*, podían prestar declaración judicial *en su domicilio o lugar de trabajo*; y, finalmente, la Ley N° 18.592, de enero de 1987, que modificó el Art. 6° de la Ley de Control de Armas, *eximiendo de responsabilidad* a los militares y detectives que porten armas en determinadas circunstancias.

Sin embargo, ahora hay una particularidad. Las víctimas son en esta etapa "cualquier persona", al igual que en la etapa inicial. No están plenamente determinadas lo que se explica por la dinámica creciente de los grandes actos masivos de protesta antigubernamental. Así, la mayoría son simples manifestantes callejeros, o, peor aún, en muchos casos se trata sólo de menores de edad y otros curiosos que se limitan a observar los hechos, varios de ellos desde el interior de sus hogares. Hay numerosas víctimas fatales o heridos producto de balas perdidas en el interior de sus hogares. El caso del Padre André Jarlan es demostrativo de esto.

Dentro del marco de represión de las protestas coexisten la brutalidad de las fuerzas policiales y militares regulares que reprimen con desproporción, y la actuación de individuos vestidos de civil que generalmente desde el interior de vehículos particulares disparan con total impunidad a los manifestantes.

La imagen del período que recorre el mundo entero, es la de los militares en la calle y los allanamientos masivos.

Desde luego, más allá de la represión indeterminada, que es característica de esta etapa, las cúpulas política y social sigue siendo reprimida, y aunque el exilio observa signos alentadores de disminución, muestra también importantes casos de recrudescimiento²⁸.

A los responsables habituales de las violaciones de derechos humanos, tales como el Ministro y Subsecretario del Interior, tribunales, agentes clandestinos dotados de impunidad, se suman nuevamente destacamentos regulares de las Fuerzas Armadas y Carabineros que son usados para reprimir las manifestaciones masivas, practicando allanamientos y ejerciendo violencia innecesaria, muchas veces con resultado de muerte o gravísimas lesiones.

Sexto Período: 1986-1988. Del atentado contra el General Pinochet al Plebiscito y desde éste a 1990

Ya en el período anterior se había reforzado sobremanera la competencia de la justicia militar. Desde el caso conocido como "asalto a la Panadería Lautaro", en abril de 1986, esta tendencia se desarrolla con mayor fuerza aún y se decide concentrar la mayor capacidad punitiva posible en los tribunales militares, los que aplican el sistema penal, también reforzado, dotados de enormes atribuciones jurídicas y de hecho. La Central Nacional de Informaciones, si bien mantiene jurídicamente su dependencia del Ministerio del Interior, comienza a actuar operativamente bajo la severa dirección del Fiscal Militar ad-hoc a cargo de los procesos más importantes en la persecución de grupos armados, que han aumentado los actos de terrorismo privado.

El resto de la justicia militar, con el Auditor Fernando Torres Silva a la cabeza e integrando –con escándalo mundial– nuestra Corte Suprema de Justicia, se encarga de las expresiones pacíficas de disidencia y de los manifestantes de protestas que, en lugar de ser relegados o expulsados del país, son procesados bajo la acusación de "maltrato de obra a carabinero". Paralelamente, muchos dirigentes políticos o sociales, periodistas y abogados son procesados bajo la acusación de ofender a las Fuerzas Armadas y de Orden por actividades completamente legítimas de oposición política.

En consecuencia, aunque se mantiene la vigencia de los Estados de Excepción Constitucional, las medidas adoptadas en tal virtud pierden su importancia anterior y sólo se usan ocasionalmente. No hay nuevos expulsados, la relegación se usa cada vez menos; a la vez, se autoriza paulatinamente el retorno de mayor número de exiliados.

Hace excepción a lo anterior el período inmediata-

mente siguiente cuando se descubre el arsenal de Carrizal Bajo, el 6 de agosto de 1986, y el atentado al General Pinochet, el 7 de septiembre del mismo año. Sin embargo, y seguramente con relación al funcionamiento de estos grupos opositores armados, el instrumento de represión por la vía criminal directa mantiene su plena vigencia.

Así, a las pocas horas del sorpresivo atentado a la comitiva del General Pinochet, *cuatro personas fueron asesinadas en operaciones perfectamente planificadas para la venganza*, llevadas a cabo con el más riguroso profesionalismo y con la certeza de quien se sabe amparado de todo castigo. Igualmente, en 1987, se lleva a efecto una operación por la cual se da muerte, en menos de veinticuatro horas, y en varios lugares diferentes, a una docena de personas, todas relacionadas entre sí. Y, por último, ese mismo año *se reedita el método de la desaparición de personas*, con cinco casos en una semana, ejecutados casi sin dejar rastros, con una perfecta planificación previa.

Los principales reprimidos en este último período son personas vinculadas a los grupos armados de cualquier forma, no sólo aquellas que participan efectivamente en esos grupos, sino también los llamados "ayudistas", que abarcan la más amplia gama. Los represores son, en este caso, los fiscales militares, en especial aquellos designados ad-hoc, los agentes de seguridad y grupos que ejecutan directamente los actos de violencia atentatorios contra los Derechos Humanos. Los disidentes políticos son ahora reprimidos principalmente por las fuerzas policiales, en las manifestaciones callejeras, y por los mismos jueces militares bajo el amplísimo cargo de las "ofensas".

El resumen que presentamos en el **Cuadro N° 1, 1981-1988** señala que al año ocurren 16 mil 650 casos de violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país, Con una media mensual de un mil cuatrocientos hechos constitutivos de atropellos a la dignidad de las personas y con una

frecuencia de 46 personas que diariamente son víctimas de la represión sistemática que ha llevado a cabo el régimen en el período de la Constitución de 1980.

A fines de 1989 se presenta un nuevo caso de represión criminal, con el asesinato de Jecar Neghme, dirigente político del MIR, que encabezara la evolución de este partido o grupo de la extrema izquierda hacia la inserción en el sistema y los procedimientos democráticos.

Cuadro N° 1

TIPO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DENUNCIADAS ENTRE 1981 Y 1988

Tipo de violación	Años	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	Total 1981-1988
1. Muertes										
Por abuso de poder		23	20	76	48	45	31	30	25	298
Por supuestos enfrentamientos		8	3	14	22	9	6	12	7	81
Por tortura		0	0	0	2	2	1	2	1	8
Otras causas		2	1	6	8	10	17	4	8	56
Total		33	24	96	80	66	55	48	41	443
2. Homicidios frustrados		0	0	381	362	232	264	86	216	1.541
3. Detenciones arbitrarias										
Secuestros (*)		0	0	0	0	0	135	140	71	346
Detenciones individuales		648	306	645	1.624	831	956	620	806	6.436
Otras detenciones		263	1.483	14.436	37.825	8.287	33.173	5.730	8.296	109.493
Total		911	1.789	15.081	39.449	9.118	34.264	6.490	9.173	116.275
4. Relegaciones		60	81	127	733	169	0	3	0	1.173
5. Torturas		68	123	434	297	169	299	134	139	1.663
6. Tratos crueles, inhumanos y degradantes		0	0	1.180	1.541	746	864	644	1.234	6.209
7. Amedrentamientos		140	245	794	550	399	907	1.274	1.575	5.984
Total de violaciones denunciadas		1.212	2.262	18.093	43.012	10.899	36.653	8.679	12.378	133.188

(*) De 1981 a 1985 están incluidos en "Detenciones Arbitrarias Individuales".

Fuente: Comisión Chilena de Derechos Humanos y Vicaría de la Solidaridad. Datos a mayo de 1989.

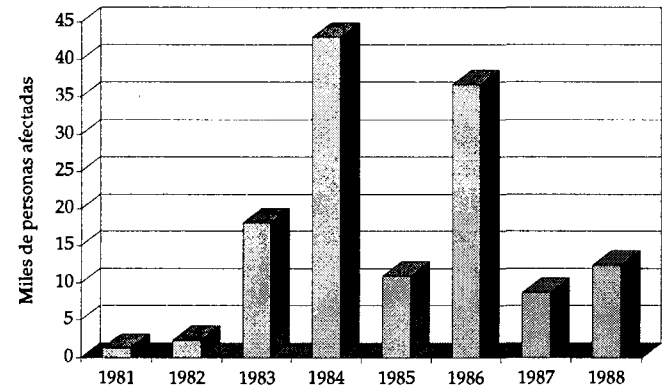
Cuadro N° 2

VOTACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS CONDENANDO LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE

Año	A favor	En contra	Abstenciones	Total
1975	95 (73,6 %)	11 (8,5 %)	23 (17,8 %)	129 (100,0 %)
1976	95 (71,9 %)	12 (9,0 %)	25 (18,9 %)	132 (100,0 %)
1977	96 (71,1 %)	14 (10,3 %)	25 (18,5 %)	135 (100,0 %)
1978	96 (68,1 %)	7 (5,0 %)	38 (27,0 %)	141 (100,0 %)
1979	93 (73,2 %)	6 (4,7 %)	28 (22,0 %)	127 (100,0 %)
1980	95 (67,0 %)	8 (5,6 %)	39 (27,4 %)	142 (100,0 %)

Gráfico N° 1

TOTAL DE VIOLACIONES A LOS DD.HH. DENUNCIADAS ENTRE 1981 Y 1988



NOTAS

1. Aldunate, José; Castillo, Fernando y Silva, Joaquín: "Los Derechos Humanos y la Iglesia Chilena". Editorial ECO. Santiago, 1980, págs. 77 y ss.
2. Ibidem.
3. Op.cit., págs. 78 y ss.
4. Doc. De la Conferencia Episcopal de julio de 1968.
5. Op. cit. pág. 79 y s.
6. Documento de la Conferencia Episcopal de noviembre de 1969.
7. Ibidem.
8. Collier, Simon & Sater, William F.: "A History of Chile, 1808-1994". Cambridge University Press, Cambridge, [England], 1966, page. 268. Recientemente se publicó en España una versión abreviada en castellano, Madrid 1998.
9. Aylwin, Mariana; Bascuñán, Carlos; Correa, Sofía; Gazmuri, Cristián; Serrano, Sol; y Tagle, Matías: "Chile en el siglo xx". Editorial Emisión, Santiago, 1985, pág. 272.
10. Ranquil: "Capítulos de la Historia de Chile". Editorial Quimantú. Santiago, 1973, pág. 130.
11. Aylwin y otros, op. cit. pág. 272 y s.
12. Op. cit. pág. 278 y s.
13. Prats González, Carlos: "Memorias. Testimonio de un Soldado". Pehuén Editores, Santiago, 1985, pág. 127.
14. "Memorias", pág. 188.
15. Colliers y Sáter, op. cit. pág. con conocimiento de los archivos de la CIA estadounidense y del Informe Church –que nadie se explica por qué no han sido traducidos al castellano y difundidos en Chile para saber quien es quien en la gestación del golpe militar del 11 de septiembre de 1973– señalan sobre el asesinato del General Schneider: "La derecha, sin embargo, estaba muy desilusionada con el fracaso del PDC ante la amenaza marxista. Un movimiento organizado rápidamente y bautizado "Patria y Libertad" realizó reuniones políticas y una o dos veces hicieron llover panfletos sobre Santiago desde avionetas. Algunos impecuosos derechistas colocaron bombas. Otros generales, algunos de ellos en el servicio activo, también estaban conspirando, incentivados, e

incluso abastecidos con armas, por la CIA norteamericana –una siniestra señal del trato que Allende podía esperar de la administración Nixon, que ya se mostraba inquieta ante la perspectiva de una segunda Cuba–. La táctica de los conspiradores era secuestrar al despreciado constitucionalista, general Schneider, y obligar así al Ejército a entrar en acción. El grupo de Viaux se puso en marcha primero y estropeó el plan. Schneider se resistió al intento de secuestro y fue herido de muerte (22 de octubre). El asesinato estremeció a toda la nación. Nada comparable había ocurrido desde el asesinato de Portales en 1837. La opinión pública apoyó firmemente a Allende y la tradición democrática".

16. Se escribió hasta un libro, por un paniaguado brasileño con ese nombre, que indica el del gobernante socialdemócrata ruso que sucedió al Zar en febrero de 1917 y que fue desplazado por la Revolución de Octubre de los Bolcheviques.

17. Fue éste el sujeto César Luis Palma Ramírez, alias "el Fifo".

18. "Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación", Volumen 1, pág. 18.

19. Esto me lo dijo cuando me permití sugerirle que nominase al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Osvaldo Erbetta, segundo de la quina, y reconocido masón al igual que Allende.

20. Aquí, tiempo después, no fue poca la sorpresa de tan caritativas ladies al ver que sus joyas no estaban garantizando la deuda externa chilena, sino que colgaban de los pechos y cuellos de algunas "siúticas" de la nueva hornada. El caso más conspicuo fue el de un collar valiosísimo de perlas cultivadas de varias vueltas que su dueña (expropiada) en una reunión social encontró pendiente del pescuezo de una destacada periodista del régimen, muy amiga de Pinochet, y posteriormente nombrada Directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Por respeto al lector omito el desenlace de la gaffe.

21. Pinochet Ugarte, Augusto: "El Día decisivo", págs. 69 y ss.

22. Florencia Varas: "Gustavo Leigh. El General Disidente". Editorial Aconcagua, Santiago, 1979.

23. Davis, Op. cit., págs. 333 y ss. Y en nota (18) agrega el

embajador Davis: "Freed y Landis demuestran de diversas formas que el periodista británico Robert Moss [autor del libro "El Experimento Marxista Chileno", editado por Gabriela Mistral junto con el "Libro Blanco" de Gonzalo Vial, en octubre de 1973] y David A. Phillips, Jefe de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, estaban directamente implicados en la elaboración del texto". Además en Chile periodistas financiados con dineros norteamericanos publicaron, en noviembre de 1973, un folleto intitulado "Septiembre/73. Martes 11. Auge y caída de Allende". Editorial "Triunfo", que se vendió profusamente en las calles y que de la pág. 101 a la 103 da *dos* de las *seis* versiones del fantasmagórico "Plan Z". El dirigente de "Patria y Libertad", Pablo Rodríguez Grez, vuelto a Chile después del golpe, llegó al colmo de la estulticia al denunciar por Televisión que en el envoltorio negro de las cajetillas de unos cigarrillos que se fumaban por entonces, si se ponían en forma inversa podía leerse "Z Now", que era el mensaje criptográfico de la acción "ahora" del Plan... La no existencia del Plan Z ha quedado plenamente confirmado con los documentos desclasificados que el gobierno de Estados Unidos ha dado a la luz pública en 1999, tanto de la CIA, como del Departamento de Estado y del Pentágono.

24. Para ver mayores detalles de las distintas tesis sustentadas para aseverar que en Chile existió "una guerra interna" y sus variantes, sus refutaciones a la luz de los hechos, procesos, sentencias de la Corte Suprema, del derecho internacional aplicable "en tiempos de guerra", y a la propia "Ley de Amnistía" –que no es dable dictar para "casus belis"– pues presume la comisión de "delitos", y los "Actos de Guerra Legítimos" obviamente no serían delictuales ni merecerían sanción. Aquí hay una contradicción vital en la normativa de la dictadura: Si hubo Guerra legítima, no pueden haber delitos relacionados con ella, por lo que la "Ley de Amnistía" no tendría sujetos a quien aplicarla. Si se dictó tal Ley, ella reconoce implícita y explícitamente que se cometieron delitos que hay que "olvidar" por que no fueron "actos legítimos dentro de una guerra". Consúltese el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad precitado, págs. 68 a 75.

25. "Gazeta Ministerial de Chile", N_45, del 20 de junio de 1818, en "Archivo de don Bernardo O'Higgins", Tomo XI, pags.

77 y ss. Santiago, 1952. En este mismo número de la "Gazeta", pág. 83, al igual que en numerosos otros de esos años, figuran otorgamientos de "Cartas de Ciudadanía" ("Nacionalización") a naturales de España, Irlanda, Inglaterra, etc.

26. En la provincia de Tarapacá: Pisagua y el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique; en la provincia de Antofagasta: la Base de Cerro Moreno, la Primera Comisaría de Carabineros, el Centro de Instrucción de Carabineros, el Cuartel de Investigaciones y el Campamento Chacabuco; en la provincia de Valparaíso: el Campamento Puchuncaví, la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma, el Campamento de Ritoque, los buques mercantes "Lebu" y "Maipo", los buques de la Armada "Lautaro" y "Esmeralda"; en la provincia de Santiago: Tres Alamos, el Estadio Nacional, el Estadio Chile, la Primera Comisaría de Santiago, Bases Aéreas El Bosque y Colina, los Regimientos Tacna, Buin, de Infantería y Ferrocarrileros, la Escuela Militar, el Recinto Naval de la Quinta Normal, la Academia de Guerra de la FACH, y en la costa de San Antonio: el Regimiento de Tejas Verdes; en la provincia de Concepción: la Base Naval de Talcahuano, la Isla Quiriquina, el Fuerte Borgoño, el Cuartel de Investigaciones de Talcahuano, el Estadio Regional de Concepción; en la provincia de Cautín: el Regimiento Tucapel; en la provincia de Magallanes: la Isla Dawson.

27. Sobre las protestas, su extensión y represión, véase Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; y Sepúlveda, Oscar: "La Historia Oculta del Régimen Militar". Ediciones La Epoca. Santiago, 1988, Capítulos 37, 38 y 39.

28. Expulsiones de Jaime Insunza, Leopoldo Ortega, Juan de Dios Parra, Ociel Núñez, y René Largo.

Nuestra interpretación global de los últimos 30 años, que explicitamos en diferentes capítulos, es que en Chile desde 1964 se abrió una fase histórica que culminó en septiembre de 1973, generando un proceso de discontinuidad respecto del gobierno derechista de Jorge Alessandri. Obviamente, los gobiernos de Frei y Allende tuvieron especificidades que derivaron del contexto internacional, latinoamericano, y concretamente de proyectos políticos diferentes: Democracia Cristiana y Unidad Popular. De todos modos, no podría explicarse la aplicación inmediata del programa allendista si no se toman en cuenta las medidas de Frei de "chilenización del cobre", Reforma Agraria y Participación popular.

Un análisis riguroso conduce a señalar que las medidas del gobierno de Allende constituyeron objetivamente una continuidad histórica, en un plano de mayor radicalización, del proceso abierto por la Democracia Cristiana. En términos de sociología política, se trataría de un proceso de revolución democrática que no alcanzó la fase socialista, porque la Unidad Popular ganó electoralmente el gobierno pero no el poder real.

En rigor, la Unidad Popular no alcanzó a cambiar el carácter del Estado ni un nuevo tipo de institucionalidad, que formalizara los embriones de poder popular. Conclusivamente —y ateniéndonos a las tesis de los tratadistas mundiales del Estado, como Harold Laski, y del carácter de las revoluciones del siglo XX analizadas por el reciente libro de Hobsbawm— la Unidad Popular habría cumplido una parte de su estrategia de la revolución por etapas, la primera etapa, democrático-burguesa, sin poder pasar a la segunda, la socialista.

El militarismo abrió un nuevo tiempo de ruptura-discontinuidad-continuidad, que engloba no solo los 17 años del gobierno de las Fuerzas Armadas, como Institución, sino también los gobiernos de la Concertación que pese a haber sido elegidos democráticamente, debieron sujetarse a la Constitución de 1980 y al "poder fáctico" ejercido por los militares, así como, entre otros aspectos, a la continuidad del modelo, el sistema binominal, los senadores designados, la autonomía de las Fuerzas Armadas y la inamovilidad, consagrados constitucionalmente.



EDICIONES
CHILEAMERICA
CESOC